



EXPOSICIÓN Y CRÍTICA

DEL CÓDIGO PENAL

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº DE GRUPO	9437
UBICACIÓN	E. 1-2
FICHA NITR	

DEI.

CÓDIGO PENAL

DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

POR EL

Doctor RODOLFO RIVAROLA

Ex-Juez del Crimen

Actual Secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires



TOMO TERCERO



BUENOS AIRES

FÉLIX LA JOUANE, EDITOR

79 — PERÚ — 89

—

1890



EXPOSICIÓN Y CRÍTICA

DEL CÓDIGO PENAL



PARTE ESPECIAL

SECCIÓN SEGUNDA

DELITOS PÚBLICOS

CAPITULO I

REBELIÓN, SEDICIÓN Y MOTÍN

(Artículos 226 á 233)

909. Materia que comprende el título *Delitos contra la seguridad interior y el orden público*. — 910. Observación sobre el método. — 911. Elementos esenciales de la rebelión y de la sedición. — 912. No es necesaria á su consumación la existencia de un daño. — 913. Cuestión sobre la posibilidad de la tentativa en estos delitos. — 914. Los actos que preceden á los delitos *formales* son meramente preparatorios. — 915. En otros códigos, la conspiración ó complot se castiga especialmente. — 916. ¿Será aplicable á estos delitos la disposición sobre complot contenida en el artículo 28? — 917. Caracteres comunes y diferencias entre la rebelión y la sedición. — 918. Carácter colectivo de estos delitos. — 919. Sentido en que debe tomarse la palabra *gobierno*, en el artículo 226. —



920. Examen de la fórmula "alterar ó destruir la Constitución". — 921. Observación sobre el texto. — 922. Propósito de deponer al gobernador ó á otro de los poderes públicos é impedir la transmisión del mando. — 923. Crítica á la redacción del inciso. — 924. Propósito de arrancar á los poderes públicos alguna medida ó concesión. — 925. Observación del doctor Hall sobre la distinta gravedad de este caso con los anteriores. — 926. "Impedir la reunión de las Cámaras Legislativas, disolverlas ó impedir que funcionen libremente". — 927. "Reformar las instituciones vigentes por medios violentos". — 928. Interpretación del texto. — 929. "Sustraer á la obediencia del gobierno algún departamento ó partido". — 930. Supresión del caso en que el propósito fuera el de investirse ilegalmente de autoridad. — 931. Propósitos sediciosos: deponer algún empleado público ó impedir que tome posesión de su destino. — 932. Impedir la promulgación ó ejecución de las leyes. — 933. Impedir la celebración de elecciones populares. — 934. Impedir el cumplimiento de providencias administrativas ó judiciales. — 935. Allanar lugares de prisión ó atacar á los que conducen presos. — 936. Motín y asonada. — 937. Penas de los delitos expuestos. — 938. Exención ó atenuación de pena en caso de disolverse los sublevados. Ambigüedad de la disposición. — 939. Fundamentos de la exención. — 940. Conveniencia de una intimación previa. — 941. Delitos cometidos durante la rebelión, motín ó asonada. — 942. Debíó comprenderse también los cometidos durante la sedición. — 943. Pena del empleado encargado de conservar el orden, que no combatiera los delitos expresados. — 944. Pena de los meros ejecutores.

909. El título primero de la segunda sección del libro segundo del Código Penal, rubricado *Delitos contra la seguridad interior y el orden público*, comprende los delitos de rebelión y sedición y los de atentados y desacatos contra la autoridad.

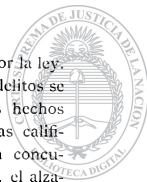
Esta materia está también legislada en la ley de 14 de

Setiembre de 1863; pero habiéndose dictado el Código Penal en la intención de que sólo fuera aplicado por las jurisdicciones locales, uno y otro son tan completamente independientes entre sí como si se tratara de leyes de distintos países, de modo que aquélla queda por tal circunstancia escluida de esta exposición (1).

910. En el capítulo primero del citado título se encuentran reunidas bajo la calificación de *rebelión y sedición* disposiciones legales referentes á delitos manifiestamente distintos entre sí, y que ninguna razón aparente aconsejaba aglomerar. Cuando se hace en un código una clasificación de delitos, debe comprenderse bajo un título único todos los delitos que tengan entre sí relaciones genéricas, y legislar dentro de él, separadamente, los que constituyen especies ó variaciones del género. En el capítulo de que me ocupo no sólo se contienen las prescripciones referentes á la rebelión y á la sedición, sino también las del motín y asonada, todas las que constituían títulos diversos en el proyecto Tejedor. Por lo menos debió, pues, conservarse para el capítulo, el rubro de *Rebelión, sedición, motín y asonada*, que adoptó el proyecto de la Comisión revisora, si no se quería dar á entender que los últimos delitos se llamaban también rebelión y sedición.

(1) Puede verse en este capítulo una demostración más de que el Código Penal ha sido dictado solamente para ser aplicado por las jurisdicciones locales, quedando en plena subsistencia la ley de 14 de Setiembre de 1863, cuestión de que me he ocupado en el número 12 de esta obra. Quien quiera tener un convencimiento completo de que la intención de los legisladores fué la de no alterar en parte alguna las leyes especiales, así la de 1863, como las de ferro-carriles y telégrafos, debe recorrer la discusión del proyecto de Código en las sesiones de 1885 y 1886.





911. La rebelión y la sedición no se definen por la ley. Pero del contexto de los artículos que á ambos delitos se refieren resultan determinados cuáles son los hechos que pueden caer bajo una ú otra de aquellas calificaciones; y de su análisis aparece que deben concurrir esencialmente á su existencia: 1º un *hecho*, el alzamiento público: 2º una *intención*, la referente á cualquiera de los propósitos taxativamente enumerados en la ley.

912. Se infiere de esto que á la consumación del delito no es necesaria la existencia de un daño real y efectivo: no es necesario que se haya conseguido deponer al gobernador ó destruir la Constitución: basta el alzamiento *unido* á tal propósito, cualesquiera que sean las consecuencias reales del hecho.

Refiriéndose al delito de *resistencia* dice Carrara, que no sólo se requiere cierta materialidad indispensable á su existencia, sino también una dirección particular de la voluntad, y que, en consecuencia, son esenciales al mismo ciertas condiciones *materiales* y ciertas condiciones *intencionales* que proceden independientemente las unas de las otras, las cuales se deben investigar é indagar distintamente por los jueces (1).

913. Estos delitos son puramente formales. De aquí surge la importante cuestión referente á la posibilidad ó imposibilidad de que pueda ocurrir en ellos la tentativa. Al exponer oportunamente el concepto legal de la tentativa, consideré que, aun cuando la ley no consigna expresamente que los actos tendentes al delito sólo sean

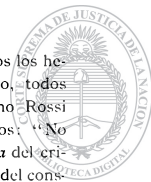
(1) *Programma*, § 2712.

imputables desde que constituyan principio de ejecución, ha entendido referirse á ésta al hablar en el artículo 8º de la resolución manifestada por actos exteriores; que tengan relación directa con el delito, y al declarar impunes los actos preparatorios (1). Si los delitos de rebelión y sedición no requieren para su consumación un daño ó un efecto consecutivo: si el delito aparece perfecto en el instante en que se produce el alzamiento, todo lo que precede á este hecho no es principio de ejecución, sino acto preparatorio. “ El *conspirador* que reúne armas y municiones, dice Rossi, que prepara en su gabinete las proclamas, y que por sus prodigalidades trata de captarse el favor popular: que aumenta el número de sus obreros, de sus criados, de sus clientes: que trata de obtener el alejamiento de un cuerpo de tropas, la aproximación de otro cuerpo; que esparce noticias falsas; que reúne en torno suyo á sus amigos, á los hombres influyentes, para inspirarles el disgusto del orden de cosas establecido y el vivo deseo de un cambio próximo, este conspirador, digo, no ha *comenzado* el acto de traición que medita: lo *prepara*... La ejecución del crimen de traición *comienza* cuando, llegado el día de la explosión, el conspirador reúne sus fuerzas, distribuye las armas, reparte proclamas, explica sus proyectos, designa los puntos de ataque. Entonces ha salido de su esfera de actividad individual, turba el orden público, la *agresión es flagrante*. Ya no prepara el crimen: lo *ejecuta*” (2). Pero en este último caso, dada la

(1) Numeros 49 y siguientes, en el tomo I.

(2) Rossi, *Traité de droit penal*, liv. II, chap. XXVII,





naturaleza de los delitos de que se trata, todos los hechos de ejecución son ya el alzamiento público, todos ellos constituyen ya el delito perfecto. El mismo Rossi agrega más adelante de los párrafos transcritos: “No es necesario confundir el *resultado que se espera* del crimen, con la *ejecución* del crimen. El propósito del conspirador puede ser apoderarse del poder ó hacerle pasar á otras manos. ¿Quiere decir esto que el crimen no comience sino en el momento en que el conspirador se apodere efectivamente de la cosa pública? Aquel es ya el resultado del crimen, no su principio de ejecución”.

914. Es, pues, difícil, según la doctrina en que se funda la ley sobre la tentativa, distinguir en estos delitos á que se dá el nombre de *formales*, otra cosa que el acto preparatorio y el delito perfecto: la tentativa escapa á toda percepción. Cada uno de los actos que preceden al alzamiento público, puede ser en sí mismo un acto perfectamente lícito, ó una mera infracción castigada en sí misma, y no por su relación con el delito á que se dirige. Esos actos no tienen una relación directa y necesaria con el propósito final: no son *inequívocamente* conducentes á él.

915. Pero, entre los actos preparatorios, el que mantiene relación más directa con el delito, es el de la conspiración. La rebelión y la sedición son delitos que requieren el concurso de varias personas, el mútuo acuerdo, la comunicación de los proyectos y de los medios de ejecución. Por esto en los códigos penales extranjeros, en que se ve en la conspiración en sí misma un acto que pone en peligro la seguridad interior del Es-

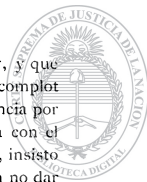


tado, se la prevé especialmente y se la castiga con penas inferiores á las que imponen al delito (1).

916. Una disposición de la Parte General del Código, de cuya interpretación me ocupé en su sitio (2), podría entenderse aplicable á los casos de complot para la rebelión, y con mayor motivo si se tiene en cuenta la anotación con que fundaba su artículo el doctor Tejedor, y se la aplica al nuevo texto. Me refiero al artículo 28, en que se dispone que, “en los casos de delito no consumado, la organización del complot se castigará como tentativa del delito convenido”, parte del artículo 43 del código Tejedor, á cuyo pié el proyecto transcribía estas palabras de Chauveau: “Hay ciertos delitos, especialmente de traición contra el Estado, en que la organización del complot, aunque no se siga la ejecución, puede castigarse no sólo como tentativa, sino también como si el crimen se hubiese consumado. La ley en este caso castiga la resolución de obrar, la simple voluntad, independientemente de cualquier acto exterior, porque esta voluntad y esta resolución presenta peligros para la sociedad, desde que emana una y definitiva de muchas personas reunidas”. Fácil sería, tomando el texto del artículo 28 y esta anotación, entender que también está incriminada por nuestro Código la conspiración de los rebeldes. Ateniéndome á la resultante de la comparación de los textos legales sobre complot y sobre tentativa, demostré en el lugar citado que la mera organización

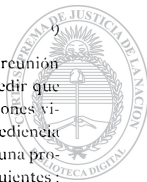
(1) Artículo 249 del código español, 134 del italiano, 89 del código francés, 124 del belga.

(2) Véase el número 223.



de un complot, no era un acto penado por la ley, y que no podía entenderse que la incriminación de un complot naciera sino del hecho de manifestarse su existencia por actos exteriores que tuvieran relación directa con el delito. En cuanto al ejemplo puesto en la nota, insisto en creer que sea consejo de buena interpretación no dar á las anotaciones de los proyectos, especialmente cuando se limitan á la transcripción de textos de autores, un alcance que es difícil que deseara atribuirle el mismo autor del proyecto. Una nota de aquel género no siempre se coloca como fundamento ni como explicación de la disposición : es, por lo regular, un elemento de comparación que se pone á mano del inteligente lector, para que lo aproveche en sus justos límites. Bastará recordar que los autores que prestan su material á las notas, han escrito sobre otro cuerpo general de leyes y de doctrinas, y que su auxilio no es eficaz sino en tanto que el punto consultado tenga perfecto acuerdo en ambas legislaciones.

917. La rebelión y la sedición tienen por carácter común el *alzamiento público*. Se diferencian en cuanto la rebelión existe cuando al alzamiento público se une la abierta hostilidad contra el gobierno de alguna Provincia, y el alzamiento público, en la sedición, tiene lugar sin desconocer al gobierno constituido. Se diferencian así mismo en el objeto del alzamiento. El de la rebelión debe consistir necesariamente en uno de los siguientes: 1º alterar ó destruir la Constitución; 2º deponer al gobernador ó á otro de los poderes públicos é impedir la transmisión del mando en los términos y forma establecidos en la Constitución ; 3º arrancar á los poderes constitui-



dos alguna medida ó concesión : 4.º impedir la reunión de las cámaras legislativas, disolverlas ó impedir que funcionen libremente : 5.º reformar las instituciones vigentes por medios violentos : 6.º sustraer á la obediencia del gobierno algún departamento ó partido de una provincia. Los fines de la sedición deben ser los siguientes : 1.º deponer alguno ó algunos de los empleados públicos de alguna provincia ó sus departamentos, ó impedir que tomen posesión del destino los legítimamente elegidos ó nombrados : 2.º impedir la promulgación ó ejecución de las leyes, ó la celebración de las elecciones provinciales : 3.º impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones ó hagan cumplir sus providencias administrativas ó judiciales : 4.º allanar los lugares de prisión ó atacar á los que conducen presos de un lugar á otro, sea para salvar á éstos ó para maltratarlos.

918. He enunciado que, según los términos de la ley, el elemento de hecho de los delitos de rebelión y sedición consiste en *alzarse públicamente*. De este hecho deriva el carácter *colectivo* de aquellos delitos, carácter sobre el cual no es posible duda alguna. Explicando las mismas palabras en el texto del código español, Groizard dice que alzarse públicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno, es insurreccionarse, es sublevarse, es levantar en frente de su autoridad y de su fuerza, fuerzas organizadas para luchar y disputarle en todo ó en parte el ejercicio del poder público. No todo movimiento tumultuario es por lo tanto una rebelión, sino aquel que obedece á previos propósitos y planes y que tiene la organización necesaria para poder decirse con razón que vá encaminado á conseguir alguno de los propósitos deter-



minados en la ley (1). Refiriéndose luego á la reforma introducida por el texto del código de 1870 al de 1850 agregando que el alzamiento público en la sedición debía ser tumultuario, el mismo autor añade : “ En la reforma se ha querido, sin duda, determinar más el carácter colectivo de esta clase de delitos. Un reducido número de personas no se alza públicamente contra las autoridades, ó si se alza, no produce el daño, el peligro y la alarma inherentes á una verdadera sedición. Para subvertir el orden jurídico, atropellar las leyes ó impedir á las autoridades el ejercicio de sus funciones, es por lo menos necesario la ostentación de una fuerza colectiva que pueda creerse en condiciones, sino de triunfar, de resistir al empuje de la fuerza pública. Una reunión tumultuaria es casi siempre signo de la ineficacia del medio elegido para llegar al fin del delito ” (2).

Aunque en nuestro texto no se consigne la palabra *tumultuariamente*, la necesidad de que concorra para su consumación cierto número de personas, que nuestra ley deja indeterminado, se manifiesta en la relación que debe existir entre el alzamiento y el propósito que lo inspira. Antes de la reforma expresada del código español, el de 1850, que guarda en esta materia la más perfecta analogía con el nuestro, se entendía de la misma manera : “ La rebelión es un delito colectivo que se hace en público, que se sostiene con armas. Nunca hay un rebelde, como no haya muchos rebeldes ; nunca se comete este crimen sino empleando la fuerza con verdade-

(1) GROIZARD, *El Código penal de 1870*, tomo 3º, página 375.

(2) *Ibidem*, página 410.

ra organización, con abierta y declarada hostilidad. Una reunión de amotinados tumultuarios no son rebeldes. Un regimiento que toma las armas, una plaza fuerte que se subleva, sí lo son". Y respecto á la sedición: "De hecho, la palabra sedición no se emplea sino cuando el número de personas es proporcionalmente considerable: mas determinar cuándo y desde qué punto lo comienza á ser nos parece una pretensión imposible. Hay cosas que mejor que se definen se sienten. Para verificar el alzamiento de que habla el artículo, necesario es que exista una fuerza proporcionada, que presuma á lo menos medirse con la pública y vencerla" (1).

919. La *abierta hostilidad contra el gobierno de alguna Provincia* que el artículo 226 del Código enuncia como elemento necesariamente concurrente con el alzamiento público para constituir el delito de rebelión, no se consignaba en el proyecto Tejedor ni en el de la Comisión revisora. Han sido tomados del código penal español. Según el proyecto Tejedor, cometían delito de rebelión "los funcionarios ó particulares que se alzan públicamente para alguno de los objetos siguientes etc.": el proyecto de la Comisión revisora usó los términos: "los que se alzaren públicamente", y el código español: "los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad *contra el gobierno*". Tanto en esta fórmula como en la de nuestro artículo, "contra el gobierno de alguna Provincia", y aún más especialmente en la segunda, me parece que la palabra *gobierno* debe tomarse en una acepción más extensa que la usual entre nosotros, que se refiere

(1) PACHECO, *El Código penal, etc.*, tomo 2º, páginas 166 y 186.



al Poder Ejecutivo. Entre los objetos que puede proponerse el alzamiento, la ley enuncia el de arrancar á los poderes constituidos alguna medida ó concesión, el de impedir la reunión de las *Cámaras Legislativas*, disolverlas ó impedir que funcionen libremente y el de reformar las instituciones vigentes por medios violentos, circunstancias todas en que la ley no tendría por qué requerir la abierta hostilidad contra el Poder Ejecutivo como elemento constitutivo del delito.

920. En la enumeración de los fines que puede proponerse el alzamiento, el artículo 226, consigna el de “alterar ó destruir la Constitución”. El proyecto Tejedor decía: “destruir la Constitución de la Provincia y variar la forma de gobierno”, fórmula que también reprodujo el proyecto de la Comisión revisora. Es también la fórmula del inciso 1° del artículo 11 de la ley nacional de 1863. No encuentro en la nueva redacción ninguna reforma que modifique el fondo de la disposición, si solamente se atiende al contexto del inciso. La forma de gobierno en cualquiera de los estados argentinos deriva de una Constitución, que es el único medio de existencia legal del gobierno mismo. En consecuencia, cuando se dice *alterar* la Constitución, queda comprendido, en aquel término general, así una variación en la forma de gobierno, como toda otra alteración.

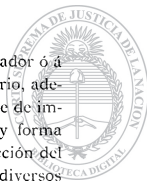
921. La cuestión es más grave cuando se subordina el inciso 1°, al encabezamiento del artículo que consigna los elementos generales del delito de rebelión. Para que este exista es necesario que el propósito de alterar ó destruir la Constitución se haya manifestado por un alzamiento público y en abierta hostilidad contra el go-

bierno de la Provincia. Y ¿si el alzamiento con tal propósito contara con el apoyo de uno de los poderes públicos ó directamente de los que desempeñen uno de éstos? ¿si se tratara de una alteración violenta en la Constitución operada por el Poder Ejecutivo con disolución de las Cámaras Legislativas? No se trata de saber por qué medios se restablecería el funcionamiento regular del orden constitucional; se trata de saber si sería delito el cometido por el funcionario público con aquel propósito. Más explícito era sobre este punto el proyecto Tejedor: el delito de rebelión lo cometían los *funcionarios* ó particulares que se alzarán para destruir la Constitución. Esto no obstante, teniendo presente la acepción en que aparece usado el término *gobierno*, y á la que ya he hecho referencia, no conteniéndose, por otra parte, excepción alguna respecto de los funcionarios, creo que esta calidad no les eximiría de la responsabilidad penal.

922. El segundo inciso agrega: “deponer al gobernador ó á otro de los poderes públicos é impedir la transmisión del mando en los términos y forma establecidos en la Constitución”. El proyecto de la Comisión de códigos de la Cámara de Diputados, presentado en 1885, decía simplemente “deponer al gobernador constituido ó á uno de los poderes públicos”, y la última parte fué introducida en las reformas propuestas por la misma Comisión en las sesiones de 1886 (1). Según la interpretación gramatical de la nueva redacción, no basta para constituir el delito de rebelión que el alzamiento pú-

(1) *Diario de sesiones de 1886*, tomo 2º, página 686.





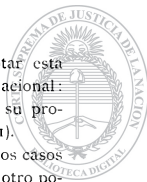
blico tenga el propósito de deponer al gobernador ó á otro de los poderes públicos, sino que es necesario, además, en cualquiera de los dos casos, que se trate de impedir la transmisión del mando en los términos y forma establecidos en la Constitución. En la construcción del periodo, el oficio de la conjunción es unir los diversos miembros que le constituyen, y debe en consecuencia entenderse en el citado, que las primeras circunstancias tendrán lugar *conjuntamente con* las segundas. No bastará para resolver lo contrario la concordancia que aparece existir entre el inciso de que me ocupo y el segundo de la citada ley nacional de Setiembre de 1863: “para deponer al presidente de la Nación, despojándolo de su autoridad constitucional, ó para arrancarle alguna medida ó concesión, ó para impedir la transmisión de la misma autoridad en los términos y formas establecidos en la Constitución”.

923. ¿Cómo deberá, en definitiva, interpretarse la disposición? ¿Ha habido en el texto del inciso segundo una incorrección gramatical? ¿Ha habido un error de copia? No creo en manera alguna que la afirmativa en cualquiera de estas dos últimas cuestiones sea indudable. El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la redacción actual sin observación alguna. Es posible que para ello mediaran razones que no nos son conocidas. Desde luego, deponer á un gobernador ó á otro poder constituido que se excediera en el término de su mandato, que no lo transmitiera en la fecha y formas constitucionales determinadas, no sería un hecho digno de incriminación. Más criminal sería el gobierno conculcador de las leyes fundamentales, que el pueblo que se alzara en

abierta hostilidad contra él para defenderlas. Puede haberse pensado en esta circunstancia para adoptar una fórmula que se creyó más liberal: aunque si esto fuera así, presentaría por otra parte el peligro de que el alzamiento tuviera por objeto impedir la transmisión del mando sin deponer al gobernador, hecho que no sería de extrañarse en cualquier época de servilismo en que las sensualidades del poder originaran en el gobernante veleidades de tiranía, que el partido oficial favoreciera. El texto del inciso que comento sería en todo caso censurable por no inculpar este hecho que resulta penado por la ley de Setiembre que se tuvo á la vista: pero de todas maneras, la ley debe ser aplicada *tal como está escrita*.

924. El inciso tercero dice: “arrancar á los poderes constituidos alguna medida ó concesión”, disposición que tampoco se consignaba en los proyectos anteriores y que fué introducida por la Comisión de la Cámara de Diputados en la planilla de reformas de 1886. Aparece tomada inmediatamente de la citada ley de 1863. La discordancia entre los proyectos anteriores y la ley nacional había sido ya censurada: “El proyecto (1) no dice sino *deponer al gobierno constituido*: de manera que arrancar alguna medida ó concesión al Gobernador ó Jefe del Poder Ejecutivo en el orden provincial, no lo considera como un acto de rebelión. El informe de la Comisión no da ninguna razón para la supresión de estos hechos de la categoría de los delitos que constituyen actos de rebelión, y, por el contrario, manifiesta en su

(1) Se refiere al de los doctores Villegas, Ugarriza y García.



informe la conveniencia de armonizar y adaptar esta parte del Código á las disposiciones de la ley nacional: creemos que ella ha sido inconsecuente con su propósito al enunciar esta parte del artículo 1.4" (1).

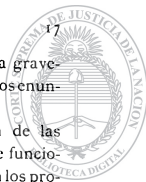
925. Pero á la vez se ha hecho observar que los casos de levantarse para deponer al Gobernador ó á otro poder constituido, ó alterar el régimen constitucional presentaban distinta gravedad con el de que se tratara de arrancar alguna medida ó concesión, y que debiera corresponderle distinta pena. Refiriéndose á la ley nacional de 1863, el doctor Hall decia: "Los diferentes casos que constituyen delitos de esta naturaleza no son todos del mismo orden ni de la misma gravedad; destruir la Constitución jurada ó cambiar la forma de gobierno, no es, bajo ningún punto de vista un delito de la misma gravedad que "arrancar alguna resolución á los poderes colegisladores violando el recinto de sus sesiones": en este delito, la alarma causada, la violencia cometida, no tienen ni deben tener la importancia del delito consignado en el primer inciso: una vez que hubiere cesado la intimidación ejercida sobre los cuerpos colegisladores, estos pueden dejar sin efecto aquellas resoluciones arrancadas por medio de la fuerza á la cual no se ha podido contrarrestar: los actos ejecutados bajo la influencia de esta opresión y violencia no pueden tener ningún carácter válido, á no ser que mediare ratificación expresa ó tácita después que la violencia hubiere cesado" (2). Aunque no es necesaria para la con-

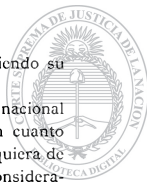
(1) J. J. HALL, *Rebelión y sedición*, tesis presentada á la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la Capital, página 40.

(2) *Ibidem*, página 35.

sumación la realización del objeto propuesto, la gravedad del fin es manifiestamente distinta en los casos enunciados.

926. El inciso 4º dice: "impedir la reunión de las Cámaras Legislativas, disolverlas ó impedir que funcionen libremente", disposición que concuerda con los proyectos anteriores y con los códigos españoles de 1850 y de 1870. Estudiando la ley nacional del 63, que en el artículo respectivo dice: "disolver el *Congreso*" el doctor Hall, en el trabajo citado, se propone la cuestión de saber si el impedimento debe recaer sobre ambas Cámaras, ó sobre una de ellas, y en este último caso, si las penas aplicables deben ser de la misma intensidad, ó si impidiendo la deliberación á una de ellas debe de creerse conculcados sus fueros, dejando á la más alta expresión del poder público sin facultad de manifestar su voluntad: y la resuelve en el sentido de que el delito se perfecciona aún cuando el levantamiento se dirija contra una sola de las Cámaras, teniendo en cuenta que en el orden constitucional las leyes se discuten y se votan en ambas Cámaras y pueden tener su origen en cualquiera de las dos, con excepción de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas; que cada ley discutida y sancionada por una de las Cámaras, debe de sufrir el mismo trámite en otra, no pudiendo convertirse en ley ningún proyecto sin la sanción de ambas; que, ejerciendo presión ó impidiendo la deliberación sobre uno de los cuerpos colegisladores, por reflexión se ejerce sobre el otro: y en conclusión que, impidiendo deliberar á una de las Cámaras se impide á las dos, é impi-





diendo que deliberen se disuelve, desapareciendo su autoridad (1).

La misma cuestión que suscita el texto de la ley nacional puede originarse del inciso del Código Penal, en cuanto se refiere á las Cámaras, en plural, y no á cualquiera de ellas; y aunque me parecen concluyentes las consideraciones que hace el doctor Hall, preferiría que el texto de la ley no diera lugar á dudas, lo que sería posible con una ligera modificación.

927. El inciso 5° dice: “reformular las instituciones vigentes por medios violentos, disposición consignada en el proyecto Tejedor y en el de la Comisión revisora, en los que se decía *violentos ó ilegales*. La supresión de esta última palabra obedece al concepto general de la rebelión caracterizada por la *abierta hostilidad*, que introduce entre los elementos sustanciales del delito, el de la violencia.

928. El inciso se refiere á las instituciones *vigentes*, y no es fácil determinar con precisión á qué cosa entiende la ley referirse con estos términos.

En los proyectos en que se consignaba la misma disposición no se hablaba antes de ella del propósito de *alterar* la Constitución de que se habla en el inciso 1° del artículo que comento. Podía entenderse entónces que el inciso se refería á la reforma violenta de la Constitución. Prevista hoy en un inciso la rebelión con propósito de alterar la Constitución, y en otro la que tiene por objeto reformar instituciones vigentes, éstas y aquéllas son para la ley cosas manifestamente diversas. El inciso se refiere á toda organización institucional que

(1) *Ibidem*, página 45.

emane de una ley distinta de la Constitución; y sólo cabría á este respecto alguna observación relativa á la distinta importancia ó gravedad del delito, que podría fundar una diversidad de penas.

929. El último inciso dice: “sustraer á la obediencia del gobierno algún departamento ó partido de una Provincia”, disposición que los proyectos anteriores tomaron del código penal español, y propósito final de la rebelión cuya incriminación se justifica fácilmente.

930. En los proyectos del Código se consignó un inciso más, que decía: “investirse de autoridad ó facultades que no se hubiesen obtenido legalmente”, y que resultó suprimido en la planilla de modificaciones presentada en 1886 á la Cámara de Diputados por su Comisión de Códigos. El motivo de la supresión puede suponerse que haya sido el de encontrarse en el hecho un delito calificado en otro título bajo la denominación de usurpación de autoridad. Si este fuera el motivo, no sería justificada la modificación, porque en un caso se trata de un alzamiento público con propósito de investirse de autoridad y en otro era necesario para la consumación del delito el ejercicio efectivo de la autoridad. No creo tampoco que se haya supuesto que un número de personas debieran alzarse para investirse todas de autoridad, según los términos proyectados, pues el delito aparecería perfecto en el autor principal que se alzara para investirse él mismo de autoridad, pudiendo cooperar á la ejecución numerosos cómplices.

931. He expresado ya que la sedición presentaba como carácter legalmente distintivo de la rebelión el de que el alzamiento público se operara sin desconocer al go-





bierno constituido y con distintos propósitos finales.

El primero de los objetos enunciados en el artículo 227 es el de “deponer alguno ó algunos de los empleados públicos de alguna Provincia ó de sus departamentos, ó impedir que tomen posesión del destino los legítimamente nombrados ó elegidos”.

Alzarse públicamente para deponer un empleado público ó impedirle que tome posesión de su destino, requiriéndose á la vez que no se desconozca al gobierno constituido, es un hecho que quizás no pueda presentarse sino en tanto que el nombramiento ó la deposición del empleado no dependa del gobierno. En este último caso es posible el alzamiento para deponer ó impedir la toma de posesión, sin que la acción de los sediciosos se manifieste en hostilidad contra el gobierno. Cuando se trata de un empleado gubernativo, aquellos actos son de manifiesta desobediencia al gobierno.

Esta misma observación cabe, quizás, respecto de cada uno de los incisos del artículo 297, por lo que puede repetirse con toda propiedad que la sedición es el camino de la rebelión. O el alzamiento desaparece ante la intimación del gobierno, ó la resistencia se pronuncia contra éste, apareciendo la abierta hostilidad que caracteriza la rebelión.

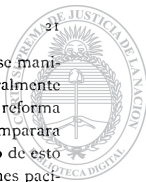
932. El inciso segundo del mismo artículo 297 dice : “ impedir la promulgación ó ejecución de las leyes ó la celebración de las elecciones provinciales. ” Esta es también la disposición del inciso 1º del artículo 250 del código penal español de 1870 y del 174 del código de de 1850, de donde la tomaron los proyectos anteriores. El alzamiento con el propósito de impedir la promulga-

ción ó ejecución de leyes no es un hecho á que se manifieste tendencia en nuestro país. Se tiene generalmente confianza en los medios legales para obtener la reforma ó derogación de cualquiera iniquidad que se amparara también de las formas legales. Ha dado ejemplo de esto la ciudad de Buenos Aires buscando en reuniones pacíficas los medios de resistencia al cumplimiento intentado por la empresa de las obras de salubridad de la Capital, de una ley eminentemente perjudicial á los intereses del vecindario.

933. En cambio, la tendencia á obstaculizar la celebración de las elecciones ha sido manifestada en todas las épocas de lucha de los partidos políticos, haciéndose en todos los casos completa omisión de las disposiciones penales al respecto. A esta viciosa impunidad se debe quizás alguna parte de la manifiesta descomposición del sistema electoral á que hoy hemos llegado y contra la cual es ya ineficaz la acción de la ley penal.

934. Puede ser también propósito del alzamiento el de impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones ó hagan cumplir sus providencias administrativas ó judiciales. Tratándose de un delito formal conviene recordar que no será necesario para su consumación trabar el ejercicio de la autoridad, sino alzarse con ese objeto. La violencia que con este motivo se ejerciera en el empleado constituirá una causa de agravación y no un elemento del delito.

935. Lo mismo puede decirse del inciso 4º del artículo 227: “allanar los lugares de prisión ó atacar á los que conducen los presos de un lugar á otro, sea para salvar á éstos, sea para maltratarlos”. Es siempre el *alzamiento*





público con este objeto lo que constituye el delito, porque tal es la indudable disposición legal, tomada de la ley española. No es necesario acto alguno de violencia personal, ni el ataque efectivo: bastará la manifestación hostil.

936. El artículo 228 contiene una disposición que comprende las que en el código Tejedor se denominaban motín y asonada. Consiste en el hecho de los que, sin rebelarse contra el Gobierno, ni desconocer las autoridades locales, se reúnan tumultuosamente para exigir con violencias, gritos, insultos ó amenazas, la deposición de algún funcionario público, la soltura de un preso, el castigo de delincuentes ú otra cosa semejante, y de los que se unieren en número que no baje de cuatro, para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito, ó perturbar con gritos, injurias ó amenazas una reunión ó la celebración de alguna fiesta religiosa ó cívica, ó para exigir de los particulares alguna cosa justa ó injusta.

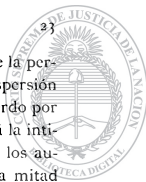
De estos términos resulta que se trata también de un delito formal como el de la rebelión y el de la sedición, consistente en la reunión tumultuosa por aquellos medios y con los propósitos indicados.

937. Las penas que la ley asigna á estos delitos son: para los reos de rebelión, la de destierro por tres á seis años; para los reos de sedición, la de uno á tres años de destierro; para los de motín ó asonada, la de arresto; correspondiendo el máximo de la pena á los autores principales, á los empleados públicos que hubiesen tomado parte en los delitos, y á los instigadores del hecho.

938. Dispone además la ley que “en caso de disol-

verse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sea que la dispersión se verifique espontáneamente y de común acuerdo por los mismos sublevados ó bien por obediencia á la intimación de la autoridad, sólo serán enjuiciados los autores principales y castigados en su caso con la mitad de la pena señalada para el delito ”.

La cuestión que inmediatamente surge de esta disposición legal, y dada su actual colocación en el capítulo en que se encuentra consignada, es la de saber si se trata de una disposición común á los delitos previstos en los artículos 226, 227 y 228. ó si es solamente referente al de que trata el último. Quien tuviera presente lo que sobre este punto disponen muchos códigos extranjeros y lo que disponía el código Tejedor, se sentiría inmediatamente inclinado á aceptar aquella prescripción como común á los tres artículos citados. En el código español de 1850, en el reformado de 1870, en el código de Honduras, en el de la República Oriental del Uruguay, etc., la disposición se aplica también á los delitos de rebelión ó sedición. Pero, estudiando la formación de este capítulo del Código Penal, y correlacionando sus disposiciones particulares, puede ser muy fundada una interpretación diversa. En el proyecto que la Comisión tuvo principalmente á la vista, la disposición de que se trata se consignaba en un capítulo llamado *Disposiciones comunes*, á continuación de los capítulos *Rebelión, Sedición, Motín y Asonada*. Incorporados todos estos capítulos en uno solo, no puede ya asegurarse que cada artículo tenga forzosamente subordinados á los anteriores, pudiendo referirse á uno solo de ellos y no á los demás. El artí-





culo 230 habla de la disolución del *tumulto* y el artículo 228 es el único que hace referencia á una reunión *tumultuosa*. Los artículos 226 y 227 no hablan de *tumulto*, por más que pueda considerarse que este es el acto de ejecución de los delitos de rebelión y de sedición. ¿Se ha querido efectivamente privar á los autores de estos últimos delitos de la exención de pena ó de la atenuante que establece el artículo 230? No encuentro qué motivo podría justificar la separación de una regla generalmente admitida, y pienso que si alguna razón hubiera existido para ello, se hubiera tenido mayor cuidado en no dar lugar á una interpretación dudosa y se hubiera referido con toda precisión la disposición de que se trata al caso particular á que debía aplicarse. Creo asimismo que una disposición de tanta importancia como la que autoriza la exención de toda pena para unos delinquentes y la reducción á la mitad del castigo para otros, no debiera haberse consignado en forma ambigua.

939. Considerando el fondo mismo de la disposición se encuentra en ella una excepción á los principios generales que rigen la penalidad de los delitos. Según queda expuesto en números anteriores los delitos de que trato alcanzan su perfecta consumación con el alzamiento público con uno de los objetos enunciados en la ley. La especialidad que aparece en este delito es la de que una vez consumado según los términos de la ley, pueden sus autores eximirse de pena ó reducirla, circunstancia que no se manifiesta en ésta forma en ningún otro delito. Se encuentra generalmente el fundamento de ésta disposición en la utilidad manifiesta que para el restablecimiento de la tranquilidad pública puede

importar el hecho de no encarcelar un gran número de ciudadanos. Pero puede verse una razón jurídica de la disposición en el hecho de haberse erigido en delito lo que en la generalidad de los casos de delincuencia sería mera tentativa. Puede verse también una eminente razón de justicia en disponerlo así, por cuanto la rebelión, la sedición y el motín pueden ser inspirados, los primeros por el móvil generoso de buscar el mayor bien del país y el último por la justa indignación que produjera un acto odioso de la autoridad ó del particular contra quien se dirigiera. No hay que olvidar que los delitos políticos, tan bien clasificados y reprimidos como se quiera por las leyes penales, han sido el medio por el cual se ha llegado á la conquista de las grandes libertades. Las revoluciones que han derrocado las más oprobiosas tiranías, que han devuelto la independencia á los pueblos conquistados y que han levantado grandes naciones donde había miserables colonias, se han producido por la rebelión, la sedición ó el motín. Nuestra gran revolución de Mayo sería cuando mucho en los términos del Código, una sedición. El gran movimiento político que ha cambiado la forma de gobierno en el único territorio americano sustraído á la forma republicana, la gran revolución que ha mudado el régimen gubernativo del Brasil es, por el código criminal del Imperio, un crimen contra la constitución del Imperio y la forma de gobierno, que el artículo 85 castiga hasta con prisión perpetua con trabajos forzados. Quizás deba en definitiva borrar-se de los códigos penales una clase de delitos que son castigados solamente cuando sus autores no realizan su propósito y que son en cambio acciones alta-





mente meritorias que obligan el reconocimiento de la posteridad cuando consiguen derrocar una tiranía, independizar un pueblo ó perfeccionar una forma institucional. No podemos rememorar el pasado ni contemplar las estatuas de nuestras plazas públicas sin encontrar venerados como héroes á los autores de rebeliones, de sediciones y de motines. Un gobierno ó una forma de gobierno pueden subsistir mientras tengan fuerza en la opinión ó fuerza material para sostenerse. Si la tienen, les bastará para mantenerse, el uso de la fuerza, y para conservar el orden en la sociedad, los medios preventivos que la Constitución les acuerde: si no los tienen, resulta ilusoria la acción del Código Penal que se convierte en una fuerza de inhibición puramente nominal.

940. Se contiene generalmente en los códigos penales una disposición que prescribe la intimación á los revoltosos de disolverse ó retirarse. El Código no la consigna, aunque supone el caso de que la autoridad hubiera hecho la intimación. Esto no obstante, nuestra ley no difiere fundamentalmente de las que como la española, prescribiendo á la autoridad el deber de hacer dos intimaciones, no dispone sanción alguna contra la autoridad que omitiera el cumplimiento de la prescripción, ni atribuye á esa omisión influencia alguna sobre la culpabilidad de los imputados. En mi opinión, sería conveniente la doble intimidación que generalmente se prescribe, pero disponiendo á la vez que no se entendiera consumado el delito sino por la desobediencia á la intimación, salvando los casos en que fuera imposible que ella tuviera lugar.

941. La ley dispone que los que cometen delitos comu-

nes con motivo de la rebelión, motín ó asonada ó con ocasión de ella, sean castigados con la pena que corresponda á esos delitos. Análogas disposiciones se consignan en la ley nacional de 1863, en el código Tejedor y otros. Comentando el artículo del código español, Groizard piensa que aunque el artículo no estuviera escrito en el código, los tribunales harían lo que él dice, porque sería necesario para que así no sucediera el que fuera la rebelión un motivo de exención de responsabilidad criminal para las demás clases de delitos (1).

Pero si la disposición del código penal español no puede dar lugar á observación alguna, depende de que la disposición está consignada en él en los siguientes términos: “los delitos particulares cometidos en una rebelión ó sedición ó con motivo de ellas, serán castigados respectivamente *según las disposiciones de este código*”. Esta última parte dá lugar á estimar la concurrencia ó la conexidad de delitos, según los casos. Nuestro texto manda que al autor de rebelión, motín ó asonada, que cometiera un delito común, se le aplique la pena de este delito, con lo que se le excluye la del delito principal. Con esto podría presentarse el caso de que un rebelde, autor de una lesión leve ó de un hurto, fuera castigado con la pena de arresto en lugar de la de destierro por tres á seis años, lo que no es quizás lo que se ha intentado disponer. Esta consecuencia es la que trataba de evitar la ley nacional del 63 al disponer que los reos de crímenes particulares durante la rebelión ó con ocasión de ella fueran castigados con la pena mayor que

(1) GROIZARD, *El código penal de 1870*, tomo 3º, página 436.



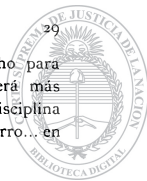
correspondiera á los delitos. Era también esta la fórmula del proyecto Tejedor. Pero para adoptar una fórmula semejante sería necesario determinar en estos casos la equivalencia de las penas de destierro con la de los otros delitos.

942. En el mismo artículo se omite comprender en la disposición el caso del delito común cometido durante la *sedición* ó con ocasión de ella. Esta omisión no aparece en las leyes concordantes, pues, aunque separadamente la consignan, ella se encuentra en la citada ley nacional y en el Proyecto Tejedor. En el código español se encuentra entre las disposiciones comunes.

943. El empleado que estando encargado de conservar el orden público no combate la rebelión, sedición, motín ó asonada con los medios de que disponga, sufrirá, dice la ley, la pena de destitución. El código Tejedor y la ley nacional agregan á esta pena la de inhabilitación para obtener cargos públicos.

944. El artículo 233, último del capítulo *Rebelión y Sedición* dispone que “los meros ejecutores serán condenados al servicio de las armas por uno á dos años”. No refiriéndose la ley á distinción alguna deberá entenderse que corresponde la misma pena á los meros ejecutores de rebelión, de sedición ó de motín, delitos que siendo de diversa entidad en los autores principales debían lógicamente serlo en los meros ejecutores: y esta es la primera observación que sugiere la disposición citada. Pero hay otra más, y es la de que la ley entiende que es menor que la de los inspiradores ó autores principales la responsabilidad que los que llama meros ejecutores, y cree sin duda favorecerlos con imponerles la pena de servi-

cio de las armas. No es necesario insistir mucho para comprender que en ciertas circunstancias será más grave pena un año de servicio en la rigurosa disciplina de los cuerpos de línea que un año de destierro... en Montevideo.





CAPÍTULO II

ATENTADO Y DESACATO Á LA AUTORIDAD

(Artículos 234 á 239)



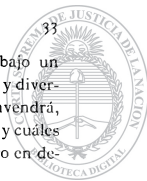
945. Observaciones sobre el método. — 946. Método de la exposición. — 947. Disposiciones legales sobre el atentado y el desacato. — 948. Caracteres comunes de ambos delitos. — 949. Diferencias entre ellos. — 950. Qué se entiende por *autoridad* en el delito de atentado ; legislación comparada. — 951. Cómo debe entenderse el artículo 234, en este punto. — 952. Empleo de “ fuerza ó intimidación ”. — 953. “ Al tiempo de practicar sus funciones ”. — 954. Cuándo es legítima la resistencia. Jurisprudencia y doctrina en Francia. — 955. Solución legal de la cuestión. — 956. Extracción de presos. — 957. Criterios de gravedad adoptados. — 958. Otras agravaciones que sería posible admitir. — 959. Conveniencia de tener en cuenta la importancia de la autoridad ofendida. — 960. Método para legislar el desacato. — 961. Provocación á duelo, injuria ó amenaza á un funcionario. — 962. Por qué no se comprenden la calumnia y los insultos. — 963. Deben ser motivados aquellos hechos á causa del ejercicio de las funciones. — 964. — ¿ Es necesario que la ofensa sea *dirigida* al funcionario? — 965. Grave perturbación del orden en los Juzgados, Tribunales, y donde quiera que la autoridad ejerza sus funciones. —



966. Entrar armado al salón de sesiones de las Cámaras legislativas. — 967. Impedir á un representante ó funcionario público que concurra á su Cámara ó despacho. — 968. Resistir ó desobedecer abiertamente á la autoridad. — 969. Penalidad del desacato. — 970. Criterios de gravedad que se podría admitir.

945. El capítulo segundo del título *Delitos contra la seguridad interior y orden público* legisla sobre los delitos de *atentado y desacato contra la autoridad*, y si se considera que es indispensable á la existencia de estas calificaciones que el hecho no sea cometido con alzamiento público, se verá que hay fundamento para creer que á ellos sólo corresponda el carácter de delitos contra el orden público, y no contra la seguridad interior del Estado. Más aún, un atentado ó un desacato contra la autoridad pueden tener la más perfecta consumación sin que produzcan menoscabo en el orden público; por ejemplo, cuando el funcionario está en su despacho y el atentado se produce sin escándalo. Teniendo también en cuenta que debe mediar una necesaria relación de subordinación entre los artículos consignados en la ley y el título de la misma en que se encuentran colocados, estimo como superior al de nuestro Código, el método observado por el Código Penal de la República del Uruguay: los delitos de rebelión y sedición, son delitos contra el *orden público*; el atentado y desacato, corresponden al título *De los delitos contra la administración y la autoridad pública*.

946. El atentado y el desacato son delitos que la ley estima diversos, aunque por los caracteres comunes que



pueden presentar, el Código los haya reunido bajo un solo capítulo. Son diversas sus denominaciones y diversas las circunstancias que los caracterizan. Convendrá, pues, investigar en qué consisten sus analogías y cuáles son sus diferencias, en general, estudiando luego en detalle sus particularidades.

947. Según el artículo 234 del Código cometen *atentado* contra la autoridad los que *sin alzamiento público*, emplean sobre ella intimidación ó fuerza al tiempo de practicar sus funciones, ó por consecuencia de haberlas practicado.

Según el artículo 237, cometen *desacato* contra la autoridad: 1º los que provocan á duelo, injurian ó amenazan á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones; 2º los que causan grave perturbación en el orden de los juzgados ó tribunales, y en donde quiera que las autoridades públicas estén ejerciendo sus funciones; 3º los que entran armados manifiesta ú ocultamente al salón de sesiones de las Cámaras legislativas; 4º los que impiden que un representante ó funcionario público concurra á su Cámara ó despacho; y 5º los que resisten ó desobedecen abiertamente á la autoridad.

948. El carácter común del atentado y el desacato, es que estos delitos, á diferencia de los que forman la materia del capítulo anterior, se producen *sin alzamiento público*, y, aunque esta circunstancia no está esplicitamente consignada con referencia al delito de desacato, ella resulta de que alguno de los hechos que constituyen el delito son de tal naturaleza que no admiten la acción de una colectividad, como la provocación á duelo, y los otros hechos constituirían, al ser acompañados de alzamiento público, un acto de sedición.



Otro carácter común de estos delitos se manifiesta en la circunstancia de que el objeto contra el cual se dirigen es la persona de los que ejercen autoridad, en razón de este mismo ejercicio, en el acto de sus funciones ó por consecuencia de ellas.

949. La diferencia inmediatamente aparente entre el atentado y el desacato está en que el primero se constituye por un acto violento de intimidación ó fuerza y el segundo por un acto de irrespetuosidad ó desobediencia.

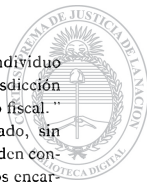
Esto no obstante, en el inciso 1º del artículo 237 se considera como desacato á la autoridad la *amenaza* á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones. La amenaza es un medio de intimidación ; y el delito de atentado no consiste en haber conseguido efectivamente intimidar al funcionario, sino en el empleo de la intimidación, pues estos delitos como los anteriores no requieren para su consumación un efecto consecutivo de la acción, y quedan consumados cuando empiezan á ejecutarse. Parecería, pues, confundirse el hecho de intimidación de que habla el artículo 234 con el de amenaza de que habla el 237; pero es manifiesto que la ley ha querido referirse á cosas diferentes, por lo menos en grado, y atendiendo á la distinta gravedad que se atribuye á ambos delitos, podrá juzgarse que la amenaza que por las circunstancias que la rodean no pueda bastar para considerársela con poder de intimidar, constituirá delito de desacato; y la que pueda reputarse eficaz para una intimidación dará lugar á la calificación de atentado. De la idoneidad ó inidoneidad del medio empleado para el fin propuesto resultará la procedencia de una ú otra calificación.

950. Estudiando en particular las disposiciones legales referidas, aparece como elemento esencial del atentado, que tenga lugar contra la *autoridad*? ¿Es autoridad el ejercicio de toda función' ó servicio público. ¿Debe tomarse esta palabra en el sentido del diccionario de la lengua, como el carácter que tiene alguno por su empleo ó circunstancias? ¿Debe tomarse en el sentido usual en el país, que une á la palabra autoridad la idea del poder de ordenar en nombre del interés social? Quizás percibiéndose las dificultades del uso de un término tan general y comprensivo es que algunos códigos han determinado expresamente á qué autoridades entendían referirse. Así el código francés (1) habla del ataque ó resistencia con violencia ó por vías de hechos contra los oficiales ministeriales, guardas de campos ó de bosques, fuerza pública, encargados de recaudación de impuestos y contribuciones, alguaciles, empleados de aduana y oficiales ó agentes de la policía administrativa ó judicial; el código belga (2) hace una enumeración análoga: el código italiano (3) se refiere al *funcionario público*, como el inciso primero de nuestro artículo 237 y el mismo código español se refiere á la fuerza empleada contra la autoridad, ó sus *agentes*. ¿Son, pues, dos cosas distintas la autoridad y los agentes de la autoridad? El código español ha creído necesario pronunciarse expresamente sobre este punto: "para los efectos de los artículos comprendidos en los tres capítulos precedentes, dice el artículo 277,

(1) Artículo 209.

(2) Artículo 269.

(3) Artículo 390.



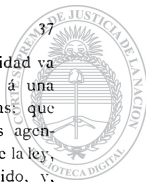
se reputará autoridad al que por sí solo ó como individuo de alguna corporación ó tribunal ejerciere jurisdicción propia y también los funcionarios del ministerio fiscal.” La calidad de agentes de la autoridad ha quedado, sin embargo, indefinida. Piensa Groizard que “pueden considerarse como tales los funcionarios ó empleados encargados de ejecutar las órdenes de aquélla, sin que sea necesario distinguir entre autoridades judiciales, políticas ó administrativas, porque todas tienen dependientes y subordinados á quienes encomendar el cumplimiento de sus órdenes ó determinaciones en el inmenso círculo de sus atribuciones. Así, son agentes de la autoridad los dependientes de orden público, ya procedan de los gobiernos de provincias, ya de los municipios; todos los encargados de la policía urbana, desde los comisarios á los serenos; los que tienen á su cuidado la policía rural y la forestal, desde el guarda municipal de campo, hasta los sobre-guardas de montes y peones camineros, los que forman parte en segundo orden de la policía judicial; los encargados del cobro de contribuciones, bien sean directas, bien indirectas, y en fin todos los que tienen la misión de llevar á cabo sus determinaciones”. La jurisprudencia ha fijado también el carácter de agentes de la autoridad en los empleados de los caminos de hierro, en cuanto hace referencia al desempeño de esas funciones, y en los cabos de vara de los presidios(1).

951. Si se considera que la distinción entre autoridad y agentes de la autoridad, que hace la ley española, aunque corriente y usual en nuestro lenguaje, no ha sido

(1) GROIZARD, *El Código Penal de 1870*, tomo 3º, página 451.

adoptada por el Código; que á la palabra autoridad va anexo el concepto de una potestad relacionada á una manera de obrar en determinadas circunstancias; que para fijar una distinción entre la autoridad y sus agentes, es necesario un pronunciamiento expreso de la ley, distinción y pronunciamiento que la ley ha omitido, y, por último, que es regla de interpretación no distinguir cuando la ley no distingue, la solución que se impone en esta materia es la de considerar que el artículo se refiere á toda autoridad ó agente de autoridad.

952. El empleo de *fuerza ó intimidación* es otra condición esencial de este delito. Estas pueden manifestarse por un acto de ataque ó por uno de resistencia, siempre que creen una situación de oposición violenta entre la autoridad y los particulares. Una desobediencia abierta y manifiesta, pero sin actitud de hostilidad, constituiría el delito definido en el inciso 5° del artículo 237: una amenaza inidónea para intimidar, constituiría como queda expresado en un número anterior, el delito previsto en el inciso primero del mismo artículo. “ Cuando la voluntad de desobedecer, dice Carrara, se manifiesta en una actitud puramente pasiva del intimidado, éste no ha comenzado aún á resistir, ni ha manifestado intención determinada de resistir. El que, intimidado á abrir la puerta de su casa, se niega á hacerlo ó permanece inmóvil, obligando así á los ejecutores á derribarla, ha desobedecido, ha resistido moralmente la orden, pero no es aún culpable de tentativa de resistencia. El que al intimidársele arresto, responda asegurándose á un árbol para tener un punto de apoyo, ó arrojándose en tierra para imponer á los ejecutores la molestia de alzarle, tam-





poco ha resistido ni comenzado el delito de resistencia" (1). Para llegar á la misma conclusión bastará atenderse al texto claro de nuestro artículo 234: lo que constituye el delito es el empleo de intimidación ó fuerza contra la autoridad, no el hecho de obligar á la autoridad á que use de fuerza ó intimidación.

953. Otro elemento del delito, enunciado en el artículo 234, es el de que la fuerza ó intimidación se empleen *al tiempo de practicar sus funciones ó por consecuencia de haberlas practicado*. En el momento de practicar sus funciones, la persona del particular desaparece dando su lugar á la del funcionario, y no sería posible distinguir en tal situación si el propósito del delincuente fué atacar á la autoridad ó al particular. Quien tiene resentimientos personales ó motivos de odio ó venganza contra éste debe respeto á la autoridad superior que representa. No sucede lo mismo cuando la autoridad está fuera del ejercicio de sus funciones: es indispensable, entonces, distinguir si el motivo del ataque es ó no un acto de la autoridad; la ley quiere asegurar la tranquilidad é independencia de todo funcionario por sus actos como tal, aún fuera del momento en que los ejecute.

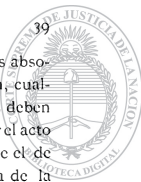
954. Suscítase en la doctrina una cuestión que puede tener la mayor importancia en la aplicación de las disposiciones sobre el atentado. Trátase de saber si habrá lugar á la calificación del delito cuando la resistencia á la autoridad tuviera por causa un proceder ilegal ó arbitrario por parte de la misma. Chauveau y Hélie resumen el estado de esta cuestión en la jurisprudencia

(1) *Programma*, § 2745.

francesa, en los términos siguientes: "La regla es absoluta: cualquiera que sea la ilegalidad de la orden, cualquiera que sea el abuso del poder, los ciudadanos deben obedecer en silencio; no tienen derecho de discutir el acto presumido de ilegal; no tienen otro derecho que el de reclamar de su ejecución (1). Esta jurisprudencia de la Corte de Casación ha sido resistida aun por las Cortes de Apelación francesas, lo mismo que por la doctrina de otros publicistas. "El agente que se permite un acto irregular ó arbitrario, dice Garraud, comete un exceso de poder: es él el primer culpable, puesto que abusa él mismo del carácter de que está investido: es indigno de la protección especial de la ley, puesto que obra fuera de las condiciones prescriptas por ésta. Bajo el punto de vista objetivo como bajo el punto de vista subjetivo no existiría rebelión (2) en la resistencia aun con violencia y vías de hechos, opuesta á un acto ilegal. En efecto, lo que constituye la criminalidad de la rebelión, es la desobediencia y el desprecio de la ley: la violencia contra los agentes de la autoridad es el medio exterior por el cual se manifiestan esta desobediencia y este desprecio. Cuando el funcionario público no ejecuta la ley, saliendo de sus funciones ó abusando de ellas, comete un acto arbitrario en perjuicio del ciudadano, y éste resistiéndolo no se opone á la ejecución sino á la violación de la ley. No solamente esta resistencia deja de ser delictuosa, sino que se convierte en legítima. Colocándose en el punto de vista subjetivo se llega á la misma conclusión.

(1) *Théorie du code pénal*, numero 940.

(2) Es el nombre del atentado en el derecho francés.





El ataque ó la resistencia violenta con el fin de impedir la ejecución de una ley ó de una orden de la autoridad es el elemento intencional del delito de rebelión; ahora bien, el que resiste á un acto arbitrario no intenta oponerse á la ejecución de la ley, puesto que la resiste precisamente porque no es ejecutada. Si, pues, la violencia podía ser considerada como delictuosa, no sería ciertamente bajo la calificación de rebelión sino bajo la calificación que correspondiera según la gravedad de sus consecuencias " (1). Esta teoría del derecho de la resistencia, eminentemente fundada en razón y justicia cuando la autoridad procede con violación de la ley, es reconocida por un gran número de escritores y conviene con el mayor respeto que merece la libertad y derecho del individuo. Otra cuestión sería la de saber "si este derecho de resistencia, como tal derecho, debe ó no estar inscripto en la ley". La negativa, dice el doctor Alcorta, me parece evidente. Para la afirmativa sería necesario que fuera posible establecer claramente los límites que dependen de los hechos mismos; y es la apreciación de los tribunales y la oposición de la doctrina, las únicas que pueden dar las reglas de solución (2).

955. Dentro de los términos de nuestra ley, la solución de la cuestión planteada surge claramente de los principios expuestos sobre la absoluta exención de responsabilidad que la ley declara en los casos de defensa, y las reglas dadas sobre la materia. La defensa está autorizada por la ley contra toda agresión *ilegitima*. El ataque,

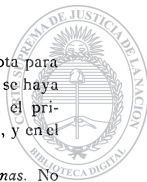
(1) *Traité du droit pénal français*, tomo 3º, número 380.

(2) *Las garantías constitucionales*, página 330.

pues, del funcionario que procede ilegítimamente, exime de toda pena al que se defiende. Desapareciendo toda responsabilidad por el empleo de fuerza ó intimidación en defensa propia, desaparece la imputabilidad del delito de atentado. Bastará que concurra para esto el otro elemento enunciado por la ley para justificar la defensa, á saber, la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, lo que dependerá en todos los casos de una apreciación de las circunstancias en que el hecho se produzca.

956. Por la disposición del artículo 236 se considera como atentado contra la autoridad la extracción de los presos de las casas de seguridad por astucia ó mediante cohecho ó seducción del que los custodia. Este hecho sobre cuya incriminación no habría nada que observar, debiera tener una denominación distinta, pues que está constituido por elementos esenciales que le distinguen totalmente del delito de atentado en los caracteres antes enunciados. No hay violencia ni intimidación contra la autoridad, no hay manifestación de odio, de rencor ó de falta de respeto contra ella; el autor no se propone rebelarse contra ella: su objeto final es favorecer una evasión de presos, y en este punto el delito debiera ser penado cualquiera que fuere el medio por el cual se favoreciera la evasión, y no solamente cuando se ejecuta por astucia ó mediante cohecho ó seducción del que los custodia. Tan diferente es este delito á que se atribuye arbitrariamente la calificación de atentado, del atentado propiamente dicho, que para su consumación no basta un principio de ejecución sino que se requiere un resultado ó efecto consecutivo: la extracción de los presos.





957. Los criterios de gravedad que la ley adopta para la penalidad del delito de atentado son el de que se haya cometido con armas ó sin ellas, imponiendo en el primer caso la pena de prisión por uno á tres años, y en el segundo la de arresto por uno á seis meses.

El Código usa los términos *con armas* y *sin armas*. No se refiere, pues, claramente, á una agresión á mano armada, como lo expresa el inciso 1º del artículo 264 del código español. ¿Se referirá el texto de nuestro artículo al simple porte de armas como lo hacen varios códigos extranjeros, ó entenderá referirse al uso de armas? ¿Habrá que hacer en el primer caso una distinción entre porte de armas aparentes y el de ocultas? Si el artículo 235 se limita á decir, *con armas* ó *sin armas* no me parece que pueda deducirse que requiere el uso de armas; pero al mismo tiempo creo que relacionada esta disposición con la del artículo 234 aparece claramente resultante la solución de que es necesario que se trate de armas ostensiblemente llevadas. La equiparación de las armas ocultas y aparentes para el objeto de graduar la gravedad de la resistencia no puede subsistir en presencia de los elementos materiales constitutivos del delito de atentado. La gravedad deriva de que se use ó no medios eficaces de intimidación ó fuerza, y sería vano querer encontrar esta eficacia cuando aparezca después de sometido el reo del delito, que tenía oculta un arma sin que de ello se hubiera apercibido la autoridad agraviada. El agente tendría derecho de contestar, como observa Carrara: “ejecutando la resistencia con todas mis fuerzas físicas y sin usar de las armas que tenía en el bolsillo, he demostrado bien claramente que no he querido

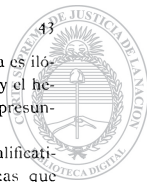
resistir á mano armada: la presunción contraria es ilógica porque está desmentida por el hecho mio: y el hecho positivo es más elocuente que todas las presunciones" (1).

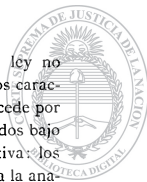
958. La ley no contiene otras agravaciones calificativas del delito. El código español enumera algunas que tienen su concordancia en otras legislaciones: la de si los reos fueren funcionarios públicos, la de si los delincuentes pusieren mano en la autoridad y la de si por consecuencia de la coacción la autoridad hubiera accedido á las exigencias de los delincuentes. El código francés adopta como otro criterio de agravación, el del número de los delincuentes, lo que en ciertas circunstancias viene á constituir lo que llamamos sedición, motín ó asonada.

959. Un elemento de distinción que no aparece en nuestro texto es el de que, empleándose el término autoridad en su concepto más amplio, están comprendidas la más alta y la más infima representación del poder público. Yo veo la conveniencia y la razón de distinguir entre la gravedad del delito cometido contra una del cometido contra otra. No inspirando todas las funciones públicas naturalmente el mismo respeto, debe ser menos grave el atentado cometido en un agente inferior de la autoridad que el cometido contra el Gobernador de la Provincia; es mayor el atentado cometido en la persona de un magistrado con vejamen de una alta autoridad que el que se cometa en un ejecutor de la justicia.

960. Estudiando en particular las disposiciones refe-

(1) *Programma*, § 2797.



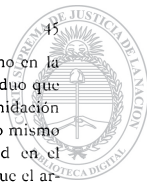


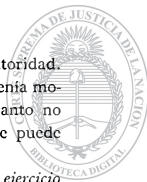
rentes al desacato, aparece desde luego que la ley no contiene una definición ni una enunciación de los caracteres fundamentales de este delito, sino que procede por una enumeración de los hechos que serán penados bajo aquella calificación. Tal enumeración es taxativa: los actos enumerados y no otros, cualquiera que sea la analogía que con ellos tengan, son los que deberán ser reprimidos. Tal es también el sistema adoptado por la generalidad de los códigos, sistema fundado en la manifiesta conveniencia de no dejar entregada á la vasta amplitud de los términos generales de una definición una materia tan delicada como la referente al continuo rozamiento de gobernantes y administrados, de la autoridad con el individuo, en que por lo común peligraría la libertad é independencia de éste.

961. El primero de los hechos enunciados como desacato á la autoridad, es el de provocar á duelo, injuriar ó amenazar á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones. La provocación á duelo, la injuria y la amenaza no requieren explicación ni comentarios después de lo que ya queda dicho sobre el particular, cuando cualquiera de los hechos expresados no se dirige contra un funcionario público á causa de funciones. Lo que puede aparecer dudoso es todavía la indeterminación de lo que deba entenderse por funcionario público, y quizás con mayor motivo, por cuanto se habla en el mismo capítulo de autoridad y de funcionario público. Si esos términos son en rigor perfectamente distintos entre sí, por cuanto por autoridad debe entenderse el poder ó la potestad en abstracto y por funcionario público el individuo que ejerce la potestad, el hecho es que

en el artículo 234 se usa la palabra *autoridad* no en la acepción abstracta sino en lo referente al individuo que la ejerce, pues es manifiesto que la fuerza ó intimidación no podrán ejercer sobre una entidad ideal; y lo mismo ocurre con el uso de la misma palabra *autoridad* en el inciso 5º del artículo 237. Creo por mi parte que el artículo 237 entiende referirse con la palabra *funcionarios públicos* á las mismas personas á que entendía referirse el artículo 234 con el empleo de la palabra *autoridad*.

962. Entre los hechos que pueden constituir el desacato de que habla el inciso primero, no hace nuestra ley mención ni de la calumnia, como lo hace el código español, ni del insulto, como el mismo código y nuestra ley de 1863. Ninguna de las dos circunstancias se enumeraban en los proyectos anteriores, y creo que esto tiene un completo fundamento legal. Si se imputa al funcionario un delito cometido en su calidad de tal, el interés del Estado reclama la averiguación de la verdad de la imputación, pues que no puede tener interés en la permanencia en los puestos públicos de los funcionarios delincuentes. Si la imputación hecha al funcionario no es falsa, el que la ha proferido ha ejercido en cierto modo una acción popular, y la ley le declara exento de pena. ¿Podría ser penada la imputación verdadera de un delito cometido por el funcionario público? Si el hecho de la falsa imputación es lo único que se debe penar, ya está el caso previsto y legislado como delito de calumnia, y no es necesario ni justo castigar el mismo hecho bajo otra calificación. Si la imputación no tiene lugar contra el funcionario público en su calidad de tal, sino contra el individuo particular, desaparece todo motivo de





calificación fundado en el respeto debido á la autoridad.

En cuanto á los *insultos*, el Código tampoco tenía motivos para incluirlos en la enunciación, por cuanto no constituyen sino una de las variadas formas que puede asumir la injuria.

963. Nuestro inciso dice también *á causa del ejercicio de sus funciones*; es decir, la provocación, la injuria ó la amenaza contra el funcionario deben tener por motivo un acto de éste en el desempeño de su cargo; la ley no dice aquí como en el artículo 234 *al tiempo de practicar sus funciones*, lo que dá fundamento para resolver que entonces el atentado puede no tener por causa el ejercicio de las mismas.

También se deduce de los términos generales en que está concebida la frase que no es necesario para que exista el desacato, que la autoridad se encuentre presente, pues basta que haya relaciones directas entre la injuria y el acto del funcionario contra el cual se produce. En todas las formas en que puede producirse la injuria y la amenaza, verbalmente ó por escrito, por gesto ó por dibujos, puede producirse el desacato.

964. Una cuestión para cuya solución no presenta nuestro texto fundamento alguno, es la de saber si puede calificarse de desacato la injuria proferida en su ausencia ó que no le haya sido dirigida á él. Conforme á los términos del artículo 179, comete delito de injuria el que deshonra, desacredita ó menosprecia á otro, por medio de palabras ó escritos que no pueden constituir calumnia ó por medio de hechos ó acciones que no importen delitos más graves. Así, pues, relacionando este texto, al del 1º del artículo 237, constituiría delito de

desacato el hecho de desacreditar ó menospreciar á un funcionario público, aun en su ausencia. Esta no es sin embargo la noción que de este delito adopta generalmente la legislación. El artículo 266 del código español habla de la presencia del funcionario ó que la injuria le sea *dirigida* por escrito; el artículo 276 del código belga habla del ultraje por palabras, hechos, gestos ó amenazas dirigido durante ó con ocasión del ejercicio de sus funciones; el código portugués requiere que la injuria sea en presencia del magistrado, públicamente, durante sus funciones, ó públicamente en la sesión del tribunal ó cámara á que pertenece, cuando se hallare ausente. El código francés fué reformado en su redacción primitiva sobre este punto, para establecer claramente la necesidad de que la injuria fuera dirigida contra el funcionario; y la jurisprudencia francesa ha consignado que tanto en lo que concierne al ultraje verbal como en lo referente al ultraje por escrito, es necesario que el acusado se haya dirigido directamente al funcionario, ó que si ha tomado un intermediario, lo haya tomado con intención de una comunicación directa y en condiciones que aseguraran su cumplimiento (1). El código italiano requiere también que la ofensa se infiera en presencia del funcionario público y á causa de sus funciones (2). No obstante que considero ésta como la verdadera doctrina del desacato, no encuentro que en la interpretación de nuestro Código pueda fundarse claramente la misma solución. Sería preciso para ello no considerar

(1) Artículo 294.

(2) CHAUVEAU y HÉLIE, *Théorie du code pénal*, número 968.





como injuria la definida por tal en el citado artículo 179, é inferir de los dos grados de gravedad del artículo 238, la necesidad de la presencia del funcionario, lo que en definitiva no creo procedente.

965. El inciso 2° del artículo 237 considera desacato la grave perturbación del orden en los juzgados ó tribunales y en donde quiera que las autoridades públicas estén ejerciendo sus funciones. Aunque la disposición se refiere en primer término á los juzgados ó tribunales, habla en segundo lugar de las autoridades públicas, con lo que la disposición se generaliza á sus más amplios términos. El hecho penado en el inciso es meramente el de la grave perturbación del orden, lo que puede tener lugar sin injuria, desobediencia y amenazas á la autoridad, y bastaría, por ejemplo, el que los perturbadores del orden se injuriaran ó amenazaran entre sí. La extensión, pues, á la perturbación del orden donde cualquiera autoridad pública ejerza sus funciones, no me parece suficiente para una incriminación análoga á la de amenaza directa á la autoridad. El código español de 1850, el código brasilero y la ley del 63, que el doctor Tejedor citaba como concordantes de esta disposición determinan cuales son las autoridades cuyo respeto debe sancionarse por una disposición especial. El código español de 1850 preveía el caso de que se causare tumulto ó turbase gravemente el orden en la audiencia de un tribunal ó juzgado, en los *actos públicos* propios de cualquier autoridad, en algún colegio electoral, en espectáculos públicos ó solemnidad ó reunión numerosa (1);

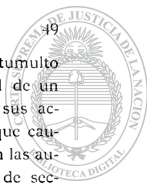
(1) Artículo 196.

el código brasileiro dice, simplemente, ocasionar tumulto ó excitar al desorden en la audiencia ó tribunal de un juez hasta el punto de impedir ó interrumpir sus actos (1); y la ley nacional prevé el caso de los que causan tumulto ó perturban gravemente el orden en las audiencias de la Suprema Corte, en los juzgados de sección y en el comicio electoral (2). No es lo mismo decir *autoridad pública*, como dice el Código, que decir *acto público de la autoridad*. Esto último contiene la idea de una solemnidad que impone mayor respeto que el simplemente debido á la autoridad pública.

966. El inciso 3º agrega: los que entren armados manifiesta ú ocultamente al salón de sesiones de las cámaras legislativas. El doctor Tejedor anotaba como concordante de este artículo el 152 del código peruano. El caso previsto generalmente por otras leyes penales es el de causar una grave perturbación del orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores, caso que, dados los términos del inciso anterior, podría considerarse comprendido en él. Entrar armado manifiesta ú ocultamente, es simplemente ser portador de una arma cualquiera. Este hecho no debía bastar para una incriminación cuando no se ha relacionado con ningún propósito referente á perturbar la sesión legislativa y sin intención alguna de faltarle al respeto debido. El delito debiera nacer puramente de la intención con que se lleva el arma y no del solo hecho de llevarla, que no es dañino por sí mismo.

(1) Artículo 98.

(2) Artículo 33 de la ley de 14 de Setiembre de 1863.





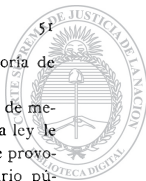
967. El inciso 4º considera también como desacato, el hecho de impedir que un representante ó funcionario público concurra á su Cámara ó despacho. Este artículo está tomado del 36 de la ley nacional de 1863, que prevé el hecho de que con violencia ó con fines contrarios á la Constitución ó por otro motivo reprobado se impidiere á un Senador ó Diputado asistir al Congreso. Nuestro inciso se refiere, además del representante, á todo funcionario público, dando así á la disposición mayor extensión que la que tiene el artículo concordante. Dada la naturaleza del delito de que se trata, su elemento intencional debe ser el de impedir el ejercicio de las funciones, no el de que se tenga una razón ó motivo puramente particular. La ley no lo dice aquí expresamente, como en el inciso 1º, pero es manifiesto que mientras el acto del individuo no se refiriera sino al particular, no podría decirse que existiera una falta de respeto y acatamiento á la autoridad. Debe admitirse, sin embargo, que el delito existiría desde el momento en que el particular, trabado en su libertad personal, invocara su calidad de funcionario y su necesidad de concurrir al lugar de sus funciones.

968. La última forma de desacato enunciada en el artículo 237, es la de los que resisten ó desobedecen abiertamente á la autoridad. Esta forma no necesita en sí misma mayor explicación ni comentario, porque presenta en sus caracteres más naturales los elementos constitutivos del desacato. Bastará prever que la resistencia ó la desobediencia de que se trata, no tienen que estar acompañadas de actos que puedan importar una intimidación ó fuerza contra la autoridad, pues que

con estos hechos el desacato pasaría á la categoría de atentado.

969. El desacato es un delito manifiestamente de menor gravedad que el atentado. Las penas que la ley le impone son en consecuencia inferiores. Los que provocan á duelo, injurian ó amenazan á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones, sufrirán la pena de tres á seis meses de arresto, si el delito se cometiese en la casa de sesiones ó en el despacho ú oficina del empleado público, y con arresto de uno á tres meses cuando no se comete en esos lugares. Todos los demás delitos de desacato son castigados con arresto de uno á tres meses.

970. Otros criterios de gravedad del delito hubieran podido determinar en algunos casos el aumento de estas penas. Uno de ellos sería el de tener en cuenta la gravedad de la injuria en sí misma, puesto que la división de la injuria en grave y leve ha servido ya de criterio para la penalidad de la injuria contra un particular. Otro criterio de distinción que creo muy fundado, es el de tener en cuenta las distintas categorías de las personas contra quien se dirigiera el desacato, valiendo á este respecto las mismas consideraciones hechas en este capítulo para referir al atentado la distinción que propongo.





CAPITULO III

USURPACIÓN DE AUTORIDAD

(Artículos, 240 241 y 242)



971. *Delitos peculiares a los empleados públicos.* — 972. Carácter común de estos delitos. — 973. Usurpación de autoridad. — 974. No se trata de la que pueda cometer un particular. — 975. La comete el empleado con título ó nombramiento emanado de autoridad incompetente. — 976. Continuación indebida en el ejercicio de funciones públicas por el que se halla destituido ó suspendido de un cargo público. Legislación comparada. — 977. Es necesario que la destitución ó suspensión sea legítima. — 978. Es necesario que la destitución ó suspensión hayan sido comunicadas oficialmente. — 979. Ejercicio por el empleado público de atribuciones que no le corresponden. — 980. Casos que podrian ser penados y que no lo están. — 981. Penalidad de la usurpación de autoridad. — 982. Caso en que se cometa el delito con falsificación de títulos ó documentos públicos.

971. El título segundo de la sección del Código que comento lleva el rubro de *Delitos peculiares á los empleados públicos*, esto es, delitos para cuya ejecución es indispensable en el agente estar investido de la calidad de



empleado público. Esos delitos son en el orden de colocación que tienen en la ley, los de usurpación de autoridad, prevaricato, cohecho, infidelidad en la custodia de presos, abuso de autoridad, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones. En el mismo orden serán tratados en este capítulo y los ocho siguientes.

972. Puede reconocerse como vínculo común de todos los delitos expresados, el que el objeto de su incriminación es el de mantener el orden y la pureza en la administración pública, sin preocuparse de lo que puedan ser afectados por tales actos los intereses particulares. Tal debiera, por lo menos, ser el principio fundamental que los agrupara bajo una denominación común: pero no será extraño encontrar delitos que, como algunas de las formas en que puede producirse el abuso de autoridad, presentan mayor motivo de incriminación en razón del daño que causen á los particulares, que el que puedan ocasionar á la buena administración pública. Tal excepción, lejos de obstar á la regla que he enunciado, no demostraría otra cosa que una indebida inclusión en este título de hechos que debieran comprenderse en otra calificación legal.

973. El primero de los delitos enunciados es el de usurpación de autoridad. La ley no presenta una definición de este delito, pero enumera los tres casos en que puede producirse: 1º ejerciendo funciones públicas sin título ó nombramiento expedido por autoridad competente; 2º continuando en el ejercicio de las funciones públicas anexas á un cargo el que se hallara des-

tituido ó suspendido en él; 3º ejerciendo un empleado atribuciones que no le competen por la ley.

974. Podría comprenderse con toda propiedad como delito de usurpación de autoridad la que cometiera el particular que ejerciera funciones públicas sin título ó nombramiento expedido por autoridad competente. Tal fué, quizás, el propósito del proyecto de Código. El Dr. Tejedor cita como concordante de la disposición el artículo 251 del código penal español de 1850, que castigaba al que se fingiese autoridad, empleado público ó profesor de una facultad que requiera título y ejerciera actos propios de la profesión ó cargo; pero esta disposición correspondía al capítulo *De la usurpación de funciones, calidad ó nombres supuestos*, que era á su vez parte del título *De las falsedades*. El título *De los delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos* contenía otro capítulo sobre *usurpación de atribuciones*. El artículo 258 del código francés, también citado como concordante por el Dr. Tejedor, prevé la intromisión en funciones públicas, sin título, ó la ejecución de un acto de ellas. Este artículo corresponde al parágrafo *usurpación de títulos y funciones*, en la sección de los delitos de *resistencia, desobediencia y otras faltas contra la autoridad pública*, en tanto que en una sección “de delitos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones” se prevé en el § VII el ejercicio de la autoridad pública ilegalmente anticipado ó prolongado. ¿Deberá interpretarse la ley conforme á estos antecedentes, ó atenerse al carácter peculiar que atribuye al delito el título á que corresponde? He manifestado antes de ahora cuál es mi opinión respecto á la autoridad de las notas y concor-





dancias de los proyectos de ley. No considero éstas sino como elementos de comparación, no como fundamentos ni como interpretación: la ley debe interpretarse y aplicarse según su texto mismo, y no según el texto de leyes extranjeras. ¿Quedaría así impune un hecho cuyo castigo sería necesario? Así será, pero no corresponderá al juez en ningún caso aplicar una disposición distinta de la que resulta del texto claro de la ley. Los delitos enunciados en el título de que me ocupo no pueden ser cometidos sino por *empleados públicos*: así lo dice claramente el rubro "*De los delitos peculiares á los empleados públicos*"; y cuando el inciso 1º del artículo 240 usa el pronombre *el que*, no puede referirse sino á empleado público.

975. No se crea que contradice esta solución la circunstancia de que al referirse la disposición de la ley á funciones públicas sin título ó nombramiento, deba comprenderse que se trata solamente del particular. El delito que cometiera un *particular* no sería *peculiar á un empleado público*. La ley no se refiere solamente al título ó nombramiento, sino que requiere que sea expedido por *autoridad competente*. Las leyes constitucionales y las orgánicas establecen la competencia de las autoridades para el nombramiento de empleados. Cada individuo nombrado para el ejercicio de un puesto público está en el deber, antes de ejercerlo, de examinar la competencia del que le confiere el nombramiento. El nombramiento por autoridad incompetente y la aceptación constituirían al aceptante en empleado público; el *ejercicio* de las funciones le convertiría en delincuente. El juez que ejerciera funciones con nombramiento directo del Poder

Ejecutivo, en los casos en que el nombramiento no fuera atribución de éste, ó dependiera de la adquiescencia del Poder Legislativo; los miembros de una corporación municipal que ejercieran funciones públicas con nombramiento gubernativo en los casos en que la ley lo establece por elección, y tantos otros ejemplos que podría ponerse, cometerían el delito de que se trata en los términos precisos de la ley. Con esto puede decirse, en conclusión, que el delito de que habla el inciso 1º del artículo 240 no lo comete sino el empleado público que tenga título ó nombramiento expedido por autoridad incompetente, solución completamente opuesta á la de los artículos citados como concordantes por el doctor Tejedor.

976. El segundo caso de delito de usurpación de autoridad enunciado en el artículo 240 es el del que, hallándose destituido ó suspenso de un cargo público continuara ejerciendo funciones anexas á él. El artículo 197 del Código Penal francés, que es concordante con esta disposición, declara expresamente que el delito lo cometerá el funcionario suspendido ó destituido *legalmente*, que continúe en el ejercicio de sus funciones después de *haber tenido conocimiento oficial* de la suspensión ó destitución, ó que siendo electivo ó temporario, las ejerza después de haber sido reemplazado. El código español de 1850, también citado como concordante por el proyecto Tejedor, dice que comete el delito el empleado público que continuare ejerciendo su empleo, cargo ó comisión después que debiere cesar *conforme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales de su ramo* (1). Otro

(1) Artículo 130.



de los concordantes, el código brasileiro, dice como el francés, que se trata del empleado público *oficialmente* instruido de su suspensión, destitución, translación ó reemplazo legal (1). El nuevo código español ha conservado la fórmula del de 1850 (2). El italiano ha adoptado una fórmula análoga al francés y al brasileiro, refiriéndose á la necesidad de la *comunicación oficial* de la resolución que hace cesar ó suspende el ejercicio de sus funciones (3). Lo mismo dicen el código belga (4) y el de la República Oriental del Uruguay (5).

977. ¿Procederán en la aplicación de nuestra ley las mismas condiciones ó circunstancias que resultan de los textos mencionados? Una de ellas es la de que la destitución ó suspensión sea legítima. La legitimidad depende, según los casos, de la primera de estas circunstancias ó de las dos conjuntamente: facultad para destituir ó suspender en el que impone la destitución ó suspensión, juicio previo ó causa fundada en ley para imponerlas. En el ejercicio de ciertos empleos y funciones públicas, el nombramiento y la destitución son discrecionales de un superior gerárquico, y entónces toda la legitimidad de la destitución depende de la competencia del que la pronuncia. Para otros empleos, la destitución requiere una causa fundada en ley, y entonces, no obstante la destitución pronunciada, faltando el juicio de esa causa no cometería delito el funcionario que se man-

(1) Artículo 340.

(2) Artículo 385.

(3) Artículo 185.

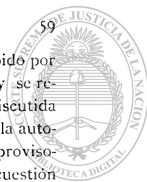
(4) Artículo 262.

(5) Artículo 183.

tuviera en el ejercicio de su cargo. Habría habido por parte del destituyente un abuso de autoridad, y se reproduciría con este motivo la cuestión ya discutida sobre el derecho de resistencia á los excesos de la autoridad. Cuando la suspensión fuera meramente provisoria y con objeto de enjuiciar al funcionario, la cuestión sería de competencia para imponer la suspensión. En conclusión, aunque de un texto expreso de nuestra ley no resulte que se trata de destitución ó suspensión legítima, debe entenderse la ley en este sentido, porque la solución se funda en claros principios de razón y justicia y el texto legal no pone obstáculo ninguno á ella.

978. La segunda condición que aparece en las leyes citadas, es la de que el funcionario público haya tenido conocimiento oficial de la suspensión ó destitución. Esto tampoco está dicho por la ley, pero no puede entenderse de otra manera que la consignada en tales leyes. Ningún funcionario puede ajustar su conducta como tal á las noticias que adquiriera por la voz pública ó que le fueren transmitidas privadamente. Por otra parte, es también la regla general de la administración, y el uso constante de ella, que el cumplimiento de toda providencia administrativa depende de la comunicación en las formas usuales.

979. La última forma de usurpación de autoridad enunciada en el artículo 240, es la del empleado público que ejerce atribuciones que no le competen por la ley. Los términos de esta disposición son suficientemente amplios para comprender en general no solamente todos los casos de usurpación de autoridad, sino también muchos que constituirían el delito de abuso de autoridad.





Pero al hacer la ley mención del *ejercicio de atribuciones*, ha querido significar el uso de actos que corresponden legítimamente á otro de los funcionarios ó empleados públicos. La esfera de atribuciones de cada uno de los funcionarios y empleados de las diversas administraciones, no está determinada ni puede serlo con tal precisión que nadie deba equivocarse sobre lo que es ó no de su competencia en cosas que pueden no aparecer perfectamente deslindadas. De aquí las numerosas cuestiones de competencia que tienen que ser resueltas por las autoridades administrativas ó judiciales. No podría en tales circunstancias fundarse una incriminación en el ejercicio de actos que el empleado creyera impuestos por el cumplimiento de su deber. El motivo de incriminación no aparece sino cuando se viola abiertamente una clara disposición de la ley, cuando no hay motivo fundado para admitir que el empleado creyera obrar cumpliendo su deber ó cuando la cuestión de competencia ya hubiera sido resuelta. Atendiendo, quizás, á consideraciones análogas, el código penal español no ha adoptado como el nuestro una fórmula general que comprendiera todo ejercicio indebido de atribuciones, sino que ha distinguido las que correspondían á distintos poderes, sea que un funcionario se arrogue atribuciones del poder legislativo, sea que un juez se arrogue atribuciones propias de las autoridades administrativas ó impida á éstas el ejercicio legítimo de las suyas, sea que un funcionario del orden administrativo se arrogue atribuciones judiciales ó impida la ejecución de una providencia ó decisión dictada por juez competente. Dentro de un mismo orden de atribuciones no comete delito

sino el funcionario que legalmente requerido de inhibición continuare procediendo antes que se decida la contienda jurisdiccional (1). Dada la extensión de nuestra disposición, resultante de los términos generales en que está concebida, parece necesario reconocer excusas ó exenciones que no resultan de fórmulas expresas de la ley. No bastará probar ó demostrar la falta de voluntad criminal, puesto que el inciso 7º del artículo 81 no exime de pena al que *crea* obrar en legítimo ejercicio de su autoridad ó cargo sino al que obra efectivamente en él. La prudencia y la justicia de los magistrados impedirán la iniciación de procesos contra los que de buena fé hayan ejercido atribuciones que no les correspondieran; pero sería mucho mejor que esta seguridad resultara explícitamente de la ley.

980. Los casos previstos por la ley no son todos los que podrian ser incriminados. Se ha hecho mención del ejercicio de funciones públicas por el que se halla destituido ó suspendido en ellas: no se ha previsto, pues, el caso de la cesación efectiva por disposición de la ley, tratándose, por ejemplo, de funciones que son conferidas por términos fijos ó de comisiones que cesan cuando desaparece el objeto para el cual se confirieron. Es por esto preferible la forma adoptada por el artículo 385 del código español ya citado: "el funcionario público que continuare ejerciendo su empleo, cargo ó comisión después que debiere *cesar* conforme á las leyes, reglamentos ó disposiciones especiales de su ramo respectivo." No hay tampoco en este título de nuestro Código

(1) *Código penal español de 1870*, artículos 388, 389 y 390.



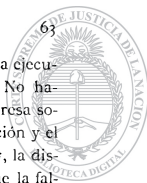


disposición referente al abandono intempestivo de un puesto público. En el código español se pena por el artículo 387 el delito del funcionario público que sin habersele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño de la cosa pública; y es digna de mención también la disposición del artículo 393 del mismo código, que castiga al funcionario público que á sabiendas propone ó nombra para cargo público persona en quien no concurren los requisitos legales. El proyecto Tejedor agregaba un inciso que no ha sido conservado: el de que cometía usurpación de autoridad el juez ó tribunal que ejerciera jurisdicción contraviniendo á lo dispuesto sobre esta materia por el código de enjuiciamiento en materia civil y penal. Pero esta prescripción queda enteramente comprendida en los términos generales del inciso 3º del actual artículo.

981. La pena que la ley impone á la usurpación de autoridad, es la de arresto de un mes á un año é inhabilitación por uno á tres años, penas que deben aplicarse conjuntamente. La parte final del artículo 241 que es el que las establece, previene que ellas se impongan según la gravedad del delito. Es perfectamente racional sujetar este delito únicamente á las reglas generales para la determinación de las penas según la concurrencia de circunstancias agravantes ó atenuantes. La mayor ó menor gravedad del delito, dependerá de la naturaleza de los actos de usurpación que hayan sido ejecutados.

982. El artículo 242 dice que si el delito se comete falsificando títulos ó documentos públicos, la pena será la señalada para el delito más grave, considerándose el otro como circunstancia agravante. Se trataría aquí de una

falsificación que hubiera servido de medio para la ejecución de un delito de usurpación de autoridad. No habiendo en la Parte General una disposición expresa sobre la relación entre el delito medio de ejecución y el delito final, pues no es tal la regla del artículo 87, la disposición del artículo 242 se justifica toda vez que la falsificación de un título ó de un documento pueda ser el medio de que se valga un empleado público para ejecutar alguno de los hechos que constituyen usurpación de autoridad.





CAPÍTULO IV

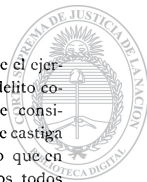
ABUSO DE AUTORIDAD

(Artículos 243 y 244)



983. Observación sobre el método.—984. Retención de un detenido ó preso cuya soltura ha debido decretarse. ¿Qué debe entenderse por *empleado público*?—985. ¿Es necesario que la retención haya sido maliciosa?—986. Cómo debió expresarse la ley.—987. Detención de un individuo sin ponerlo á disposición de juez competente. Prescripciones constitucionales.—988. Quién puede tener la facultad de aprehender ó detener.—989. Allanamiento de domicilio.—990. Qué debe entenderse por *ciudadano*, en el inciso 3°.—991. Violación de la comunicación ó incomunicación de un preso.—992. Debiera pensarse la incomunicación ilegal en todos los casos.—993. Ocultación de un detenido por el empleado público que debe presentarlo á la autoridad.—994. Abusos en la guarda ó custodia de presos.—995. —Apremios ilegales ó innecesarios.—996. Seducción de la mujer que litiga ó se encuentra detenida ó presa.—997. Penalidad de estos delitos.—998. Disposiciones suprimidas.

983. El artículo 243 del Código Penal enumera una serie de hechos que constituyen cada uno de ellos una forma distinta de abuso de autoridad, y en los que po-



dría mirarse dos órdenes diversos : uno en que el ejercicio abusivo de la autoridad constituye un delito cometido contra los particulares, otro en que se considera principalmente la buena administración y se castiga hechos que la contradicen. Es por este motivo que en muchos códigos no se encuentran comprendidos todos estos hechos bajo la denominación común de *abusos de autoridad*, denominación absolutamente genérica y que podría comprender otros delitos del título en que se consigna, sino que refieren la incriminación á los atentados cometidos por empleados públicos contra los derechos y garantías individuales asegurados por las leyes fundamentales. En otros códigos, cuyo método de clasificación se funda exclusivamente en la naturaleza del derecho violado, la calidad de empleado no causa una calificación distinta de un delito, sino que se la toma como un mero criterio para determinar la gravedad de las penas.

984. Conviniendo al método de exposición de esta materia examinar cada uno de los incisos del artículo 243, los examinaré en el mismo orden en que están enunciados en él.

Dice el primero que abusa de autoridad el empleado público que retiene á un detenido ó preso cuya soltura haya debido decretar ó ejecutar. El proyecto Tejedor decía: "el juez que no otorga la libertad al detenido ó preso, cuya soltura haya debido decretar conforme á la ley". En estos términos, la disposición tenía ciertamente una limitación inconveniente. No había otra prescripción que penara el caso de que la detención indebida se ejecutara por una autoridad distinta de la del juez, sea cuando

los funcionarios de policía hubieran verificado la detención, sea cuando el juez hubiera decretado la libertad y el empleado subalterno no hubiera cumplido inmediatamente la orden. La sustitución de la palabra *empleado* á la de *juez*, no ha quitado á éste la posibilidad de ser inculcado por el abuso de autoridad de que se trata. La fórmula *empleado público* es suficientemente genérica por sí misma, y está, además, empleada en su más amplia acepción en el rubro del título: *Delitos peculiares á los empleados públicos*. Si en otros incisos aparece la distinción entre el *empleado público* y el *juez*, como en el inciso segundo, en que se habla de *empleado público* y de *juez competente*, ó en el noveno, en que se habla de *juez ó empleado*, se explica esto por la necesidad de distinguir entre el género y la especie, ó por el uso superfluo de la distinción. Que el cambio de redacción del proyecto Tejedor al Código, haya tenido por objeto ampliar los términos de la ley en el sentido de que pudieran ser comprendidos tanto el juez como cualquier empleado público, no me parece dudoso. Se trata en la disposición legal de una protección á la libertad individual, de una sanción de garantías constitucionales, que si bien los jueces deben ser los primeros en respetar, podrían alguna vez ser los autores de su violación. Esto puede ocurrir en los casos supuestos por Pacheco, de que aparezca la inocencia de tal modo que no pueda imponerse pena alguna, sea cuando sólo pueden recaer penas pecuniarias, de caución, vigilancia, etc. (1): y puede agregarse cuando el juez no cumpliere ó mandare cumplir la resolución

(1) *El código penal*, etc., tomo 2º, página 453.



ejecutoria, propia ó de un tribunal superior, que mandara poner en libertad al detenido.

985. A análoga redacción en el código español, el mismo autor citado agregaba: “Es excusado decir que para que tengan lugar estas penas ha de haber estimado el tribunal que la conducta de esos jueces no procedió de error, *sino de malicia*. Por meras equivocaciones, por puntos en que pueda haber diversidad de pareceres, por liberaciones ó prisiones dudosas, claro está que no se han de ejecutar tales castigos. La presunción aboga, como no puede desconocerse, por la rectitud del juez, y es indispensable para penarla que se justifique ó *gran ignorancia ó notorias malas intenciones*”. Transcribo esta cita porque es la que fundaba el texto del proyecto Tejedor, pero ocurre aquí, como tantas veces en la obra del reputado penalista español, cuya autoridad es tan respetada por nuestro foro, que cuestiones bien difíciles de resolver, conforme á los textos legales, quedan terminadas en dos palabras, dichas al parecer con la autoridad de la razón más clara. Empieza el párrafo transcripto por afirmar que no corresponde la pena sino contra el que procedió de malicia, y se concluye por asegurar que se impondrá también cuando se probase *gran ignorancia*. La verdad es que la ley no dice una cosa ni otra y que el hecho queda sujeto á las reglas establecidas en la Parte General; y entre éstas no se encuentra ninguna que funde una incriminación en la *gran ignorancia*, que en el caso sería gran ignorancia del derecho.

986. Sería preferible que sobre esta materia la ley se hubiera expresado con mayor claridad. No bastará que una detención sea ilegal, no bastará que un empleado

público no haya decretado ó ejecutado la soltura del reo que *ha debido* decretar ó ejecutar. Los casos en que se *debe* hacer una cosa conforme á derecho no son todos tan perfectamente claros que el empleado no pueda dudar sobre la recta conducta. Me parece que contribuye á proporcionar la claridad deseada la fórmula del código belga, *ilegalmente y arbitrariamente*. “No basta que el arresto sea *ilegal* para incurrir en la pena: el funcionario puede haberse equivocado de buena fé, haber hecho una falsa aplicación de la ley ; por este motivo puede ser sometido á una reparación civil ; pero, para que le afecte la jurisdicción penal, es necesario que el acto haya sido cometido *arbitrariamente*, es decir por pura voluntad ó capricho y sin poder invocar ninguna regla en apoyo de su acción” (1).

987. El segundo caso del artículo 214 es el del abuso de autoridad que comete “el empleado público que prolonga indebidamente la detención de un individuo sin ponerlo á disposición del juez competente”. Esta disposición es quizás la única del Código que guarde relación con la importantísima garantía de la libertad individual, contra el abuso de la autoridad que declaran las Constituciones políticas en la Nación y las Provincias. A este respecto, la declaración más absoluta, es la del artículo 18 de la Constitución Nacional: “nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”. Sin embargo, por la misma forma absoluta de esta declaración, hay en ella falta de precisión que atenua su eficacia: queda librado á la legislación particular

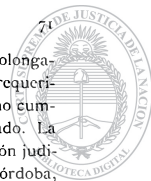
(1). *Législation criminelle de la Belgique*, tomo 2, página 132, num. 10.



determinar cual sea la autoridad competente para expedir órdenes escritas de arresto, y una ley especial que atribuyera esa competencia á una autoridad distinta de la judicial, haría quizás peligrar la libertad individual, sin contrariar el texto de la Constitución. Las Constituciones provinciales han establecido por su parte reglas más precisas sobre esta materia. La de la Provincia de Buenos Aires dispone que todo aprehendido sea notificado de la causa de su detención dentro de 24 horas (1), y que toda persona detenida puede pedir por sí ó por medio de otra que se le haga comparecer ante el juez más inmediato, y expedido que sea el auto por autoridad competente no puede ser detenida contra su voluntad, si pasadas las 24 horas no se le hubiese notificado por juez igualmente competente la causa de su detención. Declara deber de todo juez, aunque lo sea en un Tribunal colegiado, á quien se hiciere esta petición ó se reclamase la garantía del artículo anterior, proceder en el término de 24 horas contadas desde la presentación con cargo auténtico, bajo multa de mil pesos nacionales, y proveída la petición, el funcionario que retuviese al detenido ó dejase de cumplir dentro del término señalado por el juez el requerimiento de éste, incurre en multa de quinientos pesos nacionales, sin perjuicio de hacerse efectivo el auto (2). Disposiciones análogas se encuentran en las otras Constituciones provinciales y por ellas viene á quedar determinado en qué casos es indebida la prolongación de la detención de un individuo. Según la Cons-

(1) Artículo 17.

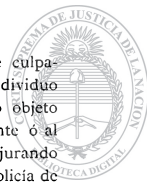
(2) Artículo 18.



titudin de la Provincia de Buenos Aires, la prolongación de la detención será indebida sólo cuando, requerida por auto de juez la autoridad que la verificó, no cumpliera el mandato de éste en el término señalado. La autoridad no incurre en mora sino por requisición judicial. Según la Constitución de la Provincia de Córdoba, la requisición judicial no será en ningún caso necesaria. La autoridad competente para detener tiene impuesto el deber de dar aviso en el término de veinticuatro horas al juez competente, y poner el reo á su disposición con los antecedentes del hecho que motive su arresto (1). En la de la Provincia de San Juan se impone la misma obligación, fijándose el término de 48 horas.

988. Se ve por estas disposiciones que la facultad de aprehender ó detener puede ser conferida á una autoridad distinta de la judicial, pero limitada al solo acto expresado, debiendo ser puesto el aprehendido á disposición de juez competente. Toca á las leyes de procedimientos que aun están por dictarse en la mayor parte de las Provincias, complementar estas disposiciones para poder determinar con precisión donde concluye el deber de la autoridad y donde comienza el atentado á la libertad del individuo. El Código de procedimientos en materia penal para la justicia federal y los tribunales ordinarios de la Capital Federal y territorios nacionales ha establecido algunas disposiciones sobre este punto, Nadie puede ser constituido en prisión preventiva sin orden escrita de juez competente, expedida contra persona determinada y á mérito de existir contra ella semi-

(1) Artículo 18.

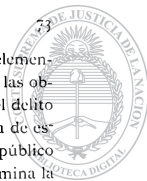


plena prueba de delito ó indicios vehementes de culpabilidad. En caso de *infraganti* delito, cualquier individuo del pueblo puede detener al delincuente, al solo objeto de presentarlo inmediatamente al juez competente ó al agente de la autoridad pública más inmediata, jurando que lo ha visto perpetrar el delito. El Gefe de Policía de la Capital y sus agentes tienen el deber de detener á las personas que sorprendan en *infraganti* delito, y á aquellas contra quienes hayan indicios vehementes ó semi-plena prueba de culpabilidad, debiendo ponerlas inmediatamente á disposición de juez competente. A los efectos de los dos artículos precedentes, el delito sólo se considerará *infraganti* respecto del que haya presenciado su perpetración. Detenido el presunto culpable y entregado al juez competente, éste procederá en las primeras horas hábiles de su despacho á interrogarlo y á practicar las diligencias necesarias para decretar su prisión preventiva ó su libertad (1).

A estas disposiciones se agregan las que reglamentan con distinción las formas y modos de proceder en los casos de detención, arresto ó prisión ilegal de las personas, que por referirse directamente al procedimiento y por su extensión omito reproducir.

989. La tercera forma de abuso de autoridad enunciada en el artículo 243 es la de que el empleado público allane el domicilio de un ciudadano sin las formalidades prescriptas por la ley ó fuera de los casos que ella determina. Se trata en esta disposición de asegurar la inviolabilidad del domicilio contra los abusos de la autoridad.

(1) Artículos 2, 3, 4, 5 y 6.



En cuanto á las circunstancias constitutivas del elemento material y del elemento moral del delito, valen las observaciones hechas al tratarse especialmente del delito de violación del domicilio, en la sección primera de esta Parte especial. Es la calidad de empleado público obrando en sus funciones como tal, lo que determina la especialidad de la disposición.

990. Aunque en los términos del inciso sólo se hace referencia al caso en que el empleado público allane el domicilio de un *ciudadano*, no debe entenderse que no lo cometeria el que allanara el domicilio de un extranjero. La palabra no está usada por la ley en el sentido del derecho político sino en oposición á la calidad de empleado público. Ciudadano es también en lenguaje correcto el vecino de alguna ciudad y el que goza de derechos civiles, y en tal acepción presentan los léxicos aquella palabra. Por otra parte, las declaraciones constitucionales al respecto son bien claras para que en ningún caso pudieran presumirse las restringidas. Las garantías enunciadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional son referentes á todos los *habitantes* de la Nación Argentina. La propiedad de la redacción, dado el uso corriente de la palabra ciudadano en todas nuestras leyes, aconsejaría quizás otra frase que significara con mayor precisión el concepto que se quiere enunciar.

991. En el inciso 4º se legisla sobre dos hechos que no tienen conexidad entre sí, y que podrían estar perfectamente separados: uno es el abuso del empleado público que viola la comunicación ó incomunicación de un preso, ordenada por el Juez; otro es el del empleado público que oculta al detenido que debe presentar á la au-



toridad. Por *violar la comunicación* debe entenderse poner en incomunicación al detenido. El inciso se refiere solamente al caso en que se viole la comunicación *ordenada por el juez*. Más justa y clara era la disposición del proyecto Tejedor: “el empleado público que pone en incomunicación sin decreto judicial á los reos sometidos á juicio, ó que levanta la comunicación ordenada por el Juez”. La incomunicación importa una grave y excesiva restricción de la libertad individual autorizada solamente por las necesidades del procedimiento penal en los momentos que siguen al delito. Si el juez no ha tenido necesidad de incomunicar al reo, ni ha dictado, en consecuencia, el auto que le levanta la incomunicación, será siempre, racionalmente, un abuso de autoridad toda incomunicación y la ley debiera preverlo. El sistema que conciliaría las necesidades del procedimiento con las garantías individuales sería el que autorizara la incomunicación por un término de horas suficiente para poner el hecho en conocimiento del juez y esperar la resolución de éste.

992. La ley no se refiere sino al empleado público que incomunica al detenido sin orden de juez. Presume, pues, que los jueces tienen un poder ilimitado de incomunicar, y que sobre este punto ellos no pueden cometer abuso de autoridad. Esto no debiera ser así. Las leyes de procedimientos pueden fijar, y fijan efectivamente, límites al poder del juez para incomunicar al detenido. El Código de Procedimientos de la Capital previene que la incomunicación de una persona detenida ó presa podrá ser decretada solamente por el juez ó funcionario que instruya las diligencias del sumario, *cuan-*

do para ello existiera causa bastante, que expresará en el auto ó acta respectiva, y agrega que en ningún caso la incomunicación podrá exceder de cinco días, si bien podrá ordenarse nuevamente en auto motivado, por otros cinco, bajo la responsabilidad del juez ó funcionario que la ordene (1). No solamente en cuanto al término, sino también en cuanto al modo ó forma, el poder del juez se encuentra limitado, y la ley, que enuncia separadamente los casos de abuso de autoridad que prevé, omite éste que es bien importante. El caso omitido por nuestro Código lo prevé especialmente el inciso 1.º del artículo 214 del código penal español, que enumera entre los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos individuales sancionados por la Constitución, el de la *autoridad judicial* que prolongare indebidamente la incomunicación de un preso.

993. La ocultación del detenido que el empleado público debe presentar á la autoridad, puede asumir formas de delincuencia bien diversas. O tiene por objeto favorecer la impunidad del delito, ó tiene el de privar al reo de las seguridades y garantías que puede esperar de su juez competente. Bajo el primer aspecto presentaría los caracteres de un encubrimiento del delito por ocultación de la persona, agravado por la calidad del agente. Como tal encubrimiento debe considerarse previsto por la disposición del inciso 7.º del artículo 42 que considera encubridores á los que teniendo conocimiento de un delito ó de sus autores, omiten comunicar lo que saben á la autoridad, cuando tenían obligación de hacer-

(1) Artículos 256 y 257.

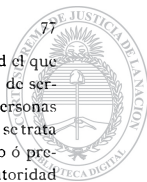


lo por su profesión ó empleo. La disposición del inciso 1º del artículo 243 no se aplicará, pues, sino al segundo de los casos enunciados, esto es, al de que la ocultación haya importado una restricción de las garantías del individuo para ser puesto á disposición de la autoridad competente; pero entonces este caso se confunde con el del inciso 2º del mismo artículo 243, de donde resulta la posibilidad de que la prescripción de que me ocupo carezca de aplicación.

994. Los incisos 5º, 6º y 7º prevén otros abusos que pueden ser cometidos por empleados públicos encargados de la guardia ó custodia de presos. Declara el primero de ellos que abusa de autoridad el empleado público que impone á los presos que guarda, severidades, vejaciones ó apremios ilegales, ó los coloca en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto; declara el segundo que cometen asimismo abuso de autoridad los gefes de presidios, penitenciarias y demás establecimientos de condenados, como los que hagan sus veces, que reciban algún reo sin testimonio de la sentencia ejecutoriada en que se les hubiera impuesto la pena; y el último, que lo comete el alcaide ó cualquier otro empleado de las cárceles de detención y seguridad que recibe un preso sin orden de autoridad competente salvo el caso de flagrante delito. La claridad de estos preceptos ahorra el comentario. Basta tener presente respecto del inciso 5º, que la ley se refiere á las severidades, vejaciones y apremios *ilegales* para significar que no se trata de los que sean una condición ó circunstancia del cumplimiento de la condena, por ejemplo, los trabajos forzados que caracterizan la pena de presidio.

995. El inciso 8º califica de abuso de autoridad el que comete el empleado que desempeñando un acto de servicio impone cualquiera vejación contra las personas ó les aplica apremios ilegales ó innecesarios. No se trata de las relaciones entre la autoridad y un detenido ó preso, sino de las que surgen en todo acto de la autoridad en presencia del particular cualquiera que sea la ocasión en que se produzca. Conviene advertir que la ley no hace referencia solamente á los apremios legales, sino también y distintamente, á los innecesarios. Esto importa recomendar á los funcionarios el uso prudente y discreto de la autoridad. Sólo en tales límites puede ésta no chocar abiertamente con las garantías necesarias de la libertad individual. El poder de que se inviste á la autoridad y á sus agentes no importa conferirles una facultad general de humillación á los particulares. El primer deber de todo funcionario público que tenga una recta conciencia del modo en que debe ser usada la autoridad, es el de no ejercitar los apremios de que puede disponer sino en la medida estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de su institución. Pasando de este límite se sale del uso y se entra en el abuso de autoridad: el empleado ó funcionario se convierte entonces en delincuente.

996. Los incisos 9 y 10 se refieren á un mismo género de hechos, fundándose la distinción únicamente en la calidad de las personas. Se refiere el primero al juez ó empleado que seduce á la mujer, hija ó pupila del que litiga ó tiene pendiente alguna gestión ante él: y el segundo al empleado en establecimiento de condenados ó detenidos que seduce á la mujer detenida ó sentenciada ó á



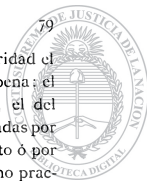


alguna hija de ésta. Análogas disposiciones del código español han sido reunidas en un capítulo titulado de abusos contra la honestidad. En lugar del término *seduce*, se ha hecho referencia en él al que *solicitar* a una mujer, etc., lo que expresa con mayor exactitud que es lo realmente constitutivo de delito en los casos de que se trata. No debe exigirse que el empleado haya seducido, es decir haya logrado engañar á la mujer requerida por él: lo que debe haber de imputable en el hecho es el mero requerimiento. Si esto fué lo que nuestra ley se propuso castigar, hay que convenir que es superior la forma adoptada por el código español.

997. La pena impuesta á todos los casos del delito de abuso de autoridad es la de arresto y suspensión del empleo, siempre que el hecho no importe delito á que la ley señale pena mayor. Los casos enumerados en el artículo 243, pueden asumir caracteres de gravedad de todo punto distintos y á que debieran corresponder distintas penas. La libertad individual y la inviolabilidad del domicilio debieran requerir para ciertos casos penas superiores á la que la ley determina. El delito de seducción del empleado público á la mujer libre que tiene gestión pendiente ante él, es de una gravedad moral inferior á la seducción de la mujer detenida, pues que ésta no dispone manifestamente de los medios de defensa que puede encontrar aquélla. Esta distinción la hacía con justicia el proyecto Tejedor, imponiendo para el primer caso la pena de inhabilitación especial por seis años y para el segundo la de prisión por uno á tres años.

998. El proyecto Tejedor enumeraba algunos otros casos que el de la Comisión de la Cámara de Diputados

suprimió. Considerábase también abuso de autoridad el del empleado público que sin ser juez impone pena; el del juez que impone pena sin precedente juicio; el del juez que impone penas diferentes de las designadas por la ley para cada delito; el del juez que de intento ó por negligencia no proceda á instruir el sumario ó no practica las diligencias del juicio dentro del término que la ley señala, y el del empleado que en el ejercicio de su cargo no se sujeta á las prescripciones de las leyes ó reglamentos especiales. La supresión se justifica en parte porque los primeros hechos expresados revisten los caracteres de una usurpación de autoridad, de un prevaricato, y el último encontrará su sanción en las facultades discrecionales de la administración : pero la supresión del penúltimo de los incisos citados no me parece justificada y pienso que el hecho, sino bajo la denominación de abuso de autoridad, bajo otra calificación pertinente debiera reprimirse.





CAPÍTULO V

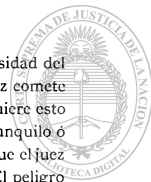
PREVARICATO

(Artículos 245 á 249)



999. Consideraciones generales. — 1000. Dificultades en la incriminación del prevaricato de los jueces. — 1001. No es imputable el error. — 1002. Disposiciones de nuestra legislación antigua y moderna. — 1003. Comparación del Código con la legislación anterior. — 1004. Interpretación del inciso 1° del artículo 245. — 1005. La fórmula adoptada es más concreta y precisa que las anteriores. — 1006. No se atribuye influencia á la naturaleza del móvil del delito. — 1007. Delito del juez que conoce en causa que patrocinó como abogado. — 1008. Delito del juez que á sabiendas cita hechos ó resoluciones falsas. — 1009. Supresión de otros casos de delitos. — 1010. Pena del prevaricato de los jueces. — 1011. Agravación en caso de haberse impuesto pena en consecuencia de la sentencia injusta. — 1012. Prevaricato de abogados y procuradores. — 1013. Penalidad de este delito. — 1014. Prevaricato de jueces árbitros ó arbitradores, asesores ó peritos. — 1015. Observaciones críticas sobre el caso del número anterior.

999. El más odioso delito que pueda cometer un juez en su calidad de tal, es el de torcer la justicia y negar la



razón y el derecho á quien los tenga. La odiosidad del hecho se impone á la conciencia cuando el juez comete una injusticia, sabiendo que la comete. No quiere esto decir que el espíritu público deba quedar tranquilo ó indiferente cuando tenga completa opinión de que el juez no se movió por malicia sino por ignorancia. El peligro es exactamente igual: y si forzosamente se quisiera hallar alguna diferencia sobre si es peor el juez que procede con malicia ó el que procede por ignorancia, no vacilaría en contestar que los males que el último puede causar son mayores: el juez perverso no procederá siempre por malicia; el juez ignorante fallará siempre mal. Todavía se presta esta materia á una distinción más: la del juez ignorante que tiene algo de la sabiduría de Sócrates, y sabe que no sabe nada, y la del inconsciente que no sabe nada de su ignorancia. El primero es para mí un delincuente: su dolo manifiesto está en tener conocimiento de su falta de aptitudes, y en estafar al Estado vendiéndole conocimientos que no tiene. Al otro yo le absolvería... pero le destituiría.

1000. La incriminación de la injusticia que el juez cometa presenta serias dificultades que surgen de la naturaleza de las situaciones que acabo de exponer, y de la materia en que se producen. En primer lugar, escapa á una determinación precisa lo que debe tenerse por injusto en la solución de un pleito. La verdad no vierte una luz tan excelsa sobre los hechos de que el juez tiene que informarse que su conciencia pueda pesarlos con exactitud, ni, por otra parte, la idea de la justicia se impone tan definida al espíritu que no quepan dudas sobre la justicia ó injusticia de una solución cualquiera. Cuántas ve-

ces, después de considerar detenidamente una solución que se nos presenta, no decimos *es justa*, sino *parece justa*. Un espíritu imparcial no se pronuncia sobre la injusticia de un pronunciamiento judicial con la extrema facilidad con que lo hace un litigante, precisamente porque éste se encuentra siempre en la más inconsciente inclinación de su ánimo á ser injusto contra aquel á quien pide justicia. Volviendo á nuestro asunto, el elemento material del delito es, pues, de la más difícil determinación, y hay que renunciar al castigo de la mayor parte de las injusticias que puedan cometerse. Sólo podrían ser incriminadas las más chocantes, las más manifiestas, las más indudables; pero, entonces, el juez perverso que hubiera querido cometerlas, las habría revestido de formas que le dieran el aspecto de un convencimiento de la conciencia, y presentándose en tal caso toda la delincuencia en la intención, el castigo y aún la imputación se harían imposibles por las dificultades de la prueba.

1001. He considerado solamente el caso del juez que procede por malicia y el del que obra por ignorancia. Son estos los dos únicos en que debe considerarse necesaria la defensa de los derechos de los particulares contra las injusticias del juez. Nadie puede pensar en que el *error* deba incriminarse. Pero ¿qué es el *error*? El error consiste en tomar por verdad lo que no es tal. Hay error en la falsa deducción que se saca de los conocimientos que se tenga; y en este punto puede distinguirse el *error* de la *ignorancia*, en cuanto ésta es la falta de los conocimientos necesarios para la deducción. Pero la verdad, como la justicia, y como todas las ideas absolutas, son poco eficaces cuando se las trae al mundo de





las realidades para buscar la solución de hechos positivos. Sucede por esto, que se llama *error* no solamente la falsa apreciación de los hechos, sino la *distinta* apreciación. ¿Cuándo afirmar, entonces, que un juez ha cometido error? ¿Cuando su resolución ha sido revocada?

Pero entonces pueden ser los tribunales superiores los que estén en error. No hay que olvidar que la verdad que se busca en éstos no es en definitiva más que una presunción de verdad, á la que se da aquella fuerza porque la tranquilidad social exige que los litigios tengan fin.

1002. Una materia que ofrece tales dificultades para determinar lo que *debe* tener castigo, y lo que *puede* tenerlo, tiene que dar lugar á las más justificadas vacilaciones en la legislación. Examinando el derecho que nos regía antiguamente, se encuentra en el Fuero Juzgo disposiciones sobre este punto: “ el juez si juzga *tuerto por algun ruego*, ó mandar toller alguna cosa *con tuerto*... peche otro tanto de lo suyo, etc. ” (1). El Fuero Real decía: “ si el alcalde juzga *tuerto por ruego* ó por *precio* que le den ó quel prometan, ó si mandare quitar alguna cosa á alguno *sin derecho*, etc... E si el alcalde juzgó *tuerto* é mandó tomar alguna cosa por su *negligencia*, que no lo entiende, jure que eso no fizo *por ruego*, ni *por amor*, ni *por precio*, e no vale lo que juzgó, ni él no haya ninguna pena ” (2). La ley de Partidas distinguía: el juez que juzgaba contra derecho á *sabiendas*, por *odio* que tuviera contra aquel á quien juzgaba, ó estimación á su conten-

(1) Ley 19, título 2º, libro 4º.

(2) Ley 2º, título 2º, libro 2.

dor, y no por precio que le dieran ó le prometieren, tenía pena pecuniaria, indemnización de daños, y quedaba infamado y destituido; si daba sentencia por precio, tenía multa del triple de lo que recibió y de lo que le prometieron, además de las penas expresadas; y si la diese por ignorancia, debía pagar los daños y perjuicios solamente (1). Las penas tenían especial gravedad cuando se trataba de sentencia en que se impusiera pena corporal (2). Este era el derecho que regía cuando el doctor Tejedor proyectó el castigo del prevaricato, enunciando los casos siguientes como únicos en que podía cometerlo el juez: 1º si expedía sentencia manifiestamente injusta; 2º si conocía en causa que patrocinó como abogado; 3º si citaba hechos ó resoluciones falsas; 4º si se negaba á juzgar bajo pretexto de oscuridad ó insuficiencia de la ley; y 5º si se apoyaba en leyes supuestas ó derogadas. El proyecto de la Comisión revisora limitó la prevaricación á tres casos contenidos en dos incisos: “1º el juez que maliciosamente expide sentencia injusta ó que viola ó sabiendas las leyes de procedimiento y jurisdicción; 2º el que se niega á administrar justicia dentro de los términos señalados por las leyes”. Por último, la Comisión de la Cámara de Diputados proyectó el artículo en la forma consignada en el Código: “Comete prevaricato: 1º el juez que expide sentencia definitiva ó interlocutoria que tenga fuerza de tal, si fuese contraria á la ley expresa invocada en los autos, salvo prueba de

(1) Ley 24, título 22, Partida 2ª.

(2) Ley 25, título y Partida citada, y leyes 1ª, título 7º, y 11, título 8º, Partida 7ª.



que ha procedido por error ; 2º el juez que conoce en causa que patrocinó como abogado ; 3º el juez que á sabiendas cita hechos ó resoluciones falsas ”.

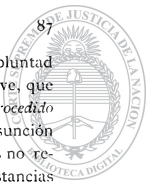
1003. Se ve, pues, en lo que precede que el Código ha abandonado así la fórmula que requería que el juez dictara sentencia injusta, á sabiendas de que lo era, equivalente á la que lo hiciera maliciosamente, como la que requería que la injusticia fuera *manifiesta*.

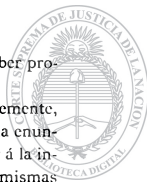
1004. En cuanto á la primera, enunciada, como se ha visto, en la ley de Partidas, ha sido conservada en el Código español de 1850 y en el de 1870. No puede dudarse de que los términos *á sabiendas* tenían algún valor para la interpretación de la ley, en la opinión de los redactores del Código: están usados en el artículo 94. Ellos importan desechar las presunciones legales y requerir la *prueba* del conocimiento que el agente tuviera del alcance de su acción. Sosteniendo la disposición del código español, Pacheco afirma que la ley estaba en el caso de declarar que la prevaricación sólo se comete *á sabiendas* para que de su silencio no se dedujesen legítimamente consecuencias que podrían ser peligrosas, y que si el artículo no hubiese usado aquella palabra, daría á entender que en todo caso de sentencia injusta, la presunción estaría por haberse hecho con conocimiento y designio de delinquir, y, por el contrario, usándola, da á entender que la presunción es la opuesta y que ese mal intento necesita ser justificado (1). La fórmula del Código, no adoptando el término *á sabiendas*, ni el *maliciosamente*, del proyecto de la Comisión revisora, importa

(1) PACHECO, *Código Penal concordado*, etc., tomo 2º, página 401.

colocar el hecho bajo la presunción general de voluntad criminal, y esto con una circunstancia más grave, que resulta de la salvedad final, la *prueba de haberse procedido por error*. Según el artículo 6º del Código, la presunción general de voluntad criminal subsiste mientras no resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa: el artículo 245 es, pues, más exigente, desde que solamente salva la *prueba* de haberse procedido por error.

1005. Esta situación tan grave en que el inciso 1º del artículo 245 coloca al juez acusado, se encuentra quizás justificada por la substitución de los términos *manifiestamente injusta*, que empleaba el proyecto Tejedor, por estos otros: *si fuese contraria á la ley expresa invocada en los autos*. Decir “manifiestamente injusta” era quizás tan poco preciso como limitarse á prever simplemente el caso de la sentencia injusta, porque tanto se requiere una operación de la inteligencia para resolver sobre la justicia ó injusticia de la sentencia, como para determinar si la injusticia es manifiesta ó no. La forma adoptada por el Código concreta y determina, cuanto es posible en una materia tan difícil, en qué caso puede ser inculpada la injusticia. No habiendo una ley que terminantemente mande ó prohíba lo contrario de lo que el juez prohíba ó mande: una ley que lo diga *expresamente*, no bastando que lo contenga implícita ó virtualmente, no hay imputación de delito. Si sólo en este caso especialísimo la ley impone el castigo, no hay porque erigir en elemento del delito, que sea necesario establecer por medio de prueba, el conocimiento que el Juez haya tenido de su injusticia. No hay ya posibilidad de





otra alegación en defensa del Juez que la de haber procedido por error.

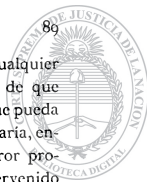
1006. En las citas de leyes hechas precedentemente, de la antigua legislación española, se ha visto la enunciación de los móviles que han podido dar lugar á la injusticia : el amor, el odio, el interés. Es en estas mismas condiciones que la ley francesa prevé el delito de que se trata, quedando en ella comprendido entre las disposiciones referentes al delito de corrupción. Nuestro Código, siguiendo el ejemplo de los nuevos códigos españoles, no hace distinción alguna sobre el móvil de la injusticia. Conviene advertir, sin embargo, que en el código español de 1870 se ha establecido una penalidad para el caso en que el juez dictase sentencia manifiestamente injusta en causa civil ó criminal, *por negligencia ó ignorancia inexcusables* (1).

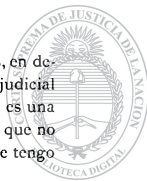
1007. El inciso 2º del artículo 245 enuncia como delito de prevaricato el que comete el juez que conoce en causa que patrocinó como abogado. Los términos demasiado absolutos en que está consignada esta disposición podrían hacer injusta su aplicación estricta, si llegara á producirse el caso poco probable de una acusación sobre este delito. Conocer como juez en una causa puede ser el simple hecho de poner una providencia de trámite ordinario en que no hay que tener en cuenta sino las formas de la sustanciación; puede ser el mero hecho de dictar una resolución de las que, según el lenguaje de procedimientos, no causan gravamen irreparable. Haber patrocinado un asunto como abogado, puede ser el he-

(1) Artículo 366.

cho de haber firmado un escrito de trámite ó cualquier otro de escasa importancia. El inciso segundo de que trato no ha salvado expresamente el error en que pueda incurrir el juez, como lo hace el inciso 1°. Resultaría, entonces, autor de prevaricato el juez que por error proveyera en causa en que no recordara haber intervenido como abogado. Es evidente que ésta no puede ser la voluntad de la ley y que no sería así como debiera aplicarse. A la ley no interesa castigar estos errores insignificantes é incapaces de causar daño alguno. Dado el alcance que he explicado ya de los términos del inciso 1°, *salvo la prueba de haber procedido por error*, al no consignarlos en el inciso 2°, la ley es menos exigente que con su enunciación, pues entonces rigen las reglas generales sobre la voluntad criminal, en que basta para que desaparezca la imputación de delito, que á la presunción de voluntad criminal se oponga cualquiera otra resultante de las circunstancias particulares de la causa.

1008. Según el inciso 3°, comete prevaricato el juez que *á sabiendas* cita hechos ó resoluciones falsas. El término *á sabiendas*, que no se consignaba en el proyecto Tejedor, fué agregado en el proyecto de la Comisión de la Cámara de Diputados. Con el agregado ó sin él, la disposición podrá justificarse quizás en algún caso extraordinariamente raro; pero en los demás no se comprende cómo puede imputarse por delito de prevaricato una falsa cita de un hecho ó resolución, sin hacerse distinción alguna sobre este punto. Algo se aventajaría si la ley se hubiera referido á la invocación que el juez hiciera de hechos ó resoluciones que tuvieran alguna importancia decisiva en el asunto y que fuera la causa aparente de su





injusticia. Pero, erigir, en términos tan generales, en delito una cita ó resolución que puede no ser perjudicial sino al buen crédito del magistrado que la hace, es una disposición tan original de nuestros proyectos que no le encuentro concordante en las leyes penales que tengo á la vista.

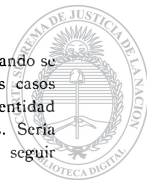
1009. En cambio, no creo que haya sido conveniente ó justificada la supresión de toda disposición sobre la negativa ó retardo malicioso para administrar justicia. Es ya un mal arraigado profundamente en muchos de los juzgados y tribunales de la República la morosidad en el despacho que hace desesperar de la solución de los pleitos. No basta para esto los recursos de queja que se dé á los interesados, si faltan medios eficaces para compeler á los jueces al cumplimiento de sus deberes, y mucho más cuando á una queja puede oponer, por ser corrientemente admitida, la excusa del recargo de tareas. Como toda proporción de fuerzas es relativa, el recargo de tareas no significa sino impotencia para desempeñarlas, y el juez que no puede fallar todos los asuntos que entran á su despacho debe abandonar su puesto, porque no presta todo el servicio por el cual se le paga. Si no abandona voluntariamente el puesto, su permanencia es una falta tan grave que la ley puede erigirla en delito. En este sentido me parece conveniente que se hubiera consignado una disposición semejante á la del inciso 2º del artículo 137 del proyecto de la Comisión revisora: “el que se niega á administrar justicia dentro de los términos señalados por las leyes”. Con esta disposición son concordantes la del artículo 159 del código brasileiro: “rehusar ó retar-



dar la administración de justicia en lo que sea propio de sus atribuciones", y el artículo 185 del código penal francés: "todo juez, tribunal, empleado ó autoridad que, *bajo cualquier pretexto*, aun el de silencio ú oscuridad de la ley, denegare la administración de justicia, después de haber sido requerido por las partes, y perseverare en su negativa, después de haber sido advertido ó prevenido por sus superiores, podrá ser procesado y será castigado con una multa de 200 á 500 francos é inhabilitación para cargos públicos por cinco á veinte años". La forma usada en Francia para las intimaciones previas es la de hacerlas por intermedio de un alguacil al secretario del juzgado con intervalo de tres días si se trata de un juez de paz, y de ocho, de otro tribunal del orden judicial. Cuando la denegación de justicia está consumada por la reunión de los elementos diversos que la constituyen, el delito existe y el ministerio público puede perseguirlo de oficio, sin tener que esperar una demanda de la parte interesada en la decisión (1).

1010. El artículo 240 impone para todos los casos de prevaricato que quedan expresados la pena de destitución é inhabilitación perpetua para ser juez. En este punto la penalidad del Código es mucho más severa que la del proyecto Tejedor que sólo imponía suspensión de empleo de seis meses á un año, y que la del proyecto de la Comisión revisora, que imponía la de suspensión mayor que duraba de tres años y un día á cinco años. La pena impuesta por el Código no es por

(1) GARRAUD, *Trait du droit pénal français*, tomo 3^o, números 307 y 308.



esto injustamente severa, y es la conveniente cuando se trate de la conducta maliciosa del juez. Pero los casos de delito que la ley indica no son todos de igual entidad y pueden ser de consecuencias muy diversas. Sería entonces conveniente que la penalidad pudiera seguir al delito en todas su modalidades.

1011. El mismo artículo agrega que si la sentencia fuese condenatoria, el juez sufrirá además la misma pena que impuso. Esta parte es la única que se refiere directamente al juez que sentencia en lo criminal. Este artículo tiene su concordante en el 361 del Código penal español, según el cual el juez que dictase sentencia injusta contra el reo en causa criminal, por delito, incurrirá en la pena impuesta por la sentencia, si ésta se hubiere ejecutado. Esta penalidad está aprobada por los comentaristas españoles, y es la odiosidad del delito lo que inspira la aprobación de esta especie de pena del talión, que puede fundarse por otra parte, en la necesidad de proporcionar la pena á la magnitud del daño causado.

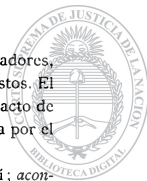
1012. La palabra *prevaricato* se ha aplicado más directamente al delito del abogado ó procurador que falta á la lealtad debida ó abusa de la confianza que en él depositara su cliente ó defendido. La ley no define en términos generales el prevaricato del abogado ó procurador, pero enumera los casos en que el delito se comete: 1° cuando revelan los secretos que el poderdante ó defendido le hubiese confiado para la defensa; 2° cuando defiendan ó representen á ambas partes en el mismo juicio; 3° cuando, después de representar ó patrocinar á una parte, representan ó patrocinan á la contraria en la misma causa.

Las dos últimas formas son las únicas que enunciaba el proyecto Tejedor. La primera está tomada del artículo 273 del código español de 1850; pero este mismo fue reformado, agregándose que el delito lo constituían tanto el abuso malicioso de su oficio como la negligencia ó ignorancia inexcusables, que perjudicaran al cliente. La negligencia ó la ignorancia no dan lugar entre nosotros sino á la acción por indemnizaciones civiles.

1013. La pena fijada para el delito de prevaricato cometido por abogado ó procurador es la de multa de cien á quinientos pesos y suspensión del ejercicio de la profesión por cuatro á seis años. El proyecto Tejedor sólo imponía pena pecuniaria. Pero es digna de aprobación la pena de inhabilitación profesional que se ha agregado.

1014. El artículo 249 declara que los jueces árbitros ó arbitradores, los asesores y los peritos quedan sujetos en sus respectivos casos á las disposiciones anteriores, esto es, según la naturaleza de sus funciones respectivas. El juez árbitro ó arbitrador *decide* el asunto sometido á su juicio. Queda, entonces, sujeto á las responsabilidades penales del juez, que son la destitución é inhabilitación perpetua para ser juez. La pena se hace casi ilusoria y no guarda relación con el delito ó es sólo de efecto puramente moral. El árbitro ó arbitrador es un juez accidental, y no recibe daño material alguno con la pena de destitución é inhabilitación. La pena debiera ser distinta y aun más grave, por una razón de derecho. Contra los pronunciamientos de los jueces sujetos á formalidades legales, hay siempre recursos y tribunales superiores que enmienden yerros. Los pronunciamientos de





jurisdicción arbitral, especialmente de los arbitradores, están librados por completo á la conciencia de éstos. El sometimiento á su decisión discrecional es un acto de absoluta confianza, y su prevaricato se agrava por el abusq de ésta.

Los asesores y los peritos nada deciden por sí; *aconsejan*, dejando libre la decisión del juez; pero pueden inducirlo en engaño con su prevaricación. Pueden serles aplicadas sin inconveniente las penas del artículo 248.

1015. Para unos y otros casos la ley debiera haber precisado con mayor determinación en qué consistirían los delitos de árbitros, arbitradores, asesores y peritos. Desde que el prevaricato ya no se comete por una sentencia manifestamente injusta, sino por una sentencia contraria á un texto legal invocado en la causa, no teniendo el arbitrador, según las reglas ordinarias de procedimiento, que sujetarse á una solución impuesta por la ley, sino que fallar conforme á su ciencia y conciencia, resulta que nunca podrá cometer el delito del inciso 1º del artículo 245.

En cuanto á los asesores y peritos, el mayor mal que pueden causar es el de inducir en engaño ó dar informes falsos con ese objeto, que es un hecho muy distinto del que se consigna como delito del abogado ó procurador, y que con ser tan grave quedará sin castigo.

CAPÍTULO VI

COHECHO

(Artículos 250 á 254)



1016. Qué se entiende por cohecho.—1017. Disposición sobre el cohecho en general.—1018. Qué funcionarios ó empleados pueden cometer el delito.—1019. Los miembros de las asambleas deliberantes no están comprendidos.—1020. Recibo de dádiva ó aceptación de promesa.—1021. Consumación del delito del empleado.—1022. Interpretación de los términos "para hacer ó dejar de hacer alguna cosa".—1023. Pena del cohecho en general.—1024. Debiera erigirse en delito de los funcionarios la aceptación de regalos en consideración á sus funciones.—1025. Cohecho cometido por el juez.—1026. Cuándo queda consumado según el texto.—1027. Cohecho cometido por el particular.—1028. Caso que juzgué bajo la vigencia del Código Tejedor.—1029. Pena del cohecho del particular. Caso de dádiva indeterminable.—1030. Atenuación del cohecho en causa criminal, por vínculos de parentesco entre el corruptor y el reo.—1031. Comiso de las dádivas.

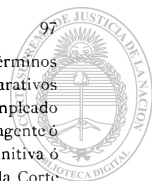
1016. Por *cohecho* se entiende generalmente el delito del que corrompe á un empleado ó funcionario público, comprando por dinero ú otra dádiva la falta de cumpli-



miento de sus deberes. Pero la ley ha adoptado la palabra para indicar en primer término el delito del funcionario que trafica con los deberes de su cargo, sea faltando á ellos, sea recibiendo dádiva por cumplirlos; y aplica, en segundo término, la calificación al delito del que da ú ofrece la dádiva. Es el delito que en el derecho francés se denomina de *corruption*. La aplicación de la palabra *cohecho* á las dos formas indicadas, tiene la autoridad del código español.

1017. En los términos más generales de la ley, se castiga como delito de cohecho el de “todo empleado en el orden administrativo ó judicial, agente ó encargado en cualquier ramo de la administración pública que recíbese dinero ó cualquier otra dádiva ó que aceptase una promesa directa ó indirecta para hacer ó dejar de hacer alguna cosa”. Esta disposición en cuanto enuncia los caracteres constitutivos del cohecho en el empleado público, ha sido tomada por los diversos cóligos que concuerdan en ella, del artículo 177 del código penal francés. Convendrá, pues, al analizarla, tener presente su origen.

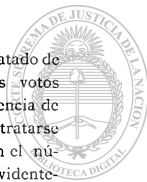
1018. La primera condición que en los términos transcritos aparece como esencial al cohecho pasivo, es la de que su autor sea un empleado cualquiera del orden administrativo ó judicial, agente ó encargado de cualquier ramo de la administración pública. El artículo 177 del código francés, dice: “todo funcionario público del orden administrativo ó judicial, *todo agente* ó encargado de la administración pública”. Diciéndose por una parte *todo funcionario*, y por otra, *todo agente ó encargado*, se entiende referirse á distintas clases de personas. Lo



mismo debe entenderse nuestro artículo. Los términos “agente ó encargado” no son meramente aclarativos del concepto anterior: la ley se refiere á todo empleado que funcione regularmente como tal y á todo agente ó encargado que atienda una función pública definitiva ó transitoria. En un fallo de 29 de Mayo de 1886, la Corte de Casación de Francia declaró comprenderse en los términos del artículo 177 del código francés “á los que, investidos de un mandato público, sea por una elección regular, sea por una delegación del poder ejecutivo, derivan de ese mandato el derecho de concurrir á la gestión de los asuntos del Estado, del departamento ó de la comuna”. Debe aplicarse la disposición, agrega Garraud, no solamente á los funcionarios propiamente dichos, es decir, á los delegados directos de la autoridad pública para administrar ó juzgar, sino también á todos los auxiliares, á todos los empleados de las administraciones públicas, en una palabra, á todas las personas colocadas en la organización administrativa (1).

1019. Los miembros de las asambleas deliberantes no están comprendidos en la disposición, porque, como expresa el mismo autor, no están encargados de *administrar* ó de *juzgar*, sino simplemente de deliberar y de votar. Esta exclusión perfectamente resultante de los términos legales, no se funda en principios ni constituye un sistema racional. En los tiempos que corren, desgraciados para la delicadeza personal en cuestiones de dinero, tal supresión constituye simplemente un sensible vacío de la legislación, ya notado en Francia en más de una

(1) GARRAUD, *Traité de droit pénal*, tomo 3º, número 274.



ocasión, donde en estos últimos tiempos han tratado de colmarlo penando tanto la venta indigna de los votos como el tráfico de influencias. En la citada sentencia de 29 de Mayo de 1877, se decidió, sin embargo de tratarse de miembros de cuerpos deliberativos, que "en el número de los funcionarios públicos, figuran evidentemente los miembros de los concejos municipales; que no se podría, por otra parte, quitar este carácter de generalidad al artículo 177, sin desconocer la intención que ha tenido el legislador de proteger el cuerpo social contra la corrupción de todas las personas que han recibido misión de participar en la administración de la cosa pública". El código español ha adoptado términos más comprensivos que los de la ley francesa y la nuestra. Puede imputarse el cohecho á todo *funcionario público* y se entiende por tal, según definición del artículo 416, todo el que por disposición inmediata de la ley, ó por *elección popular*, ó por nombramiento de autoridad competente, participe del ejercicio de funciones públicas.

1020. La segunda circunstancia enunciada en la ley, es la de que el empleado reciba dinero ú otra dádiva ó que acepte una promesa directa ó indirecta. Son también los términos del código francés "que haya aceptado ofertas ó promesas ó recibido donativos ó regalos". En nuestro texto se ha hecho referencia á la promesa *directa* ó *indirecta* para aclarar un concepto que aun en el texto del código francés se presentaba como indudable (1). La importancia de las dádivas no está sujeta á proporción alguna con la del hecho que ejecuta el em-

(1) Véase CHAUVEAU y HELIÉ, *Theorie du code pénal*, número 836.

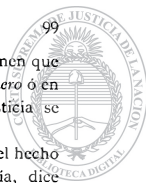
pleado. Nada influye en la esencialidad del crimen que el lucro sea *dado ó prometido*; consistente en *dinero ó en otra cosa apetecible*; *grande ó pequeño*. La justicia se ofende *etiam uno nummo* (1).

1021. La consumación del delito se opera con el hecho de recibir ó de aceptar la promesa. La baratería, dice Carrara, queda consumada con el contrato, puesto que en nada se refiere á la lesión del patrimonio privado. Es también indiferente que después de haber recibido la dádiva, el oficial público haya ó no ejecutado el acto para cuya obtención el particular la había dado. La ofensa á la justicia queda consumada en la forma, aún sin ninguna lesión en la materia, cuando se ha puesto á precio el acto del empleo. En la consumación del contrato está la consumación de este delito (2). Esto mismo resulta del texto de nuestro artículo 250; impone la pena al que *recibe* dinero ó *acepta* la promesa *para* hacer ó dejar de hacer, etc., no al que *hace* ó *deja* de hacer mediante dinero.

1022. El artículo 250 enuncia, pues, como tercera condición ó fin del contrato, que la dádiva ó promesa se reciba ó acepte para hacer ó dejar de hacer alguna cosa. El texto del código francés dice: “para ejecutar un acto de su función ó de su empleo”. Los términos de nuestro artículo, ¿deben entenderse también en este sentido? La nota del artículo del proyecto Tejedor, trascribiendo á Chauveau, que comenta el artículo del código francés, ciñéndose á su texto, resolvería afirmativamente

(1) CARRARA, *Programma*, § 2554.

(2) *Ibid* § 2554.

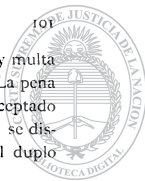




la cuestión: se trataría “de un acto cometido en el ejercicio de sus funciones, de un acto que haga parte de las atribuciones legales del funcionario, en una palabra, de un acto de su competencia *ex officio suo*, según la expresión de la ley romana. En efecto, un acto cometido fuera de sus funciones, un acto extraño á sus atribuciones y que no hubiese tenido el derecho de cometer en virtud de su empleo, puede muy bien ser considerado como acto de funcionario, pero no acto de sus funciones, y sólo un acto de esta clase es lo que la ley ha querido proteger contra un tráfico ilícito”. Pero esta solución, única en presencia del texto francés, no es la que se impone en nuestro artículo. La ley no requiere que el acto sea del ejercicio de las funciones, y si bien no será por esto incriminado de cohecho todo acto ó abstención de un individuo que no tenga relación alguna con la *calidad* de empleado, puede comprenderse en él tanto lo relativo al ejercicio de sus funciones como lo que haga con abuso de ellas ó con usurpación de las ajenas. Caben, pues, dentro del texto de nuestra ley, distinciones que no resultan del texto francés. No valdrían, con nuestro texto, las críticas de Chauveau y Hélie á la jurisprudencia de la Corte de Casación sobre el artículo en cuestión, que ha juzgado como delito de corrupción el acto del empleado que ha obrado fuera de sus atribuciones, y aún fuera de su jurisdicción, jurisprudencia que fué modificada posteriormente (1).

1023. La pena que se impone al caso general hasta aquí estudiado, es la de pérdida del empleo, inhabilitación de

(1) *Théorie du code pénal*, número 39.

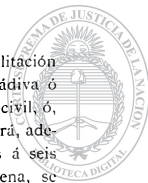


cinco á diez años para obtener otro alguno y multa igual al triple del valor de la dádiva ó promesa. La pena es menor si la dádiva ó promesa se hubiera aceptado para el cumplimiento de los deberes del cargo: se disminuye á la de pérdida del empleo y multa del duplo del valor de la gratificación ó recompensa.

1024. En el código español se contiene también en el título del cohecho una disposición inspirada en la más austera moralidad y que es ya tiempo de que figure en nuestro Código Penal, para contener con la reprobación de la ley cierto vicio que tiende á generalizarse, porque parece no bastar contra él la reprobación de las conciencias honradas. Hléla aquí: “El funcionario que admitiere regalos que le fueren presentados en consideración á su oficio, será castigado con la suspensión en sus grados mínimo y medio y reprensión pública” (1). Tengo por una regla de la más estricta moralidad del funcionario público, el no permitir en manera alguna que en atención á su calidad de empleado pueda hacérsele presentes de ningún género, especialmente mientras desempeña funciones públicas. Aunque nuestra historia sea rica en actos de austeridad que escasean en tiempos más próximos, bueno sería oponer á la decadencia de las costumbres el obstáculo de la pena.

1025. El artículo 251 se ocupa especialmente del cohecho cometido por el juez que dá por precio una sentencia, el más repugnante de todos los prevaricatos. La penalidad de este delito se somete á varias distinciones: si da por precio una sentencia justa, incurre en la pena

(1) Artículo 401 del código reformado de 1870



general del cohecho, pérdida del empleo, inhabilitación por cinco á diez años y multa del triple de la dádiva ó promesa; si la sentencia fuese injusta en causa civil, ó, siendo absolutoria, en causa criminal, la pena será, además de las anteriores, de penitenciaría por tres á seis años; si por la sentencia injusta se impusiere pena, se aplicará al juez la misma á excepción de la de muerte, que se conmutará en presidio por tiempo indeterminado, incurriendo el juez en inhabilitación perpetua, sin que diga la ley si especial ó absoluta.

El artículo 252 impone la pena de inhabilitación por cinco á diez años y multa del triple del valor de la dádiva ó promesa á los árbitros que dieren por precio una sentencia injusta.

1026. En estas disposiciones, á diferencia de lo que ocurre en las que penan en general, el cohecho de todo empleado, no aparece, según los términos legales, que deba reputarse consumado el delito sino cuando el juez ó el árbitro haya *dado* la sentencia. No es, pues, conforme á estos términos, el mero contrato lo que constituye la perfección del delito. Cuando el delito de cohecho es cometido por un Juez asume las proporciones de agravación más repugnantes, y hay justo motivo para aumentar relativamente la gravedad de las penas. Pero nada de esto demuestra que la naturaleza misma del delito deba cambiar. El juez que ha recibido ó aceptado la promesa para dictar una sentencia, ha corrompido la administración de la justicia, aun cuando se guarde el dinero y se abstenga de pronunciarla, y aun cuando quiera restituir el dinero recibido. La lógica exige que esto que se reconoce en el acto del empleado cohe-

chado, se reconozca en el del juez. No hay razón que justifique en un caso la disposición y no la justifique en otro. Ó el delito es formal en los dos ó no lo es en ninguno.

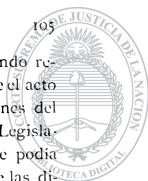
1027. Me he ocupado hasta aquí del cohecho del funcionario, considerado en cuanto á las responsabilidades penales de éste. Pero el funcionario no puede cometerlo si el particular no ha dado ó se ha obligado á dar el precio ú objeto que constituye la recompensa del primero. Según el artículo 253, el que diese ó prometiese la dádiva será castigado con la multa de que habla el artículo 250 y prisión de uno á tres años, á menos que, siendo el soborno en causa criminal en favor del reo, fuese hecho por su cónyuge, ascendiente, descendiente hermanos ó afines en los mismos grados, en cuyo caso se impondrá al sobornante una multa de valor igual al de la dádiva ó promesa.

1028. Según los términos del artículo que queda transcrito, y que son los mismos que usaba el código Tejedor, el delito de cohecho activo queda consumado no solo por la entrega de la dádiva sino por la simple promesa, aunque no haya sido aceptada. En 1883, siendo Juez del Crimen en la Provincia de Corrientes juzgué el caso siguiente: Don J. C. dirigió á don S. D., hermano del Ministro de Gobierno de aquella Provincia, una carta concebida así: “Tengo una propuesta pendiente, que actualmente se discute en la legislatura por el cobro de los impuestos atrasados. El Gobierno tiene una suya; y como podrían conciliarse las dos y á esto podrían concurrir su hermano por parte del Gobierno y el doctor N., por los amigos que lo acompañan en la



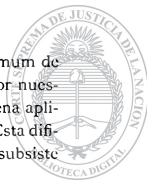


Legislatura, autorizo á Vd. para ofrecer el veinte por ciento de lo que á mi me corresponda si se sanciona la ley, encargándome á mi de la cobranza de los referidos impuestos". Las defensas opuestas por el acusado fueron: 1° que la carta le había sido inspirada por el mismo S. D., al declarante, hecho que no pudo probar; 2° que la propuesta no se hacía al Ministro sino al hermano de éste; 3° que, en todo caso, la proposición estaba dirigida á la persona privada del *hermano* de S. D., y no al Ministro; 4° en que dado que la promesa se hubiera hecho al Ministro, no existía delito de cohecho, por no haberse procurado un acto de las funciones de su empleo; 5° que en todo caso, se había cometido simple tentativa y no cohecho; 6° que si había autor de delito, sería tal S. D., por haber hecho uso de la carta que le fue dirigida. Como se vé, el caso merece citarse por haberse propuesto todas las dificultades á que puede dar lugar el asunto. Juzgué: 1° que la proposición había sido hecha al Ministro de Gobierno, por interpuesta persona de su hermano, lo que se deducía naturalmente del encajenamiento lógico de las ideas en la carta, puesto que el firmante de ella solicita un *concurso eficaz* á sus propósitos, de tercera persona, autorizando á la segunda á quien se dirige á *ofrecer* el veinte por ciento de las utilidades que le correspondan, y no puede suponerse remuneración á una persona por servicios prestados por otra que no está bajo su absoluta dependencia, y de los cuales no es dueña: 2° que era inadmisibile la distinción entre la persona pública y la privada, puesto que se llegaría con ella á la consecuencia de que el empleado que recibiere dádiva ó promesa para el ejercicio de sus fun-



ciones no cometería delito de cohecho, asegurando recibirlas en su calidad de persona privada; 3° que el acto que se solicitaba era del ejercicio de las funciones del Ministro, desde que éste debía sostener en la Legislatura en nombre del Gobierno, un proyecto que podía conciliarse con el que pretendía C., de modo que las diligencias para conciliación entre ambos que se requería, era un acto del Ministro *ex-officio suo*, según los términos usados por los escritores de la materia: 4° que la simple promesa constituía el delito consumado; ó, como dicen Chauveau y Hélie, la tentativa de cohecho se forma de los mismos elementos que el crimen, y la pena no es atenuada sino en razón de la atenuación del peligro; 5° que según declaraciones en autos, don S. D., entregó la carta al Ministro por considerar deshonrosa para éste la proposición, de lo que se deduce que la entrega no fué hecha en cumplimiento del mandato criminal que le confirió C., sino para llevar á conocimiento del ofendido la corrupción intentada.

1029. La pena á imponerse en el caso de que acabo de dar cuenta ofrecía también dificultades, mientras regía el código Tejedor. En aquél dije: “que siendo las penas del corruptor, según el artículo 393 del Código Penal las determinadas en el artículo 390 para el empleado corrompido, no era aplicable la de pérdida de empleo, por no tenerlo el procesado, y aunque lo tuviera, no haber obrado en su ejercicio; y tampoco la de multa del triple de la dádiva ó promesa, por ser esta una cantidad indeterminada sujeta á las eventualidades de una ganancia, en cuyo caso, según Chauveau y Hélie, cuando la cosa prometida no tiene valor apreciable, el juez debe abstener-



se de una estimación arbitraria y aplicar el *minimum* de la pena pecuniaria, que no está determinado por nuestra ley penal; y que en consecuencia la única pena aplicable era la de inhabilitación absoluta, etc." Esta dificultad para la aplicación de la pena pecuniaria subsiste aún en el artículo 253 del Código.

1030. La ley atenúa el delito del corruptor cuando el soborno tenga lugar en causa criminal en favor del reo y sea hecho por el cónyuge de éste, su ascendiente, descendiente, hermano ó afín en los mismos grados. En estos casos la pena sólo será de multa igual al valor de la dádiva ó promesa. La excepción se justifica por el móvil que impulsa al delincuente. No puede equipararse el que cohecha por espíritu de lucro al que lo hace movido á la vez por el dolor y por delicados sentimientos de afección.

1031. El artículo 254 dispone que en todos los casos de cohecho, las dádivas caerán en comiso. Son las dádivas y no las promesas lo que queda confiscado, aunque parece que la mismarazón mediará para las unas que para las otras. Lo mismo dice el artículo 180 del código francés: en ningún caso se devolverán al corruptor las cosas dadas por él. Chauveau y Hélie deciden que caen en comiso las cosas *depositadas* como precio del cohecho, pues el corruptor ya se habría desapoderado de ellas. "Se ha decidido, agregan, que el artículo 180 no exige para que proceda la confiscación que la suma haya sido entregada al agente corrompido, y que si ha sido entregada por el corruptor al cómplice caen bajo la aplicación del artículo" (1).

(1) *Théorie du code pénal*, número 856.

CAPÍTULO VII

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS

(Artículos 255, 256 y 257)



1032. Elementos constitutivos del delito de infidelidad en la custodia de presos. — 1033. Cuándo queda consumado el delito. — 1034. La ley no prevé el caso de la evasión por imprudencia en la custodia. — 1035. Penalidad del delito. — 1036. Delito cometido por particular encargado de la custodia.

1032. La simple evasión de un condenado ó preso no constituye delito alguno penado por nuestra ley, en lo que se refiere al prófugo; pero no así, en cuanto se refiera al encargado de la custodia. El artículo 255 impone pena al “empleado público culpable de connivencia en la evasión de algún preso cuya custodia ó conducción le hubiese sido confiada”. La ley castiga, pues, la connivencia, es decir, el acuerdo consciente y voluntario del empleado con el reo, *en la evasión* de algún preso ó detenido. De esto resulta ser necesario para la consumación del delito que la evasión se haya realmente producido,



para lo que bastará que el preso ó detenido haya recobrado la libertad, aunque sea momentáneamente. En resumen, este delito consta del elemento material de la fuga, y del moral, de la connivencia del empleado con el prófugo.

1033. He dicho que para que quede consumado el delito basta que el preso ó detenido haya recobrado su libertad, aunque sea momentáneamente. En este sentido se ha producido la jurisprudencia española. Se ha juzgado repetidas veces por el Tribunal Supremo que constituía delito de infidelidad el hecho de permitir que los reos salieran, no definitivamente, sino para ganar un jornal, para restablecerse de una enfermedad, etc.

1034. Siendo la connivencia un elemento esencial del delito, según el texto legal, parece que no puede verse en él la posibilidad de una imputación por negligencia. Si fuera solamente el hecho material lo que se castigara, procedería la imputación de delito si la presunción ordinaria de voluntad criminal no desaparecía ante una presunción contraria derivada de las circunstancias particulares de la causa, y la imputación de culpa si había mediado imprudencia en el cuidado del preso. Ahora bien, puede haber imprudencia en la custodia ; pero no puede haber imprudencia en la connivencia. El caso se presentó también en la jurisprudencia española. La Sala de Justicia de la audiencia de Mallorca, en un caso en que el comandante del presidio había permitido que los penados permanecieran hasta la noche fuera del establecimiento, del que se fugaron sin estar en connivencia con ellos, calificó el hecho de infidelidad en la custodia de presos, cometido por simple negligencia con infrac-

ción de la ley y reglamentos. Interpuesto el recurso de casación, alegándose por el recurrente que los hechos que se calificaban como probados no constituían delito por no estar probada la connivencia, según resulta de los fundamentos de la sentencia, el Tribunal Supremo confirmó la calificación (1). Pero no hay en la solución argumento alguno que satisfaga la cuestión propuesta. El código penal francés ha sido más previsor, al distinguir los casos en que la fuga tenga lugar por connivencia de los en que se produzca por imprudencia. Por más que en nuestro Código las reglas de la imputabilidad por imprudencia sean generales, no me parece posible su aplicación á casos en que entra como elemento esencial del delito, un fin intencional determinado. El empleado imprudente en la custodia de presos habrá cometido una falta prevista quizás en reglamentos especiales, pero no un delito por imprudencia.

1035. El criterio de gravedad del delito de infidelidad, adoptado para la determinación de la pena consiste en relacionarla á la pena del prófugo según que ya se le hubiera impuesto por sentencia ejecutoriada ó que se hallase procesado. El artículo 255 impone la pena de penitenciaría por tres á seis años, si el reo prófugo estuviese condenado por sentencia ejecutoriada á la pena de muerte ó á la de presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado ; la de prisión de uno á tres años si el prófugo fuese reo de delito que merezca alguna de las penas expresadas y no hubiese sentencia ejecutoriada ; con pena de prisión de uno á tres años si el prófugo

(1) VIADA, *Código penal de 1870*, página 411.

estuviese condenado por sentencia ejecutoriada á presidio ó penitenciaria por tiempo determinado ; la de prisión por uno á dos años si el prófugo fuese reo de delito que merezca alguna de las últimas penas, y no estuviese condenado por sentencia ejecutoriada ; y la de arresto de un mes hasta nueve si el prófugo fuese reo de delito menor de los expresados, esté ó no condenado. El artículo 256 declara que siendo varios los reos á que se dé soltura se impondrá el máximum de la pena.

1036. Corresponde el minimum de las expresadas penas al particular que hallándose encargado de la custodia ó conducción de algún preso ó detenido le dé soltura ó favorezca su fuga. La disposición se refiere al caso en que ocurra accidentalmente que la autoridad confie á un particular la custodia ó conducción de un preso. La misma disposición se contiene en el código español.



CAPÍTULO VIII

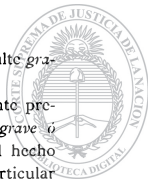
INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

(Artículos 258 á 261)



1037. Sustracción, ocultación, destrucción ó inutilización de documentos por un empleado público.—1038. No hay imputabilidad si no hay daño de la cosa pública ó de tercero.—1039. Delito del escribano que sustrae documento originario de un archivo ó protocolo.—1040. Crítica á la penalidad de este delito.—1041. Quebrantamiento de sellos.—1042. Debíó penarse el delito del que abre papeles ó documentos cerrados.—1043. Otras personas responsables por infidelidad en la custodia de documentos.

1037. Comete delito de infidelidad en la custodia de documentos, el empleado público que sustrae, oculta, destruye ó inutiliza documentos confiados á su custodia. La pena que impone para este caso el artículo 258, es la de prisión por uno á tres años, inhabilitación por doble tiempo y multa de cincuenta á quinientos pesos. La parte final del artículo agrega : si del hecho no resulta grave daño á tercero ó á la cosa pública, la pena será de arresto de tres á doce meses y multa de veinte á doscientos pesos. Luego, la pena determinada en la pri-



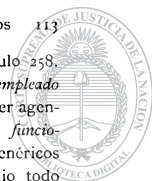
mera parte no debe imponerse sino cuando resulte *grave daño* para tercero ó para la cosa pública.

1038. En el artículo citado aparecen claramente previstos el caso de *daño grave* y el de *daño menos grave ó leve*. Pero, ¿existirá también el delito cuando el hecho no produce daño para la cosa pública ni para particular alguno? El artículo 375 del código penal español, castiga el mismo delito con pena de prisión mayor y multa de 250 á 2500 pesetas “siempre que del hecho resultare *grave daño* de tercero ó de la causa pública”, y con prisión correccional en sus grados mínimo y medio “cuando *no fuere grave el daño* de tercero ó de la causa pública”. Con este texto, que aparece perfectamente análogo al de nuestra ley, se ha resuelto, en la jurisprudencia española, negativamente la cuestión propuesta. “Considerando, dice, una sentencia, que, como lo indica claramente el tenor literal del artículo 375 del código penal vigente, la diferente y respectiva sanción penal que se establece en los números 1º y 2º del mismo, no sólo supone la existencia de un daño de tercero ó de la causa pública, resultante del hecho de la sustracción, destrucción ú ocultación de documentos ó papeles confiados á un funcionario público por razón de su cargo, sino que se hace depender la penalidad aplicable en cada caso, de la mayor ó menor gravedad de ese mismo daño, *el cual, por consiguiente, constituye uno de los elementos esenciales* del delito previsto y penado en dicho artículo, etc.” (1). Creo esta jurisprudencia en completa con-

(1) VIADA, *El código penal reformado de 1870*. Suplemento primero, página 264; Suplemento segundo, página 255, y Suplemento tercero, página 272.

cordancia con la disposición de nuestro artículo 258.

1039. Nuestro artículo emplea los términos *empleado público* para designar la calidad del que puede ser agente del delito. El código español usa estos otros: *funcionario público*. Entiendo que estos términos son genéricos respecto de los primeros. En un sentido amplio todo empleado público puede considerarse funcionario público; pero no todo funcionario público puede llamarse un empleado. Se reconoce la calidad de funcionario público al escribano, pero no se le tiene por empleado. Es por esto que se justifica la especial prescripción contenida en el artículo 260: "el escribano que sustrae algún documento originario de sus archivos ó protocolos, ó consiente en esa sustracción, será castigado con penitenciaría de tres á seis años é inhabilitación perpetua". Especializando una prescripción respecto del escribano, y no considerándose á éste como empleado público, en ningún caso le será aplicable la disposición del artículo 258. Quedan así sustraídas á la calificación de que se trata, la destrucción, ocultación ó inutilización de los documentos confiados á su custodia; y lo quedan asimismo todos los documentos que no sean *originarios de sus archivos*. Según las circunstancias con que estos hechos se produzcan, podrán constituir delito penado bajo otra calificación, pero es lo cierto que no ha habido motivo ninguno para distinguir. Hubiera sido preferible limitarse á decir, como el código español, el *funcionario público*, y si se quería por alguna razón especial agravar la pena para el caso en que el delito fuera cometido por un escribano, pudo consignarse la agravación excepcional.





1040. La pena impuesta al delito del escribano puede ser justa en algunos casos, pero en otros aparecerá tan desproporcionada que será manifiestamente injusta. El criterio de la magnitud del daño causado, tan oportunamente adoptado en el artículo 258, no se ha tenido en cuenta en el 260; y era, sin embargo, el mejor para proporcionar la pena. No podría ser la misma la delincuencia del escribano que consiente en la sustracción de un testamento por el mismo testador, que la del que consiente que otro lo sustraiga, ó más aún, que se sustraiga después de la muerte del testador. Para el primer caso bastaría quizás la pena de inhabilitación temporal ó perpetua, pero nunca los tres años de penitenciaría.

1041. El artículo 259 prevé un delito cuyo elemento material difiere esencialmente de los otros de infidelidad de que acabo de ocuparme: es el del empleado público que teniendo á su cargo la custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad, viola los sellos ó consiente en su violación. Para la existencia de los delitos anteriormente expuestos, se requería la destrucción ó sustracción; en éste, el documento ó el efecto sellado no se pierde. El delito consiste simplemente en violar el sello ó consentir en su violación. Más que el daño real ó efectivo, lo que se reprime es un abuso de confianza ó una falta á los deberes del empleo. El Código no lo prevé sino para el caso en que sea cometido por un empleado público, y aún por disposición del artículo 261, para el caso en que lo cometa un particular que estuviera accidentalmente encargado de la custodia de los efectos ó documentos sellados: no para el caso de otro particular

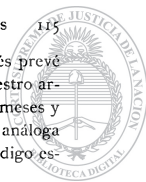
que tuviera interés en violarlos. El código francés prevé el delito en todos los casos (1). La pena que nuestro artículo impone es la de arresto de tres á doce meses y multa de cincuenta á quinientos pesos. Es más análoga al delito la de inhabilitación que impone el código español (2).

1042. El mismo delito que se comete con la violación de sellos, puede cometerse abriendo ó consintiendo en que se abra, sin la autorización competente, papeles ó documentos cerrados cuya custodia estuviese confiada al empleado. La naturaleza del hecho es idéntica á la del quebrantamiento de sellos, y no hay motivo para que en un caso proceda penalidad y en el otro no. En el código español de 1850, en el de 1870, en el proyecto Tejedor y en el de la Comisión revisora, se consignan disposiciones en el sentido referido. Si no figuran en el Código, es porque se ha tenido para ello alguna razón, que no percibo, por lo que creo que el caso debió pensarse.

1043. Las disposiciones por infidelidad en la custodia de documentos, son aplicables á los empleados subalternos de las respectivas oficinas y á los *particulares encargados accidentalmente de la custodia* de archivos, registro civil, documentos, etcétera. Esta *etcétera* está en la ley, aunque no es conveniente su empleo en el lenguaje legal. Con más propiedad, el código español dice: “las penas designadas en los artículos anteriores, son aplicables también á los eclesiásticos y á los particulares en-

(1) Artículos 249 á 252.

(2) Artículo 376.



cargados accidentalmente del despacho ó custodia de documentos ó papeles, por comisión del Gobierno, ó de funcionarios á quienes hubiesen sido confiados aquellos por razón de su cargo”.



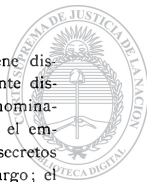
CAPÍTULO IX

REVELACIÓN DE SECRETOS

(Artículos 262 á 265)



1044. Disposiciones contenidas en el capítulo *Revelación de secretos* del Código Penal. — 1045. Criterios adoptados por la ley para la penalidad de la revelación de secretos de la administración. — 1046. Caso de la concurrencia de grave daño y de la revelación por dinero. — 1047. No debió adoptarse como criterio de gravedad de este delito la circunstancia de mediar dinero. — 1048. Revelación de secretos de un particular. — 1049. Secreto profesional. Disposiciones legales referentes á él. — 1050. Quienes están comprendidos en la disposición del artículo 265. — 1051. Están comprendidos los sacerdotes. — 1052. Discusión y solución sobre el caso de los escribanos. — 1053. La ley sólo hace referencia al secreto que se *haya confiado*, no al de que se haya tenido conocimiento en el ejercicio de la profesión. Soluciones contrarias de la doctrina y de la legislación. — 1054. No es elemento del delito la intención determinada de dañar. Doctrina y jurisprudencia general. — 1055. Últimas decisiones de la jurisprudencia francesa. — 1056. Discusión de esta cuestión conforme á nuestros textos. — 1057. Derecho del poseedor del secreto á rehusarse á revelarlo á la justicia. — 1058. La revelación á la justicia no excluye la responsabilidad penal. — 1059. Tampoco la excluye el consentimiento del interesado en el secreto. — 1060. Violación de correspondencia. — 1061. La disposición del Código Penal no rige respecto de los empleados de correos y capitanía de puerto. Legislación especial.



1044. El capítulo *Revelación de secretos* contiene disposiciones que se refieren á hechos esencialmente distintos entre sí y que no caben bajo una sola denominación. El artículo 262 prevé el delito que comete el empleado que en asuntos de servicio público revela secretos de que tenga conocimiento por razón de su cargo; el 264, el del empleado que revela secretos de un particular, de que tenga conocimiento por razón de su oficio; en el 265 ya no se trata de delito cometido por empleado público, sino de la violación del secreto profesional, y por último, en el 263 no se trata ya de revelación de secretos, sino de violación de correspondencia ó de documentos. En los primeros casos es esencial que haya un secreto, y que sea un empleado el que lo revele; en seguida, es también necesario que haya un secreto revelado, pero que no sea por razón del empleo sino por título profesional que se haya conocido; y en el último no es esencial que haya secreto. Estando colocados todos estos hechos bajo la misma calificación, los expondré en el orden en que acabo de colocarlos.

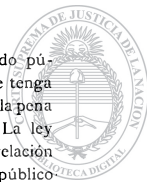
1045. El artículo 262 se refiere al empleado público que causa daño á la administración revelando un secreto de que tenga conocimiento por razón de su cargo. Se diferencia del artículo 264 en que en éste se trata de la revelación de secretos que interesan á un particular y no á la causa pública. La necesidad de que la revelación produzca un daño moral ó material parece ser condición de este delito, pues la penalidad se determina según la existencia de grave daño, ó que la revelación se haya hecho por dinero, ó que no concurra ninguna de estas circunstancias, valiendo en consecuencia las considera-



ciones hechas respecto del artículo 258. Con arreglo á este criterio, se impone la pena de prisión por uno á tres años, destitución é inhabilitación por doble tiempo. Esta inhabilitación es absoluta, puesto que la especial no podría concurrir con la destitución. Se impone la misma pena cuando la revelación se haya hecho por dinero, *no concurriendo la circunstancia anterior*; y simple destitución del empleo si no concurre ninguna de las dos circunstancias expresadas.

1046. ¿Qué sucederá cuando la revelación se hiciese por dinero y causare grave daño á la causa pública? El artículo prevé el caso de una circunstancia ó de la otra; pero no prevé el caso de su concurrencia. El proyecto de la Comisión de códigos de la Cámara de Diputados no contenía en el inciso 2º del artículo de que se trata la salvedad que se ha agregado después. Resultaba entonces, y esto quizás determinó la modificación, que la circunstancia de haber mediado dinero no alteraba la pena cuando concurría con la de grave daño; pero, por lo mismo, el caso de la concurrencia de ambas circunstancias no quedaba excluido.

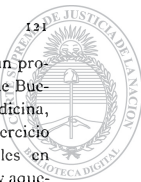
1047. La previsión del caso en que medie dinero no es en manera alguna útil en la disposición. Si la ley hubiera guardado silencio al respecto, el caso del dinero se hubiera juzgado conforme á otra calificación á que indudablemente se ajusta: la de cohecho, y se procedería conforme á las reglas generales sobre la concurrencia de delitos. La concurrencia del soborno en la revelación de secretos no la encuentro especialmente enunciada en las leyes concordantes, con excepción del código español de 1822, pero quedó excluida por las reformas posteriores.



1048. El artículo 264 prevé el delito del empleado público que revele secretos de un particular, de que tenga conocimiento por razón de su oficio, y le impone la pena de destitución y arresto por uno ó tres meses. La ley dice con suficiente claridad que se trata de la revelación de los secretos de particulares que el empleado público haya conocido por su calidad de tal. Falta quizás la distinción que antes se hizo, referente á la magnitud del daño causado. Cuando éste fuese de mucha consideración la pena de uno á tres meses de arresto no aparecerá suficiente.

1049. El artículo 265 legisla sobre el secreto profesional: “los que, ejerciendo profesión que requiera título, revelasen secretos que por razón de ella se les hubiese confiado, sufrirán la pena de suspensión por seis meses á un año y multa de veinticinco á trescientos pesos”. No es esta la única disposición que se refiere á tan importante materia. Ya en el artículo 44, inciso 2°, se vió que estaban exentos de pena por ocultación los sacerdotes, médicos y abogados, cuando el secreto les había sido confiado en el ejercicio de sus funciones, y en el artículo 247 se ha visto calificado de prevaricato el delito del abogado ó procurador que revelara los secretos que el defendido ó poderdante les hubiese confiado para su defensa. Respecto á la primera de estas dos disposiciones, puede verse las observaciones que hice en su respectivo lugar; en cuanto á la segunda, como disposición especial, debe aplicarse al caso de delito cometido por abogado ó procurador con exclusión de la regla general.

Además de las disposiciones del Código Penal, leyes especiales referentes al ejercicio de la medicina prescri-



ben la observancia del secreto profesional: ningún profesor, dice el artículo 7 de la ley de la Provincia de Buenos Aires, reglamentando el ejercicio de la medicina, podrá revelar secretos que se le confien en el ejercicio de su profesión, exceptuándose los casos especiales en que pueda resultar peligro para la salud pública, y aquellos en que deba hacerlo por las leyes penales.

1050. Conviene examinar en primer término quienes son los que pueden ser autores del delito de que se trata, pues sólo mediante una calidad personal en el agente procederá la imputación. El artículo 265 usa los términos: los que *ejerciendo profesión que requiera título*. En el código francés y en el belga se emplea una fórmula de enumeración completada por una general: los médicos, cirujanos, oficiales de sanidad, farmacéuticos, parteras, y *todas* las demás personas depositarias *por su estado ó profesión* de los secretos que se les confien, etc. Con arreglo á estos términos se reconoce en la jurisprudencia francesa, como en Bélgica, estar prohibida la revelación por los ministros del culto de los secretos que se les comunicaran en la confesión; estar comprendidos en los mismos términos los abogados y los procuradores (*avoués*); y controviértese respecto de los notarios, á los que la jurisprudencia belga reconoce como comprendidos en la disposición (1).

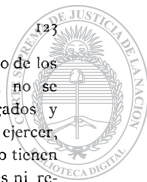
1051. Por nuestro artículo es indudable que la disposición se aplica á médicos, cirujanos, farmacéuticos y parteras; que no se aplica á los abogados y procurado-

(1) Véase CHAUVEAU y HÉLIE, *Théorie du code pénal*, capítulo LXVII, y NYPELS, *Code pénal belge interprété*, tomo 2º, páginas 664 y siguientes.



res, por constituir el caso de éstos el delito de prevaricato. Pero, ¿hay una conclusión igualmente indudable respecto de los sacerdotes? Propiamente, la profesión del ministro de un culto no requiere *título* entendiendo por tal la autorización facultativa del Estado para el ejercicio de una profesión. Pero respecto de la Iglesia católica, la relación de dependencia en que ésta se encuentra con respecto al Estado facilita la resolución en sentido afirmativo de la responsabilidad del sacerdote. Colocada también en Francia la Iglesia con relación al Estado en la misma condición de protegida que tiene en nuestro país, la Corte de Casación declaró, al serle sometida la cuestión relativa al secreto del sacerdote, “que la religión católica está colocada bajo la protección del gobierno, y lo que se refiere á su ejercicio debe ser respetado y mantenido; que la confesión se refiere esencialmente á los ritos de la religión, que dejaría de ser practicada desde que su inviolabilidad dejara de estar respetada; que los magistrados deben, pues, respetar y *hacer respetar* el secreto de la confesión, y que un sacerdote no puede ser obligado á declarar ni aún ser interrogado sobre revelaciones que haya recibido en aquel acto de religión” (1). Esta solución se refiere directamente á la exención de responsabilidad del sacerdote por encubrimiento, lo que está expresamente declarado en nuestra ley; pero, á ese derecho de callar, por parte del sacerdote, me parece manifiesto que debe corresponder el derecho que imponga silencio al mismo en interés del que le haya confiado sus secretos.

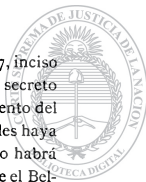
(1) *Théorie du code pénal*, número 1867.



1052. ¿Procederá la misma conclusión respecto de los notarios? Los notarios, dicen Chauveau y Hélie, no se encuentran en la misma situación que los abogados y los procuradores; su profesión no los llama á ejercer, como éstos, el derecho sagrado de la defensa: no tienen que recoger para dirigir esta defensa confesiones ni revelaciones; no son ni aún depositarios de los secretos de las partes, pues su misión se limita rigurosamente á recibir las convenciones y á traducirlas fielmente en actos" (1). "No parecería posible dudar, dice Carrara, que en cuanto á la obligación del secreto los notarios debieran ser equiparados á los otros que ejercen profesiones confidenciales. Sin embargo, en presencia del código francés la Casación ha fluctuado en este punto en dos resoluciones de 28 de Julio de 1830 y 10 de Junio de 1853. Pero Blanche en el *quinto estudio* se pronuncia de un modo absoluto por la afirmativa" (2). Entre nosotros, pienso que la cuestión debe decidirse según la naturaleza especial del acto que haya revelado el escribano. Si se trata de un acto público registrado en su protocolo, la necesidad de que el acto tenga lugar en presencia de testigos, excluye toda idea de reserva. El escribano deberá limitarse á no ser indiscreto para no perjudicar los intereses de su clientela. Pero si al aconsejarse del mismo para el otorgamiento de acto público se le revelara un secreto relativo al estado de familia ó cualquier otro, y se le confiara en tal calidad, creo que sería indudable la imposición de pena por transgresión á la reserva.

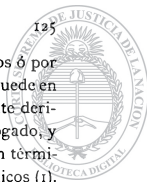
(1) Ibidem, número 1870.

(2) *Programma*, § 1644, n.º ta 2.



1053. Tanto el artículo que comento como el 247, inciso 1º, como el 44, inciso 2º, sólo hacen referencia al secreto *que se hubiere confiado*. ¿Y si han tenido conocimiento del secreto en el ejercicio de la profesión, sin que se les haya hecho confidencia alguna? Según el texto legal no habrá responsabilidad. El código Francés lo mismo que el Belga, se refieren también al caso en que se haya hecho confidencia del secreto. Pero un sentimiento de dignidad profesional aconseja la extensión de la disposición. Refiriéndose al secreto médico dice el eminente profesor de medicina legal de la Facultad de París: “En derecho estricto, ateniéndose á la letra del artículo 378 del código penal, la jurisprudencia ha limitado esta obligación ó este derecho de silencio, al secreto confiado, á las confidencias hechas bajo el sello de la reserva. Debemos reconocer que desde hace algunos años la interpretación jurídica parece más extensa y tiende á aproximarse á la interpretación médica. Para nosotros, el secreto es no solamente lo que se nos ha confiado, sino lo que hemos visto, oído, comprendido con ocasión de nuestras funciones médicas. El secreto de nuestro cliente es de tal manera el nuestro para nosotros los médicos, que aquél ignora frecuentemente su existencia ó su extensión, y no puede libertarnos de él puesto que ignora de qué es que nos desliga” (1). Análoga conclusión se ha indicado por la doctrina respecto de los abogados. “Aún respecto de los abogados, observa Amerpoel, que les corresponde la no revelación, no sólo de los secretos manifestados por los clientes, sino también de aquellos que durante la defen-

(1) BROUARDEL, *Le secret médical*, página 240.

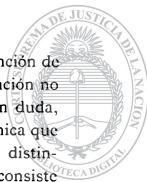


sa hayan recogido por confidencias de terceros ó por investigaciones propias. Esta proposición no puede en abstracto ser impugnada, puesto que lógicamente deriva de la obligación que su posición impone al abogado, y es, además, sugerida por la analogía con lo que en términos semejantes se enseña respecto de los médicos (1). Estos deben ser los verdaderos principios que rijan la materia, porque son los más sanos y los más honestos; pero con los actuales términos de la ley no es posible que la jurisprudencia avance en ese sentido. A aquella conclusión se ha llegado ya en el código italiano: "cualquiera que, *teniendo noticia* por razón de su estado ú oficio, ó de la *propia profesión ó arte*, de un secreto que revelado pueda causar daño, etc." (2).

1054. Una cuestión importante que se discute en esta materia es la de determinar si para la imputabilidad del delito es necesario que concurra una determinada resolución de dañar ó si el delito se encontrará perfecto desde el momento en que se haya cometido la revelación voluntariamente y sin consideración á la gravedad del propósito. En la jurisprudencia francesa se había resuelto que estando el artículo 378 colocado bajo el título de las calumnias, injurias y revelaciones de secretos, su objeto era el de castigar las revelaciones indiscretas inspiradas por la perversidad y el propósito de difamar y dañar. Chauveau y Hélie consideran esta interpretación como la única conforme con las reglas generales de la ley penal. La voluntad, considerada como elemento de

(1) CARRARA, *Programma*, § 1644, nota 1.

(2) Artículo 163.



un delito, decían, encierra esencialmente la intención de dañar; si se hace la abstracción de esta intención no queda más que un hecho material, perjudicial sin duda, pero despojado de la criminalidad que es la única que lo hace punible (1). Rauter había combatido la distinción de la jurisprudencia: “el delito, decía, consiste en la violación del depósito de confianza hecho á las personas de que se trata. La intención criminal existe, pues, por el simple hecho de que el depositario viole voluntariamente este depósito y se coloque así por encima de la ley; no es, pues, necesario que haya querido perjudicar á la persona cuya confianza ha herido; basta que quiera perjudicar el depósito que ha recibido (2). Blanche opinaba que el delito existía con el hecho de la revelación, aunque no hubiera intención alguna de dañar. En Italia, la jurisprudencia se había pronunciado conforme á la opinión sostenida por Puccioni en el mismo sentido de la jurisprudencia francesa, esto es, considerando como elemento esencial la voluntad de dañar; pero en sentido contrario se pronunció decididamente Carrara: “Lo que es importante notar en este delito es que no tiene necesidad del extremo del dolo, ó mejor dicho se informa por un dolo *sui generis* que consiste únicamente en el ánimo de hablar aunque no concurra el ánimo de dañar”, y más adelante agrega: para mí el dolo en este caso consiste en el ánimo de hablar y en la previsión de la posibilidad del daño aunque no concurra intención de dañar” (3).

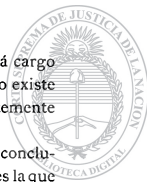
(1) *Théorie du code pénal*, número 1872.

(2) *Traité du droit criminel*, tomo 2º, página 104.

(3) *Programma*, §§ 1642 y 1644.



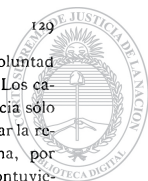
1055. La Corte de Casación de Francia se ha pronunciado por último en el sentido de las opiniones de Rauter, de Blanche y de Carrara. El 13 de Diciembre de 1884 el doctor Watelet, defendiéndose de algunas imputaciones que consideraba ofensivas, hechas con referencia al ejercicio de su profesión en un caso que había asistido, publicó en el diario *Le Matin*, de Paris, una carta en que exponía diversos accidentes de la enfermedad que por su carácter debían ser reservados. Nada más ajeno á la intención del médico citado que causar un daño á la reputación de su cliente. El había sido provocado é impulsado por la necesidad de justificarse, había hablado. Más que los caracteres de un delito, el caso presentaba los de la legítima defensa. El acusado conforme á lo establecido por la jurisprudencia, se excepcionó con su falta de intención de dañar que por otra parte resultaba indudable en su caso. El abogado general de la Corte de Paris M. Hemar, contestó que en el caso en cuestión el doctor Watelet había hecho la relación que se le imputaba no con la intención de dañar, pero con un fin de interés personal, la defensa propia, si se quiere, y para contestar á ciertos reproches de impericia que se le habían dirigido. “No importa, agregaba, ha hecho la revelación voluntariamente, es decir, libremente; este es el primer elemento de la incriminación penal. La ha hecho con conocimiento. Ha tenido la conciencia del acto tal como está determinado por la ley, ha sabido que revelaba un hecho confidencial por su naturaleza y del cual no tenía conocimiento sino por el ejercicio de su profesión”. La Corte resolvió que la disposición del artículo 368 es general y absoluta, que castiga toda revelación de secre-



to profesional, sin que sea necesario establecer á cargo del revelador la intención de dañar y que el delito existe desde que se ha hecho la revelación independientemente de toda intención maligna (1).

1056. Queda ahora por examinar cuál de estas conclusiones expuestas en los dos números anteriores es la que procede de conformidad con nuestros textos legales. Desde luego lo que distingue en nuestra ley esencialmente el delito perfecto del cometido por culpa ó imprudencia, es la existencia ó inexistencia de la voluntad intencionada á producir un daño determinado. El delito y la culpa concuerdan en este punto : en que media la voluntad en el *antecedente*; y difieren en que en el delito media también la voluntad en la *consecuencia*; y en la culpa la consecuencia debe ser *previsible*, pero [no deseada]. Pero estos caracteres son demasiado generales y poco precisos para que expresen la verdad en sus justos límites, lo que depende especialmente de las dificultades para fijar las condiciones exactas de la culpa ó imprudencia, según lo expuse en el capítulo respectivo. Habría aún que distinguir entre la consecuencia *previsible* y la consecuencia *necesaria*. En la culpa, la *causa* puede ó no producir un *efecto* perjudicial, y la imputabilidad nace de no haber previsto el efecto, pudiendo preverlo. En el delito de que se trata, la enunciación pública del secreto no tiene por consecuencia la revelación, que es el elemento esencial del delito, sino que es la revelación misma. El que viola voluntariamente un secreto no puede escudarse en su falta de intención de causar daño,

(1) Véase BROUARDEL, *Le secret médical*, capítulo 1º.

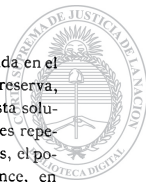


porque siendo la revelación un delito, la libre voluntad de cometerlo es siempre una voluntad criminal. Los caracteres de la revelación por culpa ó imprudencia sólo podrían verse en un acto del que pudiera resultar la revelación, pero que no fuera la revelación misma, por ejemplo, si siendo depositario de papeles que contuvieran el secreto, no se les guardara con la reserva que la prudencia aconsejara.

1057. Consecuencia de que la revelación del secreto profesional constituye un delito, es el derecho del poseedor del secreto cuando es interpelado por la justicia. Le bastará en todos los casos enunciar la calidad con que haya tomado el interpelado conocimiento de los hechos sobre los cuales se le interroga. Esta solución, admitida con toda generalidad por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, sólo ha sido excepcionalmente combatida.

1058. Consecuencia de no requerirse para la perfección del delito la intención especialmente determinada á causar un daño cierto, es que procederá la imputabilidad del delito cuando el poseedor del secreto, citado ante la justicia á declarar como testigo, lo revelara. Chauveau y Hélie opinan lo contrario apoyándose en la jurisprudencia de la Corte de Casación; “pero esta jurisprudencia, dice una nota de E. Villey, ha sido posteriormente modificada por varias sentencias hasta 1870. Se lee en una de 11 de Mayo de 1844, que el abogado está siempre obligado á guardar un secreto inviolable, sobre todo lo que sabe á ese título; que esta obligación absoluta es de orden público y que nadie podría exonerarlo de ella (1)”.

(1) *Théorie du code pénal*, anotada por E. VILLEY, número 1887, nota 2.



1059. La cuestión de saber si la parte interesada en el secreto puede exonerar al que lo guarda de la reserva, se resuelve con generalidad por la negativa. Esta solución tiene un fundamento indudable muchas veces repetido: en razón de sus conocimientos profesionales, el poseedor del secreto conoce su verdadero alcance, en tanto que la persona á quien interesa lo ignora. Sobre esto hay también decisiones de la jurisprudencia francesa (1).

1060. El artículo 263, no se refiere, como ya lo he hecho notar, á la revelación de secretos; prevé el delito del empleado público que, abusando de su cargo, *intercepte, sustraiga, inspeccione, oculte ó publique* cartas ó documentos particulares, y le impone las penas del artículo 262, esto es, la de tres años de prisión, destitución é inhabilitación absoluta por seis años, si del hecho resultare grave daño á la causa pública ó se hubiera cometido por dinero “no concurriendo esta circunstancia”, y con la simple destitución si no concurren estas circunstancias. La última parte del artículo agrega: “si el abuso recae en documentos públicos, mediando dinero ó grave daño, se aplicará el *máximo* de las penas”.

No me parece necesario recurrir al criterio de que la sustracción de una carta *particular* produzca grave daño á la *causa pública* para aplicar una pena severa al empleado que con abuso de su cargo viola la correspondencia. La inviolabilidad de la correspondencia debe encontrarse mejor garantida cuando ésta se encuentra en manos de un funcionario público que cuando lo está en las

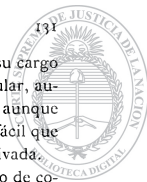
(1) DALLOZ, *Repertoire*, v^o Temoin, número 49.

de un particular, y el solo hecho de abusar de su cargo ofendiendo gravemente el derecho de un particular, autorizaría una pena superior á la de destitución, aunque no hubiera daño de la causa pública, que no es fácil que lo haya en la violación de la correspondencia privada.

1061. Conviene advertir que estando el servicio de correos á cargo exclusivo de la administración nacional y bajo su jurisdicción, no se aplicará á los empleados de correos la disposición del Código Penal, sino las de la ley de 1863, según la cual “ todo empleado de la administración de Correos ó Capitanía del Puerto que detenga, oculte, destruya ó abra una carta dirigida á la administración para ser entregada ó conducida, perderá su empleo, será destinado á trabajos forzados por dos ó seis meses ó pagará una multa de cien á trescientos pesos, ó sufrirá una y otra pena (1) ”; “ si la carta detenida ó abierta contuviese billetes de banco, ó letras de cambio ó de crédito, ó cualquier otro documento para recibir ó pagar dinero, el empleado que resulte delincuente quedará inhabilitado para obtener cargos públicos y sufrirá la pena de trabajos forzados por cinco años (2) ”.

(1) Artículo 52.

(2) Artículo 53. — Véase número 12 y la nota al 309.





CAPÍTULO X

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

(Artículos 266 á 271)



1062. Analogía del delito de malversación con el de defraudación por violación de depósito. — 1063. Aplicación de caudales públicos á objetos distintos de los señalados por la ley. — 1064. Diferencia entre nuestra disposición y su análoga en el código español. — 1065. Uso de caudales por empleado público para sí ó para otros. — 1066. Discusión sobre la incriminación del uso de caudales. — 1067. Penalidad de este delito. — 1068. Sustracción de caudales públicos. — 1069. Crítica al artículo 268. — 1070. A qué otras personas se aplican las disposiciones del capítulo. — 1071. Caso de depósito hecho por particular en manos de empleado público. — 1072. Demora injustificada en un pago ordinario ó decretado por autoridad competente. — 1073. Negativa á entregar una cantidad ó efecto depositado.

1062. Al exponer el inciso 6º del artículo 203 me he detenido á estudiar las condiciones en que se consuma el delito de los que se apropian ó distraen dinero, efectos ó cualquier otra cosa mueble que se les hubiese da-



do en depósito, comisión, administración ú otro título que produzca obligación de entregar ó devolver. Los delitos de que se tratará en este capítulo tienen perfecta analogía con aquéllos, y podrán sujetarse, en general, á los mismos principios que rigen la interpretación de los primeros. La distinción fundamental entre unos y otros es la calidad de empleado que revista el agente del delito. La circunstancia de ser públicos los bienes sobre los cuales recaiga la acción no es esencial, aunque entre en la denominación del delito, malversación de caudales públicos, pues, como se verá más adelante, el acto puede recaer en bienes de particulares.

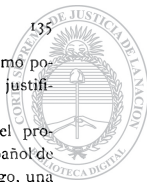
1063. La primera forma de cometerse este delito es, según el artículo 266, cuando el empleado público, teniendo á su cargo caudales ó efectos públicos, les dá una aplicación pública distinta de la señalada por las leyes, en cuyo caso se impone la pena de suspensión de seis meses á un año, y además, multa de diez á cincuenta por ciento sobre la cantidad mal aplicada si resultase daño ó entorpecimiento del servicio público.

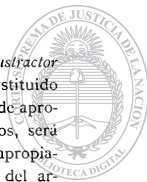
Este delito no presenta caracteres de verdadera inmoralidad desde que el empleado público comete una mera distracción de fondos de un objeto público á otro del mismo carácter. Pero ¿qué sería del orden económico de los bienes del Estado, si las disposiciones legislativas que determinan la aplicación de sus caudales carecieran de una sanción penal? El hecho tendrá más los caracteres de una mera falta que los de un delito; la voluntad criminal consistirá simplemente en la voluntad de violar la ley, ó en el convencimiento de que se viola con

la distinta aplicación de los fondos; el hecho mismo podrá no causar daño alguno, pero está también justificada su represión por la razón antedicha.

1064. El artículo 266, tomado textualmente del proyecto Tejedor, concuerda con el 320 del código español de 1850 y el 408 del reformado; pero hay, sin embargo, una distinción que aún no se ha hecho notar. En el código español no se dice que se dé á los caudales ó efectos públicos “una aplicación distinta *de la señalada por las leyes*”, sino “una aplicación diferente de aquella *á que estuvieran destinados*”. Estos términos comprenden una disposición mucho más extensa que los nuestros: son de mayor amplitud; cualquiera que sea la disposición superior que haya determinado el destino de los fondos, se cometerá el delito aplicándolos á distinto objeto. Entre nosotros será necesario que el fondo público tenga una aplicación determinada *por la ley*, y no habría delito si esa aplicación estuviera regida, por ejemplo, por una ordenanza ó resolución de consejo municipal. Pienso por este motivo, que sean preferibles los términos adoptados por el código español.

1065. El artículo 267 prevé el delito del empleado que hace uso para sí ó para otro de los caudales que custodia ó administra. El delito se comete con el mero hecho de *usar* de los caudales confiados á su custodia. La existencia ó inexistencia de daño para el servicio público, la calidad de la reintegración *espontánea ó nó*, son criterios que determinan la gravedad de la pena, pero que no hacen esencialmente al delito. Esto último está confirmado por la supresión de la última parte del artículo proyectado por el doctor Tejedor: “si el empleado no reintegra espon-





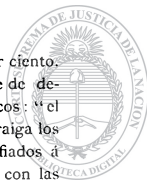
táneamente la cantidad será condenado como *sustractor* de caudales públicos", es decir, el delito será constituido por otros elementos. La sustracción con ánimo de apropiarse de los valores administrados ó custodiados, será el caso del artículo 268; el uso, sin ánimo de apropiación, ó con ánimo de reintegración, es el caso del artículo 267. Pero es de la espontaneidad ó no espontaneidad en la reintegración de lo que se trata, no de la reintegración misma, que será siempre necesaria, pues si esta no se operara, el elemento material del delito habría excedido quizás á la intención del agente, lo que según las disposiciones generales, constituiría una mera atenuación del hecho realmente cometido, cuya penalidad sería la aplicable.

1066. La incriminación del uso de un caudal que se custodia ó administra, no es admitida sin discusión en la ciencia, cuando ni la reintegración se demora ni resulta daño ó entorpecimiento para el servicio público, partiendo para tal conclusión de una razón jurídica: la de que la constitución de la custodia coloque el caudal á riesgo y peligro del administrador. "Algunos códigos modernos, dice Carrara, han declarado reo de peculado, y como tal, punible, aún al funcionario público que se apropie del dinero tenido por él á su exclusivo riesgo. Pero esta severa opinión no responde ni á los principios *jurídicos*, ni á los principios *morales*. No á los principios jurídicos, porque el funcionario deudor de *cantidad*, se hace *propietario* de las cosas que recibe: la naturaleza del contrato le dá facultad para disponer de ellas, de modo que el delito no se consuma cuando usa de la cosa ó del dinero que es suyo con todo rigor de términos,

sino cuando, con ocasión de la rendición de cuentas, no pague exactamente su deuda á la administración pública. No á los principios morales, porque desde que el funcionario no incurre en dolo cuando usa del dinero que tiene como suyo y á su propio riesgo, puede también no estar en dolo cuando deja de satisfacer su deuda en el día de la reclamación, porque circunstancias fortuitas le hayan impedido disponer de los medios que razonablemente había calculado como suficientes para ponerlo en estado de rendir cuentas" (1). No obstante esta autorizada opinión, y aun creyendo que no haya motivo para una incriminación por el uso de un depósito de cosas fungibles, en las condiciones del caso propuesto por Carrara, creo que sería necesaria una distinción que deriva de lo que he expuesto sobre la apropiación, de un depósito entre particulares: podría bastar la acción civil, en ausencia de dolo ó fraude; pero en mi opinión la defraudación comenzaría desde el momento en que el deudor no se hubiera encontrado en condiciones generales de solvencia para atender su rendición de cuentas al usar del depósito.

1067. La penalidad de este delito se ajusta á los criterios ya indicados: si la suma usada es reintegrada después de haber causado daño al servicio público, la pena es de suspensión por uno á dos años, y multa de veinte á cincuenta por ciento de la cantidad de que hubiera hecho uso; si el reintegro se verifica espontáneamente antes de haber resultado daño ó entorpecimiento en el servicio, la suspensión será de tres

(1) *Programma*, § 3373.



á seis meses y la multa de diez á veinticinco por ciento.

1068. El artículo 268 prevé el caso más grave de delincuencia en la malversación de caudales públicos: "el empleado que sustrae ó consiente que otro sustraiga los bienes, caudales, ú otros valores públicos confiados á su administración ó custodia, será castigado con las penas señaladas para los *ladrones* é inhabilitación perpetua para cargos públicos". En cuanto á los caracteres constitutivos del delito, nada hay que observar que no se derive necesariamente de lo dicho sobre lo que importa la sustracción: es el apoderamiento de la cosa con ánimo de tenerla para sí. Las consideraciones generales hechas sobre el robo, el hurto y las defraudaciones ilustrarán el conocimiento del delito de que se trata, pues que lo único que cambia en estos hurtos ó robos, es la condición del agente y la calidad de la cosa: que el uno sea empleado público: que la otra, sea cosa de propiedad pública.

1069. Pero, en cuanto á la manera de determinar la penalidad, el Código merece en este artículo una severa censura. ¿Qué significa esto de las penas señaladas para los *ladrones*? ¿Quiénes son *ladrones*? La ley no ha dicho en ninguno de sus artículos qué penas impone á los ladrones por ser tales, sino qué penas impone al robo, al hurto, á la estafa, á la defraudación. ¿Á cuál de las penalidades ha querido referirse el artículo? Ni en el proyecto Tejedor, ni en el de la Comisión revisora, ni en los códigos españoles que la Comisión de la Cámara de Diputados tuvo á la vista, se ha adoptado una redacción que puede tener cierto efecto moral en la construcción del período, pero con perjuicio de la precisión y claridad que deben

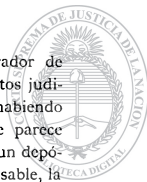
ser los primeros requisitos de la redacción legal. El criterio adoptado por las leyes y proyectos citados es el de graduar la pena según la importancia pecuniaria de la defraudación, y es *quizás* á las penas señaladas por el artículo 202 que la ley ha querido referirse y no á las del capítulo de los robos y hurtos. Pero, esto no puede asegurarse sin vacilación y no sería difícil que en la duda se adoptara como más benigna la pena del artículo 193 para el hurto, cuyo máximo no pasa de tres años de prisión, en tanto que la pena de la defraudación puede llegar á seis años de penitenciaría.

1070. Según el artículo 269, quedan sujetos á las disposiciones de que hasta aquí se ha hablado en este capítulo, los que administran bienes municipales ó pertenecientes á establecimientos de instrucción pública ó de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan á particulares.

Conviene observar que esta disposición no obsta á la objeción hecha al final del número 1064. De toda ella no resulta que cometa delito de malversación el administrador de bienes municipales ó pertenecientes á establecimientos de instrucción pública ó de beneficencia, que dé á los fondos que administra una aplicación distinta de aquella á que estén destinados por autoridad competente, cuando el destino no esté determinado por una ley.

1071. El artículo 269 no se refiere al depósito hecho por particulares, y debe tenerse esto bien presente para su aplicación: se refiere á caudales depositados por *autoridad competente*, aunque pertenezcan á particulares.



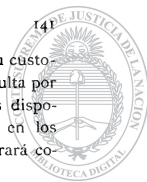


Sería este el caso del empleado ó administrador de banco oficial que sustrajera dinero de depósitos judiciales. Si el dinero corresponde á particulares, habiendo sido depositados por éstos ¿qué ocurrirá? Me parece que es posible una distinción: si se tratara de un depósito por el cual el erario público fuera responsable, la defraudación no sería de los intereses particulares, sino de los intereses públicos, y correspondería la aplicación de los artículos 267 ó 268, según los casos, sin influencia que se derivara del origen del depósito; si el erario público no era responsable, según las circunstancias con que el depósito se hubiera verificado, el defraudado sería el particular, y no podría en ningún caso corresponder imputación por malversación de *caudales públicos*; habría estafa ó cualquier otra defraudación.

1072. También constituye delito la injustificada demora del empleado que tenga fondos espeditos, en verificar un pago ordinario ó decretado por autoridad competente. La pena que la ley impone es la de suspensión por tres á seis meses y multa de dos á diez por ciento sobre la cantidad no satisfecha, á beneficio de la parte damnificada. Se trata de un delito leve, y esta pena es adecuada. Sólo una demora *injustificada* es la que puede dar origen á la imputación; luego, no por toda demora en la verificación de un pago procederá la acción, sino cuando aparezca falta de justificación para no pagar.

1073. No difiere sustancialmente de la disposición del artículo 270 que acabo de exponer, la del artículo 271: “es aplicable la pena anterior al empleado público que requerido por autoridad competente rehusare entregar

una cantidad ó efecto depositado ó puesto bajo su custodia ó administración, debiendo graduarse la multa por el valor en que se justiprecie el efecto". Las dos disposiciones están comprendidas en un solo artículo en los códigos españoles. Su escasa importancia ahorrará comentarios.





CAPÍTULO XI

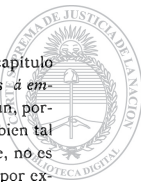
FRAUDES Y EXACCIONES

(Artículos 272 á 276)



1074. Observaciones sobre el método. — 1075. ¿En qué consiste el delito de fraude? — 1076. Fraude sin defraudación. — 1077. Legislación y doctrina sobre este punto. — 1078. En qué consiste el dolo en este delito. — 1079. Cómo se le legisla en Bélgica. — 1080. Conclusión. — 1081. Penalidad del fraude. — 1082. Crítica. — 1083. Observaciones sobre la penalidad en el caso del artículo 273. — 1084. ¿En qué consiste el delito de exacciones? — 1085. Elementos constitutivos. — 1086. Abuso de autoridad. — 1087. Percepción ilegal. — 1088. Dificultad para precisar la distinción entre la exacción ilegal y el cohecho. — 1089. Conocimiento del funcionario público de la ilegalidad de la percepción. — 1090. Penalidad de este delito. — 1091. Observación crítica.

1074. En las disposiciones del capítulo *Fraudes y exacciones*, del Código Penal, se prevé dos delitos distintos, que no tienen otro carácter esencial que les sea común que el de la calidad de *empleado*; pero siendo genérica esta circunstancia, no había más motivo para reunirlos



que el que daría lugar á la reunión en un sólo capítulo de cualesquiera otros del título *Delitos peculiares á empleados públicos*. El ánimo de lucro no les es común, porque, como se verá luego más detenidamente, si bien tal propósito subsiste siempre en el delito de fraude, no es él un requisito del delito de exacción, desde que por expresa disposición del artículo 274 la exacción puede cometerse “aunque sea para el servicio público”. El motivo del método del Código en este capítulo no debe buscarse, pues, en los caracteres comunes de delitos, que no los tienen, sino en la autoridad del ejemplo. El proyecto Tejedor adoptaba el mismo método, que fué seguido por el de la Comisión revisora, y en la misma forma se encuentran en el código español de 1850 y en el reformado de 1870.

1075. Los artículos 272 y 273 legislan sobre el delito de fraude. Según el primero lo comete “el empleado público que en los contratos en que intervenga por razón de su cargo, ó por comisión especial defraude al Estado, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones ó suministros”, y, por la disposición del segundo, “el empleado público que directa ó indirectamente se interese en cualquier clase de contrato ú operación en que deba intervenir por razón de su cargo”, siendo aplicable esta disposición “á los peritos, árbitros y contadores particulares, respecto de los bienes ó cosas en cuya tasación, adjudicación ó partición interviniesen; y á los guardadores ó albaceas respecto de los pertenecientes á sus pupilos”.

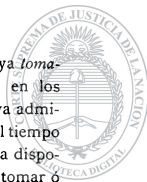
1076. La distinción entre estas dos disposiciones que aparece inmediatamente del examen del texto, es la de

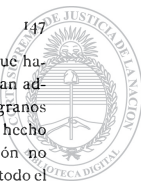
que en el delito de que habla el artículo 272 es condición esencial la *defraudación* al Estado, en tanto que el artículo 273 castiga el mero hecho de interesarse directa ó indirectamente en cualquier contrato ú operación en que deba intervenir por razón de su cargo, *sin defraudación*. Pero entonces ¿por qué llamar delito de *fraude* al que se comete sin defraudación? ¿Será simplemente por la presunción de fraude que supone Pacheco que deba acompañar al hecho del empleado que se interesa en los contratos ú operaciones en que deba intervenir? (1). Ciertamente es que alguna razón tendría la presunción "porque no es de creer que ninguno descuide sus intereses y que haciendo contratos para ganar, deje de ganar todo lo posible, cuando es él mismo quien ha de fijar los límites á su ganancia". Pero si una disposición legal castiga la defraudación, la justicia de la pena aparece evidente: en cambio, si se castiga la *presunción* de un fraude, no existe ya la evidencia de la justicia, ó por lo menos, la lógica de los principios generales podría llevarnos á esta conclusión: se trata de una presunción *juris*: debe admitirse la prueba en contrario; debe eximirse de pena al que destruye la presunción. ¿No sería mejor legislar estos hechos partiendo de principios y fundamentos distintos? Para ello convendrá examinar la legislación y la doctrina que pueden influir en la solución.

1077. El artículo 175 del código penal francés contiene una prescripción cuyo texto concuerda con el 273 nuestro; "todo funcionario, todo oficial público, todo agente del gobierno, que, sea abiertamente, sea por actos si-

(1) *El código penal, etc.*, tomo 2º, página 518.

mulados, sea por interposición de personas, haya *tomado ó percibido algún interés*, cualquiera que sea, en los actos, adjudicaciones, empresas ó negocios, cuya administración ó vigilancia tuviese en todo ó parte al tiempo del acto, será castigado, etc. ". En el texto de esta disposición aparece incriminado el mero hecho de tomar ó percibir un interés, independientemente de toda idea de defraudación. Esta no se menciona ni como criterio de gravedad de la pena. Chauveau y Hélie, comentando el artículo citado y su correlativo el 176 del mismo código, dan á la disposición un alcance que concuerda con el sistema adoptado en esta materia por nuestro Código, en cuanto se agrega la distinción de la existencia ó inexistencia de fraude en el acto del funcionario. "Es, sin embargo, necesario observar, dicen, que la infracción de la prohibición puede tener dos caracteres muy distintos : si no está viciada por dolo ó fraude, no habrá más que una contravención material cometida por el funcionario; si, al contrario, el acto prohibido ha sido cometido con un pensamiento concupiscente y fraudulento, el acto mismo constituirá un delito moral. Así, el oficial público que ha tomado interés en una empresa relacionada con sus funciones, el prefecto que ha hecho un acto de comercio sobre los granos ó las bebidas, pueden haber obrado con esa lealtad que debe resplandecer sobre todos los actos de los funcionarios; han infringido es verdad una prohibición, pero han separado cuidadosamente al funcionario y al especulador; no han hecho concurrir sus funciones en auxilio de su empresa, no se han servido de ellas, no han abusado de ellas. Supongamos ahora que han favorecido con todo su poder el ne-





gocio á que su interés particular estaba ligado ; que hayan hecho liquidar el crédito discutible que habían adquirido ; que hayan hecho alzar el precio de los granos concurriendo para ello su poder ó monopolio ; el hecho cambia evidentemente de naturaleza ; la infracción no es ya una simple desobediencia ; se agrava con todo el peligro de un abuso de poder, con toda la inmoralidad de un abuso de confianza". Agregan, luego, que únicamente son pasibles de pena los hechos que ofrecen los elementos del delito moral, y tratan de demostrarlo con la exposición de motivos del código, en que se expresa que las penas alcanzan igualmente al *abuso de confianza* y al *monopolio*, y fuera de estos casos no hay castigo. Pero esta interpretación es justamente criticada por M. Edmond Villey, anotador de la sexta edición, por cuanto fuera de los términos de la ley, crea una distinción arbitraria entre *delitos-contravenciones* y lo que llaman *delito moral* (1).

1078. La transcripción hecha en el número precedente demuestra el verdadero origen de la idea de incriminar el interés de los funcionarios públicos en los contratos en que intervengan como tales, bajo el título de fraude. En el código francés, el título del delito en cuestión es el de "delitos de los funcionarios que se ingieren en negocios ó asuntos incompatibles con su calidad", y si bajo esta denominación se ha sostenido por tan distinguidos autores la exención de pena cuando hubiera ausencia de fraude, con mayor razón podría sostenerse la misma interpretación de nuestro artículo, en que el

(1) *Théorie du code pénal*, sexta edición, tomo 2º, página 604.



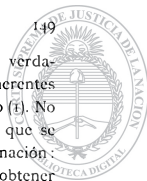
delito se llamará *fraude*. Conviene advertir, sin embargo, que la cuestión es controvertida en Francia. “La inmiscusión prohibida es delictuosa, dice Garraud, por el solo hecho de que el funcionario contravenga *voluntariamente* á las prohibiciones del artículo 175; no es necesario que haya obrado con intención fraudulenta. No es solamente un abuso de poder que sirva á un interés personal lo que la ley ha querido castigar: su fin ha sido sustraer á los funcionarios públicos, aún á la tentación de una ingerencia peligrosa. El carácter prohibitivo de la medida indica que se trata aquí de un delito en cuya constitución la intención fraudulenta no entra como elemento necesario”. (1)

1079. En Bélgica, los documentos oficiales de la preparación del código penal no dejan duda alguna de que el delito existe por la sola inmiscusión de los funcionarios en los asuntos en que les está prohibida, sin que sea necesaria la intención fraudulenta ni la existencia de perjuicio. El delito existe por el hecho material de tomar parte en los actos ó adjudicaciones cuya administración ó vigilancia está confiada al funcionario público. Se ha consignado en la ley una sola excepción: la disposición no es aplicable al que no podía, en razón de las circunstancias, favorecer por su posición sus intereses privados, y *que hubiera obrado abiertamente* (2).

1080. En conclusión de lo expuesto, no es el fraude condición esencial del delito del artículo 273; la denominación y la colocación que se le ha dado son impro-

(1) GARRAUD, *Traité du droit pénal français*, tomo 3º, número 268.

(2) NYPELS, *Code pénal belge interprété*, tomo 2º, página 636 v sig.



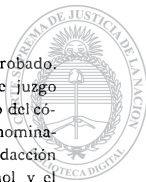
pías, y deben desaparecer, dándose al delito su verdadera colocación, como violación de deberes inherentes al empleo público, como lo hace el código italiano (1). No podría suponerse por esto que faltara al hecho que se reprime una condición esencial á toda incriminación: el dolo. Este consistiría no en el propósito de obtener una ganancia ilícita, sino en la violación voluntaria de una prohibición legal.

1081. La pena impuesta por la ley al delito de fraude es, en el caso del artículo 272, de prisión de uno á tres años é inhabilitación absoluta por cinco ó diez años. Esta pena no guarda proporción con las que la ley impone en los casos ordinarios de defraudación, en que adoptándose como criterio de la gravedad del delito el importe de lo defraudado, la pena puede variar desde un mes de arresto hasta seis años de penitenciaría (2).

No hay un motivo suficiente para apartarse de un criterio tan apropiado á los delitos cuyo estímulo es el lucro, tratándose del fraude cometido por el empleado. No hay motivo porque justificarse que la misma represión deba caer sobre el oscuro empleado que defraude en suma menor de cien pesos, que sobre el funcionario autor de la defraudación en grande escala. Y digo que la pena sería la misma, por cuanto, aunque puede variar en los límites del máximo y el minimum, tal variación está sujeta por las reglas de los artículos 52 y 53 á la concurrencia de circunstancias atenuantes ó agravantes, ó unas y otras conjuntamente; y no se com-

(1) Artículo 176.

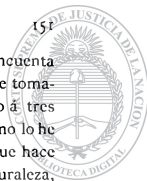
(2) Artículo 202.



prende en estas circunstancias el importe de lo robado.

1082. El criterio de penalidad adoptado, y que juzgo equivocado, no podría justificarse con el ejemplo del código penal español. Aunque lleven la misma denominación, aunque observen colocación análoga y redacción semejante, hay entre el artículo del código español y el nuestro una diferencia fundamental, á tal punto que es distinta la naturaleza misma del delito. Tanto el artículo 323 del código de 1850 como el 411 del código reformado, no erigen en delito el hecho del empleado que defraude realmente al Estado, sino el del funcionario público que *se concertare* con los interesados ó especuladores ó usare de cualquier otro artificio *para defraudar al Estado*; es decir, se trata de un delito puramente formal. Cuando el empleado público ha defraudado realmente al Estado, se aplican las penas señaladas para la defraudación ordinaria, agregadas con las de inhabilitación temporal especial en su grado máximo á inhabilitación perpetua especial. El empleado público que defrauda al Estado comete una infracción ciertamente más grave que la defraudación cometida por un particular, pues que comete una defraudación y á la vez un abuso de la confianza pública que en él se hubiese depositado: y es este delito moralmente más grave que el de la simple defraudación, el que tiene en nuestra ley una penalidad cuyo máximo es muy inferior al máximo del segundo.

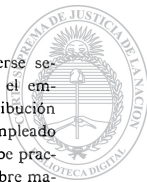
1083. La pena del delito previsto por el artículo 273, esto es la del empleado público que directa ó indirectamente se interesa en cualquier clase de contrato ú operación en que deba intervenir, es la de inhabilitación



especial de uno á cinco años y multa de diez á cincuenta por ciento sobre el valor de la parte que hubiere tomado en el negocio, ó en su defecto, prisión de uno á tres años. El delito á que se impone esta pena es, como lo he hecho notar, de menor gravedad que el delito á que hace referencia el artículo 272. Es aún de distinta naturaleza, pues es un delito formal: no es necesario para la infracción que ocurra un daño consecutivo á la acción; el delito se comete con *interesarse* en el contrato ú operación, es decir, con asociarse á la parte con quien debe contratarse en razón de funciones públicas que se ejerce: mientras que para la existencia del delito anterior se requería una positiva defraudación. Atendiendo á la diferente gravedad del delito, el código español impone solamente la pena de inhabilitación temporal especial y la multa del 10 al 50 por 100 del valor del interés que se hubiere tomado en el negocio, pero no determina pena corporal subsidiaria, de manera que si el valor del interés del reo no pudiera ser determinado no había lugar á imposición de pena (1). El proyecto Tejedor fijó la pena subsidiaria en defecto de la pecuniaria en un año de prisión, ó sea la mitad de la que imponía al delito de fraude del artículo anterior: la pena subsidiaria de uno á tres años que señala el Código no guarda proporción con la del artículo 272, y concluye de demostrar la necesidad de ajustar la penalidad de estos delitos á otras proporciones.

1084. Los artículos 274, 275 y 276 legislan sobre el de-

(1) Juzgado así por el Tribunal Supremo de España. VIADA, Suplemento 1º, página 291.



lito de exacción ilegal. Este delito puede cometerse según las citadas disposiciones legales : 1° cuando el empleado público exija arbitrariamente una contribución “ó cometa otras exacciones”; 2° cuando el empleado público exija derechos ó propinas por lo que debe practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, ó cobre mayores derechos que los designados por la ley. Las circunstancias expresadas en la misma ley, referentes á que la exacción se cometa para el servicio público ó se convierta en provecho propio, que se verifique ó no con empleo de fuerza, ó suponiéndose órdenes superiores, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima, no son requisitos esenciales á la existencia misma del delito, sino caracteres determinantes de su relativa gravedad.

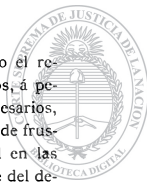
1085. Los elementos constitutivos del delito de exacción son : 1° un abuso de la autoridad de que el funcionario público está investido; 2° una percepción ilegal; 3° el conocimiento de la ilegitimidad de la percepción, de parte del agente que ha aprovechado de ella (1).

1086. La primera de las circunstancias enunciadas surge naturalmente de la calidad requerida en el agente del delito. Este no puede ser cometido sino por empleado público, pero no en el uso *legítimo* de la autoridad, lo que en ningún caso podría atribuirle el carácter de infracción, por excluirse recíprocamente las ideas de *uso* de autoridad y de infracción, sino por el *abuso* de la misma que sugiere desde luego y por sí sola la delictuosidad de la acción.

(1) GARRAUD, *Traité du droit pénal français*, tomo 3°, número 255.

1087. La segunda circunstancia, *una percepción ilegal*, no se explica con tanta facilidad. El delito se comete desde que se *exija* la contribución etc. Pero la palabra *exigir* tiene dos significados igualmente castizos: uno propio, en la acepción de *cobrar*, *percibir*, *sacar* de otro una cosa; otro metafórico, el de pedir á otro con mucha instancia que haga algo, siendo más corriente y usual el sentido figurado que el propio. En el sentido figurado, el delito tendría el carácter de meramente formal, conviniendo así con la doctrina sustentada por varios autores. Carrara tiene este carácter de la concusión como elemento característico y distintivo entre la concusión y el cohecho. "La concusión, dice, es un delito verdaderamente *formal*, porque para su consumación no es necesario que el particular haya entregado realmente el dinero que se le quería sacar con el temor ó con el engaño. El delito se cumple con el simple acto del oficial público dirigido al engaño ó á la intimidación" (1). Pero, cuando se ha presentado á la jurisprudencia española, con un texto análogo al nuestro, la ocasión de decidir si la ley empleaba la palabra en su acepción propia ó en la figurada, se ha decidido por lo primero. Se trataba en el caso de un cobro indebido de derechos, que el empleado había intentado hacer efectivo por cuantos medios podían ser conducentes hasta llegar al embargo y subasta de los bienes de los deudores. La sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid había visto en el hecho un delito consumado; pero el Tribunal Supremo casó

(1) *Programma* § 2583; PINCHERLE, *Manuale de diritto penale*, número 261.



la sentencia, porque “por no haber conseguido el recurrente hacer efectivos los expresados derechos, á pesar de que ejecutó para ello todos los actos necesarios, no pasaron los delitos cometidos de la categoría de frustrados, ya se atienda al significado gramatical en las palabras *exacción* y *exigir*, ya á la definición que del delito frustrado se hace en el párrafo 2º del artículo 3º del código penal” (1).

1088. El requisito de la ilegítima *percepción*, tiene por consecuencia la posibilidad de que, en determinadas circunstancias pueda dudarse respecto del pago indebido hecho á un empleado público, en esta calidad, si procederá la calificación de exacción ó la de cohecho. En términos generales puede no ser grave la duda. En el delito de exacción hay un abuso de autoridad contra el particular, que coloca á éste en la condición de víctima del delito: en el delito de cohecho, hay una codelinuencia ó complicidad del particular con el funcionario. En la exacción, la exigencia del dinero parte del funcionario público; en el cohecho, la prestación del particular es voluntaria. Pero estas distinciones no bastan para resolver las cuestiones que pueden suscitarse sobre el punto. “Mientras se supone el caso simple y obvio, dice Carrara, todo es fácil. Pero no siempre el empleado se dirige á cara descubierta contra el particular diciéndole: dame tal cantidad ó te reduzco á prisión; ó ¡dame tal cantidad ó te doy una sentencia contraria. Estos modos son demasiado groseros y por lo mismo son muy raros.

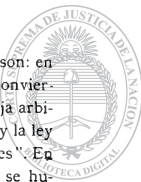
(1) PANTOJA, *Jurisprudencia criminal*, Apéndice 5º, página 459; VIADA, *Suplemento* 1º, página 297.



El empleado venal no exige, pero hace comprender que recibiría; no amenaza, pero deja nacer el temor de su poder. Es entonces cuando el particular (tenga ó no justa razón para temer) entiende y teme; y ofrece el dinero. No es él el autor del pensamiento criminoso; se habría ahorrado voluntariamente aquel sacrificio, habría confiado en el conocimiento y en la justicia de sus razones: pero se le ha hecho conocer que no basta tener razón, sino que es preciso saber manejarse... ¿Es este un *corruptor* que merece castigo, ó más bien, una víctima infeliz de la perversidad ajena? Es esto lo que creo delicadísimo y difícil de definir" (1). Yo entiendo sobre esta cuestión que los caracteres absolutos que antes he enunciado bastan para distinguir legalmente la exacción ilegal, del cohecho; y si no pueden resolver todos los casos, es que también en esta materia, como respecto de otras lo he enunciado, la apreciación judicial de las circunstancias de cada caso tendrá que suplir los vacíos que dejan los términos generales de las leyes y de la doctrina.

1089. El tercer elemento de la exacción es el conocimiento de parte del funcionario ú oficial público de la ilegalidad de la percepción: es necesario que esté comprobado que el agente ha exigido ó recibido lo que sabía que no se debía. El ánimo de defraudar no es necesario á la existencia del delito, porque lo mismo existe este en su manifestación perfecta cuando el empleado ó funcionario público no ha cometido la exacción con interés personal, sino con interés público.

(1) *Programma*, § 2575.



1090. Los criterios de gravedad de este delito son: en el caso más grave, el del empleado público que convierta en provecho propio las contribuciones que exija arbitrariamente ó las otras exacciones que cometa; y la ley le castiga “con las penas impuestas á los ladrones”. En segundo término, se encuentra la exacción que se hubiese verificado con empleo de fuerza, que se castiga con destitución y multa del veinticinco por ciento de la cantidad exigida, ó en su defecto prisión de uno ó tres años. Sigue luego la del empleado que exija arbitrariamente la exacción, que sufrirá suspensión de dos meses á un año y multa del cinco al veinticinco por ciento de la cantidad exigida, ó en su defecto, arresto hasta un año. Por último, el empleado público que exija derechos ó propinas por lo que debe practicar gratuitamente, tiene multa del duplo al cuádruplo de la cantidad que hubiere percibido, y además la pena de destitución, si para efectuar las exacciones supone órdenes superiores, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima.

1091. Esta penalidad no puede considerarse fuera de discusión. El artículo 275 repite la fórmula ya criticada de referirse á las penas impuestas á los ladrones, que usó para determinar la pena del delito de malversación, en el artículo 268, fórmula demasiado vaga en una materia tan importante, porque no puede saberse á ciencia cierta si la ley entiende imponer las penas fijadas para el robo, el hurto ó la estafa; pues, si bien la denominación de ladrones puede comprender á los que roban y á los que hurtan, antes que á los que estafan, es la proporcionalidad de las penas para estos últimos la que podría convenir.

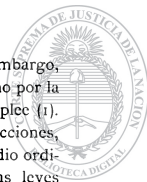
CAPÍTULO XII

DE LAS FALSEDADES



1092. Carácter general de la falsedad. — 1093. Motivos de erigir en delito lo que es en sí un acto preparatorio. — 1094. Doctrina de Garraud sobre la falsedad que debiera reprimirse. — 1095. Consideración sobre la misma. — 1096. Sistema adoptado por la legislación. — 1097. Influencia de los progresos de la ciencia sobre el delito de falsificación. — 1098. Teoría que excluye de las falsedades la que recaen en instrumento privado. — 1099. Consideraciones sobre esta teoría. — 1100. Sistema del código penal italiano sobre este punto. — 1101. Falsedades previstas por nuestro Código Penal.

1092. El delito se manifiesta ordinariamente por uno de estos medios de ejecución: la *violencia*, es decir, el uso de la fuerza; el *engaño*, esto es, la disimulación, la mentira, la *falsedad*. La violencia no es por sí misma un delito, sino un medio de ejecución, y no fundándose la clasificación de los delitos en el medio de ejecución no encontramos en el Código un delito de violencia penado bajo este nombre. Las *coacciones*, que constituyen un delito en que el uso de la violencia



es esencial y característico, no son, sin embargo, castigadas por el solo hecho de la violencia, sino por la relación de ésta con el fin para el cual se la emplee (1). La falsedad por palabras, por escritos ó por acciones, según la distinción clásica, que es también medio ordinario de ejecución de los delitos, aparece en las leyes con una consignación especial, fundándose las distinciones no en razón del objeto ó propósito final del autor, sino en razón del objeto material al cual se aplica la falsificación. Preséntase por una parte la falsedad considerada como simple medio de ejecución de delitos contra la propiedad, contra el estado civil ó contra el honor, y por otra se erige en delito por sí mismo lo que en algunos casos podría llegar á tentativa de aquéllos, pero que por lo general no pasaría de acto preparatorio. Bajo este punto de vista la materia de las falsedades, aparece regida por principios excepcionales. El acto preparatorio, cuya incriminación no ha sido aceptada por nuestra ley, es erigido aquí en delito por sí mismo. Ni es aún necesario que se haya hecho uso alguno de la pieza falsificada para que se dé cabida á la aplicación de la pena.

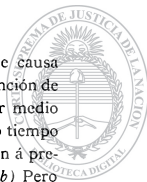
1093. Este sistema se encuentra generalmente justificado por la doctrina de los autores. “La falsedad, dice Garraud, presenta demasiados peligros en su ejecución misma, para que el legislador pueda sin comprometer los intereses públicos y privados que debe proteger, detener la represión hasta el momento en que el autor se sirva ó intente servirse del medio que ha preparado para

(1) Artículos 170 y 171.

realizar la estafa ó el hurto. La misma facilidad de usar una pieza ó una moneda falsificada, y el perjuicio que puede resultar de ello, deben determinar al legislador á derogar en esta materia el derecho común y á castigar el mero hecho de la alteración, aún cuando el autor no hubiera empleado el instrumento preparado por él para atentar al honor, á la fortuna ó á la salud ajena, tanto más cuanto que es más fácil usar de una pieza falsificada que falsificarla, y que la fabricación es más peligrosa que el uso. La pieza falsa, en efecto, puede ser puesta en circulación independientemente de la voluntad del que la ha fabricado, por ejemplo, por su heredero si el falsario llega á morir, ó aún por cualquiera persona que la encuentre y se apodere de ella, y en consecuencia, la posibilidad de un perjuicio existe desde que la falsificación ha tenido lugar. Esta eventualidad es suficiente para motivar la intervención de la ley penal" (1).

1094. Pero la *falsedad* no se castiga según una definición genérica que constituya en delito toda alteración de la verdad. Tomada en sí misma, dice el autor citado, la *mentira* no es punible: la ley penal deja á cada uno el cuidado de preservarse contra el error; no protege la verdad por una sanción represiva. "Bajo este punto de vista, agrega, la acción de la ley penal ha sufrido en las civilizaciones modernas una doble evolución en sentido contrario pero no contradictorio: a) Producir el error en el espíritu es siempre bajo el punto de vista filosófico un hecho perjudicial, dañoso. Durante largo tiem-

(1) *Traité du droit pénal français*, tomo 3º, número 56.



po se ha pensado que el perjuicio intelectual que causa el error era de los que pueden motivar la intervención de la ley. Profesar falsas doctrinas, propagarlas por medio de la palabra ó de la prensa, ha sido por mucho tiempo considerado como delito, pero otras ideas tienden á prevalecer cada vez más en los pueblos modernos ; b) Pero la mentira puede también causar un perjuicio á estos bienes tangibles que la sociedad garantiza y debe garantizar : la propiedad, el honor, la condición y el estado de los ciudadanos. ¿ Debe ejercerse la acción represiva en estos casos ? Yo creería legítimo erigir en delito penal toda mentira directa ó indirecta *susceptible* de causar un perjuicio moral, cuando el autor hubiera obrado con intención fraudulenta. Aunque evolucionando todas en esta dirección, se puede decir que ninguna de las legislaciones contemporáneas ha llegado á formular una regla tan comprehensiva. La falsedad perjudicial no constituye en Francia, lo mismo que en el exterior, un *delito general*, y la ley escoge entre los actos destinados á engañar á terceros ciertos procedimientos que incrimina en razón de su gravedad ; pero deja á los demás en la categoría de los hechos de *dolo civil* y no les reconoce como consecuencia, sino la obligación para el autor de los manejos dolosos de reparar civilmente el perjuicio material ó moral que haya podido causar por su falta" (1).

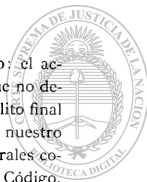
1095. En los términos generales en que Garraud quisiera ver reprimida la falsedad, lo que se castigaría, sería la mentira *susceptible* de causar perjuicio cuando ha habido intención criminal, es decir, el elemento material

(1) *Ibidem*, número 53.



del delito consistiría en una mera posibilidad de causar un perjuicio y se requeriría para la imputación la prueba del elemento moral, la intención fraudulenta, como en todos los delitos en que la criminalidad está en la intención y no en el daño causado. Es indiscutible que sería conveniente perseguir con eficacia por medio de adecuados castigos toda manifestación de una intención fraudulenta, pero es muy cierto también que la intención fraudulenta no puede siempre deducirse de un hecho material, ni puede presumírsela ordinariamente en los actos del individuo que no produzcan un daño inmediato. La mera aptitud de un acto cualquiera para causar perjuicio al derecho ajeno, pero que no lo lesiona en manera alguna, no tratándose de la posibilidad de un daño enorme, como la posesión no justificada de bombas explosivas, no es en sí misma un hecho que pueda causar una alarma de consideración suficiente á justificar una incriminación, como la alarma que causa la tentativa, que es el delito en acción, y resultaría en cambio el peligro de ser perseguidos los actos más inocentes mientras no se estableciera qué clase de intención los había acompañado.

1096. Es, pues, un prudente consejo el que guía aún la legislación general al no erigir en delito toda falsedad, sino ciertas falsedades que recaen en determinados objetos, y en que una mala intención puede presumirse más fácilmente que una inocente. La fabricación de una moneda falsa, la adulteración de un documento público, son actos que aparecen inmediatamente ligados á la idea de una defraudación, y cuyo castigo independientemente del uso á que se les destine, se justifica ra-



cionalmente por el argumento antes enunciado: el acto envuelve en sí mismo tal grado de peligro que no debe esperarse á que comience la ejecución del delito final á que serviría de medio la falsificación. Aún en nuestro artículo 293 que enuncia en términos muy generales como delito toda falsedad no especificada en el Código, están determinados los medios en razón de cuyo empleo resultará punible la falsedad, y subordinada en todos los casos la incriminación á la existencia del perjuicio de tercero y no á la mera aptitud de causarlo.

1097. Este criterio de ver en el acto de la falsificación en sí misma un delito consumado y no un acto preparatorio de otro delito, no es consecuencia de un progreso de las ideas en el sentido de hacer prevalecer la incriminación de este acto preparatorio en sus términos más generales. La marcha ha sido en sentido opuesto. En un tiempo ha prevalecido la influencia de la gravedad del medio y el título de la falsificación absorbió todos los delitos en que se presentaba como elemento esencial la mutación de la verdad. “Cuando los progresos de la ciencia, dice Carrara, hicieron sentir la necesidad de coordinar las nociones de los delitos en particular á un criterio lógico jurídico y de construir una exacta clasificación de los mismos según el principio de su diversa objetividad, que era la única que podía determinar sus caracteres criminosos, el título de *falsedad* se limitó á designar aquellos delitos en los cuales se encontraba el *engaño de la fé pública* sobre la consideración del derecho particular agredido ú ofendido, sin que al mismo tiempo concurriera la lesión de otro derecho universal más especialmente afectado. Así, se desprendieron del título

de falsedad aquellos delitos que se dirigian á engañar la justicia pública. . . Así, todos aquellos hechos en los cuales se engañaba solamente la fé privada para llegar á la violación de otro derecho particular, no tomaron ya su nombre y su colocación, de la circunstancia del engaño (que sin embargo constituía en ellos un criterio y el *medio*) sino de otro derecho agredido como *fin* del agente. No se dió ya el nombre de falsedad á los engaños usados contra la doncella para robarle el pudor, sino que á la mutación de la verdad se dió el nombre de *estupro*. No se dejó en el grupo de las falsedades la supresión de estado ó la apertura de cartas, pero reconociéndose en la primera el objetivo de los derechos de familia, y en la segunda el de la libertad personal, se llevaron bajo distintos títulos á las clases correspondientes. No se definió ya como falsedad toda la serie de mentiras con las cuales se sorprende con propósito de lucro la buena fe de los demás, pero se encontró en ellas un criterio accidental de la *estafa* ó un criterio esencial del *fraude*. De este modo la *falsedad* se conservó como prominente y calificativa en los delitos de falsificación de *documentos públicos*, de *sellos*, ó de *moneda*" (1).

1098. Carrara excluye del título de las falsedades la que recae en documento privado. Las razones que fundan su opinión son ciertamente de peso. En la falsificación de un documento la distinción entre el instrumento público y el privado no induce solamente una diferencia de gravedad relativa. No; induce una diversidad de *objeto*, esto es, una diversidad de derecho lesionado.

(1) CARRARA, *Programma*, §§ 3512 y 3513.



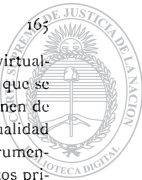
En la falsificación en uno ú otro instrumento se trata por el culpable de atacar la propiedad privada; pero en la del instrumento público el medio voluntariamente elegido, recayendo sobre un papel al que las instituciones sociales atribuyen fe contra todos, sucede que, representando la fe pública un derecho universal de todos los ciudadanos que tienen interés común respecto de los documentos públicos, presenta una *lesión medio* que prepondera sobre la *lesión fin*, por lo que en consecuencia de las reglas fundamentales y por necesidad lógica, la prevalencia del medio sobre el fin conduce el delito de falsedad á la clase que corresponde según el *medio*. Al contrario en el instrumento privado, faltando la preponderancia del medio sobre el fin, la falsificación debe quedar entre los delitos *naturales* y en la familia de los delitos *contra la propiedad*, porque en la falsificación de una firma ó de una escritura privada no es posible encontrar un interés universal y común de todos los ciudadanos respecto de aquella firma ó de aquel escrito; no es posible afirmar que por la alteración de la escritura privada se infiera un *daño inmediato* común á todos (1).

1099. Estos argumentos si acaso no justifican de todo punto la segregación de la falsificación de instrumentos privados, del titulo de las falsedades, por lo ménos conducen á reconocer en aquél un distinto momento consumativo de la infracción. La falsedad es por su naturaleza un delito *formal*, que alcanza su perfección jurídica independientemente de todo daño efectivo. Se le casti-

(1) Op. cit. § 2366.

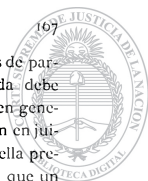
ga, como queda dicho, en razón del daño que virtualmente contiene, ó sea de la posibilidad de dañar que se ve necesariamente en ciertos actos que la contienen de una manera manifiesta. No se duda de esa virtualidad en la falsificación de monedas, de sellos, de instrumentos públicos, pero es dudosa en la de instrumentos privados. Bastaría recordar que la fuerza probatoria que las leyes civiles acuerdan al instrumento privado depende ordinariamente del reconocimiento de la firma como verdadera, ó en mejores términos, que el documento privado no reconocido no causa prueba ni obligación alguna: se le tiene por inexistente. Podría exceptuarse de esta regla, en razón de su importancia, el testamento ológrafo y los papeles de crédito en lo comercial. ¿Cuál es la posibilidad de daño que en sí mismo puede contener un documento que nada prueba y á nada obliga? La tentativa de la defraudación no aparecería sino en el momento en que se hiciera uso del documento. De aquí que ciertas legislaciones que no excluyen del título de las falsedades la falsificación de firmas ó documentos privados, no incriminen el hecho material de la falsificación sino el uso que se haga de la pieza falsificada (1).

(1) Según el antiguo código de Brunswick la falsedad en instrumentos privados no quedaba consumada sino por el uso; la falsedad en escritura pública se consumaba por la falsificación ó adulteración. El código de Prusia exige el uso en los casos de falsedad material. El código alemán, que ha reemplazado estas diversas legislaciones no distingue entre la falsedad en escritura pública y la falsedad en escritura privada, teniendo indistintamente por consumada la falsificación del documento auténtico ó del privado que pueda servir para probar derechos ú obligaciones jurídicas desde que *haga uso* de dichos documentos para engañar á una persona. (Artículo 263).





1100. A la conclusión enunciada en el número anterior se ha llegado también en el código italiano después de maduras reflexiones, de las que haré mención al tratar en particular de la falsificación de documentos privados. Los sistemas opuestos que se presentaron a la consideración del legislador eran el de tener por consumada la falsedad con la simple falsificación del instrumento privado y el de no considerarla tal sino cuando producido en juicio el documento falso se insistiera en hacerlo valer como verdadero, de acuerdo con las reglas del procedimiento civil. “Entre considerar como irrevocablemente consumada la falsedad en instrumento privado, decía el autor del código italiano, por el mero hecho de la falsificación ó suposición de un instrumento privado, y tener como perfecto este delito solamente cuando el agente haya persistido en el designio de servirse en juicio de un instrumento falso, hay una tesis intermedia, esto es, la de considerar como extremo que hace perfecta la falsedad privada, el *uso* que de cualquier modo se haya hecho del documento. En la falsedad del instrumento público el uso no debe constituir un elemento esencial del delito, puesto que la falsificación material ó moral de un documento público es por sí misma una lesión de la confianza que se atribuye al acto en que interviene un oficial público, cuya confianza se altera en cuanto se conozca que el oficial público haya traicionado sus propios deberes ó que un particular haya demostrado, usurpando el carácter de un oficial público, querer disfrazar un fraude. Al contrario, la falsificación de un documento privado no puede por sí misma dañar la fé pública, puesto que nadie está obligado á



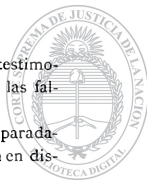
creer en la verdad de los documentos emanados de particulares. Para que la fe pública esté interesada debe perjudicarse la presunción de verdad atribuida en general á los documentos privados que se producen en juicio, ó de que se hace uso de otra manera: aquella presunción que nace naturalmente del hecho de que un documento público sea presentado á un funcionario. En consecuencia, después de operada la falsificación con el momento complementario del uso, el delito es perfecto en todos sus elementos materiales y morales potencialmente dañosos, de modo que el desistimiento del propósito malicioso tan dolosamente manifestado no podría borrar ni atenuar el carácter criminoso de la acción" (1). Cita en seguida como concordantes, además del código alemán que ya he recordado, el código húngaro, cuyo artículo 401 dice: "El que fabrica ó hace fabricar un documento privado falso, falsifica ó hace falsificar en todo ó en parte un documento privado y se sirve de él para probar la existencia, extinción ó modificación de una obligación ó de un derecho, comete una falsificación de documento privado".

1101. El Código Penal ha incluido en el título *de las falsedades*: 1º la falsificación de sellos, firmas y marcas, así se trate de sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos como de sellos, firmas, marcas y contraseñas de individuos ó establecimientos particulares; 2º la falsificación de documentos en general, así se trate de documentos públicos ó privados, de la mera falsificación ó del uso; 3º la falsificación de documentos de crédito: 4º

(1) ZANARDELLI, *Relazione ministeriale*, CXX.

la falsificación de billetes de Banco: 5° el falso testimonio; y 6°, bajo el título de *disposiciones generales*, las falsificaciones no especificadas especialmente.

Conforme al método que observo trataré separadamente de cada uno de estos casos de falsificación en distintos capítulos.



CAPÍTULO XIII

DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, FIRMAS Y MARCAS

(Artículos 277, 278 y 279)



1102. Disposiciones legales sobre la falsificación de sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos. — 1103. Legislación comparada. — 1104. La falsificación de sellos requiere distinciones á que la ley no da lugar. — 1105. Qué falsedades se prevén en este título por la legislación general. — 1106. En esta no se castiga, en general, la falsificación de la firma del funcionario público. — 1107. En qué condiciones puede ser penada la mera falsificación de una firma. — 1108. Fines que se propone el legislador al penar la falsificación de sellos. — 1109. Falsificación de papel sellado. — 1110. Impresión fraudulenta del sello verdadero. — 1111. Impresión fraudulenta por el empleado encargado del sello. — 1112. Uso del sello por segunda vez, borrando el documento á que se aplicó primero. — 1113. Falsificación de sello, firma, marca ó contraseña de establecimientos ó particulares. — 1114. Marcas en ganados. — 1115. Marcas en productos industriales. — 1116. Vigencia de la ley especial. ¿Procederá la aplicación del Código Penal á las marcas no registradas? — 1117. Análisis de los derechos lesionados en la falsificación de una marca de fábrica y consideraciones sobre la misma. — 1118. Conclusión: las marcas no registradas no están bajo el amparo de la ley penal. — 1119. ¿Pueden las Provincias establecer registros de marcas? — 1120. Agravación especial de los delitos de que trata este capítulo.



1102. La primera parte del artículo 277, impone la pena de prisión de uno á tres años al que falsifique sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos.

En materia de falsificación de sellos oficiales ó de firmas de funcionarios, nuestro Código trae como disposiciones complementarias la consignada en la segunda parte del mismo artículo, por la cual se considera como falsificación la impresión fraudulenta de sello verdadero en documento en que sea necesario y la del artículo 279 que establece una agravante para el caso en que el delito sea cometido por un empleado público.

1103. La generalidad de los Códigos difieren en esta materia notablemente del nuestro. En casi todos ellos se comienza por determinar la pena que corresponde al que falsifique el sello del Estado, la firma del rey ó la de los ministros ó las estampillas reales, imponiéndose á estos actos penas severísimas. Concordancia con las legislaciones extranjeras, aunque atenuada la gravedad de la pena, se encuentra en la ley que designa los crímenes contra la Nación y en el Código Tejedor. La primera impone trabajos forzados por dos á seis años ó multa de mil á tres mil pesos, ó una y otra pena juntamente á los que falsifiquen la firma del Presidente de la Nación ó de sus ministros de Estado, ó el sello nacional, ó cualesquiera otros sellos usados por cualquiera autoridad ú oficina pública nacional (1). El segundo fijaba la pena de prisión de dos años y multa de cien á mil pesos fuertes para el que *en documentos públicos* falsificase los sellos oficiales ó la firma del Gobernador de

(1) Ley de 14 de Setiembre de 1863, artículo 57.

la Provincia y de sus Ministros ó de los Presidentes de las Cámaras, y la pena de prisión de dos años y multa de cincuenta á quinientos pesos fuertes al que falsificase la firma de cualquier otro empleado público ó los sellos, marcas ó contraseñas que para identificar un objeto se usaren en las oficinas de la Provincia (1). El nuevo artículo ha cortado, pues, toda distinción, adoptando como disposición única la que traía el artículo 214 del código español de 1850.

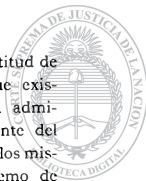
1104. Esta disposición del código español había merecido ya de Pacheco una observación que puede juzgarse acertada. "Este artículo, dice el comentarista, nos parece demasiado general, y por consiguiente, demasiado severo. La palabra sellos de autoridades y oficinas comprende en sí cosas muy diversas. Sellos son los que se ponen en ciertos documentos sobre oblea ó lacre y en el papel cortado; sellos son hasta los timbres para marcar el papel cuando en efecto se hace esta operación en la misma oficina ó secretaría de la autoridad. Resulta de todo que hay unos sellos de más importancia que otros y que la aplicación absoluta del artículo producirá ó podrá producir graves desigualdades. Lo que parece natural y justo como castigo aplicándose al sello de cancillería de un Tribunal, sería evidentemente demasiado aplicándose timbre de tinta de un pequeño Ayuntamiento ó de una celaduría de barrio" (2). Viada participa de la misma opinión: pero á ella contesta Groizard, que aparte de la casi imposibilidad de estable-

(1) Artículos 424 y 425.

(2) PACHECO. *El Código Penal, etc.*, tomo 2º, página 265.

cer una escala gradual de penas, dada la multitud de Tribunales, oficinas ó corporaciones públicas que existen lo mismo en la gerarquía judicial que en la administrativa, es lo cierto que el carácter determinante del delito y los intereses y derechos atacados son los mismos cuando se usa el sello del Tribunal Supremo de Justicia ó de la Presidencia del Consejo de Ministros que cuando se falsifican los sellos del último Juzgado Municipal ó Ayuntamiento, toda vez que el principio de autoridad, en lo que tiene de esencial no decrece ni aumenta por consideraciones de la persona ni de la localidad (1). Por mi parte ni en esta materia, ni en la de desacato á la autoridad, en que la cuestión puede presentar aún mayor interés, acepto como justo criterio el de la equiparación de la pena en todos los casos, bajo el fundamento de la unidad del principio. Es esto desconocer la realidad de los hechos. El Gefe del Poder Ejecutivo, un magistrado, un alto dignatario imponen donde quiera, por la eminencia de sus funciones y por sus cualidades personales un respeto muy superior al que puede inspirar un agente subalterno. Dedúcese de aquí que el que vence la traba de un mayor respeto á una gerarquía pública, denota mayor delincuencia que requiere mayor pena que el que no se hubiera atrevido á tanto. En el caso especial de la falsificación es también manifiesto que la falsificación de la firma ó del sello de quien tiene un poder más elevado, contiene virtualmente mayor peligro que la de quien puede disponer de menos. No quiero, sin embargo, sostener con esto que la ley

(1) GROIZARD. *El Código Penal de 1870*, tomo 3º, página 551.



deba preocuparse de una gradación cuyas dificultades no desconozco; pero si pienso que la determinación de la pena dentro del máximo y mínimo, podría subordinarse, conjuntamente con las circunstancias ordinarias de agravación ó de atenuación que concurrieren, á la calidad gerárquica del funcionario cuya firma ó sello se falsificare.

1105. Nuestro artículo no prevé sino la falsificación del selló y la de la firma. Se ha visto ya que el proyecto Tejedor preveía la falsificación de firma, sello, marca ó contraseña, usadas para identificar cualquier objeto ó para asegurar el pago de impuestos. En los mismos términos se expresaba el código español de 1850 (1) y se expresa el de 1870 (2). El código francés enumera la falsificación de timbres nacionales, de martillos del Estado para marcas de los bosques, y de punzones destinados á marcar piezas de oro ó plata (3), y el de la República Oriental del Uruguay contiene una enumeración análoga: timbres, punzones, marcas ú otros instrumentos destinados por disposición de la ley ó del gobierno para autorizar ó certificar un documento (4). Lo mismo se encuentra consignado en el código italiano (5)

1106. En las leyes citadas y en otras que no transcribo en obsequio á la brevedad, se trata en general de preservar de la falsificación las señales destinadas á identificar un objeto ó á darle una garantía de verdad. Pero, con

(1) Artículo 216.

(2) Artículo 289.

(3) Artículo 140.

(4) Artículo 230.

(5) Artículo 266.



excepción del código Tejedor, ninguna prevé especialmente la falsificación de firma de cualquier funcionario público. El código español prevé la falsificación de la firma del rey ó del regente del reino ó de la firma de los ministros de la corona (1), como nuestra ley federal la falsificación de la firma del Presidente de la República ó de sus Ministros de Estado (2); pero no se menciona la falsificación de la firma de otros funcionarios. El delito especial de falsificar la firma del rey ó de los ministros, independientemente de que por ella se consuma la falsificación de un instrumento público ó privado, es justamente censurada por Groizard. Después de investigar si la ley se ha referido á la falsificación de firma en algún documento y llegar á la conclusión negativa, se pregunta si merece aprobación en el terreno de los principios y contesta: "Sin vacilar nos decidimos por la negativa, á lo cual nos autorizan los principios de la ciencia penal y la falta de concordancias en los códigos extranjeros. Por grande que sea el respeto y la autoridad que representan las firmas del rey ó de los ministros, sin embargo, no llega al extremo de que su falsificación constituya por sí sola un delito especial. La firma del rey ó la de los ministros cuando se falsifique, ó para hablar con más propiedad, cuando se falsee, pues aquí existe más bien falsedad que falsificación, tiene que ser puesta bien en un documento público ú oficial ó en uno privado. Entonces hase cometido una falsificación en cualquiera de ambos documentos; y por más que, tratándose de la firma de personas tan elevadas, la pertur-

(1) Artículo 280.

(2) Artículo 57.

bación y el daño ocasionado sean mayores que en otros casos, sin embargo, esto que puede ser motivo para que considerándose como una agravación se imponga la pena en el grado máximo, no es bastante para constituir un delito *sui generis*" (1)

1107. Esta crítica á la creación de un delito en el mero hecho de imitar una firma me parece acertada, y conviene con la razón que da Carrara sobre la mera falsificación (sin uso alguno) en instrumento privado. No puede ser delito, dice, el mero hecho de que otro escriba mi nombre sobre una hoja de papel, ó imite el caracter de mi letra, si esto no tiene un propósito delictuoso, porque yo no puedo pretender que tenga un derecho absoluto á la *inviolabilidad* ó á la *inimitabilidad* de mi letra, como no puedo impedir que otro trace mi figura (2). Pero si en términos absolutos la imitación de una firma en su simple objetividad no importa lesión de derecho de ninguna clase, ni hay peligro mientras no se la agrega á un documento, la falsificación de la firma y aún la de la rúbrica puede ser el mismo delito que la falsificación del sello, de la marca ó de la contraseña. Un autor pone su firma en la falsa carátula de su libro para asegurarse contra ediciones fraudulentas, un industrial la pone en la cubierta de los productos de su fábrica para prevenir las imitaciones: en muchas Provincias los cuadernos del protocolo de los escribanos de registro llevan la rúbrica del Juez de subalternos ó del Juez de Paz, las hojas de los libros del Registro Civil, llevan en la Provincia de

(1) GROIZARD, obra citada, tomo 3º, página 531.

(2) *Programma*, § 2366, nota 1ª.



Buenos Aires la firma del Intendente Municipal respectivo. En todos estos casos la firma ó la rúbrica no tienen otro carácter que el de una marca ó contraseña para identificar el objeto á que se aplican. La diferencia material del signo no puede traer una diferencia formal del delito. En conclusión, puede censurarse nuestro Código por no haberse referido especialmente á la falsificación de firma destinada á servir de contraseña, como puede censurarse otros códigos por no haber comprendido los casos en que la falsificación de la firma era delito igual al de la falsificación del sello. Fuera del caso en que la firma sea destinada á la identificación ó á la garantía de verdad de un objeto, la falsificación ó es un acto que no contiene en sí mismo la posibilidad de ningún perjuicio ó debe calificarse de falsedad ó tentativa de falsedad en instrumento público ó privado, pues no debe olvidarse que es la firma en el documento y no la sola redacción lo que puede dar nacimiento á un hecho perjudicial al derecho ajeno.

1108. Al ocuparme en el número precedente de la falsificación de firma que puede ser castigada en sí misma, he indicado á la vez algunos de los motivos que justifican la punibilidad de la falsificación de sellos: dar una garantía de verdad ó de autenticidad al objeto á que se aplica. Pero no es este el único fin á que responde la costumbre universalmente propagada del uso del sello. En algunos países donde ciertos consumos están especialmente afectados por una contribución, el sello se usa como garantía y reconocimiento del pago del impuesto. Otro objeto es el de asegurar la percepción de cierta renta fiscal con la venta del papel sellado de que es in-

dispensable el uso en los casos determinados por las leyes especiales que fijan anualmente esa renta. A cualquiera de estos fines, que se adopten los sellos que usa la autoridad pública siempre será cierto que son objeto de un interés y de un derecho universal, ó porque coadyuvan á la riqueza del erario público ó porque sirven de garantía de verdad : pero lo que no puede dudarse es que su adulteración maliciosa deba erigirse en delito, y clasificarse entre los delitos sociales (1).

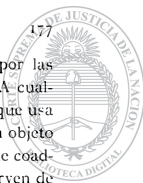
1109. Nuestro artículo 277 hace referencia en términos generales á la falsificación de *sellos oficiales*, sin hacer mención expresa de la falsificación de *papel sellado*. La falsificación de papel sellado está expresamente prevista en muchos códigos, porque en el lenguaje jurídico se aplica con preferencia la denominación de *sellos* á los que usan las autoridades y oficinas públicas en los objetos que visan ó documentos que expiden. En el Código español, está prevista especialmente la falsificación de papel sellado, sellos de telégrafos ó de correos, ó cualquier otra clase de efectos timbrados cuya expedición esté reservada al Estado, su introducción al territorio, su expendio en connivencia con los falsificadores ó introductores, su adquisición á sabiendas de la falsedad, y su venta con la misma circunstancia cuando hubieran sido adquiridas de buena fé (2). Análogas disposiciones contienen el código penal italiano (3), y el de la República Oriental del Uruguay (4). No obstante el diverso

(1) En este sentido, CARRARA, *Programma*, § 386o.

(2) Artículos 311, 312 y 313.

(3) Artículos 268, 269 y 270.

(4) Artículos 231, 232 y 233.





método adoptado por el Código, es indudable que la falsificación de papel sellado no puede quedar impune, pues, de que su represión cabe enteramente en la disposición del artículo 277, no deja lugar á vacilaciones la del artículo 294: “el que fabricase y el que á sabiendas introdujese al país ó conservase en su poder cuños, marcas ó cualquiera otra clase de útiles ó instrumentos conocidamente destinados á la falsificación de billetes de Banco, *papel sellado* ó documentos de crédito, será castigado etc.” Si constituye delito la introducción al país ó la conservación de los instrumentos destinados á la falsificación del papel sellado, esto es, si el acto preparatorio está penado en sí mismo ¿cómo dudar de que el hecho consumado entra en lo dispuesto por el artículo 277?

1110. En la segunda parte del mismo artículo la ley declara que se considera como falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero en documento en que sea necesario. Carrara subdivide el caso de la impresión indebida del sello verdadero en otros dos: 1º el del particular que se ha apoderado del sello verdadero para servirse de él en provecho propio; 2º el del *empleado* que *tiene* facultad de sellar, y usa los sellos en su provecho, sin dar cuenta de lo que perciba ni registrarlos.

En el primero de éstos no se tiene la falsedad en la *materia* sino en la *persona* que la usa, porque el sello es verdadero pero usado por persona que no tenía derecho á ello, sea esta un particular ó sea un empleado que no tenía en sus atribuciones la de usar los instrumentos para sellar. En este caso puede disputarse si el sello es válido ó nulo respecto de los terceros que lo usen de buena fé. En el segundo caso el sello nace *verdadero*, tanto respecto á la

materia como respecto á la persona que usa los instrumentos legales que le han sido consignados á aquel fin. Pues si dicha persona usa de tales instrumentos para una especulación particular suya haciendo torpe comercio de la fé pública que se le ha confiado, no puede decirse que cometa una falsedad, ni que con sellar abuse de su oficio. El delito no consiste en sellar sino en convertir su oficio en provecho propio, en apoderarse de lo que cobra y no dar cuenta de ello á quien debiera. Científicamente considerada, esta configuración ofrece el título de abuso de confianza ó de fraude en la administración que (tratándose de administración pública) entra espontáneamente en el delito de *peculado* (1).

1111. La cuestión de que se ocupa Carrara en los términos citados puede aparecer también en la aplicación de nuestra ley, relacionando la segunda parte del artículo 277 al 279. Según ellas el empleado que imprimiera fraudulentamente el sello verdadero en documento en que fuera necesario, incurriría en el máximo de la pena sin que el delito perdiera su calificación de falsificación de sellos. Refiriéndose el artículo al empleado en cuyas atribuciones estuviera la de usar el sello, la iminación no se fundaría en realidad en la falsificación, por la razón enunciada de no haber falsedad en la materia ni en la persona, pudiendo en cambio aparecer manifiesto el título de malversación de caudales públicos. Esta cuestión no puede tener otra solución que la que resulte de la aplicación de los principios que rigen la conexidad de delitos. “Se comprende fácilmente, dice

(1) CARRARA, *Programma*, §§ 3863 y 3864.



el autor citado, que en las contingencias de los hechos criminosos la adulteración de los sellos se conexiona con otros delitos á los cuales haya servido de medio. En semejantes combinaciones no es necesario decir que conserva su imperio la regla de la prevalencia, cuando el fin criminoso á que haya servido el sello falso hiera un derecho más importante y constituya un delito más grave (1)."

1112. Otra cuestión de que se ocupa la doctrina y que se ha presentado á la decisión de los tribunales extranjeros es la de saber si deberá considerarse también como falsificación de sellos el delito del que por procedimientos químicos hiciera desaparecer lo escrito en el documento á que se aplicó el sello, para utilizarlo en la falsificación de un documento distinto. En Francia se presentó el caso de haberse hecho desaparecer lo escrito en papel sellado y de juzgarse si el hecho debía comprenderse ó no como uso abusivo del timbre verdadero. La Corte de casación resolvió negativamente la cuestión declarando que "el artículo 141 del Código Penal no se aplica sino á la impresión de sellos sustraídos por medios ilícitos sin que pueda extenderse la disposición al doble empleo del papel revestido del timbre". Chauveau y Hélie tienen por indudable esta solución (2). La misma opinión comparte Nypels (3). Pero Groizard, discutiendo el caso en presencia del artículo 311, así con respecto al que blanqueando el sello lo expende ó escribe de nuevo en él, como respecto del que hace desaparecer de un sello ó timbre de Correos ó Telégrafos los signos

(1) *Ibidem*, § 3865.

(2) *Théorie du code pénal*, número 619.

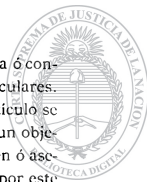
(3) *Code pénal interprété*, tomo 1º, página 441.

que lo inutilizan indicando haber servido ya para su objeto, cree que atendido el espíritu de la ley es indudable que el hecho cae bajo la responsabilidad que impone aquel artículo. “La defraudación de los intereses públicos, desde luego, existe; y existe también el dolo y la necesidad de llegar á alcanzar aquel fin reprobado mediante la práctica de ciertas operaciones, sustituyendo lo verdadero con lo falso, dando á lo nulo la apariencia de lo legítimo”. Pero agrega: “sin embargo, para alejar vacilaciones en los tribunales no estaría de más que, cuando la reforma del Código se hiciera, se penaran estos y análogos casos, siguiendo en este punto el prudente ejemplo que nos dan las legislaciones extranjeras (1).” Que la defraudación exista no hay por qué dudarlo; pero que esa defraudación sea una falsificación es menos fácil admitirlo. Sin embargo, la solución de Groizard me parece preferible á la de la jurisprudencia francesa. No hay que tener los casos propuestos como consecuencia de la disposición que declara falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero, sino como comprendido en la primera parte del artículo. Hay una imitación de la verdad al presentar como no usado antes el sello que ya ha servido: en crear un signo que acredita la satisfacción de un impuesto, valiéndose para ello de una alteración fraudulenta. Pero, pudiendo ser dudosa la solución pienso también con el mismo autor que sería conveniente una declaración expresa de la ley (2).

1113. El artículo 278 fija la pena de arresto de un mes

(1) GROIZARD, *El código penal de 1870*, tomo 3º, página 605.

(2) Así se encuentra resuelto el caso en el artículo 190 del código penal belga; en el artículo 21 de la ley francesa de 2 de Julio de 1862; en



á un año para el que falsifique sello, firma, marca ó contraseña de individuos ó establecimientos particulares. El sello, firma, marca ó contraseña á que el artículo se refiere tienen por propósito la identificación de un objeto cualquiera: es un signo que garantiza el origen ó asegura la propiedad de una cosa. La ley reconoce por este medio el derecho de los particulares para establecer una distinción especial, sea con objeto de crear una prueba de la propiedad sea con el de asegurar á otro la verdadera procedencia de un producto.

1114. Manifiéstase más comunmente el primero de los casos expuestos en la marcación y señalamiento de ganados. El Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, declara á este respecto que la marca indica y prueba acabadamente y en todas partes la propiedad del animal ú objeto que la lleva (1).

1115. El segundo caso expresado aparece en la marca que identifica los productos industriales. Pero á este respecto surge una cuestión que merece considerarse con algún detenimiento. El Código Penal, en el artículo que estudio, prevé el delito de falsificación de una marca ó contraseña de establecimiento particular. Por su parte la ley especial de 10 de Agosto de 1876, declara que son marcas de fábrica ó de comercio las denominaciones de los objetos ó los nombres de las personas bajo una forma

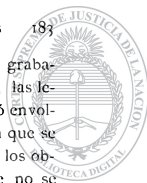
el artículo 236 del código penal de la República Oriental del Uruguay, y en el 274 del código italiano.

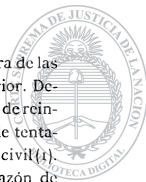
(1) Artículo 17 del Código Rural. Debe prevenirse, sin embargo, que las reglas relativas á la propiedad, forma de trasmisión, etc., pertenecen á la legislación del Código Civil, que prevalece sobre el Código Rural que no puede ser sino una ley de policía, ó régimen de la campaña, sin alterar el fondo del derecho, que es de competencia nacional.

particular, los emblemas, los monogramas, los grabados ó estampados, los sellos, viñetas y relieves, las letras y números con dibujo especial, los envases ó envoltorios de los objetos, y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica ó los objetos de un comercio (1). Declara asimismo que no se considera como marcas de fábrica ó de comercio: 1º las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba usar el Estado; 2º la forma que se dé á los productos por el fabricante; 3º el color de los productos; 4º los términos ó locuciones que hayan pasado al uso general; 5º las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos ó la clase á que pertenezcan; 6º los dibujos ó expresiones contrarias á la moral (2). El artículo 28 de la misma ley, establece que serán castigados con multa de veinte á quinientos pesos fuertes ó una prisión de quince dias á un año los que falsifiquen ó adulteren de cualquier manera una marca de fábrica ó de comercio, los que pongan sobre sus productos ó los efectos de su comercio una marca ajena; los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten á vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario; todos los que, con intención fraudulenta pongan ó hagan poner sobre una mercadería una enunciación ó cualquier otra designación falsa con relación sea á la naturaleza, cantidad, calidad, número, peso ó medida, ó al lugar ó país en el cual haya sido fabricada ó expendida; y los que á sabiendas vendan, pongan en ven-

(1) Artículo 1º.

(2) Artículo 3º.





ta, ó se presten á vender mercaderías con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el caso anterior. Declárase, además, dos reglas generales: que en caso de reincidencia las penas serán duplicadas, y que la simple tentativa no induce penalidad ni causa responsabilidad civil (1).

1116. Esta ley subsiste en todo su vigor en razón de la especialidad de la materia, y para los casos en ella previstos no podrá aplicarse otra penalidad que la que la misma determina. Pero, ¿procederá la aplicación del Código Penal en los casos de marcas no registradas? Esta cuestión tiene precedentes en la doctrina y en la jurisprudencia extranjera. “La ley francesa de 13 de Marzo de 1863 borró del código penal las palabras *ó de un establecimiento particular de fábrica ó de comercio*, del artículo 142, y las palabras *ó aun de un establecimiento particular*”. La razón de esta supresión enunciada en el informe ha sido que la ley de 23 de Junio de 1857 había reglamentado por disposiciones nuevas la incriminación y la pena de esta infracción. Pero el legislador no ha observado, agregan Chauveau y Hélie, que el artículo 142 comprendía hechos de falsificación que la ley de 23 de Junio de 1857 no había previsto. Esta ley, en efecto, no se ha ocupado de la falsificación de marcas de fábrica ó de comercio sino en los casos en que esta falsificación tenía por objeto suscitar á un comerciante ó fabricante una concurrencia desleal: había, pues, mantenido el artículo 142 respecto de toda falsificación de un establecimiento particular que no tenía el propósito de la concurrencia. La Corte de casación juzgó en consecuencia por dos fa-

(1) Artículo 28 *in fine* y artículo 30.

llos anteriores á la aplicación de la ley de 13 de Mayo de 1863 " que la ley de 1857 no había abrogado las disposiciones del artículo 142 del código penal, sino en lo que concierne á la falsificación y al uso de las marcas comprendidas en las disposiciones de la ley especial ". Parece seguirse de estos fallos y de la modificación hecha por la ley de 13 de Mayo de 1863 al artículo 142, que los hechos de falsificación de marcas de comercio á los cuales se aplicaba el artículo 142, aun después de la ley de 1857, quedan hoy sin represión. Sería un vacío sensible, puesto que se trata de un fraude que tiene el carácter de una falsedad comercial y que el artículo 142 castigaba con reclusión " (1). Con la conclusión á que llegó el legislador francés concuerda la opinión de la comisión de la Cámara de Diputados de Italia en su dictámen sobre el proyecto de código penal. " Podía dudarse, dice, si el que no ha pagado el importe de la concesión y no ha obtenido la concesión del privilegio de la marca ó signo distintivo pueda pretender la garantía especial que debe tener el que ha puesto su signo de fábrica ó de comercio ó de industria bajo la tutela de la autoridad pública. Nos parece que no, porque el signo distintivo hace fé en el comercio por la concesión pública y por la pública vigilancia bajo la cual se ha colocado; y entonces, aún admitiendo que en casos especiales puede el hecho revestir el carácter de un estelionato ó de un fraude punible, no nos parece, sin embargo que sea el caso de elevarlo á fraude público " (2).

(1) CHAUVEAU et HÉLIE, *Théorie du code pénal*, número 627.

(2) *Relazione della commissione della camera dei deputati*, etc., página 212.



1117. En la falsificación de una marca de fábrica puede verse en realidad dos órdenes distintos de derechos lesionados: los derechos del otro fabricante ó comerciante que se perjudicaría por una concurrencia desleal; y los derechos de todo comprador de los artículos falsificados ó con marca falsificada que los [adquiera en la creencia de que la marca es verdadera y garantiza el origen del producto. Es evidente que una ley de marcas de fábrica no se da sino para la protección de los primeros, esto es para garantizar los derechos del fabricante ó comerciante y no tiene en mira sino secundariamente el beneficio público. Bajo este punto de vista, la personería del fabricante ó comerciante poseedor de la marca de fábrica legítima, para quejarse de la falsificación, no nace sino del registro de la marca. En el segundo caso la falsificación constituiría el acto preparatorio de una defraudación ó de una estafa. ¿Sería punible este acto preparatorio? El artículo 14 del Código Penal declara punibles los actos preparatorios cuando constituyen una contravención, esto es, se castigan en tanto son contravención, no por ser acto preparatorio. Pero la imitación de una marca no es una contravención sinó en tanto la marca esté registrada. Luego, queda fuera de toda duda que la falsificación de una marca de fábrica ó de comercio no registrada es un hecho no punible, cualquiera que sea el aspecto en que se la considere.

1118. Hay aun una consideración más que apuntar en el sentido de la solución indicada: si ella no fuera verdadera, las marcas no registradas quedarían en mejor condición que las registradas, porque estarían protegidas contra las falsificaciones por una penalidad mayor.

Tampoco hay con la solución de que me ocupo el peligro de proteger una falsificación creando excepcionalmente una impunidad, cuando por la regla general toda falsificación queda castigada. Respecto del inventor de la marca, esta no es su propiedad sino mediante el reconocimiento del Estado. Respecto del adquirente del objeto á que se aplique la marca, no podrá verse en el engaño una defraudación ó una estafa, sino mediante la posibilidad del perjuicio ; esto es, vendiendo un objeto de inferior calidad al que se expende con la marca verdadera, pero en este caso la defraudación no estaría en la marca sino en el objeto á que se aplica.

1119. Otra cuestión importante que puede discutirse en esta materia es la de saber si las Provincias pueden establecer registros locales de marcas, en cuyo caso la sanción respectiva sería la del artículo 278 del Código Penal. De las facultades de *promover la industria* y de dictar *leyes protectoras á este fin* que la Constitución establece como concurrentes de la Nación y de las Provincias (1), podría deducirse la afirmativa en aquella cuestión, doctrina á que no han faltado sostenedores. Pero á ella obsta en primer lugar la circunstancia de estar expresamente determinada la forma en que deberá ejercerse la protección por las Provincias, y la de ser de exclusiva competencia del Congreso la legislación sobre el comercio interior y exterior. “A propósito de esta materia, dice el profesor Estrada, debo hacer notar un error que viene arraigándose en nuestras costumbres constitucionales. Diez de las constituciones de Provin-

(1) Artículo 67, inciso 16 y artículo 107 de la Constitución Nacional.



cia de la República Argentina y entre ellas la de Buenos Aires, facultan á las autoridades locales á conceder patentes de invención ó de descubrimiento. La legislación en materia mercantil es exclusiva de la Nación y conviene que así sea, porque necesita ser una, en cuanto compromete no solamente los intereses internos del país sino también sus relaciones internacionales. Por consiguiente, es contradictorio con el buen orden y la marcha regular del país que las Provincias se arroguen la facultad de dar patentes ó conceder privilegios. Una de dos: ó esos privilegios coinciden con privilegios nacionales, ó son contrarios á otros privilegios otorgados por la autoridad general. En el primer caso son insignificantes. En el segundo traban la acción legislativa y administrativa de los poderes públicos nacionales, en materia de comercio, de circulación de las mercaderías, de los productos de la industria nacional y de la extranjera importada por el comercio. De suerte que desde que las Provincias no pueden ejercer facultades concurrentemente con la Nación, cuando sea repugnante y contradictorio el ejercicio simultáneo de iguales poderes de parte de ambas entidades; siendo en este caso, repugnante y contradictoria la facultad de conceder patentes de invención ó descubrimiento de parte de la Nación y de las Provincias conjuntamente, las Provincias no tienen esta facultad, y es probable que en caso de un conflicto que sobreviniere, la autoridad judicial lo resolviera así" (1). La cuestión de las patentes de invención

(1) JOSÉ MANUEL ESTRADA, *Curso de derecho constitucional*, página 65: *Nociones de derecho federal* (notas in extenso), página 18.

ó privilegios es evidentemente la misma que la de las marcas de fábrica ó comercio, que son un privilegio. En cuanto al caso judicial que pudiera producirse, la solución no ofrece dificultad, cuando las constituciones provinciales salvan expresamente las atribuciones del gobierno general, como lo hace la de Buenos Aires (1).

1120. El artículo 279 establece como circunstancia agravante, que determina la aplicación del máximo de las penas, la calidad de empleado en el autor de los delitos de que se trata en este capítulo cuando sea *con abuso del cargo que ejerza*. Se le impone, además, la pena de inhabilitación perpetua.

(1) El artículo 99, inciso 7º, dice así: "Corresponde al poder legislativo: 7º Conceder privilegio por un tiempo limitado á los autores ó inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse sólo en la Provincia, *sin perjuicio de las atribuciones del gobierno general*".



CAPÍTULO XIV

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

(Artículos 280, 281 y 282)



1121. Delitos comprendidos en esta calificación. — 1122. Modos de falsificación de documentos previstos por la ley. — 1123. Qué debe entenderse por documentos. — 1124. Criterios esenciales de la falsificación de documentos, enunciados por la doctrina. — 1125. Primer elemento de la falsedad, alteración de la verdad. — 1126. En qué condiciones la alteración de la verdad en un documento constituye falsificación. — 1127. Modos de falsificación que importan delito según la doctrina y la legislación. — 1128. Doctrina de Bonnier sobre la falsedad intelectual en el código francés. — 1129. Opinión de Carrara sobre la misma cuestión. — 1130. Principios que concurren a la solución doctrinaria de la cuestión. — 1131. La simulación no es falsificación. — 1132. Segundo elemento de la falsedad: dolo especial. — 1133. Tercer elemento: perjuicio efectivo ó posible. — 1134. Adulteración material innócu. — 1135. Cuarto elemento, según Carrara: imitación de la verdad. — 1136. Exámen del artículo 280 del Código Penal: falsedad suplantando documento en libro ó registro en que se inscriben los de su clase. — 1137. Expedición de testimonio ó copia certificada de documento que no existe. — 1138. Alteración de documento verdadero por alguno de los modos previstos. — 1139.



Crítica al inciso 3° del artículo 280. — 1140. Interpretación que corresponde. — 1141. Alteración por supresión de una cláusula. — 1142. ¿Hay falsedad por supresión del documento? — 1143. ¿Hay falsedad intelectual según el artículo 280? — 1144. El texto no autoriza el requisito del dolo especial. — 1145. El texto no hace referencia expresa al tercer elemento enunciado: el perjuicio. Interpretación. — 1146. Criterios de gravedad: falsedad por empleado abusando de su oficio. — 1147. Falsificación de instrumento público por un particular. — 1148. Falsificación de documento privado. — 1149. Uso de documento falso. — 1150. Observación crítica al artículo 281. — 1151. Presentación en juicio de documento falso, como prueba.

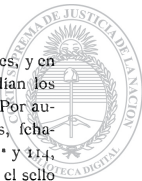
1121. El capítulo segundo, del título *De las falsedades*, comprende las disposiciones relativas á la falsificación de documentos *en general*, esto es para los casos en que no se trata de falsificación de documentos de crédito ó de falsificación de billetes de Banco, que constituyen la materia propia de los dos capítulos siguientes. Fuera de estos dos casos, el capítulo comprende los delitos de falsedad en documento público ó privado que se cometa por uno de los medios expresamente consignados en él. Si la falsificación se realizara por algún modo no especificado podría caer bajo la disposición del artículo 293, si á la vez se llenaran las condiciones determinadas por éste.

1122. Los modos por los cuales puede incurrirse en falsedad en un documento son, según la enumeración del artículo 280: 1° el de suplantar documento que no ha existido en libro ó en registro en que se inscriben los de su clase; 2° el de dar testimonio ó copia certificada de documento que no existe; 3° el de alterar documen-

tos verdaderos de alguna de las maneras siguientes: 1.^a agregando cláusulas, suprimiéndolas, variándolas sustancialmente ó borrándolas; 2.^a variando las firmas ó fechas; 3.^a suponiendo circunstancias ó fechas falsas; 4.^a ejecutando en los testimonios ó copias certificadas que se expidan por razón de oficio las alteraciones que se enumeran en las tres primeras partes que preceden. De cada una de estas circunstancias me ocuparé en particular en el curso de este capítulo, pero creo indispensable preceder el estudio especial por algunas consideraciones sobre los principios generales que rigen esta materia difícil é intrincada, como la llama Zanardelli, de la falsificación de documentos.

1123. En primer término es necesario investigar la naturaleza del objeto en que recae la falsificación. Con más exactitud que en el derecho francés, en que esta materia se denomina *falsedad en escritura*, en nuestro derecho lo mismo que en el español, el italiano, etc., se le llama *falsificación de documentos*, y los artículos del capítulo hacen invariablemente referencia á documentos, agregándose en el artículo 282 ó *certificados*, lo que no modifica en nada el término general, pues el certificado es también un documento. “Se entiende en general por documento, dice Caravantes, palabra que trae su etimología de la frase *docere mentem*, declarar ó demostrar la intención, todo escrito en que se halla consignado algún acto” (1). El documento es el medio de prueba por escrito de la existencia ó celebración del acto, ó principio de prueba del mismo. Los comentadores de las Partidas

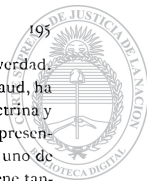
(1) CARAVANTES, *Procedimientos judiciales*, libro 2.^o, número 760.



“siguiendo el espíritu y aún la letra de estas leyes, y en especial de la ley 1ª, título 18, Partida 3ª, dividían los documentos solemnes en auténticos y públicos. Por auténticos, palabra griega que significa autorizados, fehacientes, entendían los enunciados en las leyes 1ª y 114, título 18, Partida 3ª, esto es los corroborados con el sello del rey, príncipe, arzobispo, obispo, cabildo, consejo, duque y demás personas constituidas en dignidad, con sello, ó como dice la ley 1ª de Partida citada, por persona auténtica (leyes 1ª y 114, tit. 18, Part. 3ª). Por públicos entendían los documentos ó escrituras otorgadas con las solemnidades legales ante escribano público y en que se consigna un convenio, un testamento ú otra disposición análoga: á estos documentos llama la ley 1ª de Partida citada, instrumentos, palabra que viene del verbo *instruere*, enseñar, instruir, ó del verbo *struere*, colocar en orden” (1). Según estas distinciones, *documento* sería una denominación genérica, é *instrumento* indicaría una especie. Pero estas distinciones carecen de importancia en presencia del artículo 979 del Código Civil que generaliza la acepción de la palabra *instrumentos*. Puede concluirse, pues, que por documento se entiende todo escrito que prueba ó sirve de principio de prueba de un hecho cualquiera.

1124. Los criterios esenciales de la falsificación de documentos que enuncia la doctrina son: 1º la alteración de la verdad; 2º la intención fraudulenta; 3º el perjuicio ó la posibilidad de causarlo. Carrara considera también como esencial á la existencia del delito que en

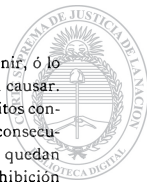
(1) *Ibidem*, número 761.



la alteración de la verdad haya imitación de la verdad.

El concurso de estos tres elementos, dice Garraud, ha sido siempre exigido rigurosamente por la doctrina y por la jurisprudencia: las dificultades no se han presentado sino en cuanto á saber en qué consiste cada uno de ellos. Pero la solución de esta última cuestión tiene tanta más importancia cuanto que en los juicios de falsedad la defensa se apoya generalmente para rechazar la acusación, en la ausencia de uno de los tres elementos clásicos de la falsedad punible. Se ha hecho notar, además, con razón, agrega el mismo autor, cuánta obscuridad sobre la verdadera naturaleza de este crimen había ocasionado la división tripartita de la falsedad punible. En efecto, la falsedad se constituye, lo mismo que las otras infracciones, por dos elementos: el *elemento material* y el *elemento intencional*. La reunión de ambos es necesaria, sin duda, pero es también suficiente. Sólo que la alteración de la verdad que constituye el elemento material de la falsedad no toma este carácter sino cuando es ó puede ser perjudicial á otro. Es lo que se quiere expresar cuando se distingue para las necesidades del análisis la alteración de la verdad, del perjuicio de que es causa. Pero sería un error creer que la posibilidad de un perjuicio sea una condición especial de la falsedad en escritura pública, un elemento característico de esta forma de incriminación: es, al contrario, una condición general y común á la mayor parte de las infracciones" (1). Esta conclusión es, á mi juicio, completamente exacta. El objeto de la incriminación de ciertos actos

(1) GARRAUD, *Traité du droit pénal français*, tomo 3º, número 109.



humanos, es de reprimir, de castigar, de prevenir, ó lo que se quiera, el mal que causan ó que pueden causar. Respecto de unos de ellos no se les tiene por delitos consumados sino cuando han producido un daño consecutivo á la acción; otros, los llamados *formales*, quedan consumados con la simple infracción de la prohibición legal, aún sin daño consecutivo. Pero en el primer caso, cuando se castiga la tentativa se castiga la posibilidad de dañar á que llegó el autor, y en el segundo la prohibición legal tiene por objeto evitar un daño. La idea de daño ó perjuicio efectuado ó posible, es inseparable de la idea de delito. Si se trata especialmente del perjuicio como elemento de la falsificación de documentos, es porque la alteración de estos puede recaer en parte que no alterará en lo mínimo su fuerza probatoria.

1125. El primero de los elementos enunciados es el de alteración de la verdad. Tan es condición esencial é ingénita á la existencia de la falsificación la alteración de la verdad que no podría concebirse aquélla sino mediante la realización de ésta. Pero, esto no obstante, es indispensable conocer en qué debe consistir la alteración de la verdad para que exista la falsificación del instrumento. “No toda falsedad que se manifieste en una escritura constituye el título de falsificación de documento, sea público ó privado. Para este fin es necesario que la escritura pueda por sí misma dañar el derecho ajeno; no basta que por un artificio posterior á la misma haya servido de *instrumento* para engañar á un tercero. Este podría bastar á la calificación de defraudación ó de estafa, pero no á la de falsificación de documentos, porque el daño no surge *directamente* del

documento falso sino de un sucesivo fraude criminoso. Si creo á cargo de Tizio una obligación á mi favor para obligar á Tizio á satisfacerla habrá una falsificación de documento. Pero si creo á mi favor una obligación de una persona imaginaria con el fin de aparecer provisto de capital, y luego con apoyo del título inservible engaño á un tercero y le hago entregar dinero, no habrá falsedad en documento sino estafa" (1).

1126. He enunciado ya que por *documento* debe entenderse todo escrito que prueba un hecho ó que sirve de principio de prueba de un hecho. La alteración de la verdad en el documento público, para que pueda constituir una falsificación tiene que modificar sus condiciones probatorias en todo ó en parte. Es con razón que Garraud dice que "lo que la ley protege contra una alteración ó una falsificación no es la *escritura*, signo sin valor por sí mismo, ni tampoco la *forma* del acto, sino la *fé* debida á la escritura y al acto. De modo que existe en toda legislación penal no solamente una afinidad estrecha sino una correlación necesaria ante el *sistema de las pruebas* y el *sistema de las falsedades*. Despojada esta idea de todo aparato científico se formula así: toda falsificación de documento supone la alteración ó la falsificación de un escrito que pueda hacer nacer una convicción contraria á la verdad en las personas á las cuales sea presentada, es decir, que pueda servir de *prueba*" (2). Yo agregaría, para mayor exactitud de esta fórmula, que la convicción contraria á la verdad que el escrito hicie-

(1) CARRARA, *Programma*, § 3466, nota 1.

(2) GARRAUD, op. cit., tomo 3º, número 118.



ra nacer, debería ser una convicción referente á *la existencia de un hecho*, y para hacerlo valer como prueba del mismo. Volvería á obscurecer la distinción esclarecida en el número anterior si aceptara sin salvedad los términos generales de la fórmula precedente. Para dejar claramente establecida en este punto la verdadera noción de la falsificación de documentos, Garraud agrega que la jurisprudencia ha rehusado atribuir el carácter de falsedad punible en varias circunstancias que se comprenden más ó menos las unas en las otras, pero que él distingue para mayor claridad en la exposición: “1° cuando el escrito falsificado ó alterado no puede ser principio del ejercicio de ningún derecho y no forma así un *título* para aquel que lo ha falsificado ó alterado; 2° cuando la falsa declaración ó la falsa mención no es de aquellas que el acto tuviera por *objeto* establecer ó constatar; 3° cuando la declaración contenida en el escrito incriminado no emana del *funcionario que hubiera sido competente*, suponiéndola exacta para constatar legalmente el hecho, ó no ha sido recibida por este funcionario; 4° cuando se han producido alteraciones en las *cuentas* sobre las cifras y los cálculos. Estando todas las cuentas y todas las memorias sujetas á verificación, las enunciaciones falsas que estén insertas en ellas no constituyen *título*.

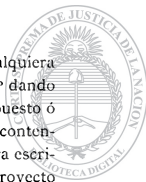
1127. Determinado sobre qué objeto debe recaer la falsificación para constituir el delito de falsedad, corresponde examinar por qué medios se ha de verificar aquella para procurar la noción completa del primer criterio esencial enunciado, alteración de la verdad. La doctrina y la legislación, en general, han reconocido que los pro-

cedimientos para llegar á la falsedad en un documento pueden consistir no solamente en una alteración material en un documento ya existente ó en la redacción material de uno falso, sino que puede llegarse á la falsificación del documento con la suposición de personas que en él deban intervenir, ó con la enunciación de cláusulas no verdaderas. De aquí, que se hable de falsificación *material*, y de falsificación *intelectual*, ó que se distinga con Carrara, en falsedad *material*, falsedad *personal* y falsedad *ideológica*. El código francés (1) y el belga (2) enuncian como medios por los cuales puede cometerse falsedad por un empleado ó funcionario público: 1º las falsas firmas; 2º la alteración de actas, escrituras ó firmas; 3º la *suposición de personas*; 4º las escrituras hechas ó intercaladas en registros ó en otros actos públicos después de su confección ó clausura; 5º desnaturalizando fraudulentamente al redactar los actos de sus funciones, la substancia ó las circunstancias, sea escribiendo convenciones distintas de las que hubieran sido trazadas ó dictadas por las partes, sea haciendo constar como verdaderos, hechos que no lo eran. En el código español (3) aparece también manifiesta la distinción de los medios por los cuales se comete falsedad: 1º contrahaciendo ó fingiendo letra, firma ó rúbrica; 2º *suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido*; 3º *atribuyendo á los que han intervenido en él declaraciones ó manifestaciones*; 4º *faltando á la verdad en la narración de los hechos*; 5º alterando las fechas verda-

(1) Artículos 145 y 146.

(2) Artículos 294 y 295.

(3) Artículo 314.



deras ; 6° haciendo en documento verdadero cualquiera alteración ó intercalación que varíe su sentido ; 7° dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto ó manifestando de ella cosa contraria de la que contenga el verdadero original ; 8° intercalando cualquiera escritura en protocolo, registro ó libro oficial. En el proyecto de la Comisión revisora se incluía también como medio de ejecutar la falsificación la suposición, en un acto, de personas que no han intervenido (1). El código de la República Oriental del Uruguay (2) y el italiano (3) adoptan esta fórmula ; “el que con perjuicio posible de tercero atestiguase falsamente en un documento autorizado por funcionario público, su identidad ó estado, ó la identidad ó estado de otra persona, ú otra circunstancia de hecho”, dice el código uruguayo, y el italiano, con mayor amplitud ó claridad : “ú otros hechos de los cuales el acto esté destinado á probar la verdad”.

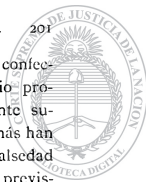
1128. Pero la falsedad intelectual ó ideológica no es admitida sin resistencia por parte de jurisconsultos distinguidos. Bonnier niega en presencia del texto del código francés, que la falsedad intelectual pueda cometerse por particulares. “Serán castigadas, dice, transcribiendo el artículo 147 del código francés, todas las personas que hayan cometido una falsedad en escritura auténtica y pública, ó en escritura de comercio ó de banco”. Ilé aquí cuál es la proposición principal del artículo. Pues bien, por falsedad en escritura pública se ha entendido siempre la falsedad cometida, bien sea por

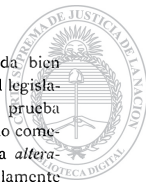
(1) Artículo 186 inciso 3°.

(2) Artículo 144.

(3) Artículo 179.

el falso redactor que desnaturaliza el escrito al confeccionarlo ó que lo altera después, ya por el falsario propiamente dicho que hace un escrito enteramente supuesto. En cuanto á las declaraciones falsas, jamás han constituido una falsedad en escritura, sino una falsedad cometida por palabras, falsedad que no se halla prevista como tal por el código penal de 1810. Sí, pues, el artículo 147 se hubiera atendido á esta proposición general que castiga la falsedad de escritura pública, no podría suscitarse ninguna duda formal sobre el sentido de la ley. Pero, por desgracia, entra en seguida en las esplanaciones siguientes: sobre la manera cómo puede cometerse la falsedad. "sea por falsificación ó alteración de las escrituras ó firmas; sea por formar convenciones, disposiciones, obligaciones ó liberaciones, ó insertarlas posteriormente en estas actas, sea por medio de adiciones ó alteraciones de cláusulas, de declaraciones de hechos que estas actas tenían por objeto consignar". Hánse apoderado de estas últimas expresiones para sostener que las declaraciones falsas, especialmente en las actas de estado civil constituyen en el día una falsedad caracterizada. Pero ¿es verosímil que el legislador, teniendo que definir la falsedad en escritura cometida por particulares, haya ido á dar por ejemplo casos en que el pretendido falsario no ha hecho más que una declaración verbal? Toda esta esplanación, ¿no se halla dominada por la proposición principal, que sólo habla de escritura. Si el último aparte del artículo 147 que habla de una *alteración de declaraciones* parece aludir á una falsedad oral, es fácil contestar que el aparte precedente habla también de formación de obligaciones; pero que lo que sigue,

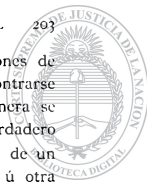




donde se trata de *inserción posterior en las actas* da bien á entender que por *obligaciones* entiende aquí el legislador, en el estilo de la práctica, la escritura que prueba las obligaciones. La misma confusión ha podido cometerse también respecto de las declaraciones, y la *alteración de estas declaraciones* parece significar sencillamente la alteración del acta que es su prueba. Véase, pues, que este equívoco lamentable sobre un punto tan esencial consiste en el abuso de lenguaje, tomado por el Código Penal á los prácticos que se inclina á confundir la prueba del hecho en el hecho mismo. Pero el sentido general del artículo 147 resulta claramente de la exposición de motivos que, después de haber distinguido respecto de los oficiales públicos, la falsedad material y la falsedad intelectual, añade que la pena no es temporal sino del simple particular, *falsificador de escrituras auténticas*. Trátase, pues, de una falsificación, de una falsedad material, y no de una simple falacia" (1).

1129. En el terreno de la doctrina pura, Carrara niega que la falsedad puramente ideológica constituya por regla general el grave título de falsificación de documento público. "Que no se falsifiquen los documentos públicos en todas aquellas condiciones que les dan su existencia de documentos públicos es cosa que interesa á todos los ciudadanos; y así con tal falsedad se ofende un derecho universal y el delito encuentra su objetivo jurídico en la *fé pública*, la que requiere el respeto de las *formas solemnes* introducidas en mira de orden público

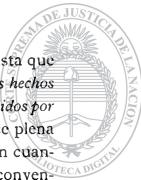
(1) BONNIER, *Tratado de las pruebas*, traducción de Caravantes, número 532. En contra, la generalidad de los escritores franceses y la jurisprudencia de la Corte de Casación.



para asegurar las convenciones y las disposiciones de los ciudadanos. Pero en verdad no podría encontrarse qué derecho universal se ofenda, ni de qué manera se ofenda la fé pública cuando en un contrato verdadero se haya declarado la pertenencia ó la libertad de un fundo, ó la ejecución de un hecho obligatorio, ú otra cosa semejante. Podrán estas observaciones embusteras ser dolosamente dirigidas al daño ajeno y podrá en ciertos casos el daño mismo acompañarse por tales circunstancias que hagan sufrir un mal inmediato y obliguen al legislador á erigir la mentira en delito. Pero el delito (cualquiera que sea el título que asuma), será siempre un delito de daño *particular*, ofensivo solamente de la fé *privada*, y en consecuencia quedará en las proporciones del delito natural, juzgable con el criterio del daño directamente inferido al particular" (1).

1130. Para la solución doctrinaria de la cuestión es, á mi juicio, indispensable tener bien presentes dos principios ya enunciados en el curso de esta exposición: 1º el de subordinación inmediata del sistema de las falsificaciones en el derecho penal al sistema de las pruebas en los procedimientos; 2º el de que no hay documento sino en tanto que haya un escrito que *pruebe* ó sirva de *principio de prueba* de un hecho ó acto jurídico. No habrá, según esto, falsificación de instrumento público aun cuando se consigne en un instrumento público una mentira sobre una circunstancia que el documento no probará. Conforme á los principios del dere-

(1) *Programma*, § 366o.



cho civil, el instrumento público hace plena fè hasta que sea argüido de falso, *de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por el mismo ó que han pasado en su presencia* (1); hace plena fè, no sólo entre las partes sino contra terceros en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimiento, etc., contenidos en ellos, entendiéndose siempre que es de aquellas cosas de que el oficial público ha adquirido certidumbre por sí mismo y que tenga misión de comprobar (2). Las condiciones probatorias del instrumento privado son mucho más limitadas que las del instrumento público: su fuerza probatoria depende del reconocimiento judicial de la parte á quien se opone y no alcanza á terceros (3). El instrumento público es, pues, una prueba plena de lo que pasó ante el oficial público, y vale contra todos: el instrumento privado es también una prueba plena contra el que lo reconoció y sus sucesores. Cuando un oficial público asegura que ante él se declaró tal cosa ¿qué es lo que queda plenamente probado? ¿el *hecho* declarado ó el acto de la declaración? Me parece que es manifiestamente lo último. Una mentira no adquiere el sello de una solemne verdad por la mera circunstancia de haber sido proferida ante un funcionario público que la asienta en un registro. El vendedor que declara falsamente la existencia de una servidumbre en favor del predio que vende, *defraudará* al comprador atribuyendo á la cosa vendida condiciones

(1) Código Civil, artículo 993.

(2) Artículo 994 y su nota.

(3) Artículo 1026.



que notiene, pero *no falsificará la escritura*. Esta continuará verdadera, á pesar de la mentira que consignó en ella el vendedor, porque ese documento nada prueba sobre la existencia de la servidumbre, que es lo falso. No sería lo mismo si el oficial público asegurara que en su presencia ocurrió la entrega del precio de la compra siendo falso el hecho; porque el documento estaba expresamente destinado á hacer prueba plena sobre aquella circunstancia.

1131. Consecuencia de estos principios es que aun los que aceptan con mayor convicción el título de falsificación de documentos en el caso de la falsedad ideológica, no lo atribuyan al caso de simulación. Chauveau y Hélie fundan su decisión en que los artículos 145, 146 y 147 establecen “dos hipótesis principales en que las otras vienen á confundirse: la falsedad material que consiste en la alteración de las escrituras ó firmas y la falsedad intelectual que consiste en la alteración de las convenciones que las partes han querido suscribir. La simulación no puede entrar en una ni en otra de esas hipótesis: en la primera, porque las escrituras y firmas emanan verdaderamente de las partes que han contraído; en la segunda, porque las escrituras simuladas son las que las partes han trazado ó dictado. Hay en este acto una evidente alteración de la verdad: encierra enunciaciones embusteras; tiene el sello del fraude. Pero esta alteración no puede servir de elemento á la falsedad criminal, porque ella no tiene el carácter moral que constituye este crimen, porque no está comprendida en ninguno de los casos enumerados por la ley” (1).

(1) *Théorie du code pénal*, número 651.



Garraud sostiene también que la simulación no se comprende en la falsificación, pero piensa que el razonamiento de Chauveau y Hélie no es convincente. Deteniéndose en la interpretación literal de la ley, dice, la simulación de una cláusula en un acto, en perjuicio de tercero, entra perfectamente en los términos de los artículos 143 y siguientes: ¿quién no vé en ella una fabricación de convenciones, obligación ó descargo? El verdadero argumento para decidir que la simulación hecha con interés de dañar á otro no es una faz del crimen de falsedad está sacado de los textos de las leyes civiles y fiscales que nos muestran al legislador dando otra sanción que la criminal á las hipótesis de simulación que prevé. Y la razón de esta misma distinción la da Rauter: "si fuera necesario castigar todas las violaciones de la verdad ó todas las infracciones al derecho ajeno cometidas por medio de la alteración de la verdad, no se concluiría jamás y excedería en vejaciones contra los habitantes del país, de modo que el fin de la ley penal quedaría falseado" (1). La sanción á que se refiere es la de nulidad del acto que pronuncia el código civil (2). Pero este sistema no me parece lógico en la doctrina de la falsedad intelectual que sostienen los escritores franceses; y guarda más consecuencia con tal doctrina la conclusión de Blanche, citado por el mismo Garraud, de que la simulación fraudulenta incurre siempre en las penas de la falsedad á menos que leyes especiales no hayan pronunciado contra ella penas diferentes.

(1) GARRAUD, *Traité du droit pénal français*, tomo 3º, número 130, nota 34.

(2) *Ibidem*, número 128.

1132. El segundo elemento que se enuncia como constitutivo ó esencial en el delito de falsificación es el *dolo*. Pero, ¿acaso no es el dolo una circunstancia esencial á la existencia de todos los delitos? ¿No es la voluntad criminal una presunción que acompaña á la ejecución de todos los hechos penados por la ley? “En la mayor parte de las infracciones el elemento necesario de la criminalidad, la *intención*, consiste únicamente en *saber* que el acto que se va á cometer es ilegal y en *querer*, sin embargo, ejecutarlo. ¿Ha obrado el acusado consciente y voluntariamente? Esto basta para engendrar su responsabilidad. Desde que se ha hecho esta constatación hay *dolo*, cualquiera que sea el fin del agente, el móvil á que ha obedecido, su *intención indirecta*. Pero por excepción hay delitos de una naturaleza particular: no basta que el agente los haya cometido con ciencia y voluntad: es necesario que haya sido determinado por cierto móvil. Además del dolo que algunos criminalistas llaman *dolo general*, siempre necesario para que el hecho sea punible, si se trata de un delito intencional, hay un dolo especial resultante del fin perseguido por el criminal. La falsedad pertenece á la categoría de las infracciones que exigen en el agente una *intención determinada*: no basta para que la falsedad sea punible que la alteración de la verdad haya sido cometida consciente y voluntariamente: es necesario que haya sido cometida con una voluntad especial (1). En el derecho francés, el dolo especial está expresamente requerido para la falsificación en el artículo 146 del código penal, pero en el artículo

(1) *Ibidem*, numero 344.



145 que se refiere á la falsedad material del documento el texto no lo requiere expresamente. No necesitan los intérpretes que el texto se lo diga de esa manera. Contra Rossi (1) que no vé que el artículo 145 del código francés requiera sino un dolo objetivo, y el 146 un dolo subjetivo, se pronuncian Chauveau y Hélie (2) que no ven por qué en uno ó en otro caso el valor de los elementos de la falsedad intelectual sería diferente. “¿Por qué motivo se presumiría de derecho el fraude cuando un oficial de justicia, por ejemplo, hubiera agregado después de terminado un acto alguna palabra olvidada, completamente indiferente, ó que un escribano hubiera inserto una enunciación de la misma naturaleza en un registro cerrado? En estas dos hipótesis y en una multitud de otras, el dolo no resulta del hecho mismo, *non se habet in rem ipsam*; no está necesariamente ligado al hecho material de la alteración. No basta, pues, saber que un funcionario ha cometido voluntariamente una falsedad para procesarlo por este crimen: es preciso investigar por las circunstancias particulares, si ha cometido esta falsedad con un pensamiento fraudulento”.

Sobre esta cuestión con relación á nuestro texto legal, volveré al estudiar en detalle las disposiciones del artículo 280.

1133. La tercera condición de la existencia de la falsedad de instrumento público imputable como delito es la de que el documento falsificado cause perjuicio efectiva ó potencialmente. Dije antes que una razón de la

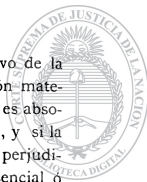
(1) *Traité du droit pénal*, libro 2, capítulo xxiv, 5°.

(2) Op. cit. número 662.

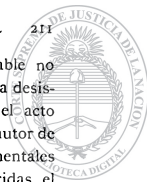
pena era el daño, el mal que se causara ó se pudiera causar; que la idea de delito era inseparable de la de perjuicio. La razón no concibe sino como un acto de tiranía la imposición de una pena donde no haya ni remota posibilidad de perjuicio. Aún en los delitos formales en que la infracción se consuma con la mera transgresión de la ley sin daño consecutivo á la acción, la prohibición legal tiene en mira evitar un perjuicio. Todos los hechos que la ley reprime causan un daño ó tienen la posibilidad de causarlo. Toda herida y toda rebelión, todo robo y toda injuria van acompañados de la presunción de voluntad criminal. ¿Por qué acompañaría la misma presunción á toda alteración en un documento? ¿No podría la aclaración tener por objeto expresar en términos más claros la verdad? ¿No podría ser manifiestamente y absolutamente innócua? Carrara refiere un caso práctico de adulteración de una letra de cambio que el tribunal dejó impune. Dos negociantes habían firmado una letra de cambio sin agregar á la misma la cláusula de solidaridad. El tenedor de la letra, conociendo que la fortuna de uno de los deudores disminuía, y temiendo perder la mitad de su crédito, agregó con mano hábil sobre la letra la cláusula de *mancomun é insolidum*. Descubierto el fraude, el Tribunal consideró que la solidaridad entre varios comerciantes firmantes de una letra nacía de la ley: que en consecuencia, la alteración, aunque hecha con un fin reprobado, no agregaba nada á la obligación primitiva, por lo que no había producido ni podido producir daño alguno á los firmantes (1).

(1) *Programma*, § 3681.





1134. Una cuestión que se discute con motivo de la precedente, es la de distinguir si la adulteración material ha sido cometida en actos cuya innocuidad es absoluta, aun cuando no fueran tachados de falsos, y si la alteración se ha referido á actos que serían perjudiciales si la omisión imprevista de una forma esencial ó la incapacidad relativa de uno de los firmantes no importara la nulidad. En el primer caso es evidente, dicen Chauveau y Hélie, que falta al crimen uno de sus elementos esenciales y la aplicación de esta regla no da lugar á ninguna dificultad, habiéndola reconocido la Corte de Casación en diversos casos. En el segundo es necesario distinguir entre los actos nulos en su principio que son afectados de un vicio radical y los que, válidos en el momento de su redacción son afectados de nulidad por la omisión de formas de que la ley ha querido que estuvieran revestidos. Los primeros no pueden ser la base de una falsedad punible, puesto que debe presumirse que en ningún caso pueden producir perjuicio. Tal es la falsa aceptación de una letra atribuida á un menor, que aunque no fuera tachada de falsa no tendría ningún efecto civil, el vicio sería inherente á su principio; el agente ha hecho un acto inútil y sin fuerza y este acto no puede constituir el crimen de falsedad. Si la nulidad toma su origen en las formas posteriores á la redacción del acto, debe distinguirse aun si esta nulidad proviene del hecho del agente ó si es independiente de su voluntad. Si un notario después de haber redactado una falsa convención no la ha hecho firmar por testigos instrumentales, debe presumirse que el autor de la falsedad ha renunciado á su empresa, su acción



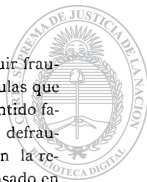
no consiste más que en un pensamiento culpable no seguido de ejecución, una tentativa de la cual ha desistido voluntariamente el autor. Si, al contrario, el acto debe su nulidad á una circunstancia extraña al autor de la falsedad, como si uno de los testigos instrumentales no ha firmado ó no tenía las condiciones requeridas, el acto, aun tachado de nulidad puede ser objeto de una acción criminal, pero considerándola como una tentativa de falsedad que no se ha consumado por una circunstancia independiente de la voluntad del autor (1).

1135. La circunstancia de *imitación de la verdad*, que enuncia Carrara como criterio esencial de la falsedad, no es generalmente tenida por tal. Bien considerada, debe reputársela absorbida en la de potencialidad de causar perjuicio. Una falsedad no puede causar perjuicio sino en tanto presente alguna vestidura que le de apariencia de verdad. Cuando fuera absolutamente imposible, por el grado remoto de imitación que alguien pudiera tomar por verdadero el documento falsificado, parece que la posibilidad del daño desaparecería; lo que demuestra que un criterio queda absorbido por el otro.

1136. Expuestos sucintamente algunos principios de los desarrollados extensamente por los escritores de esta materia, examinaré en detalle las disposiciones del capítulo del Código Penal de que me ocupo.

Se comete falsedad en un documento, dice el artículo 280: “1º *suplantando documento que no ha existido en libro ó registro en que se inscriben los de su clase*”.

(1) *Théorie du code pénal*, 678.



Suplantar, significa en un sentido propio, sustituir fraudulentamente en algún escrito voces ó cláusulas que alteren el sentido que antes tenían, y en un sentido familiar, ocupar con malas artes el lugar de *otro*, defraudándole en el empleo ó favor de que gozaba. En la redacción del inciso 1º el verbo suplantar no está usado en ninguno de los dos sentidos que le atribuyen los léxicos. En la segunda de las acepciones la acción del verbo recae siempre sobre una persona. En la primera, no se podría *suplantar un documento que* no ha existido, porque la primera condición de posibilidad de suplantación es que el documento mismo exista. Creo innecesario repetir cuán inconveniente es el uso de palabras impropias en la redacción de las leyes. ¿Qué ha querido decir el legislador al prever el caso de que se *suplante* un documento que no existe? Del contexto general de la disposición puede presumirse. Ha querido suponer el caso de que un instrumento falso fuera agregado, inscripto ó intercalado en libro ó registro en que se inscriben los documentos verdaderos del mismo género; esto es, lo mismo que en el código español se lee en estos términos: “intercalando cualquiera escritura en protocolo, registro ó libro oficial”. Se trataría de la falsedad por *creación* de un documento falsificado todo él, fuera un contrato, testamento ó cualquier otro semejante.

1137. Es de la misma naturaleza la falsedad á que se refiere el inciso 2º del mismo artículo: dando testimonio ó copia certificada de documento que no existe. Se trata también de falsificación por creación de todo un documento falso. La agregación, supresión ó variación en el testimonio de una cláusula que no se encuentra en el

original está comprendida entre las disposiciones del inciso 3º.

1138. La tercera forma de cometer la falsificación de un documento es la enunciada en el inciso 3º del artículo 280: la alteración de documentos verdaderos por alguno de los cuatro modos enumerados en el mismo. “Hay falsedad por *alteración* cuando el documento verdadero se *transforma* materialmente en alguna de sus partes, ó con quitar alguna cifra ó palabra, de modo que el documento venga á expresar y comprobar cosas diversas de las que comprobaba y expresaba su primitivo estado. Sobre esto no hay divergencias ni dudas. Todos reconocen en esta hipótesis una falsedad material por alteración, que en nada difiere ni en gravedad ni en importancia de la falsedad por falsificación de un documento. Tanto vale haber hecho por entero un contrato falso como haber agregado ó mudado una cifra, una palabra ó una cláusula en un contrato verdadero” (1).

1139. Nadie puede dudar, en efecto, de que la falsificación se cometa por tales modos. Pero ¿estará todo esto expresado de una manera suficientemente clara y precisa en el texto del inciso de que me ocupo? Creo que no, y pienso, al contrario, que habrá pocos artículos en el Código que se presten á interpretaciones más variadas. Se ha visto ya con qué impropiedad está redactado el inciso 1º; véase ahora las dificultades de interpretación á que se presta el tercero.

La primera parte del inciso presupone la existencia de

(1) CARRARA, *Programma*, § 3650.





un documento verdadero en el cual se haya causado una *alteración*, esto es, que se haya modificado lo ya hecho. Uno de los modos de la alteración es el de *agregar cláusulas*, otro el de *variarlas substancialmente*, otro el de *suprimirlas*, otro el de *borrarlas*. En cuanto á agregar, suprimir ó borrar cláusulas, no importa, según el texto legal, que éstas sean ó no substanciales, y esto resulta más manifiesto cuando en el caso de variarlas exige que sea en parte substancial. El escribano que borra de una escritura pública la nacionalidad de los testigos del instrumento, ó que la agrega, tendría la misma pena que el que suprimiera de un testamento la cláusula en que se contenía un legado. No necesita esto mayor insistencia. La ley debió expresar que lo substancial se refería al caso de cualquiera alteración, á cuya conclusión podría aún llegarse si no hubiera usado la palabra en ningún caso, porque entonces se comprendería que para que existiera una falsedad por alteración era necesario un cambio de sentido. En este punto la redacción del código español no origina dudas: “*haciendo en documento verdadero cualquiera alteración ó intercalación que varíe su sentido*” (1).

1140. Pero me parece indispensable de todas maneras llegar á una interpretación análoga á la de la letra citada del código español, porque la injusticia y el absurdo no son ni pueden ser el propósito de la ley. “Tanto puede llamarse *creado* el documento, dice Carrara, cuando se ha intercalado falsamente un documento falso, como cuando se ha dado una copia ó certificado autén-

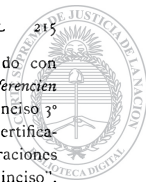
(1) Artículo 314, inciso 7°.

tico de un original, transformando el contenido con *agregados, supresiones ó modificaciones que lo diferencien del texto genuino*" (1). La cláusula 4ª de nuestro inciso 3º dice: "ejecutando en los testimonios ó copias certificadas que se expidan por razón de oficio, las alteraciones que se enumeran en las tres primeras partes del inciso", esto es, aún una agregación ó supresión en cláusula no substancial ó indiferente. Pero sobre esta interpretación directa creería yo procedente una más racional. No puede haber falsedad sin mutación de la verdad: donde ésta pueda subsistir inalterable á pesar de alguna diferencia en la copia no podrá imputarse el delito de falsificación porque sería penar la mentira que no menoscaba la verdad. Una sentencia del Tribunal Supremo de España ha juzgado que no constituía delito de falsedad la agregación en la primera copia de una escritura de las palabras "Ante mí, don fulano de tal, Notario", que no estaban en la matriz, siendo por otra parte un hecho cierto que dicha primera copia se libró ante el propio notario y que ante el mismo se otorgó la escritura de que se trataba (2).

1141. En cuanto á la alteración por supresión de una cláusula, conviene tener presente las decisiones de los antiguos jurisconsultos y de la jurisprudencia francesa. "La obliteración de una cláusula en un acto no es un elemento suficiente de falsedad si la cláusula borrada á medias queda aun legible y por consecuencia existente, pues la verdad no ha sido alterada; la voluntad del cri-

(1) Op. cit., § 3649.

(2) VIADA, *Código penal*, etc., suplemento 2º, página 208.





men se ha manifestado en un ensayo preparatorio y no se ha realizado: una acusación de falsedad no hubiera tenido por base este hecho. Pero tendría una base seria si una disposición del acto hubiera sido borrada raspándola ó suprimida por dilaceración, pues esta supresión es una alteración del acto, á no ser que la cláusula fuera extrínseca al acto y que su supresión no fuera perjudicial" (1).

1142. Carrara sostiene una forma más de alteración material de la verdad para llegar á la falsedad: la de supresión del documento. "¿Cuál es, en efecto, se pregunta, el genuino concepto de esta forma de delincuencia? ¿Acaso el hurto? No; porque el documento no tiene valor intrínseco con que se quiera enriquecerse, á no ser que se tratara de un antiguo pergamino ó de un billete al portador, en cuyas hipótesis sería admisible que el sustractor cobrara la pieza como cosa que tuviera valor en sí misma y procedería la calificación ordinaria de hurto. ¿Acaso el fraude? No; porque no se supone que el documento se haya detraído con artificios ó engaños. ¿Acaso la estafa? No; porque no se supone la supresión de un documento fiduciariamente confiado para un uso determinado. El fin del agente es ocultar la verdad para hacer prevalecer sobre ella la falsedad: hacer aparecer que el acreedor no es acreedor, que el propietario no es propietario, que el hijo no es hijo, etc. El fin es el mismo de aquel que en el escrito borra una cifra ó suprime una línea, y tanto vale que á este fin se llegue cortando un pedazo de hoja ó quemándola toda. El ob-

(1) Citas de CHAUVEAU et HÉLIE, *Théorie du code pénal*, número 642.

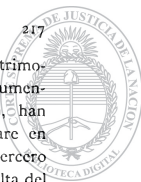
jetivo del delito podrá no ser siempre un daño patrimonial, pero habría siempre ofensa á la verdad documental" (1). El código uruguayo (2) y el italiano (3), han consignado en la ley esta doctrina: el que ocultare en todo ó en parte, dicen, con perjuicio posible de tercero un documento original ó su copia fehaciente, á falta del mismo, será castigado, etc. Nuestro artículo 203, inciso 14, considera el hecho de que se trata como una defraudación, y no obstante las autoridades citadas no me parece absolutamente equivocada la clasificación. Hablándose de falsificación de un documento surge inmediatamente la idea de la existencia del documento en una forma distinta de la primitiva ó verdadera, y por eso puede explicarse que haya falsificación en la supresión de una cláusula y no la haya en la de todo el documento.

1143. El punto del artículo 280 en que se suscitarán las mayores dudas es el de determinar si la ley ha querido penar también la falsedad *intelectual* ó *ideológica* ó si castiga solamente la falsedad *material*. Con excepción de la cláusula 3ª, del inciso 3º, ninguna duda puede haber de que sólo se trata de la falsedad material. Pero dicha cláusula dice: "*suponiendo* circunstancias ó fechas falsas", y enunciado esto como medio de *alterar un documento verdadero* no puede imaginarse de qué manera se supondría una circunstancia falsa que no fuera por la agregación ó variación de una cláusula, lo que estaría ya dicho en el sub-inciso 1º; ni puede imaginarse de qué manera se supondría una fecha falsa, que no fuera

(1) CARRARA, *Programma*, § 2377.

(2) Artículo 248.

(3) Artículo 283.





variando la fecha verdadera, lo que ya estaría dicho en el sub-inciso 2°. El hecho de suponer circunstancias ó fechas falsas importaría indudablemente una falsedad ideológica si no estuviera relacionada al encabezamiento del inciso; pero no siendo aquel un medio de alteración material, por estar todos los medios de falsedad material previstos ya, habría que admitir que la intención del legislador ha sido referirse á la falsedad intelectual.

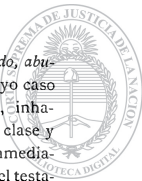
1144. ¿ Requiere la ley un *dolo especial* para la imputabilidad del delito de falsificación de documentos? Nada hay en la ley que autorice una contestación afirmativa. La presunción de dolo establecida por el artículo 6° rige también para este delito, no obstante las consideraciones doctrinarias ya expuestas en números anteriores. Para comprenderse que esto no es justo, basta lo dicho en su lugar respectivo, pero la ley no da asidero á otra interpretación. Los peligros de la interpretación quedan, sin embargo, atenuados por la desidia de las autoridades en formar procesos por las frecuentes alteraciones de instrumentos públicos, hechas manifestamente sin propósito doloso, de lo que resulta que contra la interpretación estricta del texto se da á la ley una aplicación justa y racional, como si en aquél se contuviera una salvedad expresa.

1145. Lo mismo hay que decir del otro elemento del delito de falsedad reconocido en la exposición doctrinaria: el perjuicio. Nada indica en el texto de la ley que sea esta una condición esencial á la existencia del delito de falsedad. El no enuncia, como el artículo 275 del código penal italiano que sea necesario que de la alteración de la verdad se derive ó pueda derivarse un daño

público ó privado. Sin embargo de esto, es tan esencial á la existencia del delito que haya daño ó posibilidad de daño para la infracción de la ley penal como que haya un dolo especial en la falsedad, que el Tribunal Supremo de España casó una sentencia en que se imponía catorce años, ocho meses y un día de cadena á un Secretario de Juzgado Municipal que dirigió una nota á un Juez de Instrucción firmándola con el nombre del Juez Municipal suplente encargado del Juzgado en la que pedia algunos pliegos de papel de oficio para actuaciones y manifestaba al propio tiempo su extrañeza de no haber sido suspendido de su cargo el Juez Municipal propietario. El Tribunal Supremo consideró que el elemento de la voluntad que, segun el código, ha de concurrir en las acciones y omisiones penadas por la ley como delitos ó faltas, implica la malicia ó intención de causar un mal ó daño cualquiera, adecuado y en relación con la índole del hecho punible, y que sin dicha malicia ó intención falta la condición interna y más esencial del delito, siquiera aparezca revestido de las circunstancias que puedan servir para su clasificación ó calificación externa; y que, limitada aquella comunicación á los objetos indicados, no se descubría en ella ninguna clase de malicia ó intento criminal que pudiera dar vida á la falsedad, por lo que por faltar dicho elemento, el hecho no reunía todas las condiciones necesarias para poder calificarlo como delito (1).

1146. El artículo 281 enuncia los criterios de gravedad del delito de falsificación de documentos. Es el primero

(1) VIADA, op. cit., Suplemento 3º, página 239.



el de que el delito haya sido cometido por *empleado, abusando de su oficio*, y en documento público, en cuyo caso fija las penas de tres á seis años de penitenciaría, inhabilitación perpetua para empleos de la misma clase y multa de doscientos á dos mil pesos. “El daño inmediato será siempre el mismo tanto si el contrato ó el testamento fueron falsificados por un particular como si lo fueron por un escribano; pero el daño mediato varía notablemente, porque es mayor la alarma que excita en el público la noticia de que el que ejerce una profesión de tanta confianza haya cometido una falsedad. Y se dice *abusando de su oficio* porque se comprende que cesan las razones de la agravación siempre que el oficial público haya cometido la falsedad en un acto extraño á su ministerio. El escribano que falsifica el testamento hecho por otro escribano; el escribano que falsifica un documento del archivo; el archivero que falsifica un contrato notarial y otros semejantes, aunque en la opinión pública encuentren mercedamente una abominación mayor, no puede decirse que den vida á un delito mayor. No obraron sino como particulares puesto que al delito no sirvió de *medio* el abuso de su oficio y de la confianza personal” (1).

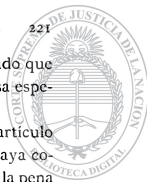
1147. El segundo criterio de gravedad que indica el artículo 281 es el de que el delito de falsificación de instrumento público haya sido cometido por un particular, en cuyo caso impone la pena de uno á tres años de prisión, inhabilitación por doble tiempo y multa de cien á mil pesos. Este caso es propiamente el caso común ú

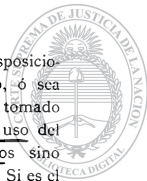
(1) CARRERA, op. cit., §§ 3707 y 3708.

ordinario, viniendo á ser la calidad de empleado que abusa de su oficio, en el caso anterior, una causa especial de agravación.

1148. La tercera circunstancia que el mismo artículo tiene en cuenta es la de que la falsificación se haya cometido en un instrumento privado, en cuyo caso la pena señalada es la de arresto por un mes á un año y multa de cincuenta á quinientos pesos. Se entiende claramente que la falsificación de documento privado á que esta parte del artículo se refiere es la que se hubiera cometido por alguno de los medios enunciados en el artículo 280, de los cuales sólo serían pasibles los enunciados en los sub-incisos 1º, 2º y 3º del inciso 3º, pues los demás del artículo se refieren manifiestamente á los instrumentos públicos. Nótese para esta interpretación que en el artículo 281 se dice: "si se cometiese la falsificación en documento privado", en cuyo caso el artículo determinante importa una referencia directa á la falsedad ya definida en el artículo 280. En el código español el artículo 318 que pena la falsificación de instrumentos privados la refiere expresamente á los modos de falsedad enumerados en el artículo 314, que define la falsedad en instrumentos públicos.

1149. El artículo 282 impone la pena de seis meses á un año de arresto y multa de veinte á cien pesos al que á sabiendas haga uso de un documento ó certificado falso ó de uno verdadero expedido para otra persona, cuyo nombre asume ó sustituye con el suyo. Si el documento falso fuere presentado en juicio, agrega el artículo, la pena será de prisión de uno á tres años y multa de cien á mil pesos.





Puede observarse, desde luego, que estas disposiciones se refieren al que no falsificó el documento, ó sea al que usa el documento falsificado sin haber tomado parte en la falsificación. La falsificación y el uso del documento falsificado no son delitos distintos sino cuando son cometidos por distintas personas. Si es el falsificador mismo el que usa el documento falsificado no hace con el uso sino terminar su propósito criminal, desde que una falsificación para no hacer de ella uso alguno no podría por lo general tenerse como delito. Es por estas circunstancias que el código español usa estos términos para análoga prescripción: “el que *sin haber tomado parte en la falsificación,* presentare en juicio ó hiciere uso, etc.” (1). Este artículo se refiere á la presentación ó uso de documentos privados. En el artículo 316 del mismo Código que se refiere á la presentación ó uso de documentos públicos, no se usa los mismos términos; pero á este respecto piensa Viada que “aunque el artículo no lo dice, debe entenderse que su disposición, al igual que la del artículo 319 es sólo aplicable *al que no ha tomado parte* en la falsedad del documento ni como autor ni como cómplice” (2).

1150. En nuestro artículo no se ha observado que la gravedad del uso de un documento falsificado debiera subordinarse al criterio de gravedad de la falsificación misma. Si se pensó con razón que la falsificación de un instrumento público era un delito de mucha mayor entidad que la falsificación de un documento privado y se

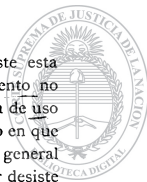
(1) Artículo 319.

(2) *El código penal, etc.*, página 377.

les fijó penas relativas á dicha gravedad, igual criterio debiera dominar en cuanto al uso á sabiendas del documento falsificado. Mayor peligro hay en el primer caso que en el segundo y con mayor seguridad de éxito obra el que presenta el primer documento que el que presenta el segundo. Esto es lo que se ha tenido precisamente en cuenta en el código español, proporcionándose las penas del delito de uso ó presentación de documentos falsificados á las de la falsificación misma (1).

1151. La presentación en juicio, como prueba, de documentos falsos, se relaciona directamente con las prescripciones admitidas ordinariamente por nuestros códigos de procedimientos. El de la Provincia de Buenos Aires, vigente aún en la Capital Federal, dispone que argüido de falso un documento presentado en juicio, “reunidos los litigantes el día señalado, el juez intimará al que hubiere presentado el documento redargüido que declare si insiste ó no en servirse de él. Si rehusase responder ó dijese que no trata de hacer valer el documento, éste será desechado del proceso”. La cuestión es esta: ¿se hace uso del documento falso cuando ha sido *presentado* como prueba ó cuando ha sido admitido como prueba? En la discusión del código italiano, la Comisión de la Cámara de Diputados sostenía lo último. “La producción en juicio de un documento falso, decía, es una *prueba*. La *prueba* no tiene tal carácter, sino cuando haya sido aceptada por el Juez sin oposición de

(1) Artículos 316 y 319. Igual distinción hace el artículo 281 del código penal italiano.



la parte contra quien se produjo. Si acaso existe esta oposición, la producción en juicio del documento no puede ser considerada sino como una tentativa de uso ó un principio de acción para usarlo en el caso en que la falsedad fuera indiscutible. Ahora, es regla general que la tentativa no se castiga cuando su autor desiste voluntariamente. Cuando el productor del documento declara *desistir de hacer uso del documento* se encuentra en el caso de quien revoca un falso testimonio en juicio, el cual por efecto de la retractación no es punible." Invoca la Comisión en el mismo sentido la opinión de Carrara para oponerla al fundamento contrario de Zarnardelli, que el desistimiento en presencia de una intimación dejaba de ser voluntario y el hecho no perdía su carácter doloso (1). La solución de esta cuestión según nuestro artículo 282 es independiente de las prescripciones del código de procedimientos. El delito no se comete con solo presentar un documento falso, sino con tener, al hacerlo, conocimiento de la falsedad. Sólo teniendo la semi-plena prueba de este conocimiento podría procederse contra el autor de la presentación. La investigación de estos indicios no corresponde á los jueces civiles, que sólo pueden pasar los antecedentes al Juzgado del Crimen cuando en las *diligencias de comprobación* de la falsedad aparecieren indicios de falsedad (2), y esas diligencias de comprobación sólo tienen lugar cuando se ha insistido en hacer uso del documento tachado de falso.

(1) Véase la *Relazione VILLA*, página 201.

(2) *Código de Procedimientos*, artículo 160.

CAPÍTULO XV

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO

(Artículos 283 y 284)



1152. Delitos previstos bajo esta calificación.—1153. Su relación con la falsificación de documentos en general y con la falsificación de billetes de Banco.—1154. Necesidad de distinguir entre los títulos *al portador*, y los títulos *nominativos*.—1155. Grave omisión del Código respecto de los títulos que no son de deuda pública, emitidos con autorización del Gobierno.—1156. Tal falsificación tampoco está comprendida en la de billetes de Banco.—1157. Tampoco lo está en la falsificación de documentos en general.—1158. Delito del que se encarga de expender títulos falsos *fabricados*. No hay motivo para no castigar al que se encarga de expender títulos falsos por *alteración*.—1159. La ley castiga como delito consumado la aceptación del mandato de expender. Crítica.—1160. Expendición por el que no se ha encargado de expender, ni ha introducido, ni falsificado.—1161. Fabricación consistente en borrar el signo de anulación de un documento.—1162. La misma cuestión en el texto de la ley.—1163. Casos previstos de falsificación por alteración.—1164. Examen y crítica del inciso 3º del artículo 283.—1165. Penalidad y criterios de gravedad.

1152. Bajo la calificación de *falsificación de documentos de crédito* el Código prevé: 1º el delito del que fabrica y el del que introduce á sabiendas en el país, falsos tí-

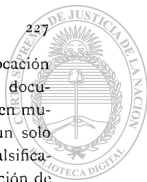


tulos de la deuda pública de una Provincia ó Municipalidad, ó se encarga de expenderlos, y letras ó libranzas de Gobiernos, oficinas de hacienda provincial ó municipal; 2º el del que altera documentos verdaderos aumentando la cantidad que expresan ó borrando las anotaciones de cantidades amortizadas que consten en ellas; 3º el hecho del que para recabar alguna cantidad del fisco, fragua expedientes supuestos ó aumenta maliciosamente la cantidad de una acreencia legítima ó apoya su crédito con pruebas falsas.

La redacción del artículo 283, en que se contiene en los términos expresados la definición de estos delitos, está tomada con ligeras variantes del proyecto Tejedor. La más importante consiste en haber excluido de este artículo la falsificación de papel sellado, que ha quedado comprendida en la falsificación de sellos.

1153. Entre la falsificación de documentos en general y la falsificación de moneda, ocupan jurídicamente un lugar intermedio la falsificación de documentos de crédito y la falsificación de billetes de Banco. En nuestra legislación, la falsificación de monedas está regida por leyes especiales de fuero federal; de modo que falta en nuestro Código este extremo de la progresión; pero ello no obsta á la colocación que queda atribuida respectivamente á cada una de dichas falsificaciones. El documento en general, he dicho, es una prueba escrita ó un principio de prueba por escrito de un hecho jurídico. El documento de crédito público, aparte de constituir una prueba plena, como instrumento público (1) de la verdad del crédito, contiene la presunción permanente

(1) Código Civil, artículo 979, inciso 7º.



de la solvencia del deudor, lo que le da una colocación en orden de importancia, superior á la de los documentos puramente comerciales. Es por esto que en muchos códigos se encuentran comprendidas en un solo capítulo la falsificación de billetes de Banco, la falsificación de documentos de crédito, y aún la falsificación de moneda. "A los efectos de la ley penal, dice el código italiano, quedan equiparados á la moneda los papeles de crédito público. Por *papeles de crédito público* se entiende, además de los que tienen curso legal como moneda, los papeles y cédulas al portador emitidas por los Gobiernos y que constituyen títulos negociables, y todos los demás emitidos por instituciones autorizadas para la emisión." (1)

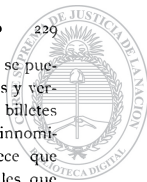
1154. Respecto á la equiparación á la moneda ó billetes de Banco, de los documentos de crédito, se ha hecho una distinción, que aunque tiene en contra la eminente opinión del codificador italiano, me parece fundada en sólidas razones. Se trata de una distinción que influiría para dividir la falsificación de instrumentos de crédito en dos clases: una que podría ser equiparada á la falsificación de instrumentos públicos, otra á la falsificación de billetes de Banco. La distinción se funda en que se trata de un título *al portador*, ó de un título *nominativo*. Zanardelli piensa á este respecto que "aún los papeles nominales, desde que constituyan *títulos negociables*, y especialmente letras de cambio y cheques, entran de tal manera en la circulación y ocusión resulta que han quedado excluidas de la penali-

(1) Código penal italiano, artículo 263.



pan de tal modo el lugar de la moneda, que pueden muy bien compararse á esta última para que la falsedad que se cometa en ellos constituya un atentado á la fé pública" (2). Pero á esto se contestó: "Para constituir lo esencial en la moneda simbólica no basta que se trate de un *título negociable*, pero conviene que este título se pueda generalmente dar en *pago* en las transacciones. Un título *negociable* es un título que se puede ceder ó se puede vender como una mercancía. Son también negociables las letras de cambio y los billetes á la orden, porque son susceptibles de operaciones de descuento y *giran* también ellos, con el giro de mano en mano, y son asimismo dados en pago junto con la moneda metálica y con los billetes de Banco, sin que por esto deba ser elevada á falsificación de moneda, la falsificación de aquellos documentos comerciales. La emisión de letras por el Estado, ó la apertura de una cuenta corriente con depositantes particulares, como sucede con la institución de las cajas postales de ahorro, á la que se liga el cheque que los depositantes giran contra dichas Cajas, es una función económica igual á la que ejercitan todos los banqueros. El carácter de la moneda es el de ser innominada, y no el de hacer fé por el nombre del girante, del aceptante ó del tomador; de circular en no limitado espacio; de recorrer el gran círculo de todo el movimiento económico de un Estado; de ser, por decirlo así, el lenguaje universal ó la *expresión* que todos adoptan y que todos entienden para denotar y valuar el precio de las cosas, como todos cambian las ideas con

(1) *Relazione ministeriale*, tomo 2º, página 178.



las palabras usuales; por lo que, si por analogía se puede admitir la parificación á las monedas propias y verdaderas que llevan valor en sí mismas, de los billetes de Banco que las representan y aún los títulos innominados que emiten los gobiernos, no nos parece que pueda decirse lo mismo de los títulos nominales que podrían tener su tutela eficaz en las penas de la falsedad documental. Tal es también la opinión de Berner, que dice: "Se equipara á la moneda metálica el papel moneda y los títulos al portador, del Estado ó autorizados. Las grandes sumas están representadas ordinariamente por el papel moneda y por los títulos, y por tanto la falsedad de estos importa aún mayor peligro y daño que la falsificación de moneda. Los títulos al portador están en oposición á los nominales como letras bonos. La falsificación de los títulos nominales no es ya falsificación de monedas, sino de documentos públicos." (1)

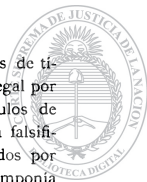
Estas consideraciones no bastaron en Italia, y el Código mantuvo la forma adoptada por el proyecto. La distinción enunciada había sido aceptada entre nosotros por el proyecto de la Comisión revisora (2) y por la ley de 14 de Setiembre de 1863. (3)

1155. Nuestro texto enumera en el artículo 283 los objetos sobre los cuales es necesario que haya recaído la falsificación para que proceda la calificación de falsificación de documentos de crédito. De esa enumera-

(1) *Relazione VII.LA*, página 186.

(2) Artículos 174 á 179.

(3) Artículo 62.



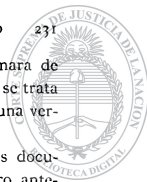
dad establecida en el capítulo, las falsificaciones de títulos al portador emitidos con autorización legal por empresas de crédito. Si la falsificación de títulos de crédito público es un delito tan grave como la falsificación de billetes de Banco, y quedan equiparados por la medida de la pena; si, por otra parte, se imponía una severa sanción á la falsificación de billetes de Bancos autorizados, no se concibe por qué no tendrán igual protección de la ley las emisiones de otros títulos al portador hechas con la autorización del Estado. La objetividad del delito es la misma: tanto es un gravísimo atentado á la fe pública garantida por la autorización del Estado la falsificación de las cédulas hipotecarias ó de las acciones de crédito como la falsificación de los billetes de Banco. Que no hubiera previsto el caso el proyecto del doctor Tejedor en una época en que no podía pensarse en el desarrollo de las instituciones de crédito en el país, se comprende; pero que la Comisión de la Cámara de Diputados, viviendo en la época más fecunda para tales instituciones no haya pensado en el hecho, es para mi inexplicable. Y tanto más difícil será toda explicación cuanto que dicha Comisión tenía á la vista el proyecto de la Comisión revisora en que se leía este artículo: “Sufrirán la pena de penitenciaría menor los que falsifiquen títulos al portador emitidos por municipalidades ó *establecimientos públicos debidamente autorizados para ello*, ó cupones de intereses ó dividendos correspondientes á esos títulos, y los que falsifiquen letras ó libranzas de ministerios ú oficinas de Hacienda.” (1) Este proyecto se encontraba también

(1) Artículo 176 del Proyecto Villegas, Ugarriza, García.

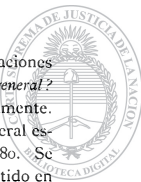
sometido á examen de la Comisión de la Cámara de Diputados, y puede por tanto decirse que no se trata de una omisión ó de una imprevisión, sino de una verdadera *supresión* de la disposición proyectada.

1156. ¿Podrá decirse que la falsificación de los documentos de crédito á que me refiero en el número anterior deba comprenderse en la disposición del artículo 285? Esta cuestión correspondería en rigor ser tratada en el capítulo siguiente, al examinar en qué consiste el billete de Banco. Pero ya queda establecida en este capítulo una distinción precisa y característica entre el simple título al portador y el billete de Banco, que podría resumir en estos términos: el título de crédito asegura el derecho de reclamar una cantidad y su renta; pero no puede imponerse forzosamente para extinguir una obligación; el billete de Banco representa una cantidad de moneda y confiere el derecho de imponerlo en pago, con entera fuerza cancelatoria. Las diversas leyes y decretos dictados por la Nación no han entendido por billete de Banco, sino el papel moneda, esto es la representación escrita de una cantidad de moneda (1). Luego, las acciones de los Bancos, las de otros establecimientos de crédito fundados ó que se funden, las cédulas hipotecarias, y tantos otros títulos de crédito que circulan hoy con tanta profusión y que son objeto de rápidas operaciones por sumas enormes, no están defendidas por la ley penal ni bajo la calificación de falsedad en documentos de crédito, ni bajo la de falsificación de billetes de Banco.

(1) Leyes de 5 de Noviembre de 1872; 14 de Octubre de 1876; 12 de Octubre de 1882; 4 de Octubre de 1883, etc.



1157. ¿Estarán siquiera previstas tales falsificaciones en el capítulo de *la falsificación de documentos en general*? La contestación negativa se impone inmediatamente. Los medios de falsedad de documentos en general están taxativamente enumerados en el artículo 280. Se falsifica *suplantando* documento que no ha existido en libro ó registro en que se inscriben los de su clase, ó dando testimonio ó copia certificada de documento que no existe, ó alterando documentos de alguna de las maneras enumeradas por la ley. La falsedad por creación, por falsificación del documento, no está prevista sino en los dos primeros casos, y ninguno de ellos conviene á la falsificación de un título de crédito de la clase omitida. De todo ello resultará esta consecuencia: que la falsedad por alteración ó falsedad *parcial* del documento está prevista como delito; y la falsificación por fabricación ó falsedad *total* del documento no está especialmente prevista ni comprendida en la disposición general. Si se contestara que el caso se ha dejado comprendido en los términos generales del artículo 293, sería seriamente censurable que mientras que la falsificación de documentos en general puede ser penada hasta con seis años de penitenciaría, inhabilitación perpetua y multa de dos mil pesos, y mientras la falsificación de documentos de crédito contra el Fisco y de billetes de Banco se castiga hasta con ocho años de penitenciaría y multa de cinco mil pesos, la falsificación de los otros documentos de crédito circulantes en el comercio y objeto de las más importantes transacciones, la falsificación de las acciones de un Banco ó de las cédulas hipotecarias de la Provincia de Buenos Ai-



res (1) no puedan ser castigadas sino con arresto y multa de trescientos pesos. Tal desproporción no necesitaría comentarios. Los legisladores del Código pudieron tener presente el artículo 62 de la ley de 14 de Setiembre de 1863: "el que introdujere ó expendiere falsos títulos de la deuda pública al portador, billetes ó libranzas del Tesoro, inscripciones de deuda u otro documento de crédito ó valores nacionales ó de un Banco erigido con autorización del Gobierno Nacional, y los que los falsificaren serán castigados con la pena de trabajos forzados por cuatro á siete años y con multa de quinientos á cinco mil pesos fuertes".

1158. Los modos de falsificación previstos en los dos primeros incisos del artículo 283 son el de la fabricación, ó falsedad por *creación* de todo el documento, y el de la alteración en la cantidad que expresan ó borrando las anotaciones de las cantidades amortizadas, que consten en ellos. Tratándose de la fabricación de documentos falsos, incurre en la misma calificación que el que fabrica el documento el que introduce á sabiendas al país el falso título, letra ó libranza, y el que se encarga de expenderlos, pero tratándose de la alteración del documento sólo castiga la ley al autor de la alteración y no al introductor ó expendedor. ¿Hubo algún fundamento para una distinción semejante? No hay elemento alguno para saberlo con exactitud, pero puesto que así resulta claramente del texto, forzoso es suponer que el codifi-

(1) En cuanto á las cédulas del Banco Hipotecario Nacional, el artículo 28 de la ley de creación del Banco declara que los que falsifiquen aquéllas sufrirán la pena en que incurren los que falsifiquen documentos públicos de la Nación.





cador lo haya tenido. No ha pensado lo mismo el codificador español: los que *falsificaren*, dice, los que *introdujesen* y los que *expendiesen* en connivencia con el falsificador ó introductor (1); y usando el término *falsificaren* queda comprendida toda falsedad, así la que procede por creación como la que procede por adulteración del documento. Conforme á nuestro artículo la introducción y el expendio de documentos de crédito alterados en la cantidad no tendría la pena de la falsificación de documento de crédito.

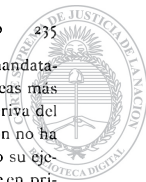
1159. El inciso 1º del artículo citado prevé el caso del que se *encarga de expender* los documentos falsificados. Es aquí el mandato ó comisión para circular el título falso lo que constituye el delito consumado, á diferencia de otras leyes que no tienen como consumado el delito sino por el acto de expender (que debe tomarse en el sentido de poner en venta), los títulos falsos. Así el artículo 62 de la citada ley de Setiembre de 1863 dice *el que introduciré ó expendiere; los que expendieren*, dice el artículo 303 del código penal español; *expendiere* ó *introdujere* dice el código uruguayo (2). No me parece que el Código esté en lo justo al tener por delito consumado la aceptación del mandato de circular la falsificación. La aceptación del mandato de cometer un delito no es más que una manifestación de una voluntad perversa é inhumana, pero no contiene en sí misma ni el daño del derecho ajeno ni la posibilidad de ese daño. Es un delito sin lesión efectiva ni potencial. No es ni siquiera un principio

(1) Artículo 303.

(2) Artículo 220, inciso 2º, relacionado con el 225.

de ejecución del hecho que puede dañar, y el mandatario podría desistir del mandato inspirado por ideas más morales. Tan injusta parece la solución que deriva del texto legal que podría pensarse que la disposición no ha entendido penar la aceptación del mandato sino su ejecución; pero á esta conclusión no podría llegarse en primer lugar, porque en este punto el Código cambió la redacción del proyecto Tejedor que decía *el que expende á sabiendas*, en segundo término porque análoga modificación hizo respecto á la falsificación de billetes de banco, y por último, porque es indudable el sentido que el diccionario de la lengua dá al verbo *encargarse*, *tomar* uno á su cargo la ejecución de alguna cosa.

1160. Por otra parte, la disposición está limitada al caso de encargarse de expender los falsos títulos, con lo que queda excluida la expendición por el que no se ha encargado, ni ha introducido ni ha fabricado los mismos; el hecho, por ejemplo, del que ha sido engañado recibiendo de buena fé falsos títulos y pretendiendo expendarlos cuando conoce su falsedad. Los códigos equipararon generalmente este caso á una verdadera falsedad, imponiendo una pena menor, en consideración á que el agente no se propone hacer un daño, sino evitar el que por desgracia le ha tocado. En la segunda parte del artículo 285 se prevé este caso con relación al billete de Banco. Después de lo dicho sobre la similitud de condiciones jurídicas entre el billete de Banco y el documento de crédito, especialmente cuando es al portador, queda también sin explicación el motivo por el cual guarda silencio sobre este punto el Código Penal. En el proyecto Tejedor, el caso en cuestión quedaba comprendido en





estos términos: el que fabrica, introduce ó *expende á sabiendas*, etc. El artículo 63 de la ley de Justicia Federal dice, resolviendo expresamente: “el que habiendo adquirido de buena fé los títulos y efectos de que habla el artículo precedente los expendiere después con conocimiento de la falsedad será castigado con la multa del tanto al triple del valor del documento, no pudiendo bajar de cincuenta pesos”. Análoga disposición traía el artículo 170 del proyecto de la Comisión revisora (1).

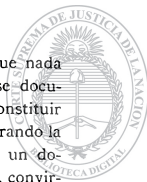
1161. Se ha presentado á la jurisprudencia extranjera la cuestión de saber si debe entenderse por fabricación de documento falso el hecho del que borrara por un procedimiento cualquiera los signos que acreditaran que un documento verdadero había sido ya cancelado ó anulado. En el inciso 2º de nuestro artículo 283 se prevé el hecho de borrar las anotaciones de cantidades amortizadas. Pero no es indiferente saber si el caso estaría regido por el inciso primero ó por el segundo del citado artículo, porque la diferencia de la penalidad es muy considerable. Viada piensa que el hecho de hacer desaparecer la nota ó señal de caducidad importa verdaderamente la fabricación de un nuevo billete, título ó cupón. “Si bien no cabe decir que se haya falsificado dichos billetes, títulos ó cupones, ya que el autor del hecho se limitó á hacer desaparecer de unos efectos verdaderos la marca ó señal que acreditara haber sido retirados de la circulación, ello es lo cierto que la nota de “retirado” ó “pagado”, ó cualquiera otra que indique la anulación ó cancela-

(1) En el Código español, el artículo 306; en el de la República Oriental del Uruguay, el 222 y 225; en el italiano 258 y 263; en el belga, el 178.

ción del billete, título ó cupón, es parte integrante del mismo billete, título ó cupón, puesto que indica la cancelación de su respectivo valor nominal; y que por lo tanto, el hacer desaparecer, por medio de reactivos químicos, semejante nota ó señal, para volverlos á poner en circulación ó apropiarse su importe, es falsificar, ni más ni menos una parte de los expresados efectos tales como estaban en el momento en que se verificó la alteración (1). Es contraria á esta conclusión la opinión de Nypels. “Sería, dice el intérprete del código penal belga, crear una falsedad de una naturaleza completamente particular, debiera llamársele como se llamaba antes á ciertos feudos, *falsedad en el aire*, porque no hay acto á que pueda referirse. Sería una falsificación sin cuerpo de delito, puesto que no quedaba huella de éste. Bien considerado, yo creo que el hecho de suprimir por un procedimiento cualquiera un timbre ó cualquier otro signo de anulación no constituye ni falsificación de títulos, ni falsedad en documentos comerciales ó de Banco, ni especie alguna de falsedad prevista por el código. Es un hecho particular, *sui generis*, que se aproxima á la falsedad por su elemento moral, la intención de dañar, pero que difiere esencialmente por el medio empleado para alterar la verdad. Este hecho si debe ser castigado (lo que no puede ser dudoso) hubiera debido ser el objeto de una previsión particular del código” (2). La fuerza de esta argumentación me parece más aparente que real. El que tiene en su poder un documento de crédito can-

(1) VIADA, *Código penal reformado de 1870*, 3ª edición, página 361.

(2) NYPELS, *Le code penal belge interprété*, tomo 1º, página 420.



celado ó anulado, tiene en realidad un papel que nada prueba ni vale nada. ¿Cómo hacer para que ese documento que nada prueba y nada vale venga á constituir la prueba aparente de un crédito supuesto? Borrando la nota de cancelación ó anulación surge á la vida un documento de crédito que había dejado de existir, convirtiéndose así el documento anulado en la materia prima de la falsificación del documento falso. Materialmente (como papel impreso) el documento tiene un origen de verdad: pero jurídicamente, como instrumento de prueba, es un documento falso, porque asume el aspecto de prueba de un crédito que no existe.

1162. Ateniéndome sobre la misma materia al contexto de nuestro artículo 283, pienso que se confirma la conclusión que acabo de emitir. El inciso 2º enuncia entre los medios de alteración de documentos verdaderos, el de borrar las anotaciones de cantidades amortizadas que consten en ellos. Este delito es de una gravedad mucho menor, según lo considera la ley, que el de la fabricación de documentos falsos. En tanto que la falsificación por fabricación se castiga con la pena de tres á ocho años de penitenciaria y multa de quinientos á cinco mil pesos, la falsificación por alteración solo se castiga con prisión de uno á tres años y multa de trescientos á tres mil pesos. Adoptado por la ley este criterio, aunque no sea de todo punto fundado, debe suponerse que se funda en haberse visto en el documento *alterado* una parte de verdad y otra de engaño, en tanto que en el documento *fabricado* todo él es absolutamente engañoso. El acto de revivir por la supresión de una anotación todo el documento, es con este criterio un delito más grave de el de

borrar las anotaciones de *cantidades amortizadas*, único hecho previsto por el inciso 2º.

1163. En cuanto á la falsificación por *alteración* de documentos, el inciso se limita á prever el modo de que acabo de hacer mención, y el de aumentar la cantidad que expresa el documento verdadero. Tratándose de documentos al portador quizás sean estos los únicos medios que convenga prever, aunque podría suponerse también el caso de que estando emitidos los documentos de crédito por series, la falsificación tuviera lugar en la indicación de la serie, cuando la distinta serie importara condiciones distintas de amortización y de renta. No sería lo mismo si la alteración tuviera lugar en el número de orden de la serie, porque entonces subsiste íntegra la misma obligación en todas sus condiciones. “Las alteraciones realizadas en documento legítimo, ha dicho el Tribunal Supremo de España, mientras lo dejen subsistente é íntegro en todo aquello que le sea esencial y de que tome fuerza y validez no constituyen falsedad... La alteración del número de orden que individualiza los títulos en la cual se funda el fallo recurrido para declarar la existencia del delito de falsificación, aunque dificulta la comprobación con los registros y con los libros de que proceden, no cambia la naturaleza, extensión ni la cuantía de la obligación que representan; y dirigida, como aparece haberlo sido, no á dar validez ó apariencias de validez á documento que la tuviera, puesto que no las ha perdido, sino á ocultar el origen que se dice criminal de su posesión, por señalada que sea su importancia para determinar en los respectivos procesos una responsabilidad derivada de culpables apoderamientos, tal alte-





ración no es constitutiva del delito previsto en el artículo 303 del Código Penal." (1) Si se tratara de un título nominativo podría ser en ciertas circunstancias, de posible perjuicio la alteración del nombre del tenedor.

1164. El inciso 3° del artículo 283 enumera tres medios de falsedad subordinados á la cláusula de la intención de *recabar alguna cantidad del fisco*: 1° fraguando expedientes supuestos; 2° aumentando maliciosamente la cantidad de una acreencia legítima; 3° apoyando un crédito con pruebas falsas. Esta disposición está tomada del proyecto del doctor Tejedor con la única modificación de haberse puesto "expedientes supuestos" en lugar de "expedientes de créditos supuestos", que decía el proyecto. Salvo el segundo de los casos expresados, que es de la misma naturaleza que el enunciado en la segunda parte del inciso 2°, difícil será que por regla general pueda verse en los otros casos una falsificación antes que una defraudación. Podrá fraguarse un expediente para comprobar la existencia de un crédito sin que haya en él otra cosa falsa que las declaraciones de testigos. Todo el expediente será entonces verdadero, como que las actas en él escritas, en que consten las declaraciones de los testigos son verdaderas en cuanto á que reproducen lo que el testigo, dijo, que es su único objeto, independientemente de que fuera ó no verdad lo que éste aseguró. No puede decirse falsa el acta en que consta un testimonio falso, porque el acta no está destinada á probar el hecho que el testigo afir-

(1) VIADA, obra citada, *Suplemento* 3°, página 199.

ma sino á consignar su afirmación. En tales condiciones, calificar de falsificación de documentos de crédito un expediente forjado con declaraciones falsas, es confundir las nociones jurídicas de dos hechos independientes.

1165. El artículo 284 fija las penas para estos delitos, que ya han quedado enunciadas en el curso de este capítulo. Pero la ley no ha consignado circunstancias especiales de agravación ó de atenuación, de modo que no rigen otras que las generales. Algunas leyes consignan como causa de atenuación especial del delito de falsificación de billetes de Banco y del de falsificación de documentos de crédito la circunstancia de ser fácilmente reconocible la falsedad. El código italiano disminuye en este caso, la pena de un tercio á un sexto (1), y el de la República Oriental del Uruguay atenúa la pena en dos grados (2).

(1) Artículos 259 y 263.

(2) Artículos 223 y 225.



CAPÍTULO XVI

DE LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE BANCO

(Artículo 225)



1166. Exposición del artículo 285. — 1167. No puede haber otros Bancos de emisión en la República que los autorizados por el Congreso Federal. — 1168. En el artículo 61 de la ley de 14 de Setiembre de 1863 se legisla el mismo caso que en el artículo 285 del Código Penal. — 1169. Las leyes sobre billetes de Banco han derogado de hecho la disposición del Código Penal. — 1170. La falsificación de billetes fraccionarios cae también bajo la ley de justicia federal.

1166. El artículo 285, único del capítulo *De la falsificación de billetes de Banco*, impone la pena de tres á ocho años de penitenciaría y multa de quinientos á cinco mil pesos al que fabrica, al que introduce y al que se encarga de poner en circulación billetes de *Bancos autorizados*. Se sobreentiende que se trata de billetes *falsos* aunque el artículo no lo diga en esta parte.

En la segunda parte del artículo se contiene una disposición independiente de la primera. Por ella se dispo-



ne que si el billete se hubiese recibido en pago de buena fe y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

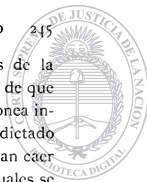
1167. El artículo limita su disposición á los casos de falsificación de billetes de *Bancos autorizados*. ¿Qué significa esta designación? La razón de la disposición es clara si se recuerda la del artículo 108 de la Constitución Nacional: las Provincias no pueden establecer *Bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal*. La facultad de emitir billetes bancarios no es, pues, como la facultad de acuñar moneda, una función privativa del Congreso y prohibida de todo punto á los poderes provinciales, y puede con aquella autorización ejercerse por los últimos. Pero si la emisión de billetes no es un acto inherente á la soberanía, como la acuñación de moneda, ni tiene tal importancia cuando el billete no es más que la representación escrita de una moneda efectiva por la cual se puede cambiar, no deja por eso de comprometer grandes intereses económicos, por lo cual la Constitución obró prudentemente al hacer depender de la autorización del Congreso la institución de Bancos de emisión. Si las Provincias no pueden establecer Bancos de emisión sino con autorización del Congreso, menos podrán hacerlo los particulares sin tal autorización; de modo que, en conclusión hay que afirmar que en la República no puede haber Banco de emisión sin autorización del Congreso federal. El artículo se ha referido, en consecuencia á los únicos billetes que podían circular en la República.

1168. No se ha entendido así, ó no se ha tenido pre-

sente aquella circunstancia ni las disposiciones de la ley de justicia federal al dictar las disposiciones de que me ocupo. Ya he hecho notar que por una errónea interpretación de preceptos constitucionales, se ha dictado el Código Penal, sólo en cuanto los delitos puedan caer en el fuero común y no en el federal, para los cuales se ha entendido dejar en plena subsistencia la ley de 14 de Setiembre de 1863. El artículo 61 de esta última ley prevé el caso de que se introdujere, expendiere ó falsificare billetes de un Banco *erigido con autorización del gobierno nacional*. ¿Importa el artículo 285 del Código Penal una derogación tácita del artículo 61 de la ley citada? En realidad se trataría de dos leyes sobre el mismo objeto y emanadas del mismo poder, por lo que, por la prevalencia de la ley posterior, la de Setiembre hubiera quedado derogada en este punto. Pero no ha sucedido nada de esto, porque de otra ley posterior al Código ha resultado la absoluta vigencia de la ley de Setiembre. Me refiero al artículo 30 de la ley de Bancos garantidos, que declara que la falsificación de los billetes de estos Bancos cae bajo las disposiciones de la ley de Setiembre de 1863.

1169. La evolución bancaria de la República ha traído forzosamente la supresión de hecho del artículo 285 del Código Penal, á tal punto que ha perdido toda significación en éste, quedando á la vez demostrado que nunca la tuvo si el Congreso no entendió derogar el artículo de la ley de 1863, lo que excusará los comentarios á que podría dar lugar. Convendrá, solamente, exponer los antecedentes que motivan aquella afirmación.

Al establecerse la unidad monetaria en la República





por la ley de 5 de Noviembre de 1881 se dispuso que todos los Bancos de emisión existentes en la República estaban obligados en el término de dos años desde la sanción de la ley, á renovar toda su emisión en billetes á *moneda nacional* (1), prohibiéndoseles la emisión de billetes por fracción de peso (2). La ley de 19 de Octubre de 1883, prescribió que los Bancos de emisión, ya fueran del estado, mixtos ó particulares, sólo podrian emitir billetes pagaderos en pesos nacionales oro, teniendo por sanción este precepto la de que no fueran recibidos en las oficinas fiscales de la Nación los billetes de Banco que no se sujetaran á las prescripciones de la misma ley.

Cumplida por todos los Bancos de emisión la declaración de convertir sus billetes á oro, fué de brevísima duración el estado de conversión en que se hallaron los Bancos. En 9 de Enero de 1885, el Banco Nacional se dirigió al Poder Ejecutivo haciendo presente las exigencias de conversión y los peligros que había en sostenerla. En el mismo día el Poder Ejecutivo dictó un decreto mandando que desde su promulgación los billetes del Banco Nacional fueran recibidos como *moneda legal* por las oficinas nacionales y por los particulares; autorizando al Banco Nacional para suspender la conversión de sus billetes en moneda metálica durante el término de dos años; fijando en 28 millones de pesos el monto de su circulación; prohibiendo disminuir la reserva metálica, y mandando depositar, mientras durara la incon-

(1) Artículo 13.

(2) Artículo 14.

versión la mitad de las utilidades liquidas, anuales del Banco para aumentar su encaje. Análogo beneficio se acordó al Banco de la Provincia de Buenos Aires en 15 de Enero del mismo año; en 21 del mismo mes, al Banco Provincial de Santa Fé; en 23 al Banco Muñoz y Rodríguez, de Tucumán; en 31 al Banco Provincial de Córdoba, y en 21 de Marzo al Banco Provincial de Salta. Puestos los Bancos de emisión en estado de inconvención por los expresados decretos del Poder Ejecutivo, una ley de Octubre de 1885 confirmó dicho estado y la intervención del gobierno en las emisiones establecidas por los mismos. Del estado de inconvención y de intervención se llegó á la institución de Bancos garantidos por la cual se autoriza á la emisión á toda corporación ó sociedad instituida para hacer operaciones bancarias, mediante la garantía de fondos públicos nacionales (1). Esta ley es facultativa. No se prohíbe por ella la emisión autorizada de billetes de Banco, convertibles en oro á la vista: se autoriza la emisión inconvertible, garantida. Todos los Bancos de emisión se acogieron á la ley, y á su amparo se fundaron varios otros, sin que se estableciera ninguno de conversión á oro. No hay, pues, otro billete de Banco en la República, ni es de suponerse que lo haya por largo tiempo, sino el de los Bancos garantidos. La falsificación de los billetes de Bancos garantidos se ha colocado bajo la sanción del *título 10* de la ley de 14 de Setiembre de 1863 (2).

(1) Ley de 3 de Noviembre de 1887.

(2) Artículo 30 de dicha ley. En algunas ediciones de ésta se dice del *artículo 10*, en vez de decirse del *título 10*, pero la errata es manifiesta.



En las condiciones expuestas, ningún objeto actual ni próximo tendría la crítica del capítulo del Código Penal de que me ocupo. Estando limitado el plan de este libro á la exposición y crítica del Código Penal queda fuera de mi propósito la exposición y comentario del expresado título de la ley de 1863, por lo que no me detendré sobre esta materia.

1170. Si alguna duda pudiera surgir sobre la aplicación de lo expuesto, respecto de la emisión de billetes fraccionarios, ella desaparecerá con la sola lectura de la ley que la autoriza. La emisión de billetes fraccionarios no es propia de ningún Banco: el Banco Nacional la emite y circula *por cuenta* y bajo la responsabilidad de la Nación (1). El delito de falsificación de billetes fraccionarios caería bajo la ley de la justicia federal según la disposición del artículo 62, como falsificación de documento de crédito ó valor nacional.

(1) Artículo 1.º de la ley de 4 de Octubre de 1883.

CAPÍTULO XVII

DEL FALSO TESTIMONIO

(Artículos 286 á 292)



1171. ¿Qué se entiende por *testigo*, en esta materia? — 1172. Peligros de que el testigo no refiera los hechos con verdad. — 1173. ¿En qué consiste la falsedad de la declaración? — 1174. El testimonio debe ser prestado judicialmente y bajo juramento. — 1175. La declaración en causa propia no es testimonio. — 1176. Caso en que declarando como testigo, éste podría comprometerse á sí mismo. — 1177. La falsedad en lo esencial y en lo incidental. — 1178. La deposición negativa puede constituir falso testimonio. — 1179. Es esencial que haya terminado la audiencia del testigo. — 1180. Declaración ante juez incompetente. — 1181. Es esencial la existencia ó posibilidad de perjuicio. — 1182. Excepción en causa civil. — 1183. Criterios de gravedad y penalidad del falso testimonio en causa criminal, en contra del reo. — 1184. Observación sobre este punto. — 1185. Falso testimonio en favor del reo. — 1186. Penas del falso testimonio en causa civil. — 1187. Soborno de testigos. — 1188. ¿No requería el soborno una prescripción especial? — 1189. Falsa exposición de peritos é intérpretes.

1171. El Código Penal determina las penas que deben imponerse al *testigo falso*, sin consignar cuáles son los



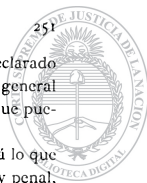
elementos constitutivos del delito de falso testimonio. Estos deben ser, en consecuencia, los que determina la doctrina y los que trataré de exponer en seguida.

En el lenguaje de los procedimientos judiciales se entiende por *testigo* la persona que declara en causa ajena respecto á hechos de que tenga conocimiento. Por la palabra *testigo*, dice Mittermaier, se designa al individuo llamado á declarar según su experiencia personal acerca de la existencia y naturaleza de un hecho. Propiamente hablando, el testigo es la persona que se encuentra presente en el momento en que el hecho se realiza; pero en la práctica y relativamente á la prueba, no adquiere importancia ni se trata verdaderamente de él como tal, sino cuando habla y refiere lo que ha visto" (1). Tenemos, pues, para la palabra *testigo* dos acepciones que, aunque se refieran á una sola persona, indican situaciones distintas de la misma; una referente al momento en que la persona se encuentra en presencia de un suceso; otra referente al momento en que se encuentra ante el juez para decir lo que sabe sobre el suceso. De estas dos situaciones la que puede llevar perjuicio á la verdad es la segunda. El proceso se instruye por el Juez para llegar á un conocimiento según el cual dictará su fallo; y admitida en los procedimientos la prueba testimonial, una declaración del testigo contraria á la verdad contiene en sí un perjuicio ó la posibilidad de un perjuicio, porque puede originar un convencimiento contrario á la verdad, y en consecuencia un fallo injusto. La ley penal no se refiere, pues, sino al testigo que ha declarado ante el

(1) MITTERMAIER. *Tratado de la prueba*, parte V, capítulo I.

juez, y no al que presencia el hecho sin haber declarado sobre él; y esto está confirmado por el contexto general de las disposiciones del capítulo respectivo sin que pueda originarse ninguna duda.

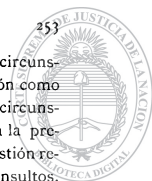
1172. Pero si no puede caber duda en cuanto á lo que se entiende por testigo en los artículos de la ley penal, no puede decirse lo mismo respecto á la circunstancia de la falsedad. ¿Cuándo es *falso* el testimonio? ¿se impondrá al testigo siempre que su declaración no reproduzca los hechos con verdad, ó siempre que pueda inducir en un convencimiento contrario á ella? El mismo Mittermaier presenta con aguda perspicacia la facilidad con que el testigo, aún sin quererlo, puede declarar lo que no es cierto. Refiriéndose al testigo *de visu* dice: “Concíbese, desde luego, que esta declaración puede muy fácilmente derogar la verdad objetiva y que la sola individualidad del testigo puede influir mucho en la manera de observar, por ejemplo, si sin pensarlo pasa por aquel punto y de ligero; si nada le exita á un examen atento, sólo se quedarán grabados en su imaginación los caracteres más notables del hecho; por último ciertas preocupaciones ó disposición de espíritu hacen que dé á los objetos colores imaginarios, y muchas veces cree haber visto lo que desea ver. Con frecuencia y relativamente á ciertos objetos, las facultades intelectuales, los hábitos prácticos y la experiencia adquirida tienen una influencia directa y notoria en las observaciones de los testigos, muchas veces es preciso un golpe de vista ejercitado y entender perfectamente la importancia de los diversos caracteres de la cosa, para percibir de una sola mirada todos sus pormenores esenciales. El interés





valo transcurrido entre el acontecimiento y la declaración puede modificar notablemente su naturaleza. La imaginación altera fácilmente el recuerdo de los hechos confiados á la memoria; y aún cuando ciertos pormenores ó detalles se olviden y otros aparezcan con colores más vivos, puede suceder que todo esto sea obra química de la imaginación, que muchas veces se apresura á llenar los vacíos de la memoria, haciéndose en tales momentos muy difícil distinguir lo que es verdadero de lo que sólo es imaginario. Con la mejor voluntad del mundo el testigo llamado á declarar mucho tiempo después del suceso, no sabe combinar la observación real con las creaciones fantásticas de la imaginación; en una palabra, cuanto más viva imaginación tiene, más riesgo corre de caer en la inexactitud".

1173. Un testimonio no es *falso*, ni puede ser perseguido por tal calificación sino en tanto que la falsedad es *consciente*, esto es, cuando se falta á la verdad á *sabiendas*, según la expresión usada algunas veces por el Código, aunque en el caso especial no la contenga por no haber enunciado ninguno de los caracteres del falso testimonio. El testigo que sinceramente depone acerca de las circunstancias de un hecho que ha presenciado, pero que no las refiere con exactitud por error en el entendimiento, no tiene intención de engañar, y es precisamente esta intención de engañar lo que funda la imputación criminal. Pero en el silencio de la ley sobre aquella circunstancia que todos estarán conformes en reconocer como elemento esencial del delito ¿no deberá aplicarse para proceder contra el falso testimonio la regla del artículo 6º del Código Penal? En otros térmi-

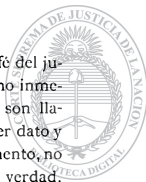


nos: cuando un testigo afirma un hecho cuyas circunstancias no son exactas ¿debe tenerse la afirmación como hecha con voluntad criminal, en tanto que las circunstancias particulares de la causa no establezcan la presunción contraria? Doctrinariamente, esta cuestión reproduciría la antigua discusión de los jurisconsultos. Según Farinacio, en la duda, debía suponerse que el testigo depuso por error y no por dolo: *in dubio proesumitur testem falsum deponisse potius per errorem et ignorantiam quam dolo*: entretanto que según Bayardo, debe antes presumirse el dolo: *testem proesumendum esse quod scienter et non ignoranter falsum testimonium dixerit*. Sería en exceso prolija la enumeración de los motivos que pueden acompañar á una ú otra solución. En mi opinión, la verdadera sería la que considerando la *falsedad* como elemento material del delito (1) no procediera contra este sino cuando la declaración fuera contraria á lo que el testigo supiera. La declaración contraria á la verdad objetiva no es un falso testimonio; la falsedad consiste en la declaración contraria al propio convencimiento.

1174. La materia del falso testimonio se retrae á las soluciones generales y presta ancho campo á la casuística. Será, pues, de alguna utilidad que presente las principales cuestiones que sobre este punto han sido controvertidas.

En primer lugar, este delito no existe, como queda dicho, sino en el caso de prestarse un testimonio judicialmente. Un testimonio, en el sentido legal de la palabra,

(1) El segundo extremo del delito, dice Carrara, es que la atestación sea *falsa*; y esto corresponde también á lo material. *Programma*, § 2671.



es una deposición hecha judicialmente, bajo la fe del juramento. De esta circunstancia se deduce como inmediata consecuencia la de que las personas que son llamadas por la justicia para suministrar cualquier dato y que no declaran como testigos ni prestan juramento, no incurrir en falso testimonio aunque falten á la verdad. En esta condición se encuentran todos los que las leyes de procedimientos declaran incapaces para testificar, y cuyas declaraciones son recogidas como indicios. El fundamento de la conclusión expresada no consiste en que la ley castiga en el perjurio la ofensa de la divinidad que haya invocado al declarar. No es la ley penal la que secunda aquí una idea religiosa y castiga el pecado de faltar al juramento ofendiendo á Dios. El fundamento de la solución dada es eminentemente jurídico. Elegida por las leyes de procedimientos la formalidad del juramento como medio de imponerse á la conciencia de los testigos para obtener mayor veracidad, las mismas leyes no han atribuido fuerza probatoria á las declaraciones que no fueran prestadas bajo juramento, porque siendo entonces tales declaraciones absolutamente innócuas no podrían dar motivo á ningún castigo. Lo contrario debería resolverse donde la prestación del juramento no fuera requisito esencial para la validez de la deposición. El perjurio no es más que un pecado ó una inmoralidad, y la ley penal no se propone ni conservar la fuerza de las costumbres religiosas ni mantener el imperio de la moral.

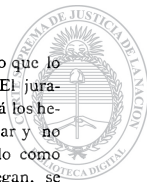
1175. En materia criminal, ningún acusado puede ser obligado á declarar contra si mismo; de donde se sigue como consecuencia necesaria que las declaraciones que



se les tomen deberán serlo sin juramento. En materia civil las leyes de procedimientos acuerdan á cada parte en un juicio el derecho de pedir que la otra parte conste bajo juramento á interrogaciones concernientes á la cuestión que se ventila. Pero he enunciado antes que por testigo la ley no entiende sino al que declara en causa *ajena*, y no obstante la forma de interrogatorio, la presencia del juez y mediación del juramento, la pena que existe respecto del que falta á la verdad en la absolución de posiciones no es la del falso testimonio sino la de la falsedad innominada que prevé el artículo 293.

1176. Controviértese si el que declarando como testigo no altera los hechos sino para no acusarse á sí mismo debe ser castigado por falso testimonio. La Corte de Casación francesa ha pronunciado la afirmativa. "La Corte de Colmar declaró no haber lugar á acusación contra un procesado por falso testimonio por el motivo de no poder ser obligado bajo pena de ser culpable de este crimen, á declarar un hecho que lo incriminaba; y este fallo fué casado en razón de que la ley no hace excepción alguna; que la santidad del juramento no la admite; que por el hecho sólo de haber invocado á la divinidad en sus palabras y en su deposición no podía ser dispensado por ninguna razón personal de cumplir los deberes sagrados que el juramento le imponía" (1). Chauveau y Hélie critican esta decisión. Adoptando la opinión de Bourguignon, dicen què la razón para dudar de que pueda imputarse un falso testimonio, está en que

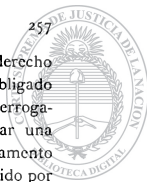
(1) Cita de CHAUCHEAU et HÉLIE, *Théorie du code pénal*, núm. 1780.



desde que se trata de explicarse sobre un hecho que lo incrimina, el testigo pierde su calidad de tal. El juramento que ha prestado no puede referirse sino á los hechos sobre los cuales puede realmente atestiguar y no á aquellos sobre los que no debe ser considerado como testigo. Aun la criminalidad de su acción, agregan, se modifica por su posición misma: si falta á la verdad no es para perjudicar á otro sino para salvarse á sí mismo; no tiene voluntad de dañar; no hace más que defenderse, y toda la cuestión está en esta palabra. En el nuevo código italiano se ha declarado expresamente que está exento de pena el que declarando la verdad se hubiera expuesto inevitablemente á sí mismo ó á un pariente próximo á grave daño de su libertad ó de su honor (1); y la Comisión de la Cámara de Diputados decía al sostener esta disposición: “nadie puede ser testigo en causa propia, y la ley no puede con amenazas de pena imponer el ejercicio de una virtud tan grande como sería la que se requeriría para decir la verdad desapasionadamente aún á costa de perderse á sí mismo ó á alguno de sus próximos parientes, atrayendo sobre estos ó sobre sí mismo los rayos de la justicia penal” (2). Esta solución me parece justa, pero para ello es necesario, como en la ley italiana, una exención expresa, que no existe ni se deduce implícitamente de nuestras leyes. Ciertamente que la Constitución declara que nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo y que las leyes procesales eximen del deber de declarar en causas con-

(1) Artículo 215.

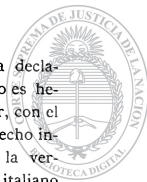
(2) *Relazione*, VILLA, página 165.



tra parientes; pero á esto se contesta que el derecho asegurado por la Constitución es el de no ser obligado á declarar, el de rehusarse á contestar una interrogación que pueda serle perjudicial, no á contestar una mentira. La exención de pena no tendría por fundamento el derecho de mentir, que no podría ser reconocido por ninguna ley, sino el estado violento del ánimo del testigo por el conflicto de motivos en que se encontraría.

1177. Están conformes, en general, los antiguos y los modernos jurisconsultos en que la falsedad para ser inculpada debe referirse á lo esencial en la declaración, considerando exento de pena el falso testimonio fuera de estas circunstancias. Pero nuestra ley, á imitación del código español, ha juzgado digna de inculpación la falta á la verdad en lo que no sea esencial sino incidental á la declaración. Así, el artículo 292 dice que "cuando la falsedad del testimonio ó exposición no recayera sobre la esencia, sino sobre algún accidente de poca entidad la pena será de arresto". De este texto resulta aún que es indispensable que alguna importancia ó poca entidad siquiera tenga la parte de verdad que ha sido alterada para que haya motivo á la imposición de la pena; la que no procederá cuando aquélla fuera absolutamente inofensiva.

1178. Una deposición negativa puede según las circunstancias constituir el delito de falso testimonio. La Corte de Casación de Francia ha dicho á este respecto: "Si es verdad que una deposición simplemente negativa no constituye esencialmente y por sí misma el falso testimonio, porque es posible que un testigo no haya visto ó no haya oído lo que había estado en situación de



ver ó de oír, es, sin embargo, evidente que una declaración de este género constituye crimen cuando es hecha de mala fé y con intención criminal, es decir, con el fin de perjudicar la prueba ó la evidencia del hecho inculminado, y de hacerse en contradicción con la verdad" (1). En el mismo sentido el código penal italiano castiga al que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial, afirma lo falso, niega lo verdadero ó calla en todo ó en parte lo que sabe sobre lo que se le interroga (2).

1179. Se reconoce con toda generalidad que es condición esencial para la imputación del falso testimonio, que la audiencia del testigo haya terminado por completo. Otros van más allá y dejan abierta la posibilidad de la retractación mientras la instrucción no haya terminado. El código italiano establece sobre esta materia las reglas siguientes: "Queda exento de pena el que habiendo declarado durante un proceso retracte la falsedad y manifieste la verdad antes de que se haya cerrado la instrucción, sea que haya cerrado con sentencia ó auto de no hacer lugar al procedimiento, ó antes que el debate haya terminado ó antes que la causa sea remitida á otra audiencia por razón del testimonio falso. Si la retractación es hecha en otro tiempo ó concierne á una falsa deposición en causa civil la pena se disminuye un tercio á la mitad siempre que la retractación se produzca antes que en la causa en que se hizo la declaración se haya pronunciado el veredicto de los jurados en los

(1) NYPELS, *Code pénal belge interprété*, tomo 1°, pág. 539.

(2) Artículo 214.

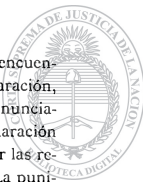


juicios de la Corte de Asises ó la sentencia en los otros juicios" (1). Nuestro Código no contiene texto alguno que favorezca la retractación, á no ser la circunstancia atenuante de haber procurado, con celo, reparar el mal causado ó impedir su consumación (2). Pero es manifiesto que la retractación es permitida durante la audiencia, desde que la validez de la constancia depende de la previa lectura y ratificación. Cuando en los procedimientos la ley exige la ratificación en el plenario como condición de validez de la declaración del sumario la falsedad en esta última no constituye por sí misma falso testimonio y puede ser retractada impunemente. La Corte de Casación francesa ha dicho sobre esta materia que, "las diferentes partes de una declaración deben considerarse como un todo indivisible; que no debe ser considerada como completa é irrevocable sino cuando los debates del asunto á que se refiere han sido definitivamente cerrados; que retractando una deposición mentirosa antes que haya causado á la sociedad ó al procesado un perjuicio irreparable, el testigo que la ha emitido, ha destruido voluntariamente su efecto... que cuando la voluntad que la produce previene los resultados en tiempo útil, los dos caracteres esenciales del crimen de falso testimonio, á saber, el hecho de haber engañado á la justicia y la posibilidad del daño resultante de este hecho, han dejado igualmente de existir".

1180. Una falsa deposición constituye también el delito de falso testimonio aun cuando el tribunal ante el cual se haya hecho se declare incompetente. Esta es la

(1) Artículo 216.

(2) Artículo 8; inciso 5º.

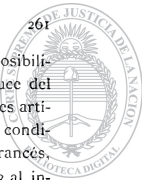


decisión de la jurisprudencia francesa; pero no encuentro justificada la solución sino cuando la declaración, haya influido ó podido influir respecto del pronunciamiento sobre la competencia, ó cuando la declaración aun prestada ante juez incompetente, pueda por las reglas procesales servir de prueba ó presunción. La punibilidad del falso testimonio depende de la posibilidad de causar perjuicio, y esta posibilidad faltaría en los casos en que la declaración fuera absolutamente nula.

1181. En cuanto á que la posibilidad del perjuicio sea una circunstancia esencial, se comprueba con los criterios de gravedad que la ley adopta: la declaración debe haberse prestado *contra* el reo, ó *en favor* del reo. En el primer caso el perjuicio ó la posibilidad del perjuicio resulta de la posibilidad de que se imponga una pena injusta al procesado; en el segundo, de que se dicte una absolución injusta con el daño que la sociedad recibe de tener en libertad á un delincuente. Puede repetirse á este respecto con Chauveau y Hélie: “La alteración de la verdad en testimonio como por escrito, ante los tribunales como en los actos, cuando no causa lesión alguna no es, cualquiera que sea la intención de dañar que la anime, otra cosa que la expresión de un pensamiento, criminal sin duda, pero inofensivo. La moral lo castiga, pero la ley antes de herirlo; quiere constatar sus efectos, pues la ley, como lo hemos observado antes, no inculpa y no castiga las acciones humanas sino cuando turban y amenazan los intereses que por su misión especial debe proteger.” (1)

1182. ¿Será necesaria también para la existencia del

(1) *Théorie du code pénal*, N° 1791.



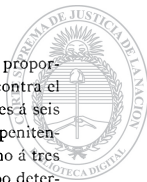
falso testimonio en materia civil que medie la posibilidad del perjuicio? En materia civil no se deduce del artículo 289 la regla que se desprende de los tres artículos anteriores. Encontrándose en las mismas condiciones el artículo respectivo del código penal francés, la Corte de Casación resolvió “que el artículo 363 al infligir una pena al culpable de falso testimonio en materia civil, no impone la condición para que esta pena sea aplicable, de que se haya causado ó no perjuicio”. (1)

1183. Los criterios de gravedad que la ley adopta son: 1º el de que la declaración sea dada en *contra* del reo, y por ella éste haya sido condenado; 2º que el reo no haya sido condenado, ó sea absuelto ó no termine el juicio por un motivo legal; 3º que la declaración se haya dado en favor del reo.

En los dos primeros casos, la medida de la pena está subordinada á la de la pena que se impuso ó pudo imponerse al reo. Cuando haya habido imposición de pena, las del falso testimonio serán las siguientes: 1º por la de muerte, penitenciaría por seis á diez años: 2º por la de presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado, las mismas penas por tres á diez años: 3º por la de presidio ó penitenciaría por tiempo determinado, prisión de uno á tres años: 4º por las de prisión, destierro ó inhabilitación, arresto por tres meses á un año; 5º por la de arresto ó multa, la tercera parte de la pena.

Si el reo no llega á sufrir la condena, ó si es absuelto

(1) En *contra*, CHAUVEAU ET HÉLIE. *ibidem*.



ó no termina el juicio *por un motivo legal*, las proporciones son las siguientes: 1º si se declarase contra el reo en delito que merezca pena de muerte, tres á seis años de penitenciaría; 2º si merece presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado, prisión de uno á tres años; 3º si presidio ó penitenciaría por tiempo determinado, arresto por seis meses á un año; 4º si prisión, destierro ó inhabilitación, arresto de uno á tres meses; 5º si arresto ó multa, la sexta parte de la pena que se había impuesto al reo; y en este caso si el reo fuese absuelto ó el juicio no terminase, el juez graduará la pena según su prudente arbitrio dentro del limite establecido.

1184. En los casos del artículo 286 es condición esencial para la imposición de penas por falso testimonio: 1º que el falso testimonio sea causa determinante para el castigo del procesado; 2º que éste *haya sufrido* la condena. Lo primero resulta de estos términos: *si en virtud del falso testimonio se impusiere la pena*. Dependerá de las circunstancias de cada caso determinar si el falso testimonio ha influido ó no en la decisión por la cual se condenó. Lo segundo resulta confirmado por el artículo 287: si el reo no llega á sufrir su condena.

Hay que observar en esta última parte que no está expresado correctamente lo que ha querido decirse. De los términos citados aparece que no podría imponerse la pena de los incisos 2º y siguientes del artículo 286, sino cuando se hubiera sufrido por el reo toda la pena que se le impuso por consecuencia del falso testimonio. Lo que sin duda se ha querido decir es lo que se lee en el ar-

ticulo 332 del código español de 1870, que distingue el caso de que *se hubiere empezado á sufrir* del que *no se hubiere empezado á sufrir* la condena.

1185. El artículo 288 impone la pena de arresto cuando la falsa declaración se hubiere dado en favor del reo. Podría haberse aumentado en algo la pena para ciertos casos; pero conservando siempre una penalidad mucho menor con relación al caso en que el testimonio se dicra en contra del reo. A este respecto son aplicables á nuestro artículo estas consideraciones de Viada al artículo análogo del código español: "Algún código extranjero, como el francés, ha comprendido bajo una misma disposición y una misma pena, así el testimonio falso dado en contra del reo, como el que se da á favor del mismo, estimando sin duda que es igual el daño que se causa á la sociedad en este segundo caso, al que se infiere al individuo en el primero. Por nuestra parte no podemos menos de aplaudir que el código español haya establecido entre ambos casos la conveniente distinción, ya por no poder equipararse el daño que se infiere á la sociedad al que se irroga al individuo, á quien un falso testimonio puede costar hasta la vida, ya porque no cabe negar que el falso testimonio que se da para favorecer á un procesado reconoce generalmente por causa un sentimiento de conmiseración que, aunque perjudicial es menos censurable, menos perverso que el que pone la mentira en los labios del testigo para condenar á un inocente." (1)

1186. El falso testimonio en materia civil es siempre

(1) VIADA, *El código penal reformado de 1870*, página 392.

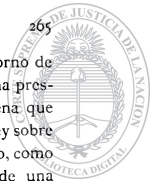


de una gravedad inferior á la falsedad en lo criminal. El artículo 289 le impone la pena de uno á tres años de prisión, *según la entidad del juicio*; y si el valor de lo cuestionado no excediera de mil pesos, la pena será de arresto de un mes á un año.

1187. Corresponde el delito de soborno de testigos al capítulo del falso testimonio, de que me ocupo. El artículo 290 trae á este respecto dos reglas: 1ª la pena del testigo falso por soborno se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida ó recibida; 2ª el sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

Resulta de esto que la pena del testigo sobornado es siempre menor que la del sobornante, cuestión sobre la cual se ha discutido largamente, prevaleciendo en un tiempo la opinión de que mayor delito era el del sobornante. En la discusión del código francés se dijo ya que este crimen contenía dos, pues el sobornante seduce al testigo y pierde al acusado; luego, sería necesario infligirle un grado de pena mayor que el del falso testimonio. El código francés de 1810 adoptó este criterio. Pero en la revisión de 1832 se consignó esta regla: el culpable de soborno de testigos será castigado con las mismas penas que el testigo falso. “La ley ha vuelto así al verdadero principio de la materia, dicen Chauveau y Hélie; el soborno y el falso testimonio son dos actos que concurren al mismo fin, pero con un caracter distinto: el soborno no es más que un acto de provocación por dádivas ó promesas, á cometer el crimen de falso testimonio: constituye, pues, un acto de complicidad de este crimen: el autor principales el testigo falso; el sobornante es su cómplice” (1).

(1) *Théorie du code pénal*, número 1821.

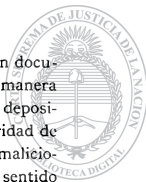


1188. Admitido este carácter del delito de soborno de testigos, no puede justificarse la necesidad de una prescripción especial para la determinación de la pena que le corresponde. Una prescripción expresa de la ley sobre la pena correspondiente al delito se explica cuando, como en el código italiano, se considera el soborno de una gravedad distinta de la del falso testimonio. En el silencio de la ley sobre este punto, valdría siempre la regla del inciso 3° del artículo 21 que considera *autor principal* del delito al que con voluntad criminal determina al autor material á ejecutar el hecho, sea por medio de consejos, orden, comisión, promesa de recompensa, dádiva, violencia irresistible, etc. Así como no hubo necesidad de decir que el que instiga al homicida será castigado como el homicida, porque esto estaba ya dicho en la citada regla general, no había necesidad de repetir que el que instiga al falso testimonio sería penado por este delito.

1189. La falsa exposición de los peritos ó intérpretes, dice el artículo 291, será castigada con la pena respectivamente designada para los testigos falsos. “ Cuando se dice *testigo* en esta materia, dice Carrara, se indica también á los peritos, para los que valen igualmente las reglas propias de este delito, salvo que será respecto de ellos difícil la prueba del dolo, por la elasticidad de las reglas de la ciencia ó arte en las cuales vierten sus informes. Entre los testigos peritos se incluyen también los intérpretes, que siendo llamados, no á referir un hecho que haya acontecido en su presencia precedentemente al juicio, sino únicamente á explicar lo que durante el juicio responde al juez un testigo ó el acusado que habla

un idioma extranjero, ó lo que se contiene en un documento escrito en lengua extranjera, no es en manera alguna responsable de la verdad ó falsedad de la deposición ó del documento pero responde de la sinceridad de la traducción que presenta al Tribunal. Que si maliciosamente, por odio ó por favor á la parte, refiere el sentido de lo escrito ó de lo dicho de manera contraria á la verdad se hace culpable de falso testimonio" (1).

(1) *Programma*, § 2682.



CAPÍTULO XVIII

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FALSEDAD

(Artículos 293 y 294)



1190. Disposición sobre falsedad en general ; crítica. — 1191. Es esencial la existencia de un daño positivo. — 1192. Fabricación é introducción de sellos, cuños y marcas. — 1193. Interpretación del artículo 294.

1190. En el capítulo *Disposiciones generales*, último del título *De las falsedades*, del Código Penal, se contienen dos disposiciones que ni son generales respecto de todas las demás disposiciones del mismo título, ni tienen entre sí vínculo común.

La primera de ellas, la del artículo 293, reproduciendo en parte los elementos enunciados en el artículo 202, que definía la estafa, prescribe que “el que de cualquier modo que no esté especificado en el Código, cometa falsedad, simulando, suponiendo, alterando ú ocultando maliciosamente la verdad y con perjuicio de tercero, por



palabras, escritos ó hechos ; usurpando nombre, calidad ó empleo que no le correspondan, suponiendo viva una persona muerta ó al contrario, sufrirá arresto y multa de veinte á trescientos pesos." Esta disposición, reproducida del proyecto Tejedor, no tiene concordantes en los principales códigos que he tenido á la vista para la comparación del nuestro. El Dr. Tejedor cita el artículo 227 del código peruano, cuya autoridad científica me es desconocida. En la segunda parte ó final del artículo, cita los artículos 250 á 252 del código español de 1850, que se refieren á la usurpación de determinadas funciones y al uso indebido de trajes, insignias ó condecoraciones, con los cuales son concordantes los artículos 159 y 258 del código francés y varios otros códigos. Sería muy difícil poder justificar el sistema de nuestro Código, pues la concurrencia del engaño y el perjuicio, en términos generales, no basta para distinguir este delito de otros que se constituyen por los mismos elementos. Por ejemplo, si el perjuicio consistiera en dinero, habría un delito contra la propiedad y no una mera falsedad. He consignado ya que la falsedad como medio de perpetrar una estafa, no constituye con ésta sino un solo delito (1). Fuera del perjuicio en los bienes, la falsedad podría causar un perjuicio á la reputación, si hubiera falsa imputación de delito, pero entonces se entraría en la calificación de calumnia. En resumen, la penalidad de la falsedad en términos tan generales podrá ser útil para suplir algunos vacíos del título, como se ha visto ya, pero entonces resultan desproporcionadas é ineficaces

(1) Véase el número 836.

las penas. Fuera de estos casos, la falsedad es medio de ejecución de otros delitos y queda absorbida en la calificación que á estos corresponda.

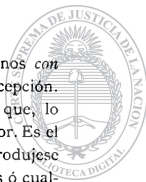
1191. En cuanto á los términos *con perjuicio*, no creo que baste aquí, como respecto de las demás falsedades, la posibilidad del perjuicio; en primer término, porque en ninguno de los otros artículos de las falsedades se hace referencia á la existencia del perjuicio ó posibilidad del perjuicio, valiendo entonces las conclusiones de la doctrina que conducen á la recta interpretación de la ley, mientras que en esta parte se requiere expresamente que la falsedad sea *con perjuicio*. En segundo lugar, el texto dice *con perjuicio de tercero*. El carácter privado del delito resulta manifiestamente con estas palabras. No es un interés inmediato de la sociedad ofendida en una de las instituciones necesarias á su organización lo que reclama el castigo, sino el perjuicio inferido á un particular. Cuando se falsifica el sello que acredita la autenticidad de una cosa, para que todo el público esté seguro de ella, ó cuando se miente ante la justicia, burlando formas sacramentales para inducirla en error, la mera posibilidad del perjuicio autoriza el castigo del delito consumado; pero, cuando se tiene en mira un interés puramente individual, el interés de un *tercero*, no basta el daño mediato de la sociedad ó la mera posibilidad del daño para infligir el castigo, y este procede como en todos los delitos privados, según la cantidad de daño realmente ocasionado. No bastaría para una solución contraria á la que sostengo la circunstancia de estar incluido el delito de que se trata entre los delitos públicos, porque si tal colocación le ha correspondido por



analogía de nombre y de materia, los términos *con perjuicio de tercero* son los que consignan la excepción.

1192. El artículo 294 contiene una disposición que, lo repito, no tiene atingencia especial con el anterior. Es el delito del que fabricase y del que á sabiendas introdujese al país ó conservase en su poder cuños, marcas ó cualquier otra clase de útiles ó instrumentos conocidamente destinados á la falsificación de billetes de Banco, papel sellado ó documentos de crédito, que se castiga con pena de seis meses á un año y multa de cien á mil pesos. Como se ve, el artículo es complementario de los capítulos de falsificación de sellos, documentos de crédito y billetes de Banco, y su verdadera colocación se hallaba en seguida de éstos.

1193. Sobre igual artículo del código español, dice Viada lo siguiente, aplicable al nuestro: “ Con el adverbio *conocidamente* ha querido sin duda dar á entender el legislador que no basta que se sospeche que tales cuños, marcas, sellos ú otros útiles ó instrumentos estén destinados á la falsificación, sino que es preciso que no quepa la menor duda acerca del objeto y destino de los mismos para imponer á sus falsificadores ó introductores las penas señaladas en este artículo. Entiéndase, empero, que éstas no podrán aplicarse sino en el caso de que la fabricación ó introducción de los expresados cuños, sellos, marcas, etc., sea un hecho aislado, no seguido de cualquiera de las falsificaciones de que se trata en los capítulos precedentes, pues si la falsificación se ejecutara con dichos cuños, sellos, marcas, etc., los fabricantes ó introductores de éstos deberían ser considerados, sin duda, como *co-autores* de la falsificación de que se trata-



ra, por haber cooperado á su ejecución por un acto sin el cual no se hubiera ciertamente efectuado, y castigados por lo tanto con la pena correspondiente al delito de falsificación. " (1)

(1) VIADA, *El código penal reformado de 1870*, página 386.





CAPÍTULO XIX

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

(Artículos 295 á 299)



1194. Carácter de estos delitos.— 1195. Elaboración y expendio de sustancias nocivas á la salud.— 1196. Elaboración de productos químicos que puedan causar estragos.— 1197. Mezcla de sustancias nocivas en las bebidas y comestibles.— 1198. Venta de medicamentos deteriorados ó adulterados.— 1199. Concurrencia de daño efectivo en estos delitos.— 1200. Violación de las cuarentenas.— 1201. Otros casos que podría preverse.

1194. Los delitos de que se trata en este capítulo pertenecen indudablemente á la clase de los delitos públicos ó sociales. Mientras se subministra á una persona una substancia preparada exclusivamente para ella, hay un delito respecto del cual la sociedad sólo está *mediatamente* interesada ; pero cuando se prepara una cantidad de sustancias nocivas á la salud, que se pone al alcance de todos ó que se adultera, y se mezcla los comestibles, las bebidas ó las medicinas, se pone en peligro la salud ó la vida de un número indeterminado

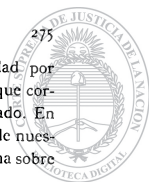
de personas, y la asociación humana está *inmediatamente* interesada en defenderse del daño que amenaza á todos sus miembros. Con esto queda dicho también que se trata de un delito *formal*: la mera posibilidad del perjuicio autoriza la aplicación de la pena.

1195. Esta materia ha sido legislada por el Código en sus últimos cinco artículos que examinaré en detalle.

Dispone el 295 que el que *á sabiendas* elabore ó expendá sustancias nocivas á la salud, sufrirá pena de arresto y multa de cien á mil pesos; que la misma pena sufrirá el que sin autorización bastante elabore productos químicos que puedan causar estragos y el que los expendá; y que será castigado con multa de cincuenta hasta quinientos pesos el que, en el caso anterior procediera con autorización, pero faltando á los reglamentos prescriptos sobre fabricación ó expendio de tales productos.

La fórmula *á sabiendas* que el Código reproduce en este artículo nos es ya conocida por haberse usado varias veces. La ley quiere significar con ella que para que haya imputabilidad del delito es necesario que el autor conozca las propiedades de la materia que elabora ó expende. Pero ¿era necesario que la ley repitiera también aquí la expresada fórmula? No lo creo en manera alguna. La elaboración ó expendición de una sustancia nociva, se acompaña lógicamente, según los principios admitidos, con la presunción de voluntad criminal. Si de las circunstancias particulares de la causa resulta desvirtuada esta presunción, no habrá acto punible alguno ó según los casos y mediando un





daño real y efectivo podrá haber imputabilidad por culpa ó imprudencia relacionada con el título que correspondiera según la naturaleza del daño causado. En los códigos que tengo á la vista, con excepción de nuestros proyectos, no se contiene prescripción alguna sobre este punto.

1196. En la segunda parte del artículo se castiga más bien un *delito* que una *falta*, si para distinguir aquél de ésta, bastara la circunstancia de ser esencial en aquél la voluntad de causar un daño, y penarse en la segunda la mera transgresión á un precepto, independientemente de toda voluntad criminal. Lo que se castiga no es la elaboración de los productos químicos que puedan causar estrago, ó su expendio: se pena la *falta de autorización*, ó la *transgresión á los reglamentos* cuando haya mediado autorización. En cuanto á la palabra estragos que se encuentra en esta parte del artículo, pienso que expresa más de lo que se ha querido decir. No era necesario para castigar la transgresión á los reglamentos, que los productos químicos en elaboración ó expendio fueran aptos para causar estragos: esto proporcionaría un criterio de gravedad de la pena; pero también podría penarse la transgresión cuando se tratara de un daño común á un número indeterminado de personas, aunque éste no tomara aquellas proporciones, siempre que se haya considerado necesario someter su elaboración y expendio á prescripciones reglamentarias en guarda de la salud pública. La prescripción de nuestro Código cuenta, sin embargo, con la autoridad del código penal español. (1)

(1) Artículos 351 y 353.



1197. El artículo 296 prevé las adulteraciones nocivas á la salud, de las bebidas ó comestibles que se destinan al consumo público, que castiga con la pena de arresto y multa de cincuenta á quinientos pesos. La pena se aplica así á los que mezclan en las bebidas ó comestibles, sustancias nocivas á la salud, como al que vende las bebidas ó comestibles mezcladas. Para uno y otro caso se ha consignado expresamente la fórmula *á sabiendas*, respecto de la cual cabe la observación ya hecha.

1198. El artículo 297 impone la pena de arresto y multa de cincuenta á trescientos pesos al que venda *á sabiendas* medicamentos deteriorados ó adulterados, ó los substituya con otros, agravándose esta pena con la de suspensión hasta por un año, si el delito se ejecuta abusando de una profesión para cuyo ejercicio se requiere título.

Debe tenerse presente que las leyes ó reglamentos provinciales ó locales pueden tener disposiciones concordantes con la de este artículo, y así se lee en el artículo 21 de la ley de la provincia de Buenos Aires que reglamenta el ejercicio de la medicina, farmacia y demás ramos del arte de curar, que los farmacéuticos responden de la buena calidad de los medicamentos que expendan, estando al efecto obligados á reconocerlos científicamente, y no se admitirá excusa alguna por expendición de medicamentos sofisticados por el fraude ó preparación defectuosa. Pero las sanciones penales que los reglamentos locales ó provinciales contuvieran han quedado derogadas por el Código Penal, única fuente legal para la imposición de castigos (1).

(1) Véase números 5 á 9 y 91.



1199. He indicado ya que los delitos contra la salud pública se consuman aunque no medie daño efectivo, por la mera posibilidad del perjuicio, como los demás delitos sociales. Si el daño aparece ó se produce, puede ser de tal entidad que sea penado con una pena mayor ó menor que las que impone la calificación de delitos contra la salud pública. El Código especializa en este punto una regla que podría formar parte de las disposiciones generales: si á consecuencia de cualquiera de los delitos expresados en los artículos precedentes, dice el 298, resultaren daños que merezcan mayor pena, se aplicará la correspondiente al delito más grave.

1200. La violación de las cuarentenas es penada por el artículo 299 con destierro por uno á dos años, sin perjuicio de ser sometido el autor del hecho, sin forma de juicio, al cumplimiento de la cuarentena. Ordinariamente este hecho será cometido sin ánimo de dañar. Solamente un loco podría proponerse la violación de la cuarentena con ánimo de propagar una epidemia en una ciudad. La voluntad criminal no consiste en este delito sino en el discernimiento con que se viola una prohibición de la autoridad, dictada en mira de la conservación de la salud general. La pena es perfectamente análoga al delito, porque se priva al delincuente de lo que más le interesa : el ingreso á la ciudad preservada.

1201. En este capítulo debieran preverse otros hechos importantes que no entran en ninguna de sus disposiciones y que sin embargo constituyen graves peligros para la salud pública ; por ejemplo : el envenenamiento, la corrupción de las aguas potables destinadas al uso común, hecho previsto por el artículo 357, inciso

2º del código español y por el 318 del código italiano, y la exhumación ó traslación de restos humanos con infracción de reglamentos sanitarios, que se prevé en el artículo 355 de aquél Código. Por otra parte, correspondería también prever la grave falta del médico que no cumpliera con las prescripciones reglamentarias tendentes á evitar la propagación de las epidemias.



TEXTO DEL CÓDIGO PENAL

CON LA INDICACIÓN DE LOS NÚMEROS DE ESTA OBRA EN QUE SE TRATA
DE LOS RESPECTIVOS ARTÍCULOS (1)



LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA

DELITOS Y PERSONAS RESPONSABLES

TÍTULO PRIMERO

VOLUNTAD CRIMINAL, DELITOS CONSUMADOS Y FRUSTRADOS

ARTÍCULO 1°

Es delito ó falta toda acción ú omisión penada por la ley.
n. 5 á 9, 16.

ARTÍCULO 2°

Hay delito consumado, cuando se ha llevado á efecto un acto
penado por la ley.
n. 16.

(1) El texto del Código está copiado, con el mayor cuidado, de la edición oficial. En otras ediciones hay varios errores de copia.



ARTÍCULO 3°

Hay delito frustrado, cuando el culpable, á pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su objeto por causas independientes de su voluntad.

n. 16, 46.

ARTÍCULO 4°

El que después de formar la resolución de cometer un delito emprenda una acción susceptible de producir uno mayor ó uno menor, será castigado como autor del delito realmente cometido, y no se le admitirá la excusa de que su intención fué sólo cometer el menos grave.

n. 31, 38, 39, 43.

ARTÍCULO 5°

Cuando por efecto de error ó ignorancia el autor de un delito no haya conocido el carácter particular de la acción que ha cometido, y este carácter sea de una naturaleza capaz de aumentar la culpabilidad de la acción, de tal modo que el culpable se encuentre haber cometido un delito más grave que el que intentaba, no se le imputará el hecho como voluntario, sino en consideración á la intención real que hubiese tenido, atendiendo á las circunstancias del caso.

n. 31, 39 á 43.

ARTÍCULO 6°

En la ejecución de hechos clasificados de delitos se presume la voluntad criminal, á no ser que resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa.

n. 31 á 37, 41, 43, 44.



ARTÍCULO 7°

Cuando una persona sea convicta de haber cometido con intención, un acto que según las nociones de la experiencia general, acostumbre producir inmediata y necesariamente un resultado criminal determinado, se tendrá como cierto que este resultado entró en las previsiones del culpable, á no ser que justifique lo contrario con pruebas manifiestas.

n. 43.

TÍTULO II

DE LA TENTATIVA

ARTÍCULO 8°

Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito ha sido manifestada por actos exteriores que tengan relación directa con el delito.

n. 45 á 62, 913 y 914.

ARTÍCULO 9°

La tentativa no está sujeta á pena alguna cuando se desiste voluntariamente del delito.

n. 47, 48, 63.

ARTÍCULO 10

La ley presume voluntario el desistimiento.

n. 63.



ARTÍCULO 11

El que se detiene en la ejecución de un delito, pero con el propósito de consumarlo en otro tiempo, en otro lugar, sobre otra persona ó de cualquier otro modo, será castigado como si hubiese dejado de cometerlo por circunstancias independientes de su voluntad.

n. 63.

ARTÍCULO 12

La tentativa será castigada con arreglo á la siguiente escala de penas, según que ella fuese más ó menos próxima :

1° Si fuese de un delito que consumado tuviese pena de muerte, los tribunales pronunciarán la de presidio desde diez años hasta por tiempo indeterminado ;

n. 251.

2° En los demás casos, la pena que corresponda al delito consumado se disminuirá desde la cuarta parte á la mitad.

En caso que al delito consumado correspondiese el mínimum de una clase de pena, se aplicará el máximium de la inferior en grado, que podrá disminuirse hasta en una tercera parte.

n. 64, 65.

ARTÍCULO 13

Si la tentativa constituye por sí misma un delito consumado, diferente del tentado y castigado con mayor pena que la señalada para la tentativa, se aplicará la establecida para el delito.

n. 66, 178.



ARTÍCULO 14

Los actos preparatorios de un delito sólo son punibles cuando importan una contravención, salvo disposición expresa de este Código.

n. 47 á 52, 67, 68, 69.

TÍTULO III

DE LA CULPA Ó IMPRUDENCIA

ARTÍCULO 15

Son punibles las contravenciones á la ley cometidas por culpa ó imprudencia.

n. 45, 83, 84, 85 y apéndice A.

ARTÍCULO 16

La culpa es grave :

1° Cuando el autor del daño ha podido prever el peligro de su acción, y sin embargo no se abstiene de ella por pasión, irreflexión ó ligereza;

2° Cuando el hecho encierra en si mismo tal grado de peligro, que basta la menor atención para prever que el hecho podía producir el resultado ilícito.

3° Cuando por razón de sus conocimientos personales ó de las circunstancias en que se encuentre, el delincuente fuese capaz de prever el peligro de su acción ó sus consecuencias;



4° Cuando el hecho ejecutado con imprudencia era ya ilícito ó prohibido por otros motivos;

5° Cuando por razón de su estado, profesión, empleo, compromisos ú otras circunstancias análogas, el autor estuviese obligado á mayor diligencia y atención;

6° Cuando sin título legal se ejerce ciencia, arte ó profesión, no estando ese ejercicio justificado por la urgencia y necesidad del caso.

n. 86, 89

ARTÍCULO 17

La culpa es leve :

1° Cuando la acción cometida por imprudencia no tiene sino una relación lejana con el resultado;

2° Cuando por defecto físico ó afección moral no se encuentra el individuo en las condiciones generales para conocer las consecuencias del acto;

3° Cuando el agente se ha visto obligado por circunstancias urgentes, que no puedan imputársele, á tomar una resolución súbita;

4° Cuando el acto se ha verificado en cumplimiento de deberes oficiales y por exceso de celo.

n. 86.

ARTÍCULO 18

El reo de culpa grave será castigado :

1° Con prisión de uno á tres años, si la acción culpable acompañada de voluntad criminal hubiese constituido un delito, cuya pena exceda de seis años de presidio ó penitenciaría.

2° En los demás casos de culpa grave la pena será arresto de un mes á un año.

n. 87.



ARTÍCULO 19

El reo de culpa leve será castigado :

1° En la hipótesis del primer inciso del artículo anterior, con la pena de arresto de tres á nueve meses;

2° En los demás casos, la pena será de arresto hasta dos meses.

n. 87.

ARTÍCULO 20

Cuando la pena fuese pecuniaria, la culpa grave será castigada con la quinta parte de la pena del delito, y la leve con la décima parte.

n. 87.

TÍTULO IV

DE LOS AUTORES PRINCIPALES

(198 á 201, 255, 256)

ARTÍCULO 21

Se consideran autores principales :

1° El que ejecuta el delito directamente por su propia acción ;
n. 202, 203.

2° El que antes ó durante la ejecución presta al ejecutor, con el intento de asegurar la consumación del delito, un auxilio ó cooperación, sin los que el hecho no habría podido tener lugar ;

n. 204.

3° El que con voluntad criminal determina al autor material á



ejecutar el hecho, sea por medio de consejos, orden, comisión, promesa de recompensa, dádiva, violencia irresistible, física ó moral, ó sea induciéndolo intencionalmente en error ó confirmando en el que se hallaba.

n. 205 á 214.

ARTÍCULO 22

El autor principal por orden, comisión, etc., no responderá sólo del hecho-especial que hubiese tenido en vista, sino también :

1° De todo delito no reservado expresamente y que el autor material del hecho se viese forzado á cometer para ejecutar el delito que se le había encargado, aconsejado, etc.;

2° De todo delito que resulte como consecuencia del hecho ordenado, aconsejado, etc., y que se imputaría al mandante ó instigador, si él mismo hubiese ejecutado el delito.

n. 215 á 218.

ARTÍCULO 23

Si el autor material hubiese ejecutado otro delito, que ninguna relación tuviese como medio, ni como resultado, con el delito sugerido, ordenado, etc., el mandante ó cualquier otro autor mediano, será castigado según las disposiciones de la ley, contra la tentativa del delito ordenado, aconsejado, etc., y no ejecutado.

n. 215 á 218.

ARTÍCULO 24

Si el autor principal mediano prescribe al autor material el modo de ejecución del delito, y éste, excediéndose de los límites

prescriptos lo consuma con circunstancias agravantes, el autor mediato no será responsable más que del delito cometido.

n. 215 á 218.

ARTÍCULO 25

Si dosó más individuos resuelven cometer un delito y se obligan, bajo promesa de auxilio recíproco, á ejecutarlo conjuntamente, esta asociación constituye un complot, y cada uno de los partícipes que antes, durante ó después de la ejecución, se haya mostrado en actitud de cooperar ó haya mantenido á sus compañeros en la convicción de que podían contar con su auxilio, será también considerado, después de la consumación, autor principal del delito.

n. 219, 220, 224, 225, 241.

ARTÍCULO 26

Los partícipes comunes del complot serán castigados con la pena ordinaria del delito cometido. Sin embargo, si esta pena tuviera un máximo y un minimum, se graduará en la extensión de sus límites legales, y se infligirá á los diferentes partícipes, según la más ó menos gravedad de su cooperación real, con excepción de los jefes que serán castigados con el máximo de la pena.

n. 221, 226.

ARTÍCULO 27

Se considerarán jefes del complot los que hayan concebido y formado la asociación criminal; los que hayan proporcionado el plan de ejecución del delito, y los que hayan dirigido su realización.





ARTÍCULO 28

En caso de delito no consumado, la organización de complot, se castigará como tentativa del delito convenido.

n. 222, 223, 915, 916.

ARTÍCULO 29

El partícipe de un complot que no haya cooperado á la ejecución, quedará exento de pena, si denuncia el complot á la autoridad antes de la ejecución del delito ó si hace saber su desistimiento á sus compañeros.

n. 227, 241, 253.

ARTÍCULO 30

Si dos ó más individuos resuelven verificar conjuntamente delitos indeterminados, esta asociación constituye banda, y serán considerados autores en todos los hechos que la banda cometa, salvo la prueba en contrario de la no participación en el hecho ó hechos determinados.

n. 219, 220, 221, 241.

ARTÍCULO 31

Las disposiciones de la ley respecto del complot son aplicables á las bandas.

n. 222.



TÍTULO V

DE LOS CÓMPlices

(228 á 230, 255, 256)

ARTÍCULO 32

Son cómplices los que no hallándose comprendidos en las disposiciones del título anterior, cooperen á la ejecución de un delito por actos anteriores ó simultáneos.

n. 231.

ARTÍCULO 33

Son cómplices en primer grado:

1° Los que hayan dado al autor principal instrucciones sobre el modo, medios ú ocasión de ejecutar el delito, cuando éste se comete siguiendo las instrucciones dadas, en todo ó en parte;

n. 232 á 235.

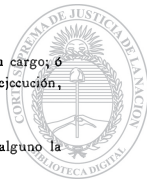
2° Los que hayan procurado al autor principal los objetos ó instrumentos para la ejecución del delito;

n. 236, 237.

3° Los que en el momento de la ejecución hayan prestado ayuda para que se consume el delito, sea por una participación directa en la acción principal, sea estando en observación, haciendo reconocimientos ó de cualquiera otra manera;

n. 238.

4° Los funcionarios del Estado y agentes públicos que estando obligados por su empleo á denunciar, descubrir, indagar ó castigar las infracciones, hayan prometido antes del hecho ó en mo-



mentos de consumarse, no cumplir con los deberes de su cargo; ó que sin acuerdo previo les hayan, antes ó durante la ejecución, prestado un auxilio efectivo de cualquiera manera ;

n. 239.

5° El que por consejos ú otros medios fortifique en alguno la resolución tomada anteriormente de cometer un delito ;

n. 240.

6° Los miembros de una banda que no hayan tenido parte en la ejecución de un delito concertado con los compañeros.

n. 241.

ARTÍCULO 34

El cómplice de primer grado será castigado :

1° Con presidio desde diez años hasta por tiempo indeterminado, si la pena contra el autor principal fuese la de muerte ;

2° Con seis á nueve años de presidio ó penitenciaría si la pena del autor principal fuera la de presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado ;

3° Con tres á cinco años de presidio ó penitenciaría, si la pena contra el autor principal fuese la de presidio ó penitenciaría por tiempo determinado que exceda de seis años ;

4° Con prisión de uno á tres años, si la pena contra el autor principal fuese la de presidio ó penitenciaría que no exceda de seis años ;

5° Con arresto, si la pena contra el autor principal fuese la de prisión ;

6° Con la cuarta parte de la pena impuesta al autor principal, si ésta fuese la de arresto, multa ó destierro.

n. 231, 246 á 249.



ARTÍCULO 35

Si el cómplice fuese uno de los empleados públicos de que habla el inciso 4° del artículo 33, se le aplicará el máximo de la pena, con más la de inhabilitación por tiempo determinado.

n. 239.

ARTÍCULO 36

Son cómplices en segundo grado:

1° Los que hayan dado las instrucciones de que habla el artículo 33, inciso 1°, cuando no se verifiquen completamente las demás condiciones del mismo;

n. 242.

2° Los que procuren al autor principal los objetos ó instrumentos que no podían servir sino para los actos preparatorios ó accesorios, ó para empresas ó proyectos posteriores á la ejecución de la acción principal;

n. 243.

3° Los funcionarios y agentes públicos designados en el artículo 33, inciso 4°, que sin estar en inteligencia con los autores principales del delito, faciliten su ejecución, omitiendo á sabiendas y con intención culpable, llenar los deberes de su cargo, antes de la consumación del hecho;

n. 244.

4° Todos los que antes ó durante la consumación hayan prometido á los criminales ocultar el hecho, ó darles cualquiera otra ayuda después de consumado el crimen.

n. 245.

ARTÍCULO 37

El cómplice de segundo grado será castigado:



1° Con cinco á ocho años de presidio, si la pena contra el autor principal fuese la de muerte;

2° Con presidio ó penitenciaría por tres á cinco años, si la pena contra el autor principal fuese la de presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado ó por más de diez años;

3° Con prisión, si la pena contra el autor principal fuese la de presidio ó penitenciaría por ménos de diez años;

4° En los demás casos en que el autor principal merezca pena de prisión, arresto, multa ó destierro, se aplicará al cómplice de segundo grado la sexta parte de la pena aplicada á aquél.

n. 231, 246 á 249.

ARTÍCULO 38

Si el acusado de complicidad prueba no haber querido cooperar sino á un crimen menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del crimen á que tenía intención de prestar ayuda.

n. 250.

ARTÍCULO 39

Si el crimen al cual se ha cooperado no se consuma, la pena del cómplice se determinará conforme á las prescripciones sobre la complicidad y en proporción de la pena de la tentativa en que hubiese incurrido el autor principal.

Pero la circunstancia de que la tentativa no es pasible de pena alguna en el autor principal, no podrá invocarse por el cómplice sino cuando los principios legales que eximen á las tentativas de castigo, puedan aplicarse á la persona ó acción del mismo cómplice.

n. 251, 252.



ARTÍCULO 40

El que antes del cumplimiento de un delito haya prometido á los culpables su cooperación para el tiempo solamente que siga á la consumación del delito, no quedará disculpado por la inejecución de su promesa después de cometida la acción, si antes que esta acción se consumase no hubiese declarado clara y expresamente á los culpables que retiraba su palabra.

n. 253.

ARTÍCULO 41

No hay cómplices sin un hecho principal punible; pero la exención de pena, la dispensa ó la atenuación que por razón personal existe para el autor principal, no alcanza á minorar la pena que corresponde á los cómplices, no existiendo tal circunstancia para ellos.

n. 252, 254.

TÍTULO VI

ENCUBRIDORES

(255, 256)

ARTÍCULO 42

Son encubridores los que sin promesa anterior al delito cometen después de su ejecución alguno de los hechos siguientes:

1.º Ocultar ó facilitar la fuga del delincuente para sustraerlo á la justicia;



2° Procurar hacer desaparecer los rastros del delito, ocultando los instrumentos con que se cometió ó tratando que desaparezcan las pruebas de él ;

3° Guardar, esconder, comprar ó vender los efectos sustraídos, para que aprovechen á los autores del delito ó á los encubridores mismos ;

4° Negar á la autoridad sin motivo legítimo el permiso de penetrar al domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él ;

5° Acoger, proteger habitualmente, guardar armas y efectos de malhechores, sabiendo que lo son, aunque no se tenga conocimiento determinado de los delitos ;

6° Los funcionarios que por interés, amor ú odio oculten las pruebas del delito, ya consista esa ocultación en actos afirmativos ó negativos, no ejerciendo las funciones de su empleo ;

7° Los que teniendo conocimiento de un delito cometido ó de los autores, omitan comunicar lo que saben á la autoridad, cuando tenían obligación de hacerlo por su profesión ó empleo.

n. 257 á 262.

ARTÍCULO 43

La pena para los enunciados en el artículo anterior, será de prisión, cuando se trate de delito á cuyo autor corresponda la de muerte, presidio ó penitenciaría por más de seis años; y en los demás casos la de arresto.

n. 263.

ARTÍCULO 44

Están exentos de pena por ocultación:

1° Los consanguíneos en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines en primer grado;

2° Los sacerdotes, médicos y abogados, cuando el secreto les haya sido confiado en ejercicio de sus funciones ;

n. 265 á 269.

3° Los domésticos del autor, sus amigos íntimos y los que de él hubiesen recibido grandes beneficios anteriores al delito. •

n. 264.

ARTÍCULO 45

La exención de pena á los expresados en los incisos 1° y 3° del artículo anterior, se entiende siempre que esa ocultación no se haya hecho por precio ó participando de los efectos del delito.

n. 264.

SECCIÓN II

TÍTULO PRIMERO

DE LAS PENAS EN GENERAL

ARTÍCULO 46

No serán castigados otros actos ú omisiones que los que la ley con anterioridad haya calificado de delitos.

n. 18 á 30.

ARTÍCULO 47

La pena sufrida no extingue la obligación de reparar el daño causado.

n. 278.





ARTÍCULO 48

Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuese distinta de la que exista al pronunciarse el fallo ó en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictase una ley más benigna, la pena debe limitarse á la establecida por esa ley.

n. 18 á 30.

ARTÍCULO 49

El tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido el condenado, se le computará: por tres días de prisión, uno de presidio; por dos días de prisión, uno de penitenciaría; por uno de prisión, otro de la misma pena; por dos días de arresto, uno de prisión, y por uno de esta pena cuatro pesos de multa.

n. 26, 279 y 280.

ARTÍCULO 50

Si durante la condena el penado se volviese loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena.

n. 281, 282.

ARTÍCULO 51

No se reputan penas, la separación ó suspensión de los empleados públicos acordada por las autoridades gubernativas en uso de sus atribuciones, ó por los tribunales durante el proceso, ó para instruirlo, ni las multas y demás correcciones que los superiores

impongan á sus subordinados y *administradores* (1) en uso de su jurisdicción disciplinaria ó atribuciones gubernativas.

n. 283.

ARTÍCULO 52

En las penas divisibles por razón del tiempo ó cantidad, la pena correspondiente al delito será el término medio, debiendo los jueces recorrer toda su extensión, aumentándolas hasta el máximo ó disminuyéndolas hasta el mínimo, con arreglo al carácter de las circunstancias agravantes ó atenuantes que existan y salvo determinación especial de calidad, de tiempo ó de suma que sea hecha por este Código.

n. 88, 272 á 275

ARTÍCULO 53

Si concurriesen á la vez circunstancias atenuantes y agravantes, los tribunales según su prudente arbitrio, aplicarán las penas dentro de los límites señalados.

n. 88, 272, 273, 276, 277.

TÍTULO II

CLASES DE PENAS, SU DURACIÓN, EJECUCIÓN Y EFECTOS.

(284 á 291, 703)

ARTÍCULO 54

Las penas que este Código establece son las siguientes:

n. 292 á 296.

(1) Debe leerse *administrados*, como en el artículo 25, n.º 3.º del Código español.





- 1° Muerte ;
- n. 297 á 320.
- 2° Presidio por tiempo indeterminado ;
- 3° Presidio desde tres á quince años ;
- 4° Penitenciaría por tiempo indeterminado ;
- 5° Penitenciaría desde tres á quince años ;
- n. 321 á 327.
- 6° Prisión de uno á tres años ;
- n. 365 á 367.
- 7° Arresto de un mes á un año ;
- n. 368.
- 8° Destierro de uno á seis años ;
- n. 369 á 370.
- 9° Inhabilitación absoluta, perpetua y temporal
- 10° Especial, perpetua y temporal ;
- n. 375.
- 11° Multa.
- n. 376 á 378.

ARTÍCULO 55

No se impondrá pena de muerte cuando solo haya prueba de presunciones, por vehementes que sean.

n. 305.

ARTÍCULO 56

La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote ó ministro del culto, cuyo auxilio hubiera solicitado ó aceptado.

El juez de la causa hará constar la ejecución de la pena en una

acta que se unirá al proceso. Esta acta y la sentencia se publicarán por dos diarios ó periódicos de la localidad.

n. 317.

ARTÍCULO 57

La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable.

La notificación no podrá hacerse en vísperas de domingo, ni de fiesta religiosa ó nacional.

n. 318.

ARTÍCULO 58

El cadáver del ejecutado será entregado á sus parientes, si lo pidiesen al Juez de la causa; pero no podrán enterrarlo con pompa, incurriendo de lo contrario en la pena de arresto de un mes á un año.

n. 318

ARTÍCULO 59

No se impondrá la pena de muerte á las mujeres, á los menores de edad y los mayores de setenta años.

Si alguno de los expresados en el párrafo anterior cometiere un delito que merezca pena de muerte, será condenado á penitenciaría por tiempo indeterminado.

n. 319, 320.

ARTÍCULO 60

Los sentenciados á presidio trabajarán en beneficio del Estado, siendo empleados en trabajos duros y penosos, y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento.

n. 328, 329.





ARTÍCULO 61

Los condenados á presidio no podrán ser empleados en obras de particulares ni en las públicas, que se ejecuten por empresas ó contratos con el Gobierno.

Si por falta de establecimiento donde deban sufrir la pena de presidio, ó por falta de trabajo en que deban ocuparse, no pudiesen cumplir su condena, serán destinados á obras públicas de cualquier género, con tal que no sean contratadas por particulares.

n. 328.

ARTÍCULO 62

Los hombres débiles ó enfermos, los menores de edad, los mayores de sesenta años y las mujeres que mereciesen pena de presidio, sufrirán la condena en penitenciaría.

n. 330.

ARTÍCULO 63

La pena de presidio lleva consigo las siguientes :

1º Inhabilitación absoluta para cargos públicos y para el ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos por el tiempo de la condena y la mitad más;

2º Interdicción civil que priva, mientras se sufre la pena, de la patria potestad, de la administración de sus bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos;

3º Sujeción á la vigilancia de la autoridad por uno á cinco años, después de cumplida la pena.

n. 331.



ARTÍCULO 64

La pena de presidio puede ser agravada con reclusión solitaria, que no exceda de treinta días, en los aniversarios del crimen.

n. 332.

ARTÍCULO 65

Los sentenciados á penitenciaría sufrirán las penas en las Penitenciarías, y donde no las hubiere, en establecimientos distintos de los presidios, con sujeción á trabajos forzosos dentro de ellos mismos.

Si el condenado no tuviese medios propios para satisfacer la responsabilidad civil en que hubiese incurrido por el delito cometido, el producto de su trabajo se destinará íntegro á este objeto y al sosten de su familia si la tuviese. Satisfecha la responsabilidad civil, el producto del trabajo se aplicará á satisfacer los gastos que cause en el establecimiento, y á formarle un fondo propio que se le entregará á su salida.

Lo que se aplique á gastos del penado no excederá de las dos terceras partes del producto de su trabajo.

n. 328, 329.

ARTÍCULO 66

La pena de penitenciaría puede agravarse con reclusión solitaria, que no pase de veinte días, en los aniversarios del delito.

n. 332.

ARTÍCULO 67

Es aplicable á los condenados á penitenciaría lo dispuesto para los presidiarios respecto á inhabilitación, interdicción y vigilancia



de policía, pero deduciéndose una tercera parte de tiempo á la inhabilitación y vigilancia, concluida la condena.

n. 331.

ARTÍCULO 68

La pena de prisión se sufrirá en cárceles que no sean presidios ó penitenciarias.

n. 365 á 367.

ARTÍCULO 69

La pena de prisión lleva consigo la suspensión de todo cargo y derecho político del penado, durante el tiempo de la condena.

n. 365.

ARTÍCULO 70

El condenado á arresto será puesto en cárcel, policía ó cuerpo de guardia, pudiendo ser arrestadas en sus propias casas las mujeres honestas, las personas ancianas ó valetudinarias.

n. 368.

ARTÍCULO 71

El condenado á destierro será expulsado de la República y conducido por orden del Gobierno hasta ponerlo fuera del territorio de la Nación.

n. 369, 370.

ARTÍCULO 72

A los desterrados que entrasen de nuevo al territorio de la Re-



pública, sin haber cumplido su condena, se les reagravará la pena con la mitad más del tiempo de la primera condenación.

n. 369.

ARTÍCULO 73

Los condenados á presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado que durante los últimos ocho años hubiesen dado pruebas de una reforma positiva, después de sufrir quince años de condena, tendrán derecho á pedir gracia del resto de la pena.

n. 334 á 364.

ARTÍCULO 74

El mismo derecho tendrán los condenados á presidio ó penitenciaría por tiempo determinado, después de haber cumplido las dos terceras partes de su condena, si durante la última tercera parte de ella hubiesen dado pruebas de una reforma positiva.

n. 334 á 364.

ARTÍCULO 75

La pena de inhabilitación absoluta importa :

1° La pérdida del empleo ó cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular ;

2° La privación de todos los derechos políticos, activos y pasivos durante el tiempo de la condena ;

3° La incapacidad para obtener cargos y empleos públicos, igualmente por el tiempo de la condena.

n. 371.

ARTÍCULO 76

La inhabilitación especial para empleo ó cargo público produce



la privación del cargo ó empleo sobre que recae y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial para derechos políticos, produce la incapacidad de ejercer, durante la condena, aquellos sobre que recae.

n. 372.

ARTÍCULO 77

Cuando la pena de inhabilitación, destitución ó suspensión recaiga en personas eclesiásticas, se limitarán sus efectos á los cargos y derechos que no tengan por la Iglesia.

n. 374.

ARTÍCULO 78

La sujeción á la vigilancia de la autoridad produce en el penado las siguientes obligaciones:

1° No variar de domicilio sin conocimiento de la autoridad encargada de su vigilancia ;

2° Observar las reglas de inspección que aquélla le prefie ;

3° Adoptar oficio, arte, industria ó profesión, si no tuviese medios propios y conocidos de subsistencia.

n. 365.

ARTÍCULO 79

La pena de multa obliga al reo al pago de la cantidad pecuniaria á que ha sido condenado en la sentencia.

La multa será siempre proporcionada á los bienes, empleo ó industria del delincuente, salvo los casos especiales de la ley; y si no pudiere pagar la multa, sufrirá arresto equivalente que no podrá pasar de nueve meses.

n. 376, 378.



ARTÍCULO 80

Toda pena que se imponga por un delito lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, á no ser que pertenezcan á un tercero no responsable.

n. 379, 380.

TÍTULO III

DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE PENA

(35, 92, 122).

ARTÍCULO 81

Están exentos de pena :

1° El que ha cometido el hecho en estado de locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta ó beodez completa é involuntaria, y generalmente, siempre que el acto haya sido resuelto y consumado en una perturbación cualquiera de los sentidos ó de la inteligencia, no imputable al agente, y durante el cual éste no ha tenido conciencia de dicho acto ó de su criminalidad ;

n. 93 á 110, 117.

2° Los menores de diez años ;

3° Los mayores de diez años y menores de quince, á no ser que hayan obrado con discernimiento ;

n. 111 á 114.

4° El que causa un mal por evitar otro mayor inminente á que ha sido extraño ;

n. 120.



5° El que obra violentado por fuerza irresistible, física ó moral ;
n. 115 á 119.

6° El que en ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente ;

n. 72, 78, 79, 80, 81, 82, 121.

7° El que obra en cumplimiento de un deber, ó en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad ó cargo ;

n. 123, 124.

8° El que obra en defensa propia ó de sus derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes :

1° Agresión ilegítima ;

2° Necesidad racional del medio empleado para impedir la ó repe-
lerla ;

3° Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende ;

n. 126 á 132 y el Apéndice B.

9° El que obra en defensa de la persona ó derechos de sus ascen-
dientes, descendientes, cónyuges ó hermanos, de los afines en los
mismos grados y de sus consanguíneos hasta el cuarto grado civil,
siempre que concurran la primera y segunda circunstancias expre-
sadas en el inciso anterior, y la de que en caso de haber precedido
provocación de parte del acometido, no tuviera participación en
ella el *ofensor* (1) ;

n. 127, 132, 133.

10° El que obra en defensa de la persona ó derechos de un ex-
traño, en momentos de una agresión grave y concurriendo las
circunstancias detalladas en el inciso 8° ;

n. 127, 135.

11° El que hiere ó mata al que pretende penetrar en su domi-
cilio por escalamiento, fractura ó fuerza, ó al que encontrase den-
tro de su hogar, siempre que haya resistencia ;

n. 124, 134 á 137.

(1) Así dice la edición oficial ; debe leerse *defensor*.



12° El cónyuge que sorprendiendo á su consorte en flagrante delito de adulterio, hiere ó mata á los culpables ó á uno de ellos ;

13° El padre y el hermano que hiere ó mata al que encuentra yaciendo con su hija ó hermana menor de quince años ;

n. 139.

14° La mujer que hiere ó mata al que intenta violarla ó robarla ;

n. 138.

15° El que obra en virtud de obediencia debida.

n. 123, 125.

ARTÍCULO 82

Todo aquel que en estado de legítima defensa hiriese ó matase á alguno, está obligado á dar aviso del suceso, tan pronto como le sea posible, á la autoridad más inmediata.

Si no cumple con esta obligación, ó trata de ocultar el hecho, se presumirá que ha habido exceso en los límites de la defensa, aunque después demuestre que hubo ataque peligroso dirigido contra él.

Si el proceso destruye esta presunción, el acusado será absuelto por lo que hace á la herida ó la muerte, pero será condenado por haber ocultado el hecho, ó por haber omitido declararlo á la autoridad, con arresto de uno á tres meses.

n. 140.



TÍTULO IV

DE LA ATENUACIÓN DE LAS PENAS

ARTÍCULO 83

Son circunstancias atenuantes :

n. 141 á 144, 156, 157.

1° Las expresadas en el título anterior, cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos ;

n. 102, 145, 153.

2° Ser menor de diez y ocho años ó mayor de setenta ;

n. 146.

3° No haber tenido el delincuente intención de causar todo el mal que produjo ;

n. 39, 77, 147.

4° Haber precedido provocación, amenaza ú ofensa por parte del ofendido ;

n. 148, 149.

5° Haber procurado con celo reparar el mal causado ó impedir su consumación ;

n. 150.

6° El estado de irritación ó furor sin culpa del autor del delito, cuando no le ha hecho perder del todo la conciencia de lo que hace ;

n. 151.

7° Cualquier otra circunstancia análoga á las anteriores ;

n. 152, 153

8° En los delitos que merezcan pena capital, cuando la causa dure más de dos años, sin culpa del procesado ó de su defensor ;

n. 154.



9° Haber corrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción del delito.

n. 155.

TÍTULO V

DE LA AGRAVACIÓN DE LAS PENAS

ARTÍCULO 84

Son circunstancias agravantes, salvo disposiciones especiales :
n. 156, 157.

1° Ser el agraviado ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano ó afín en los mismos grados del ofensor, estar éste obligado á un respeto particular hacia aquél, por ser su tutor, superior, maestro, etc ;

n. 159.

2° Ejecutar el hecho con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra á traición ó sin peligro para el agresor ;

n. 162, 166.

3° Aumentar deliberadamente el mal, causando otros innecesarios para la ejecución ;

n. 175.

4° Obrar con premeditación ;

n. 167 á 174.

5° Emplear astucia, fraude ó disfraz ;

n. 176.

6° Obrar con abuso de confianza ;

7° Cometer el delito por precio, promesa ó recompensa ;

n. 177.

8° Ejecutarlo por medio de veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión ú otros medios que puedan ocasionar ma-



yores estragos ó daños, sea á la persona objeto del delito ó á otras ;

n. 179.

9° Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio ú otros acontecimientos semejantes ;

n. 179 bis.

10° Abusar de la superioridad por edad, fuerza ó sexo ;

n. 180.

11° Prevalerse del carácter público que se inviste ;

n. 181.

12° Ejecutar el hecho con auxilio de gente armada, ó de personas que faciliten ó proporcionen la impunidad ;

n. 182.

13° Cuando se produce mayor alarma, por haberse cometido el delito de noche ó en despoblado ;

n. 158, 183.

14° Cometerlo en cuadrilla, con violación del domicilio ú otra circunstancia semejante ;

n. 182.

15° Ejecutarlo en personas que ejerzan autoridad pública, ó en lugares en que estén ejerciendo sus funciones ;

n. 160.

16° Verificarlo en la persona ó en desprecio de los ministros de una religión ó en lugares destinados al culto ;

n. 160, 161.

17° Ejecutarlo con fractura ó escalamiento de lugar cerrado ;

n. 184.

18° Ejecutarlo haciendo uso de armas prohibidas por los reglamentos ;

n. 185.

19° Haber sido el culpable castigado anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena ;

n. 186 á 196.



20° Ser reincidente de delitos de la misma especie.
n. 186 á 196.

ARTÍCULO 85

Si se ha reiterado el mismo delito contra varias personas ó cosas, ó si el mismo malhechor comete delitos de diferente especie por otras tantas acciones, la pena del uno se agregará á la del otro; pero si esta reunión fuese imposible por la naturaleza de las penas ó por exceder del máximun legal la suma resultante de la acumulación, se aplicará la del delito mayor, agravándola con las adicionales que fuese posible.

Si no fuese posible acumulación alguna por la diversa clase de las penas, el delito menos grave será circunstancia agravante del más grave.

n. 186 á 196.

ARTÍCULO 86

Si un delito de la misma especie se comete varias veces contra una misma persona ó cosa, se castigará el acto más grave y los otros se considerarán circunstancia agravante.

n. 186 á 196.

ARTÍCULO 87

Si el mismo culpable con ocasión de la ejecución del delito que se propone cometer, perpetrare otros, se le aplicará la pena del más grave y los otros se considerarán circunstancia agravante.

n. 197.

ARTÍCULO 88

Los tribunales tomarán en cuenta las circunstancias expresa-

das en el artículo 84, teniendo en consideración la naturaleza y accidentes del delito.

n. 158.



TÍTULO VI

DE LA PRESCRIPCIÓN

(385 á 389)

ARTÍCULO 89

El derecho de acusar se prescribe :

1° Por delitos que tengan pena de muerte, presidio ó penitenciaria por tiempo indeterminado, á los quince años ;

2° Por delitos que tengan pena de presidio ó penitenciaria por tiempo determinado, á los diez años ;

3° Por delitos que merezcan pena de prisión, á los tres años, y de multa ó arresto, al año.

n. 389 á 392.

ARTÍCULO 90.

Las penas se prescriben :

1° A los veinte años la de muerte, presidio ó penitenciaria por tiempo indeterminado ;

2° Las demás penas por un tiempo igual al de la condena con un aumento de dos años ;

3° La multa al año.

n. 389 á 392.

ARTÍCULO 91

Los términos de la prescripción comienzan á contarse para las



acusaciones desde el día en que se comete el delito, para las penas desde que se interrumpe su ejecución.

n. 393 á 396.

ARTÍCULO 92

Si antes de vencido el término comete el reo otro delito de la misma especie, ó que merezca igual ó mayor pena, la prescripción queda sin efecto.

n. 397, 398.

ARTÍCULO 93

Todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente, dentro del término de la prescripción, la interrumpe.

n. 399, 400.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS

SECCIÓN PRIMERA

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS



TITULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

(417)

CAPITULO PRIMERO

DEL HOMICIDIO.

(418 á 434)

ARTÍCULO 94

El que á sabiendas mata á su padre, madre ó hijo, legítimo ó natural, ó á cualquier otro ascendiente, descendiente ó á su cónyuge, será castigado :

1° Con la pena de muerte, si no concurre circunstancia atenuante alguna ;

2° Con presidio por tiempo indeterminado, si hubiese una ó más circunstancias atenuantes.

n. 435 á 446.



ARTÍCULO 95

El que mata á otro, no estando comprendido en el artículo anterior, será castigado :

1° Con la pena de muerte si el homicidio se perpetra por precio ó alevosía (162 á 166), ó por medio de veneno, incendio ó descarrilamiento, siempre que no haya circunstancia atenuante alguna ;

2° Con la pena de presidio por tiempo indeterminado, si hubiere una circunstancia atenuante ;

3° Con presidio de diez á quince años, si concurriesen dos ó más circunstancias atenuantes.

n. 251, 275, 447 á 460.

ARTÍCULO 96

En los demás casos no comprendidos en los dos artículos anteriores, el homicidio será castigado :

1° Con presidio de diez años hasta por tiempo indeterminado, si hay una ó más circunstancias agravantes ;

2° Con presidio por seis á diez años, si no hubiese circunstancia agravante alguna ;

3° Con presidio por tres á seis años, si hubiese una sola circunstancia atenuante ;

4° Con penitenciaría por tres á seis años, si concurriesen dos ó más circunstancias atenuantes.

n. 461, 462.

ARTÍCULO 97

La pena será tres años de prisión si la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas ó injurias ilícitas y graves.

n. 463 á 466.



ARTÍCULO 98

Cuando en riña ó pelea en que toman parte más de dos personas resultasen uno ó más muertos, se observarán las disposiciones siguientes :

1ª Si constase quien ó quienes dieron la muerte, sólo él ó ellos serán castigados como homicidas ; y como cómplices los otros que estuvieron de su parte ;

2ª Si la muerte se produjese por el número de las heridas, no siendo mortal alguna de ellas, todos los autores de las heridas serán castigados como homicidas con el mínimum de la pena señalada para este delito ;

3ª Si no constase quien ó quienes infirieron las heridas, todos serán castigados con prisión de uno á tres años.

n. 467.

ARTÍCULO 99

El acto de disparar intencionalmente un arma de fuego contra una persona sin hierla, será penado con uno á tres años de prisión. Esta pena se aplicará aunque se cause herida á que la ley señale pena menor, siempre que el hecho no importe un delito mayor.

n. 468 á 471.

CAPITULO II

INFANTICIDIO

ARTÍCULO 100

La madre que por ocultar su deshonra cometiese infanticidio en la persona de su hijo, en el momento del nacimiento ó hasta tres

días después, y los abuelos maternos, que para ocultar la deshonra de la madre, cometiesen el mismo delito, serán castigados con la pena de penitenciaría por tres á seis años.

n. 472 á 479.

ARTÍCULO 101

Fuera de estos casos, el que cometa infanticidio será castigado con la pena del homicida.

n. 476.

CAPÍTULO III

ABORTO

(480 á 484)

ARTÍCULO 102

El que maliciosamente causare un aborto, será castigado :

1° Con penitenciaría de tres á seis años, si ejerciere violencia sobre la mujer embarazada ;

2° Con prisión de dos á tres años si, aunque no ejerza violencia, obrare sin consentimiento de la mujer ;

3° Con prisión de uno á dos años, si la mujer lo consintiere.

n. 485 á 490.

ARTÍCULO 103

Será castigado con arresto de seis meses á un año, el que con violencia causare un aborto sin que haya tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio ó le constare.

n. 491 á 493.





ARTÍCULO 104

La mujer que violentamente causare su aborto ó consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con uno á tres años de prisión; y si lo hiciere por ocultar su deshonra, con el minimum de esta pena.

n. 494 á 500.

ARTÍCULO 105

Los médicos, cirujanos, parteras ó farmacéuticos que abusen de su ciencia ó arte para causar aborto, serán castigados con penitenciaría de tres á seis años é inhabilitación por doble tiempo.

n. 501.

ARTÍCULO 106

Cuando los medios empleados para causar el aborto hubiesen producido la muerte de la mujer, se aplicará el máximo de la pena establecida en el inciso 1º del artículo 102.

n. 502.

CAPÍTULO IV

DUELO

(503 á 509)

ARTÍCULO 107

La autoridad policial ó judicial que tuviere noticia de estarse concertando un duelo, procederá á la detención del provocador y á

la del retado, si éste hubiese aceptado el desafío, y no los pondrá en libertad hasta que ofrezcan bajo palabra de honor, desistir de su propósito.

n. 510.

ARTÍCULO 108

Los que se batan en duelo con intervención de dos ó más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán castigados :

1° Con arresto de seis meses á un año, si no resultare muerte ó heridas graves ;

2° Con prisión de uno á tres años, en caso de muerte ó heridas graves, al que las infirió.

n. 511, 512, 514.

ARTÍCULO 109

Los que se batan sin la intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán castigados :

1° El que mate á su adversario, con la pena señalada para el homicida ;

2° El que cause heridas, con la pena señalada para el autor de heridas ;

3° Con arresto de tres meses á seis, si no hubiese muerte ó heridas.

n. 513, 514.

ARTÍCULO 110

El que instigue á otro á provocar ó á aceptar un duelo y el que desacredite públicamente á otro por no desafiar ó por rehusar un desafío, será castigado :





1° Con arresto de uno á seis meses, si el duelo no se verifica;
2° Con la pena señalada en los dos artículos anteriores, si el duelo tiene lugar, según las consecuencias y condiciones en que se verifique.

n. 515.

ARTÍCULO 111

El que provoque ó dé causa á un desafío, proponiéndose un interés pecuniario ú otro objeto inmoral, será castigado :

1° Con prisión de uno á tres años, si el duelo no se verifica;
2° Con penitenciaría de tres á seis años, si se verifica el duelo y no resultan heridas graves ;
3° Con penitenciaría de diez á quince años, si infiriese heridas graves á su adversario ;
4° Con presidio por tiempo indeterminado, si le causa la muerte.

n. 516.

ARTÍCULO 112

El combatiente que falte deliberadamente en daño de su adversario á las condiciones ajustadas por los padrinos, será castigado :

1° Con penitenciaría de tres á seis años, si infiriese heridas leves á su adversario ;
2° Con penitenciaría de seis á quince años, si le infiriese heridas graves ;
3° Con presidio por tiempo indeterminado, si le da la muerte.

n. 517.

ARTÍCULO 113

En los casos de los artículos anteriores, se aplicará desde la mitad al máximun de las penas en ellos establecidas :



1° Al que habiendo injuriado á su adversario, se niegue á darle una satisfacción decorosa ;

2° Al provocador que se niegue á explicar á su adversario los motivos del desafío ;

3° Al que desechase las explicaciones suficientes á la satisfacción decorosa que le ofrezca su adversario ;

4° Al que tuviese hábito de retar ó de buscar ocasión de reñir, si no se probase que él no dió causa para el duelo.

n. 518.

ARTÍCULO 114

Se aplicará desde el minimum á la mitad de las mismas penas :

1° Al injuriado que no hubiese podido obtener de su adversario una satisfacción decorosa ;

2° Al desafiado que se batiese por no haber podido obtener de su adversario explicación de los motivos del duelo ;

3° Al que se batiese por haber desechado su adversario la explicación de los motivos del duelo ó la satisfacción decorosa del agravio.

n. 519.

ARTÍCULO 115

El que se batiese por grave ofensa inferida á su esposa, padre ó hijos, sufrirá la pena inmediatamente inferior á las señaladas en los artículos anteriores.

n. 519.

ARTÍCULO 116

Los padrinos de un duelo, si usaren cualquier género de allevosía en la ejecución del desafío ó en el arreglo de sus condiciones, serán castigados con las penas señaladas en el artículo 112, según sean las consecuencias que resulten.



ARTÍCULO 117

Si los padrinos concertasen que el duelo sca á muerte, serán castigados con prisión de uno á tres años, si se verificase la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verifica la muerte de alguno de ellos, la pena será de arresto de seis á doce meses.

n. 520.

ARTÍCULO 118

En los demás casos, los padrinos sufrirán la pena de arresto de uno á tres meses; y quedarán exentos de toda pena, si hubiesen hecho esfuerzos serios para impedir el duelo, ó para prevenir durante el combate sus desagradables resultados.

n. 520.

TÍTULO II

LESIONES CORPORALES

(521 á 532)

ARTÍCULO 119

Las heridas, los golpes, la administración de sustancias nocivas y cualesquiera otras lesiones cometidas voluntariamente, serán castigadas según las siguientes reglas :

1° El que sacare á otro los ojos ó lo castrar, será castigado con penitenciaría por seis á diez años ;

n. 533 á 536.

2° La mutilación de otro miembro ú órgano principal del cuerpo, se castigará con penitenciaría por tres á seis años ;

n. 537.

3° Con la misma pena, si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro principal ó notablemente deforme.

n. 538 á 543.

ARTÍCULO 120

Las lesiones no comprendidas en los artículos anteriores serán penadas :

1° Con prisión de uno á tres años, si la lesión produce incapacidad para el trabajo por más de un mes ;

2° Con arresto de un mes ó un año, si la lesión no produce incapacidad para el trabajo, ó si la produce por un mes ó por menos.

n. 544, 545.

ARTÍCULO 121

Si en riña ó pelca entre más de dos personas se causan lesiones, sin que conste quien sea su autor, se aplicará á todos los que estuvieron en contra del herido el minimum de la pena señalada para el delito.

n. 546.

TÍTULO III

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

(547)

CAPÍTULO PRIMERO

ADULTERIO

(548 á 554)

ARTÍCULO 122

La mujer que cometa adulterio, será castigada con prisión de uno á tres años y el delincuente con destierro, también por uno á tres años.

n. 555 á 564,





ARTÍCULO 123

El marido sólo es punible cuando tiene manceba dentro ó fuera de la casa conyugal. La pena será de prisión por uno á tres años, y la de la manceba destierro, también por uno á tres años.

n. 565.

ARTÍCULO 124

El cónyuge ofendido es el único que puede acusar por delito de adulterio, debiendo acusar á ambos culpables.

n. 566 á 568.

ARTÍCULO 125

El cónyuge ofendido, puede en cualquier tiempo remitir la pena á su consorte, debiendo en ese caso también perdonar al cómplice.

n. 569, 570.

ARTÍCULO 126

Pendiente juicio de divorcio por adulterio, no podrá intentarse la accion penal. Tampoco podrá intentarse si la sentencia fuere absolutoria.

Si se declara el divorcio por causa de adulterio, la sentencia no producirá efecto alguno en la causa criminal que se intente.

n. 571, 572.

CAPÍTULO II

DE LA VIOLACIÓN

ARTÍCULO 127

Se comete violación en cualquiera de los casos siguientes, cuan



do ha habido aproximación sexual, aunque el acto no llegue a consumarse :

- 1° Cuando se usa de fuerza ó intimidación ;
- 2° Cuando la mujer se halle privada de razón ó de sentidos por cualquiera causa ;
- 3° Cuando la mujer sea menor de doce años cumplidos, aunque no concorra ninguna de las circunstancias expresadas en los incisos anteriores.

n. 573 á 577.

ARTÍCULO 128

La pena contra la violación será :

- 1° De seis á diez años de penitenciaría, si la mujer violada fuese casada ó menor de doce años ;
 - 2° Si resultase la muerte de la menor, la pena será de presidio por diez á quince años ;
 - 3° Si la mujer violada fuese honrada, la pena será de penitenciaría por tres á seis años ;
 - 4° Si fuese prostituta, la pena será de arresto de un mes á seis.
- n. 578, 579.**

ARTÍCULO 129

Las mismas penas de los artículos anteriores se aplicarán respectivamente al reo de sodomía.

n. 580 á 583.

CAPÍTULO III

ESTUPRO Y CORRUPCIÓN DE MENORES

ARTÍCULO 130

El que estupre á una mujer virgen mayor de doce años y menor



de quince, empleando la seducción, será castigado con prisión de uno á tres años.

n. 584 á 589.

ARTÍCULO 131

Si el estupro fuese cometido por persona que ejerza autoridad, por sacerdote, por cualquiera persona encargada de la educación ó guarda de la menor, ó por su ascendiente ó hermano, la pena será de tres á seis años de penitenciaría.

n. 590.

ARTÍCULO 132

El que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza, promoviére ó facilitare la prostitución ó corrupción de menores, será castigado con prisión de uno á tres años, si la menor tuviese menos de diez y ocho años y más de catorce; y con penitenciaría por tres á seis años, si la menor tuviese menos de catorce años cumplidos.

n. 591 á 597.

CAPÍTULO IV

DEL RAPTO

{598, 599}.

ARTÍCULO 133

El rapto de mujer casada ejecutado con violencia, será castigado con penitenciaría de tres á seis años.

n. 600, 601.

Si se ejecutare con consentimiento de la mujer, la pena será la señalada para el adulterio.

n. 602.

ARTÍCULO 134

El rapto de menor de doce años, sea que se ejecute con violencia ó con consentimiento, será castigado con penitenciaría por tres á seis años.

n. 603.

ARTÍCULO 135

El rapto de viuda honesta ó de doncella mayor de doce años, ejecutado con violencia, será castigado con prisión de uno á tres años.

n. 604.

Si la robada fuese menor de quince años y el rapto se ejecutase con su consentimiento, la pena será de arresto por seis meses á un año; pero si el rapto se ejecutase con intención de casarse, la pena será de arresto por uno á tres meses.

n. 605, 606.

ARTÍCULO 136

El rapto no comprendido en los artículos anteriores, ejecutado con violencia, será castigado con arresto de uno á seis meses.

n. 607.

ARTÍCULO 137

Cuando en el rapto hubiese violación ó estupro, la pena será la misma de estos delitos, considerándose el rapto circunstancia agravante.

n. 608.





ARTÍCULO 138

El raptor que no entregue la persona robada, ó no diere razón satisfactoria de su paradero, será castigado como homicida.

n. 609, 610.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 139

Los reos de violación, estupro ó rapto, serán además condenados á dotar á la ofendida, si fuese soltera ó viuda, en proporción á sus facultades y á mantener la prole que resulte.

n. 621.

ARTÍCULO 140

En los casos de violación, estupro ó rapto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente, si se casare con la ofendida, prestando ella su libre consentimiento, después de restituirla á poder de su padre ó guardador, ó á otro lugar seguro.

n. 617 á 619.

ARTÍCULO 141

No se procederá á formar causa por los delitos expresados en el presente Título, sino por acusación ó denuncia de la interesada, ó de la persona bajo cuyo poder se hubiere hallado cuando se cometió el delito.

Si el delito se cometiere contra una impúber que no tenga padres ni guardador, puede acusar cualquiera del pueblo ó procederse de oficio; lo mismo que en el caso de que el delito fuese cometido por su ascendiente, tutor ó por cualquiera persona encargada de la guarda de la menor.

n. 611 á 616.

ARTÍCULO 142

Los ascendientes, tutores, curadores, maestros y cualquiera persona que con abuso de autoridad ó encargo, cooperasen como cómplices á la perpetración de los mismos delitos, serán castigados con la pena de los autores.

n. 620.

TÍTULO IV

MATRIMONIOS ILEGALES

(622 á 626 y 641)

ARTÍCULO 143

El que contrajere matrimonio estando casado válidamente ó sabiendo que existe otro impedimento dirimente no dispensable, será castigado con penitenciaría por tres á seis años.

(En el primer caso, *n.* 627 á 633, en el segundo, *n.* 634).

ARTÍCULO 144

En la misma pena del artículo anterior incurrirá el que engañando á una persona, simulare matrimonio con ella.

n. 635.





ARTÍCULO 145

El que contrajere matrimonio, sabiendo que existe un impedimento dirimente dispensable, será castigado :

1° Con arresto de uno á tres meses, si revalidare el matrimonio, dispensando el impedimento ;

2° Con prisión de uno á tres años, si no quisiese revalidar el matrimonio, de la cual quedará relevado cuando quiera que se revalide el matrimonio.

n. 636.

ARTÍCULO 146

El que en un matrimonio ilegal, pero válido, hiciese intervenir al párroco por sorpresa ó engaño, sufrirá arresto de uno á seis meses.

Si mediase violencia ó intimidación, la pena será de uno á dos años de prisión.

n. 637.

ARTÍCULO 147

El eclesiástico que á sabiendas autorice un matrimonio ilegal, sufrirá la pena de arresto de tres meses á un año.

Si autorizase un matrimonio ilegal sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber exigido los comprobantes de que los contrayentes están habilitados para el acto, la pena será de arresto hasta tres meses.

n. 638.

ARTÍCULO 148

El menor que contrajese un matrimonio ilegal, pero válido,



incurrirá en la pena de arresto por tres á seis meses. Sólo se impondrá esta pena á instancia de la persona que debía prestar el consentimiento.

n. 639 y 641.

ARTÍCULO 149

El contrayente doloso pagará á favor de la mujer engañada, una multa que estimará el juez, según los casos.

n. 640.

TÍTULO V

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

(643 á 646)

ARTÍCULO 150

La mujer que finja preñez ó parto para dar á su supuesto hijo derechos que no le correspondan, sufrirá prisión por un año á tres.

En la misma pena incurrirá el médico ó la partera que coopere á la ejecución del delito.

n. 647 á 652.

ARTÍCULO 151

El que expusiere ú ocultare á un niño ó le supusiese filiación para hacerle perder su estado de familia, ó los derechos que por él le correspondan, sufrirá prisión de uno á tres años.

En la misma pena incurrirá el que supusiere filiación en favor de una persona, para defraudar los derechos que correspondan á otra.

n. 653 á 655, 677, 678.



ARTÍCULO 152

Si la falsa filiación tuviese por objeto favorecer á una persona, pero sin suplantar en lugar de otra, la pena será de uno á tres años de prisión.

n. 647.

ARTÍCULO 153

El que en cualquier otro caso, que no sea de los especificados en los artículos anteriores, usurpe el estado civil de otro, será castigado con uno á tres años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponde cuando le defraude sus bienes ó derechos.

n. 656.

ARTÍCULO 154

El que siendo miembro de la familia cometa el delito previsto por el artículo 151, quedará además privado de las ventajas legales del parentesco respecto de los que hayan sido víctimas del fraude.

n. 667.

TÍTULO VI

DELITOS CONTRA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

(658 y 659)

CAPÍTULO PRIMERO

DETENCIÓN PRIVADA

(669)

ARTÍCULO 155

El que prive á otro de su libertad, encerrándolo ó deteniéndolo contra su voluntad, será castigado con prisión de uno á tres años, en los casos siguientes :



1° Si se hubiese ejecutado simulando autoridad pública ó orden de autoridad pública ;

2° Si se cometiere en la persona de los padres, hermanos ó en otros individuos á quienes se debe respeto particular ;

3° Si se hubiese amenazado de muerte al secuestrado ó infiriéndole una lesión á que la ley señale pena menor ;

4° Si la secuestración dura más de un mes, aunque no concurra ninguna de las circunstancias expresadas en los números anteriores.

n. 660 á 668.

ARTÍCULO 156

Si la secuestración durase menos de tres días sin que concurra ninguna de las circunstancias expresadas en los incisos 1°, 2° y 3° del artículo anterior, la pena será de arresto de uno á tres meses.

Si concurriese alguna de esas circunstancias, la pena será arresto por tres á seis meses.

n. 661 y 664.

ARTÍCULO 157

Si la secuestración durase más de tres días y menos de treinta, sin concurrir las circunstancias expresadas en el artículo 155, la pena será de arresto.

n. 661 y 664.

CAPITULO II

SUSTRACCIÓN DE MENORES

(670 y 671)

ARTÍCULO 158

El que sustrajere un menor de nueve años del poder de sus



padres, tutor ó persona encargada de él, sufrirá la pena de prisión por uno á tres años.

n. 672.

ARTÍCULO 159

En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de nueve años, no lo presente á sus padres ó guardadores que lo soliciten.

n. 673.

ARTÍCULO 160

El que indujere al mayor de nueve años y menor de quince á que fugue de casa de sus padres, guardadores ó encargados de su persona, sufrirá arresto de tres á nueve meses.

n. 672.

ARTÍCULO 161

En todos los casos de los artículos anteriores se exigirá á los reos la caución correspondiente.

n. 674.

CAPÍTULO III

ABANDONO DE NIÑOS

ARTÍCULO 162

El que abandone á un menor de siete años que esté á su cuidado, sufrirá arresto por tres á seis meses y multa de veinte á doscientos pesos.

n. 675 á 680; 653 á 655.



ARTÍCULO 163

Si á consecuencia del abandono muriese el niño, se aplicarán de tres á seis años de penitenciaría.

n. 675 á 680.

ARTÍCULO 164

El que teniendo á su cargo la crianza ó educación de un menor, lo pusiere en un hospicio público ó lo entregare á otra persona sin la anuencia de los padres ó guardadores ó de la autoridad local, á falta de unos y otros, será castigado con multa de cincuenta á quinientos pesos á favor del menor.

n. 681 y 682.

CAPÍTULO IV

VIOLACIÓN DE DOMICILIO

(683 á 685 y 698)

ARTÍCULO 165

El que entre en morada ajena contra la voluntad del morador, sufrirá arresto hasta seis meses y multa de diez á cien pesos.

En la misma pena incurrirá el que entre subrepticamente en casa ajena ocultándose en ella.

Si el hecho se ejecutase con violencia ó intimidación, la pena será prisión por uno á dos años y multa de cien á quinientos pesos.

n. 686 á 694.



ARTÍCULO 166

La disposición del artículo anterior no es aplicable al que entra en morada ajena para evitar un mal grave á sí mismo, á los moradores ó á un tercero, ni al que lo hace por cumplir un deber de humanidad, ó prestar un auxilio á la justicia.

n. 695.

ARTÍCULO 167

Lo dispuesto en la primera parte del artículo 165 no tiene aplicación á los cafés, tabernas, posadas y demás casas públicas, mientras estuviesen abiertas.

n. 696, 697.

CAPÍTULO V

AMENAZAS Y COACCIONES

(699 á 702)

ARTÍCULO 168

El que amenazare á otro causar al mismo ó á miembros de su familia, en sus personas, honra ó bienes, un mal que constituya delito, será castigado:

1° Con la pena inferior en grado á la señalada por la ley al hecho con que amenazare, si hubiese hecho la amenaza exigiendo una suma de dinero ó la ejecución ó inejecución de un hecho, y el culpable hubiese conseguido su propósito;

2° Si no lo hubiese conseguido, se aplicará la pena inferior en



dos grados; y en caso de no ser esto posible, se aplicará el mínimo de la pena inferior en un grado.

n. 703 y 704.

ARTÍCULO 169

En los demás casos, la amenaza será castigada con arresto de uno á tres meses.

n. 52, 702.

ARTÍCULO 170

El reo de cualquiera de los delitos expresados en los artículos anteriores, podrá ser condenado además á la caución de no ofender, y en su defecto á la vigilancia de la autoridad.

n. 705 y 706.

ARTÍCULO 171

El que impidiese á otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, ó le compeliere á ejecutar lo que no quiere, sufrirá arresto de uno á tres meses, y multa de veinte y cinco á doscientos pesos.

n. 707 y 708.

ARTÍCULO 172

En la misma pena incurrirá el que con amenazas ó violencias se hiciere justicia á si mismo, tomando ó haciéndose dar una cosa de su deudor para hacerse pago con ella.

n. 709.



CAPÍTULO VI

DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS

(710 á 712)

ARTÍCULO 173

El que se apodere de papeles ó cartas de otro será castigado:

1° Si revelase los secretos que contengan ó se aprovechase de ellos, con arresto de tres meses á un año;

2° Si no revelase ó no se aprovechase de los secretos, ó si los papeles ó cartas sustraídas no los contuviesen, la pena será de uno á tres meses de arresto.

n. 713 á 715.

ARTÍCULO 174

El que descubra el secreto de alguna invención ó procedimiento industrial, que se le confie en calidad de amigo, discípulo, dependiente ó sócio, sufrirá arresto de tres meses á un año y multa de cincuenta á quinientos pesos.

n. 716.

ARTÍCULO 175

En la misma pena de arresto incurrirá el administrador, dependiente ó criado que divulgue los secretos de su patrón, de los cuales hubiese tenido conocimiento estando al servicio de éste.

n. 717.



ARTÍCULO 176

Estas penas y las demás que impone este Código son sin perjuicio de las acciones del damnificado para pedir la correspondiente indemnización.

n. 718.

TÍTULO VII

DE LAS CALUMNIAS E INJURIAS

ARTÍCULO 177

La falsa imputación de un delito que tenga obligación de acusar el Ministerio Fiscal, ó de delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones, constituye el delito de calumnia.

n. 719 á 727.

ARTÍCULO 178

El reo de calumnia será castigado con prisión de uno á tres años.

Si probase la imputación quedará libre de pena.

n. 739.

ARTÍCULO 179

Comete delito de injuria el que deshonra, desacredita ó menosprecia á otro, por medio de palabras ó escritos que no pueden



constituir calumnia, ó por medio de hechos ó acciones, que no importan otro delito más grave.

n. 719 á 729.

ARTÍCULO 180

Son injurias graves:

1° La imputación de un delito, cuya acusación no corresponde al Ministerio Fiscal, ó no dé lugar á procedimiento de oficio;

2° La imputación de un vicio ó falta de moralidad que pueda perjudicar considerablemente la fama, el crédito, ó los intereses del agraviado;

3° Las palabras, dichos ó acciones que importen falta de respeto á los padres y demás ascendientes, á los sacerdotes, maestros, superiores y personas constituidas en dignidad;

4° Las palabras ó acciones que en concepto público se tengan por afrentosas, en razón de su naturaleza, ocasión ó circunstancias.

n. 730.

ARTÍCULO 181

Son injurias leves aquellas en que no concurra ninguno de los requisitos del precedente artículo.

n. 730.

ARTÍCULO 182

! El que cometa injuria grave sufrirá la pena de arresto por seis meses á un año y multa de cien á quinientos pesos.

Si la injuria fuese leve, la pena será de arresto por uno á tres meses y multa de diez á cien pesos.

n. 739.



ARTÍCULO 183

El reo de calumnia ó injuria equívoca ó encubierta que rehuse dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá el mínimo de la pena correspondiente á la injuria ó calumnia manifiesta.

n. 731.

ARTÍCULO 184

Cuando la injuria ó calumnia se hubiese propagado por medio de la prensa, el Juez ó Tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos ó periódicos y á costa del culpable, la sentencia ó satisfacción.

n. 732 á 734.

ARTÍCULO 185

Estando vivo el ofendido, nadie sino él puede acusar por injuria ó calumnia. Si hubiese muerto, podrán hacerlo sus herederos forzosos.

n. 735.

ARTÍCULO 186

El culpable de calumnia ó injuria contra un particular, queda exento de pena:

- 1° Si lo perdona el ofendido;
- 2° Si media provocación en las injurias verbales y en las escritas leves;
- 3° Si en las mismas consiente en hacer una retractación pública.

n. 736 á 738.



TÍTULO VIII

DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD PARTICULAR

CAPÍTULO PRIMERO

ROBOS Y HURTOS

(740 á 757)

ARTÍCULO 187

El culpable de robo, con violencia ó intimidación en las personas, será castigado con presidio por tiempo indeterminado ó por diez á quince años:

1° Si con motivo ú ocasión del robo resultase un homicidio ;

n. 758 á 762.

2° Si pone en peligro de muerte á una persona por las violencias ejercidas en ella, si se le infiere una herida mortal, si se la mutila, si su salud es alterada permanente ó incurablemente ó si ha habido violación ;

n. 763.

3° Si el robo se comete en despoblado y en banda ó complot.

n. 765.

ARTÍCULO 188

La pena será de seis á diez años de presidio:

1° Si se comete el robo en despoblado y con armas

n. 766 y 767.



- 2° Si se comete en lugares poblados, en banda ó complot;
n. 768.
- 3° Si se hiere ó maltrata á una persona, para que descubra,
entregue ó no defienda la cosa que se intenta robar:
n. 769, 773.

ARTÍCULO 189

- La pena será de tres á seis años de presidio :
- 1° Cuando se amenace ó intimide á una persona para que descubra, entregue ó no defienda la cosa que se intenta robar ;
n. 770 á 773.
- 2° Cuando se detiene en rehenes á una persona para sacar rescate ;
n. 773, 774.
- 3° Cuando se obligue por violencia á firmar un documento de obligación ó de cancelación ;
n. 773, 775.
- 4° Cuando se simule autoridad pública.
n. 773, 776.

ARTÍCULO 190

- Sufrirán de tres á diez años de presidio los que cometan robo sin violencia ni intimidación á las personas :
- 1° Cuando el robo se perpetre con escalamiento, perforación de pared ó cerco, ó introduciéndose por conducto subterráneo ó por vía que no está destinada á servir de entrada al edificio ;
n. 777, 778.
- 2° Cuando haya fractura de puerta ó ventana para penetrar en el edificio ;
n. 779.
- 3° Cuando se haga uso de ganzúa, llave falsa ú otro instru-



mento semejante para penetrar al lugar donde se intenta robar, ó de la llave verdadera que hubiese sido sustraída ;

n. 780.

4° Cuando se ejecute con auxilio de un doméstico, ó dependiente de la casa, á quien se hubiese seducido.

n. 781.

ARTÍCULO 191

La pena señalada en el artículo anterior será de prisión de uno á tres años cuando el valor de lo robado no exceda de quinientos pesos.

n. 782.

ARTÍCULO 192

Si hubiese á la vez intimidación ó violencia en las personas y fuerza en las cosas, se aplicará el máximum de las penas establecidas.

n. 783.

ARTÍCULO 193

El que cometa hurto sustrayendo clandestinamente una cosa de otro, sin concurrir ninguna de las circunstancias de los artículos anteriores, será castigado:

1° Con arresto de un mes á un año, si el valor de la cosa hurtada no excede de quinientos pesos ;

2° Con prisión de uno á tres años, si el valor de la cosa hurtada excede de quinientos pesos.

n. 784 á 786.

ARTÍCULO 194

El que arrebate una cosa de poder del que la lleve, sufrirá la

pena establecida en el artículo anterior, según el valor de la cosa.

n. 785, 786.

ARTÍCULO 195

El que robe cadáveres para hacerse pagar su devolución, sufrirá tres á seis años de penitenciaría, si consigue su objeto, y prisión por uno á tres años si no lo consigue.

n. 18 y 787.

CAPÍTULO II

DE LA USURPACIÓN



ARTÍCULO 196

El que empleando violencia despoje á otro de una cosa raíz, ó del uso, usufructo, habitación ó servidumbre que en ella goce, sufrirá de uno á tres años de prisión, y multa de veinticinco á quinientos pesos, según el valor de lo usurpado y la calidad de la violencia.

Si el despojo se cometiese por fraude ó astucia, la pena será de arresto de un mes á tres, sin perjuicio de la pena pecuniaria.

n. 788 á 792.

ARTÍCULO 197

Incurrirá en la pena de tres meses á un año de arresto y multa de veinticinco á quinientos pesos, el que para cometer usurpación destruya ó altere los términos ó linderos de las fincas ó heredades.

n. 793 y 794.





CAPÍTULO III

DE LOS QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

ARTÍCULO 198

El quebrado fraudulento sufrirá de tres á seis años de penitenciaría é inhabilitación por cinco á quince años para ejercer el comercio.

El quebrado culpable, sufrirá de uno á tres años de prisión é inhabilitación por dos á cinco años para ejercer el comercio.

n. 373, 795 á 823.

ARTÍCULO 199

Si la pérdida ocasionada á los acreedores no llegare á un veinticinco por ciento, el quebrado fraudulento sufrirá de dos á tres años de prisión é inhabilitación para ejercer el comercio por tres á cinco años.

El quebrado culpable sufrirá arresto por tres á nueve meses é inhabilitación por uno á dos años.

Si antes de pronunciarse la sentencia no se hubiese liquidado el concurso, se regulará prudencialmente la pérdida.

n. 373, 795 á 823.

ARTÍCULO 200

Sufrirá de uno á tres años de prisión :

- 1° El deudor que maliciosamente niegue la deuda ;
- 2° El que se alze con sus bienes, los oculte, enagene maliciosamente ó simule créditos en fraude de sus acreedores ;

3° El deudor y fiador que al contraer sus respectivas obligaciones presenten como bienes responsables los que no pueden ser gravados, ú ocultan ó callen sus gravámenes.

n. 824, 825.

ARTÍCULO 201

Si las deudas no llegaren á quinientos pesos, la pena será de arresto por tres meses á un año.

n. 824, 825.

CAPÍTULO IV

DE LAS ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

(826 á 832)

ARTÍCULO 202

Todo el que con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos ó influencia mentida, defraude á otros, aparentando bienes, créditos, comisión, empresa, negociación ó valiéndose para el efecto de cualquiera otro ardid ó engaño, será castigado :

1° Con arresto de uno á tres meses, si la defraudación no excede de cien pesos ;

2° Con arresto de tres á seis meses, si pasa de cien y no excede de quinientos ;

3° Con arresto de seis á doce meses, si pasa de quinientos y no excede de mil ;

4° Con prisión de uno á dos años, si pasa de mil y no excede de dos mil ;

5° Con prisión de dos á tres años, si pasa de dos mil y no excede de seis mil ;





6° Con penitenciaría de tres á seis años, si excede de seis mil pesos.

n. 833 á 837 y 855.

ARTÍCULO 203

Sufrirán respectivamente la misma pena del artículo anterior :

1° Los que defrauden á otros en la sustancia, calidad ó cantidad de las cosas que les entreguen en virtud de un título obligatorio ;

n. 838 á 840.

2° Los plateros, joyeros ó prederos que cometan defraudación alterando la calidad, ley ó peso de los metales en las obras que vendiesen ó se les hubiesen confiado, ó cambiando los diamantes ú otras piedras preciosas con falsos ó de inferior calidad, ó vendiendo perlas ó piedras falsas por finas ;

n. 838 á 840.

3° Los comerciantes y traficantes que defrauden al comprador, vendiéndole como de oro, plata ú otro metal fino, objetos que sean de distinta materia ó ley ;

n. 838 á 840.

4° Los que hagan uso de pesas ó medidas falsas ;

n. 838 á 840.

5° Los que defrauden con pretexto de supuesta remuneración á los jueces ú otros empleados públicos ;

n. 838 á 840.

6° Los que en perjuicio de otros nieguen haber recibido, ó se apropien, ó distraigan dinero, efectos ó cualquier otra cosa mueble que se les hubiese dado en depósito, comisión, administración ú otro título que produzca obligación de entregar ó devolver ;

n. 841 á 846.

7° Los que defrauden haciendo suscribir con engaño algún documento ;

n. 838 á 840.



8° Los que cometan alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo algún documento, en perjuicio del mismo que la dió ó de tercero;

n. 847 á 851.

9° Los que se nieguen á restituir la cosa ajena que hubiesen encontrado perdida ;

n. 852.

10° Los que cometan el fraude en escritura pública, ó abusando de la confianza que en ellos se hubiese depositado ;

n. 853.

11° El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo ó de tercero ;

n. 854.

12° El que otorgase en perjuicio de otros un contrato simulado ó falsos recibos ;

n. 838 á 840.

13° Los comisionistas que cometiesen defraudación, alterando en sus cuentas los precios ó las condiciones de los contratos, suponiendo gastos ó exagerando los que hubiesen hecho ;

n. 838 á 840.

14° Los que cometiesen defraudación, sustituyendo, ocultando ó mutilando algún proceso, expediente, documento ú otro papel importante.

n. 838 á 840 y 855.

ARTÍCULO 204

El que vende como bienes libres los que fuesen litigiosos, ó estuviesen embargados ó gravados, y los que vendan, graven ó arrienden como propios bienes que sean ajenos, serán castigados con las penas del artículo 201 ;

n. 856.



ARTÍCULO 205

El que abuse de las necesidades, debilidades ó pasiones de un menor, para privarle de los bienes muebles de que pueda disponer, ó hacerle firmar documento de pago ú otras obligaciones, bajo cualquier forma que se hiciere ó disfrazare esta negociación, será castigado con prisión de uno á dos años y multa del uno al diez por ciento de los bienes vendidos ó de la cantidad del pagaré ú obligación otorgada.

n. 857 á 860.

ARTÍCULO 206

Los que soliciten dádivas ó promesas y los que las ofrezcan, para no tomar parte en una subasta pública, ó finjidamente se presenten como postores, sufrirán arresto de uno á seis meses.

n. 861.

ARTÍCULO 207

El que estafe vendiendo la prenda sobre la que prestó dinero, ó apropiándose la ó disponiendo de ella sin las formalidades de la ley, sufrirá arresto de uno hasta seis meses.

n. 862.

CAPÍTULO V

DE LOS INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS

(863 á 868)

ARTÍCULO 208

El incendio será castigado con presidio por tiempo indeterminado :



1° Cuando el incendio fuese la causa inmediata de la muerte de alguna persona ;

2° Cuando se ejecutase en el archivo general del Estado ó de los Tribunales.

n. 869 á 871.

ARTÍCULO 209

Será castigado con diez á quince años de presidio, cuando se ejecute en casa habitada.

n. 872.

ARTÍCULO 210

Será castigado con presidio de seis á diez años cuando el incendio se ejecute en almacén, establecimiento industrial, casa destinada á morada, cualquier edificio en poblado aunque no esté destinado á habitación, almacén de granos, bosques, viñedos, cañaverales, mieses y otras cosas semejantes.

Si el perjuicio no excede de quinientos pesos, la pena será de tres á seis años.

n. 873 y 874.

ARTÍCULO 211

El incendiario de otros objetos no comprendidos en los artículos anteriores será castigado :

1° Con penitenciaría de tres á seis años, si el incendio se propaga á otros objetos y si el valor de lo incendiado excede de quinientos pesos ;

2° Con prisión de uno á tres años, si el valor de lo incendiado pasa de cien pesos y no excede de quinientos ;



3° Con arresto, si el valor de lo incendiado no pasa de cien pesos.

n. 875 á 877.

ARTÍCULO 212

Incurrirá respectivamente en las penas señaladas en los artículos precedentes, el que causa estragos por medio de explosión de minas, bombas ó máquinas de vapor, inundación, ú otro medio de destrucción análogo ó tan poderoso como los expresados.

n. 878.

ARTÍCULO 213

El que fuese sorprendido con bomba explosiva, mezcla ú otro preparativo conocidamente destinado para incendiar ó causar alguno de los estragos indicados en este capítulo, sufrirá de uno á tres años de prisión, si no diese explicación satisfactoria del fin á que se proponía aplicar ese elemento de destrucción.

n. 879 á 881.

ARTÍCULO 214

El culpable de incendio ó estrago no se eximirá de las penas impuestas en este capítulo, aunque para cometer el delito hubiese incendiado ó destruido bienes de su propiedad.

n. 882.

ARTÍCULO 215

El que voluntariamente rompa caminos de fierro ó coloque en ellos cualquier cuerpo que impida el tránsito de las locomotoras ó

wagones, ó las haga salir de los rieles, ó emplee otro medio con este fin, sufrirá prisión de uno á tres años.

Si como consecuencia del descarrilamiento, se ocasionasen pérdidas en la destrucción de los vehículos ó en las mercaderías, que excedan de cinco mil pesos, la pena será de tres á nueve años de penitenciaría.

n. 883, 885.

ARTÍCULO 216

Si el hecho hubiere ocasionado contusiones, heridas ó fracturas en alguna persona, la pena será de tres á nueve años de penitenciaría.

Si el accidente hubiese ocasionado la muerte de una ó más personas, la pena será penitenciaría desde diez años hasta por tiempo indeterminado.

n. 883, 885.

ARTÍCULO 217

Todo el que intencionalmente cortase los alambres del telégrafo destinado al servicio de un ferro-carril, arrancase ó destruyese los postes ó ejecutase algún otro acto tendente á interrumpir la comunicación telegráfica, será castigado con arresto de uno á nueve meses. Si del hecho hubiesen resultado accidentes en los trenes, la pena será de uno á tres años de prisión. Si de estos accidentes resultase herida ó muerte de alguna persona, la pena será de tres á seis años de penitenciaría.

n. 884.

ARTÍCULO 218

En los demás casos de destrucción de las líneas telegráficas, la pena será de uno á tres meses de arresto.

n. 884.



CAPÍTULO VI

DE LOS DAÑOS

ARTÍCULO 219

Los que causan en propiedad ajena algún daño no comprendido en las disposiciones del capítulo anterior, quedan sujetos á las del presente.

n. 886 á 888.

ARTÍCULO 220

Serán castigados con uno á tres años de prisión, los que causen daño cuyo importe exceda de quinientos pesos :

1° Con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad ó en venganza de sus determinaciones, bien se cometiese el delito contra empleados públicos, bien contra particulares, que como testigos ó de cualquier manera hayan contribuido ó puedan contribuir á la ejecución ó aplicación de las leyes;

2° Produciendo por cualquier medio infección ó contagio en aves ú otros animales domésticos ;

n. 892 y 893.

3° Empleando sustancias venenosas ó corrosivas ;

4° En cuadrilla y en despoblado ;

5° En archivos, registros, bibliotecas, ó museos públicos ;

6° En puentes, caminos, paseos ú otros bienes de uso público ;

7° En tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros ú otros objetos de arte colocados en edificios ó lugares públicos ;

n. 892, 894, 895 y 896.

8° Arruinando al perjudicado, aunque el daño no importe la suma expresada en el artículo presente.

n. 889.

ARTÍCULO 221

El que con alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, causare daño, cuyo importe exceda de cincuenta pesos y no pase de quinientos, sufrirá arresto de seis á doce meses. Cuando dicho importe no exceda de cincuenta pesos, la pena será arresto de uno á tres meses.

n. 890.

ARTÍCULO 222

Los daños no comprendidos en los artículos anteriores serán penados con arresto.

n. 891.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 223

Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones ó daños que reciprocamente se causaren :

1° Los cónyuges, los ascendientes, descendientes y afines de la misma línea;

2° El consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado á poder de otro;





3° Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.
n. 897 á 900, 906 y 907.

ARTÍCULO 224

La excepción del artículo anterior no es aplicable á los extraños que participen del delito.
n. 901 á 905.

ARTÍCULO 225

Las penas señaladas en este título se aplicarán sin perjuicio de la restitución de la cosa sustraída ó defraudada.
n. 908.

SECCIÓN SEGUNDA

DELITOS POLÍTICOS Y DELITOS PECULIARES A EMPLEADOS PÚBLICOS

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR Y ÓRDEN PÚBLICO

n. 909.

CAPÍTULO PRIMERO

REBELIÓN Y SEDICIÓN

n. 910 á 918, 930, 939.

ARTÍCULO 226

Son reos de rebelión y sufrirán destierro por tres á seis años, los que se alzan públicamente y en abierta hostilidad contra el Go-



bierno de alguna Provincia, para cualquiera de los objetos siguientes :

n. 919, 937 y 938.

1° Alterar ó destruir la Constitución ;

n. 920 y 921.

2° Deponer al Gobernador ó á otro de los poderes públicos ó impedir la trasmisión del mando en los términos y forma establecidos en la Constitución ;

n. 922, 923.

3° Arrancar á los poderes constituidos alguna medida ó concesión ;

n. 924, 925.

4° Impedir la reunión de las Cámaras Legislativas, disolverlas ó impedir que funcionen libremente ;

n. 926.

5° Reformar las instituciones vigentes por medios violentos ;

n. 927, 928.

6° Sustraer á la obediencia del Gobierno algún departamento ó partido de una Provincia.

n. 929.

ARTÍCULO 227

Son reos de sedición y sufrirán pena de destierro por uno á tres años, los que sin desconocer al Gobierno constituido se alzaren públicamente con alguno de los objetos siguientes :

n. 931, 938.

1° Deponer alguno ó algunos de los empleados públicos de alguna provincia ó sus departamentos, ó impedir que tomen posesión del destino los legitimamente nombrados ó elegidos ;

n. 931.

2° Impedir la promulgación ó ejecución de las leyes, ó la celebración de las elecciones provinciales ;

n. 932, 933.



3° Impedir que las autoridades ejerzan libremente sus funciones, ó hagan cumplir sus providencias administrativas ó judiciales;

n. 934.

4° Allanar los lugares de prisión ó atacar á los que conducen los presos de un lugar á otro, sea para salvar á éstos ó para maltratarlos.

n. 935.

ARTÍCULO 228

Los que sin rebelarse contra el Gobierno, ni desconocer las autoridades locales se reunieren tumultuosamente para exigir con violencias, gritos, insultos ó amenazas la deposición de algún funcionario público, la soltura de un preso, el castigo de delincuentes ú otra cosa semejante, y los que se unieren en número que no baje de cuatro para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito, ó para perturbar con gritos, injurias ó amenazas una reunión, ó la celebración de alguna fiesta religiosa ó cívica, ó para exigir de los particulares alguna cosa justa ó injusta, sufrirán la pena de arresto.

n. 936.

ARTÍCULO 229

Sufrirán el máximo de la pena los autores principales, los empleados públicos que hubiesen tomado parte y los instigadores del hecho.

n. 937.

ARTÍCULO 230

En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sea que la disper-

sión se verifique espontáneamente y de común acuerdo por los mismos sublevados, ó bien por obediencia á la intimación de la autoridad, sólo serán enjuiciados los autores principales y castigados en su caso con la mitad de la pena señalada para el delito.

n. 938, 939 y 940.

ARTÍCULO 231

Los que cometen delitos comunes con motivo de la rebelión, motín ó asonada, ó con ocasión de ella, serán castigados con la pena que corresponde á esos delitos.

n. 941, 942.

ARTÍCULO 232

Los empleados que estando encargados de conservar el orden público, no combatesen la rebelión, sedición, motín ó asonada con los medios de que dispongan, sufrirán la pena de destitución.

n. 943.

ARTÍCULO 233

Los meros ejecutores serán condenados al servicio de las armas, por uno á dos años.

n. 944.

CAPÍTULO II

ATENTADO Y DESACATO CONTRA LA AUTORIDAD

n. 945, 946.

ARTÍCULO 234

Cometen atentado contra la autoridad los que, sin alzamiento público, emplean sobre ella intimidación ó fuerza al tiempo de





practicar sus funciones, ó por consecuencia de haberlas practicado.

n. 947 á 954, 959, 961 y 963.

ARTÍCULO 235

Si el atentado se cometiere con armas serán, condenados los reos á prisión por uno á dos años.

Si se cometiere sin armas, la pena será de uno á seis meses de arresto.

n. 957, 958.

ARTÍCULO 236

Se considera como atentado contra la autoridad la estracción de los presos de las casas de seguridad por astucia, ó mediante cohecho ó seducción del que los custodia.

n. 956.

ARTÍCULO 237

Cometen desacato contra la autoridad :

n. 947 á 949, 960.

1° Los que provocan á duelo, injurian ó amenazan á un funcionario público á causa del ejercicio de sus funciones ;

n. 961 á 964.

2° Los que causen grave perturbación del orden en los Juzgados ó tribunales, en donde quiera que las autoridades públicas estén ejerciendo sus funciones ;

n. 965.

3° Los que entran armados, manifiesta ú ocultamente, al Salón de Sesiones de las Cámaras Legislativas ;

n. 966.

4° Los que impiden que un representante ó funcionario público concorra á su Cámara ó despacho ;

n. 967.

5° Los que resisten ó desobedecen abiertamente á la autoridad.

n. 961, 968.

ARTÍCULO 238

Los reos de cualquiera de los delitos comprendidos en el inciso 1° sufrirán la pena de tres á seis meses de arresto, si el delito se cometiese en la casa de sesiones ó en el despacho ú oficina del empleado público. Con arresto de uno á tres meses cuando el delito no se comete en los lugares designados en el párrafo anterior.

n. 969, 970.

ARTÍCULO 239

Los reos de los delitos expresados en los demás incisos sufrirán arresto de uno á tres meses.

n. 969.

TÍTULO II

DE LOS DELITOS PECULIARES Á LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

n. 971, 972.

CAPÍTULO I

USURPACIÓN DE AUTORIDAD

n. 980.

ARTÍCULO 240

Usurpa autoridad:

1° El que ejerce funciones públicas sin título ó nombramiento expedido por autoridad competente ;

n. 973 á 975.





2° El que hallándose destituido ó suspenso de un cargo público, continuara ejerciendo las funciones anexas á él ;

n. 976 á 978.

3° El empleado público que ejerce atribuciones que no le competen por la ley.

n. 979.

ARTÍCULO 241

Los comprendidos en los incisos del artículo anterior, serán castigados con arresto de un mes á un año é inhabilitación por uno á tres años, según la gravedad del delito.

n. 981.

ARTÍCULO 242

Si el delito se comete falsificando títulos ó documentos públicos, la pena será la señalada para el delito más grave, considerándose el otro como circunstancia agravante.

n. 982.

CAPÍTULO II

ABUSO DE AUTORIDAD

ARTÍCULO 243

Abusa de autoridad :

n. 983, 998.

1° El empleado público que retiene á un detenido ó preso, cuya libertad ha debido decretar ó ejecutar ;

n. 984 á 986.

2° El empleado público que prolonga indebidamente la deten



ción de un individuo, sin ponerlo á disposición del juez competente ;

n. 987, 988.

3° El empleado público que allane el domicilio de un ciudadano sin las formalidades prescriptas por la ley ó fuera de los casos que ella determina ;

n. 989, 990.

4° El empleado público que viola la comunicación ó incomunicación de un preso, ordenada por el juez, ú oculta al detenido que debe presentar á la autoridad ;

n. 991 á 993.

5° El empleado público que impone á los presos que guarda, severidades, vejaciones ó apremios ilegales, ó los coloca en lugares del establecimiento, que no sean los señalados al efecto ;

6° Los gefes de presidios, penitenciarias y demás establecimientos de condenados, como los que hagan sus veces, que reciban algún reo sin testimonio de la sentencia ejecutoriada en que se les hubiera impuesto la pena ;

7° El alcaide ó cualquier empleado de las cárceles de detención y seguridad que recibe un preso sin orden de la autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito ;

n. 994.

8° El empleado que desempeñando un acto del servicio, comete cualquiera vejación contra las personas ó les aplica apremios ilegales ó innecesarios ;

n. 995.

9° El Juez ó empleado que seduce á la mujer, hija ó pupila del que litiga ó tiene pendiente alguna gestión ante él ;

10° El empleado en establecimiento de condenados ó detenidos que seduce á la mujer detenida ó sentenciada ó á alguna hija de ésta.

n. 996.



ARTÍCULO 244

La pena señalada para los delitos expresados en el artículo anterior, sera la de arresto y suspensión del empleo, siempre que el hecho no importe delito á que la ley señale mayor pena.

n. 997.

CAPÍTULO III

PREVARICATO

ARTÍCULO 245

Comete prevaricato :

n. 999 á 1003, 1009.

1° El juez que expida sentencia definitiva ó interlocutoria que tenga fuerza de tal, si fuese contraria á la ley expresa invocada en los autos, salvo prueba de que ha procedido por error ;

n. 1004 á 1006.

2° El juez que conoce en causa que patrocinó como abogado :

n. 1007.

3° El juez que á sabiendas cita hechos ó resoluciones falsas.

n. 1008.

ARTÍCULO 246

Los jueces que incurran en cualquier delito de los expresados en el artículo anterior, serán castigados con destitución é inhabilitación perpetua para ser juez.

Si la sentencia se hubiese ejecutado, siendo condenatoria, sufrirá además la misma pena que impuso.

n. 1010, 1011.



ARTÍCULO 247

Cometen prevaricato los abogados y procuradores en los casos siguientes :

1° Cuando revelan los secretos que el defendido ó porderante les hubiese confiado para la defensa ;

n. 1049 á 1059.

2° Cuando defiendan ó representen á ambas partes en el mismo juicio ;

3° Cuando después de representar ó patrocinar á una parte, representan ó patrocinan á la contraria en la misma causa.

n. 1012, 1013.

ARTÍCULO 248

Los reos expresados en el artículo anterior, sufrirán multa de cien á quinientos pesos, y suspensión del ejercicio de la profesión por cuatro á seis años.

n. 373, 1013.

ARTÍCULO 249

Los jueces árbitros ó arbitradores, los asesores y los peritos, quedan sujetos en sus respectivos casos á las disposiciones anteriores.

n. 1014, 1015.

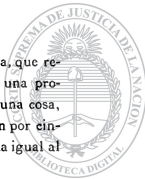
CAPÍTULO IV

COHECHO

n. 1016.

ARTÍCULO 250

Todo empleado en el orden administrativo ó judicial, agente ó



encargado en cualquier ramo de la administración pública, que recibiese dinero ó cualquiera otra dádiva, ó que aceptase una promesa, directa ó indirecta, para hacer ó dejar de hacer alguna cosa, será castigado con la pérdida del empleo, é inhabilitación por cinco á diez años para obtener otro alguno, y con una multa igual al triple del valor de la dádiva ó promesa.

Si éstas se le hiciesen para el cumplimiento de sus deberes, perderá su empleo y pagará el duplo del valor de la gratificación ó recompensa.

n. 1017 á 1024.

ARTÍCULO 251

El juez que diese por precio una sentencia justa, incurrirá en las penas establecidas en el primer párrafo del artículo anterior.

Si la sentencia fuese injusta, en causa civil, ó si lo fuese en causa criminal, siendo absolutoria, la pena será además de penitenciaría por tres á seis años.

Si por la sentencia injusta se impusiere pena, se aplicará al juez la misma, á excepción de la de muerte que se conmutará en presidio por tiempo indeterminado.

El juez incurrirá además en inhabilitación perpetua.

n. 1025, 1026.

ARTÍCULO 252

Los árbitros que por precio diesen sentencia injusta, sufrirán las penas de inhabilitación y multas designadas en el primer párrafo del artículo 250.

n. 1025, 1026.

ARTÍCULO 253

El que diese ó prometiese las dádivas será castigado con la mul-

ta de que habla el artículo 250 y prisión de uno á tres años, á menos que siendo el soborno, en causa criminal, en favor del reo, fuese hecho por su cónyuge, ascendiente ó descendiente, hermanos, afines en los mismos grados, en cuyo caso sólo se impondrá al sobornante una multa de valor igual al de la dádiva ó promesa.

n. 1027 á 1030.

ARTÍCULO 254

En todo caso las dádivas caerán en comiso.

n. 1031.

CAPITULO V

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS

ARTÍCULO 255

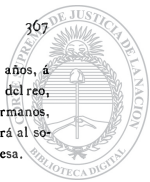
El empleado público culpable de connivencia en la evasión de algún preso ó detenido, cuya custodia ó conducción le hubiese sido confiada, será castigado :

1° Con penitenciaría por tres á seis años, si el reo prófugo estuviese condenado por sentencia ejecutoriada á la pena de muerte ó á presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado ;

2° Con prisión por uno á tres años, si el prófugo fuese reo de delito que merezca alguna de las penas expresadas en el inciso anterior y no hubiese sentencia ejecutoriada ;

3° Con pena de prisión de uno á tres años, si el prófugo estuviese condenado por sentencia ejecutoriada á presidio ó penitenciaría por tiempo determinado ;

4° Con prisión por uno á dos años, si el prófugo fuese reo de delito que merezca alguna de las penas señaladas en el inciso anterior y no estuviese condenado por sentencia ejecutoriada ;





5° Con pena de arresto de un mes hasta nueve, si el prófugo fuese reo de delito menor de los expresados, esté ó no condenado.

n. 1032 á 1035,

ARTÍCULO 256

Si fuesen varios los reos á quienes se dé soltura ó cuya fuga se haya favorecido, se impondrá el máximum de las penas establecidas en el artículo anterior.

n. 1035.

ARTÍCULO 257

Los particulares que estando encargados de la custodia ó conducción de algun preso ó detenido, les den soltura ó favorezcan su fuga, serán castigados con el mínimum de dichas penas.

n. 1036.

CAPÍTULO VI

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 258

El empleado público que sustraiga, oculte, destruya ó inutilice documentos confiados á su custodia, será castigado con prisión por uno á tres años é inhabilitación por doble tiempo y multa de cincuenta á quinientos pesos.

Si del hecho no resulta grave daño á tercero ó á cosa pública, la pena será arresto de tres á doce meses y multa de veinte á doscientos pesos.

n. 1037 á 1039.



ARTÍCULO 259

El empleado público que teniendo á su cargo la custodia de papeles ó efectos sellados por la autoridad, viola los sellos ó consiente en su violación, será castigado con arresto de tres á doce meses y multa de cincuenta á quinientos pesos.

n. 1041, 1042.

ARTÍCULO 260

El escribano que sustrac algún documento originario de sus archivos ó protocolos, ó consiente en esta sustracción, será castigado con penitenciaría de tres á seis años é inhabilitación perpetua.

n. 1039, 1040.

ARTÍCULO 261

Las penas designadas en los artículos anteriores, son aplicables á los empleados subalternos de las respectivas oficinas y á los particulares encargados accidentalmente de la custodia de archivos, registro civil, documentos, etc.

n. 1043.

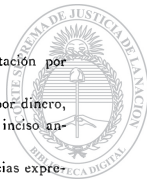
CAPÍTULO VII

REVELACIÓN DE SECRETOS

ARTÍCULO 262

El empleado que en asuntos de servicio público revele secreto, de que tenga conocimiento por razón de su cargo, será castigado:

1° Si de la revelación resultare grave daño á la causa pública,



con prisión de uno á tres años, destitución é inhabilitación por doble tiempo;

2° Con la misma pena, si la revelación se hiciese por dinero, no concurriendo la circunstancia á que se refiere el inciso anterior;

3° No concurriendo ninguna de las dos circunstancias expresadas en los dos incisos anteriores, la pena será destitución del empleo.

n. 1044 á 1047.

ARTÍCULO 263

El empleado público que, abusando de su cargo, intercepte, sustraiga, inspeccione, oculte ó publique cartas ó documentos particulares, sufrirá las penas señaladas en el artículo anterior en los respectivos casos.

Si el abuso recae en documentos públicos, mediando dinero ó grave daño, se aplicará el máximo de las penas.

n. 1060, 1061.

ARTÍCULO 264

El empleado público que revele secretos de un particular, de que tenga conocimiento por razón de su oficio, será destituido y sufrirá arresto por uno á tres meses.

n. 1044, 1048.

ARTÍCULO 265

Los que ejerciendo profesión que requiera título, revelasen secretos que por razón de ella se les hubiese confiado, sufrirán la pena de suspensión por seis meses á un año y multa de veinte y cinco á trescientos pesos.

n. 265 á 269, 1049 á 1059.

CAPÍTULO VIII

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

n. 1062

ARTÍCULO 266

El empleado público que teniendo á su cargo caudales ó efectos públicos, les diese una aplicación pública distinta de la señalada por las leyes, será condenado á suspensión de seis meses á un año, y además sufrirá una multa de diez á cincuenta por ciento sobre la cantidad mal aplicada, si resultase daño ó entorpecimiento al servicio público.

n. 1063, 1064.

ARTÍCULO 267

El empleado que hace uso para sí ó para otro de los caudales que custodia ó administra, sufrirá suspensión de uno á dos años y multa de veinte á cincuenta por ciento sobre la cantidad de que hubiese hecho uso, si la reintegra después de haber causado daño al servicio público.

Si el empleado verifica espontáneamente el reintegro antes de haber resultado daño ó entorpecimiento en el servicio, la suspensión será de tres á seis meses y la multa de diez á veinte y cinco por ciento.

n. 1065 á 1067.

ARTÍCULO 268

El empleado que sustrae ó consiente que otro sustraiga los bienes, caudales ú otros valores públicos confiados á su adminis-



tración ó custodia, será castigado con las penas señaladas para los ladrones é inhabilitación perpetua para cargos públicos.

n. 1068, 1069.

ARTÍCULO 269

Quedan sujetos á las disposiciones anteriores, los que administran bienes municipales ó pertenecientes á establecimientos de instrucción pública ó de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan á particulares.

n. 1070, 1071.

ARTÍCULO 270

El empleado público que teniendo fondos espeditos, demorase injustificadamente un pago ordinario ó decretado por autoridad competente, sufrirá suspensión de tres á seis meses y multa de dos á diez por ciento sobre la cantidad no satisfecha, á beneficio de la parte damnificada.

n. 1072.

ARTÍCULO 271

Es aplicable la pena anterior al empleado público que requerido por autoridad competente, rehusase entregar una cantidad ó efecto depositado ó puesto bajo su custodia ó administración, debiendo graduarse la multa por el valor en que se justiprecie el efecto.

n. 1073.



CAPÍTULO IX

FRAUDES Y EXACCIONES

n. 1074

ARTÍCULO 272

El empleado público que en los contratos en que intervenga, por razón de su cargo ó por comisión especial, defraudare al Estado, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones ó suministros, sufrirá prisión de uno á tres años é inhabilitación absoluta por cinco á diez años.

n. 1075, 1076, 1083.

ARTÍCULO 273

El empleado público que directa ó indirectamente se interese en cualquier clase de contrato ú operación en que deba intervenir, por razón de su cargo, será castigado con inhabilitación especial por uno á cinco años, y multa de diez á cincuenta por ciento sobre el valor de la parte que hubiere tomado en el negocio, ó en su defecto, prisión de uno á tres años.

Esta disposición es aplicable á los peritos, árbitros y contadores particulares, respecto de los bienes ó cosas en cuya tasación, adjudicación ó partición interviniesen, y á los guardadores ó albaceas respecto de los pertenecientes á sus pupilos ó testamentarias.

n. 1075 á 1083.

ARTÍCULO 274

El empleado público que arbitrariamente exija una contribución ó cometa otras exacciones, aunque sea para el servicio pú-





blico, sufrirá suspensión de dos meses á un año, y multa de cinco á veinte y cinco por ciento de la cantidad exigida, ó en su defecto, arresto hasta de un año. Si la exacción se verificase empleando fuerza, sufrirá destitución, sin perjuicio del máximo de la multa, ó en su defecto, prisión de uno á tres años.

n. 1084 á 1091.

ARTÍCULO 275

Si el empleado convirtiere en provecho propio las exacciones expresadas en el artículo anterior, sufrirá las penas impuestas á los ladrones.

n. 1084 á 1091.

ARTÍCULO 276

El empleado público que exija derechos ó propinas por lo que debe practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, ó cobre mayores derechos que los designados por la ley, los devolverá con una multa del duplo al cuádruplo de la cantidad que hubiese percibido.

Si para efectuar estas exacciones supone órdenes superiores, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima, sufrirá además destitución.

n. 1084 á 1091.

TITULO III

DE LAS FALSEDADES

n. 1092 á 1101

CAPÍTULO I

DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, FIRMAS Y MARCAS

ARTÍCULO 277

El que falsifique sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos, será castigado con prisión de uno á tres años.

Se considera como falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero en documentos en que sea necesario.

n. 1002 á 1112.

ARTÍCULO 278

El que falsifique sello, firma, marca ó contraseña de individuos ó establecimientos particulares, sufrirá arresto de un mes á un año.

n. 1113 á 1119.

ARTÍCULO 279

Si fuese empleado el que incurra en alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores, y lo cometiere abusando del cargo que ejerza, sufrirá el máximo de la pena é inhabilitación perpetua.

n. 1120.

CAPÍTULO II

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

ARTÍCULO 280

Se comete falsedad en un documento:

n. 1121 á 1135.

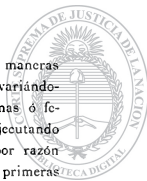
1° Suplantando documento que no ha existido, en libro ó en registro en que se inscriben los de su clase;

n. 1136.

2° Dando testimonio ó copia certificada de documento que no existe;

n. 1137.





3° Alterando documentos verdaderos de alguna de las maneras siguientes: 1°, agregando cláusulas, suprimiéndolas, variándolas sustancialmente ó borrándolas; 2°, variando las firmas ó fechas; 3°, suponiendo circunstancias ó fechas falsas; 4°, ejecutando en los testimonios ó copias certificadas que se expidan por razón de oficio, las alteraciones que se enumeran en las tres primeras partes de este inciso.

n. 1138 á 1145.

ARTÍCULO 281

El empleado que abusando de su oficio cometa falsedad en documento público, será castigado con tres á seis años de penitenciaría é inhabilitación perpetua para empleos de la misma clase, y multa de doscientos á dos mil pesos.

Si el delito fuese cometido por un particular, la pena será de prisión por uno á tres años é inhabilitación por doble tiempo y multa de cien á mil pesos.

Si se cometiera la falsificación en documento privado, la pena será de arresto por un mes á un año y multa de cincuenta á quinientos pesos.

n. 1146 á 1148.

ARTÍCULO 282

El que á sabiendas haga uso de un documento ó certificado falso ó de uno verdadero expedido para otra persona, cuyo nombre asume ó sustituye con el suyo, será castigado con seis meses á un año de arresto y multa de veinte á cien pesos.

Si el documento falso fuese presentado en juicio como prueba, la pena será prisión de uno á tres años y multa de cien á mil pesos.

n. 1149 á 1151.

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO

ARTÍCULO 283

Falsifica documentos de crédito:

1° El que fabrica y el que á sabiendas introduce al país falsos títulos de deuda pública de una provincia ó municipalidad, ó el que se encarga de expenderlos, y letras ó libranzas de los Gobiernos, oficinas de hacienda provincial ó municipal;

2° El que altera los documentos verdaderos, aumentando la cantidad que expresan, ó borrando las anotaciones de cantidades amortizadas, que consten en ellos;

3° El que para recabar alguna cantidad del fisco fragua expedientes supuestos, ó aumenta maliciosamente la cantidad de una acreencia legítima, ó apoya su crédito con pruebas falsas.

n. 1152 á 1164.

ARTÍCULO 284

Los reos del delito designado en el primer inciso del artículo anterior, sufrirán la pena de penitenciaría por tres á ocho años y multa de quinientos á cinco mil pesos.

Los reos de los delitos comprendidos en los otros incisos, sufrirán prisión de uno á tres años y multa de trescientos á tres mil pesos.

n. 1165.

CAPÍTULO IV

DE LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE BANCO

ARTÍCULO 285

El que fabrica y el que introduce al país ó se encarga de poner





en circulación billetes de Bancos autorizados, serán castigados con penitenciaría por tres á ocho años y multa de quinientos á cinco mil pesos.

Si el billete de Banco se hubiese recibido en pago de buena fé, y se expendiese con conocimiento de su falsedad, la pena será una multa equivalente al triple de la suma expendida.

n. 1166 á 1169.

CAPÍTULO V

DEL FALSO TESTIMONIO

ARTÍCULO 286

El testigo falso será castigado:

n. 1161 á 1182.

1° Si en virtud de su falso testimonio se impusiese la pena de muerte, sufrirá penitenciaría por seis á diez años;

2° Si se impusiese presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado, sufrirá presidio ó penitenciaría por tres á seis años;

3° Si se se impusiese presidio ó penitenciaría por tiempo determinado, sufrirá prisión por uno á tres años;

4° Si se impusiese prisión, destierro ó inhabilitación, sufrirá arresto por tres meses á un año;

5° Si se impusiese arresto ó multa, sufrirá la tercera parte de la pena.

n. 1183, 1184.

ARTÍCULO 287

Si el reo no llega á sufrir su condena, ó si es absuelto ó no termina el juicio por un motivo legal, el testigo falso será castigado:



1° Con penitenciaría, por tres á seis años, si declarase contra el reo en delito que merezca pena de muerte ;

2° Con prisión de uno á tres años, si declarase contra el reo en causa por delito que merezca presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado ;

3° Con arresto por seis meses á un año, si declarase contra el reo en causa por delito que merezca presidio ó penitenciaría por tiempo determinado ;

4° Con arresto de un mes á tres, si declarase en causa por delito que merezca prisión, destierro ó inhabilitación ;

5° En caso de que el falso testimonio se diese en causa por delito que merezca pena de arresto ó multa, se impondrá la sexta parte de la pena que se habría impuesto al reo. Si éste hubiese sido absuelto ó el juicio no terminase, el juez graduará la pena dentro del límite establecido, según su prudente arbitrio.

n. 1183, 1184.

ARTÍCULO 288

Si la falsa declaración se hubiera dado á favor del reo, la pena del testigo falso será la de arresto.

n. 1185.

ARTÍCULO 289

El testigo falso en materia civil sufrirá prisión de uno á tres años, según la entidad del juicio.

Si el valor de lo cuestionado no excediera de mil pesos, la pena será de arresto de un mes á un año.

n. 1186.

ARTÍCULO 290

La pena del testigo falso por soborno se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida ó recibida.



El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

n. 1187, 1188.

ARTÍCULO 291

La falsa exposición de los peritos ó intérpretes se castigará con la pena respectivamente designada para los testigos falsos.

n. 1189.

ARTÍCULO 292

Cuando la falsedad del testimonio ó exposición no recayera sobre la esencia, sino sobre algún incidente de poca entidad, la pena será de arresto.

n. 1177.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 293

El que de cualquier otro modo que no esté especificado en este Código, cometa falsedad, simulando, suponiendo, alterando ú ocultando maliciosamente la verdad y con perjuicio de tercero, por palabras, escritos ó hechos; usurpando nombre, calidad ó empleo que no le corresponda, suponiendo viva una persona muerta ó que no ha existido, ó al contrario, sufrirá arresto y multa de veinte á trescientos pesos.

n. 1190, 1191.



ARTÍCULO 294

El que fabricase y el que á sabiendas introdujese al país ó conservase en su poder, cuños, marcas ó cualquiera otra clase de útiles ó instrumentos, conocidamente destinados á la falsificación de billetes de Banco, papel sellado ó documentos de crédito, serán castigados con arresto de seis meses á un año y multa de cien á mil pesos.

n. 1192, 1193.

TITULO IV

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

1194 á 1201

ARTÍCULO 295

El que á sabiendas elabore ó expendá sustancias nocivas á la salud, sufrirá pena de arresto y multa de cien á mil pesos.

La misma pena sufrirá el que sin autorización bastante, elabore productos químicos, que puedan causar setragos, y el que los expendá.

Si procediera con autorización, pero faltando á los reglamentos prescriptos sobre la fabricación ó expendio de tales productos, la pena será de multa, desde cincuenta hasta quinientos pesos.

n. 1195, 1196.

ARTÍCULO 296

El que á sabiendas mezcle en las bebidas ó comestibles que se destinan al consumo público, sustancias nocivas á la salud,



será castigado con arresto y multa de cincuenta á quinientos pesos.

La misma pena tendrá el que á sabiendas venda las bebidas ó comestibles así mezclados.

n. 1197.

ARTÍCULO 297

El que venda á sabiendas medicamentos deteriorados ó adulterados, ó los sustituya con otros, sufrirá pena de arresto y multa de cincuenta á trescientos pesos.

Si el delito se ejecuta abusando de una profesión para cuyo ejercicio se requiere título, se aplicará también la pena de suspensión hasta por un año.

n. 1198.

ARTÍCULO 298

Si á consecuencia de cualquiera de los delitos expresados en los artículos precedentes, resultasen daños que merezcan mayor pena, se aplicará la correspondiente al delito más grave.

n. 1199.

ARTÍCULO 299

Los que violen la cuarentena, sin perjuicio de ser sometidos á ella sin forma de juicio, sufrirán destierro de uno á dos años.

n. 1200.

ÍNDICE



PARTE ESPECIAL

SECCIÓN PRIMERA

DELITOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I

REBELIÓN, SEDICIÓN Y MOTIN

Páginas

909. Materia que comprende el título *Delitos contra la seguridad interior y el orden público*. — 910. Observación sobre el método. — 911. Elementos esenciales de la rebelión y de la sedición. — 912. No es necesaria á su consumación la existencia de un daño. — 913. Cuestión sobre la posibilidad de la tentativa en estos delitos. — 914. Los actos que preceden á los delitos *formales* son meramente preparatorios. — 915. En otros códigos, la conspiración ó complot se castiga especialmente. — 916. ¿ Será aplicable á estos delitos la disposición sobre complot contenida en el artículo 28? — 917. Caracteres comunes y diferencias entre la rebelión y la sedi-



ción. — 918. Carácter colectivo de estos delitos. — 919. Sentido en que debe tomarse la palabra *gobierno*, en el artículo 226. — 920. Examen de la fórmula "alterar ó destruir la Constitución". — 921. Observación sobre el texto. — 922. Propósito de deponer al gobernador ó á otro de los poderes públicos é impedir la transmisión del mando. — 923. Crítica á la redacción del inciso. — 924. Propósito de arrancar á los poderes públicos alguna medida ó concesión. — 925. Observación del doctor Hall sobre la distinta gravedad de este caso con los anteriores. — 926. "Impedir la reunión de las Cámaras Legislativas, disolverlas ó impedir que funcionen libremente". — 927. "Reformar las instituciones vigentes por medios violentos". — 928. Interpretación del texto. — 929. "Sustraer á la obediencia del gobierno algún departamento ó partido". — 930. Supresión del caso en que el propósito fuera el de investirse ilegalmente de autoridad. — 931. Propósitos sediciosos: deponer algún empleado público ó impedir que tome posesión de su destino. — 932. Impedir la promulgación ó ejecución de las leyes. — 933. Impedir la celebración de elecciones populares. — 934. Impedir el cumplimiento de providencias administrativas ó judiciales. — 935. Allanar lugares de prisión ó atacar á los que conducen presos. — 936. Motín y asonada. — 937. Penas de los delitos expuestos. — 938. Exención ó atenuación de pena en caso de disolverse los sublevados. Ambigüedad de la disposición. — 939. Fundamentos de la exención. — 940. Conveniencia de una intimación previa. — 941. Delitos cometidos durante la rebelión, motín ó asonada. — 942. Debíó comprenderse también los cometidos durante la sedición. — 943. Pena del empleado encargado de conservar el orden, que no combatiera los delitos expresados. — 944. Pena de los meros ejecutores.....



CAPITULO II

ATENTADO Y DESACATO Á LA AUTORIDAD

Páginas

945. Observaciones sobre el método. — 946. Método de la exposición. — 947. Disposiciones legales sobre el atentado y el desacato. — 948. Caracteres comunes de ambos delitos. — 949. Diferencias entre ellos. — 950. Qué se entiende por *autoridad* en el delito de atentado; legislación comparada. — 951. Cómo debe entenderse el artículo 234, en este punto. — 952. Empleo de "fuerza ó intimidación". — 953. "Al tiempo de practicar sus funciones". — 954. Cuándo es legítima la resistencia. Jurisprudencia y doctrina en Francia. — 955. Solución legal de la cuestión. — 956. Extracción de presos. — 957. Criterios de gravedad adoptados. — 958. Otras agravaciones que sería posible admitir. — 959. Conveniencia de tener en cuenta la importancia de la autoridad ofendida. — 960. Método para legislar el desacato. — 961. Provocación á duelo, injuria ó amenaza á un funcionario. — 962. Por qué no se comprenden la calumnia y los insultos. — 963. Deben ser motivados aquellos hechos á causa del ejercicio de las funciones. — 964. — ¿Es necesario que la ofensa sea *dirigida* al funcionario? — 965. Gráve perturbación del orden en los Juzgados, Tribunales, y donde quiera que la autoridad ejerza sus funciones. — 966. Entrar armado al salón de sesiones de las Cámaras legislativas. — 967. Impedir á un representante ó funcionario público que concurra á su Cámara ó despacho. — 968. Resistir ó desobedecer abiertamente á la autoridad. — 969. Penalidad del desacato. — 970. Criterios de gravedad que se podría admitir.

31



CAPÍTULO III

USURPACIÓN DE AUTORIDAD

971. *Delitos peculiares á los empleados públicos.* — 972. Carácter común de estos delitos. — 973. Usurpación de autoridad. — 974. No se trata de la que pueda cometer un particular. — 975. La comete el empleado con título ó nombramiento emanado de autoridad incompetente. — 976. Continuación indebida en el ejercicio de funciones públicas por el que se halla destituido ó suspendido de un cargo público. Legislación comparada. — 977. Es necesario que la destitución ó suspensión sea legítima. — 978. Es necesario que la destitución ó suspensión hayan sido comunicadas oficialmente. — 979. Ejercicio por el empleado público de atribuciones que no le corresponden. — 980. Casos que podrían ser penados y que no lo están. — 981. Penalidad de la usurpación de autoridad. — 982. Caso en que se cometa el delito con falsificación de títulos ó documentos públicos.....

Páginas

53

CAPÍTULO IV

ABUSO DE AUTORIDAD

983. Observación sobre el método. — 984. Retención de un detenido ó preso cuya soltura ha debido decretarse. ¿Qué debe entenderse por *empleado público*? — 985. ¿Es necesario que la retención haya sido maliciosa? — 986. Cómo debió expresarse la ley. — 987. Detención de un individuo sin ponerlo á disposición de juez competente. Prescripciones constitucionales. — 988. Quién puede tener la facultad de aprehender ó detener. — 989.



Allanamiento de domicilio. — 990. Qué debe entenderse por *ciudadano*, en el inciso 3°. — 991. Violación de la comunicación ó incomunicación de un preso. — 992. Debiera pensarse la incomunicación ilegal en todos los casos. — 993. Ocultación de un detenido por el empleado público que debe presentarlo á la autoridad. — 994. Abusos en la guarda ó custodia de presos. — 995. — Apremios ilegales ó innecesarios. — 996. Seducción de la mujer que litiga ó se encuentra detenida ó presa. — 997. Penalidad de estos delitos. — 998. Disposiciones suprimidas...

65

CAPÍTULO V

PREVARICATO

999. Consideraciones generales. — 1000. Dificultades en la incriminación del prevaricato de los jueces. — 1001. No es imputable el error. — 1002. Disposiciones de nuestra legislación antigua y moderna. — 1003. Comparación del Código con la legislación anterior. — 1004. Interpretación del inciso 1° del artículo 245. — 1005. La fórmula adoptada es más concreta y precisa que las anteriores. — 1006. No se atribuye influencia á la naturaleza del móvil del delito. — 1007. Delito del juez que conoce en causa que patrocinó como abogado. — 1008. Delito del juez que á sabiendas cita hechos ó resoluciones falsas. — 1009. Supresión de otros casos de delitos. — 1010. Pena del prevaricato de los jueces. — 1011. Agravación en caso de haberse impuesto pena en consecuencia de la sentencia injusta. — 1012. Prevaricato de abogados y procuradores. — 1013. Penalidad de este delito. — 1014. Prevaricato de jueces árbitros ó arbitradores, asesores ó peritos. — 1015. Observaciones críticas sobre el caso del número anterior.....

81



CAPÍTULO VI

COHECHO

1016. Qué se entiende por cohecho. — 1017. Disposición sobre el cohecho en general. — 1018. Qué funcionarios ó empleados pueden cometer el delito. — 1019. Los miembros de las asambleas deliberantes no están comprendidos. — 1020. Recibo de dádiva ó aceptación de promesa. — 1021. Consumación del delito del empleado. — 1022. Interpretación de los términos "para hacer ó dejar de hacer alguna cosa". — 1023. Pena del cohecho en general. — 1024. Debiera erigirse en delito de los funcionarios la aceptación de regalos en consideración á sus funciones. — 1025. Cohecho cometido por el juez. — 1026. Cuándo queda consumado según el texto. — 1027. Cohecho cometido por el particular. — 1028. Caso que juzgué bajo la vigencia del Código Tejedor. — 1029. Pena del cohecho del particular. Caso de dádiva indeterminable. — 1030. Atenuación del cohecho en causa criminal, por vínculos de parentesco entre el corruptor y el reo. — 1031. Comiso de las dádivas....	Páginas 95
--	---------------

CAPÍTULO VII

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE PRESOS

1032. Elementos constitutivos del delito de infidelidad en la custodia de presos. — 1033. Cuándo queda consumado el delito. — 1034. La ley no prevé el caso de la evasión por imprudencia en la custodia. — 1035. Penalidad del delito. — 1036. Delito cometido por particular encargado de la custodia.....	107
--	-----



CAPÍTULO VIII

INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS

037. Sustracción, ocultación, destrucción ó inutilización de documentos por un empleado público.—1038. No hay imputabilidad si no hay daño de la cosa pública ó de tercero. — 1039. Delito del escribano que sustrae documento originario de un archivo ó protocolo. — 1040. Crítica á la penalidad de este delito. — 1041. Quebrantamiento de sellos. — 1042. Debió penarse el delito del que abre papeles ó documentos cerrados. — 1043. Otras personas responsables por infidelidad en la custodia de documentos..... 111

CAPÍTULO IX

REVELACIÓN DE SECRETOS

044. Disposiciones contenidas en el capítulo *Revelación de secretos* del Código Penal. — 1045. Criterios adoptados por la ley para la penalidad de la revelación de secretos de la administración. — 1046. Caso de la concurrencia de grave daño y de la revelación por dinero. — 1047. No debió adoptarse como criterio de gravedad de este delito la circunstancia de mediar dinero. — 1048. Revelación de secretos de un particular. — 1049. Secreto profesional. Disposiciones legales referentes á él. — 1050. ¿Quiénes están comprendidos en la disposición del artículo 265? — 1051. ¿Están comprendidos los sacerdotes? — 1052. Discusión y solución sobre el caso de los escribanos. — 1053. La ley sólo hace referencia al secreto que se *haya confiado*, no al de que se haya



tenido conocimiento en el ejercicio de la profesión. Soluciones contrarias de la doctrina y de la legislación. — 1054. No es elemento del delito la intención determinada de dañar. Doctrina y jurisprudencia general. — 1055. Últimas decisiones de la jurisprudencia francesa. — 1056. Discusión de esta cuestión conforme á nuestros textos. — 1057. Derecho del poseedor del secreto á rehusarse á revelarlo á la justicia. — 1058. La revelación á la justicia no excluye la responsabilidad penal. — 1059. Tampoco la excluye el consentimiento del interesado en el secreto. — 1060. Violación de correspondencia. — 1061. La disposición del Código Penal no rige respecto de los empleados de correos y capitanía de puerto. Legislación especial.....	Páginas 117
---	----------------

CAPÍTULO X

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS

1062. Analogía del delito de malversación con el de defraudación por violación de depósito. — 1063. Aplicación de caudales públicos á objetos distintos de los señalados por la ley. — 1064. Diferencia entre nuestra disposición y su análoga en el código español. — 1065. Uso de caudales por empleado público para sí ó para otros. — 1066. Discusión sobre la incriminación del uso de caudales. — 1067. Penalidad de este delito. — 1068. Susstracción de caudales públicos. — 1069. Crítica al artículo 268. — 1070. A qué otras personas se aplican las disposiciones del capítulo. — 1071. Caso de depósito hecho por particular en manos de empleado público. — 1072. Demora injustificada en un pago ordinario ó decretado por autoridad competente. — 1073. Negativa á entregar una cantidad ó efecto depositado.....	133
---	-----



CAPÍTULO XI

FRAUDES Y EXACCIONES

074. Observaciones sobre el método. — 1075. ¿En qué consiste el delito de fraude? — 1076. Fraude sin defraudación. — 1077. Legislación y doctrina sobre este punto. — 1078. ¿En qué consiste el dolo en este delito? — 1079. ¿Cómo se le legisla en Bélgica? — 1080. Conclusión. — 1081. Penalidad del fraude. — 1082. Crítica. — 1083. Observaciones sobre la penalidad en el caso del artículo 273. — 1084. ¿En qué consiste el delito de exacciones? — 1085. Elementos constitutivos. — 1086. Abuso de autoridad. — 1087. Percepción ilegal. — 1088. Dificultad para precisar la distinción entre la exacción ilegal y el cohecho. — 1089. Conocimiento del funcionario público de la ilegalidad de la percepción. — 1090. Penalidad de este delito. — 1091. Observación crítica..... 143

CAPÍTULO XII

DE LAS FALSEDADES

092. Carácter general de la falsedad. — 1093. Motivos de crimir en delito lo que es en sí un acto preparatorio. — 1094. Doctrina de Garraud sobre la falsedad que debiera reprimirse. — 1095. Consideración sobre la misma. — 1096. Sistema adoptado por la legislación. — 1097. Influencia de los progresos de la ciencia sobre el delito de falsificación. — 1098. Teoría que excluye de las falsedades la que recae en instrumento privado. — 1099. Consideraciones sobre esta teoría. — 1100. Sistema del código penal italiano sobre este punto. — 1101. Falsedades previstas por nuestro Código Penal... 157

CAPÍTULO XIII

DE LA FALSIFICACIÓN DE SELLOS, FIRMAS Y MARCAS



Páginas

1102. Disposiciones legales sobre la falsificación de sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos. — 1103. Legislación comparada. — 1104. La falsificación de sellos requiere distinciones á que la ley no da lugar. — 1105. ¿Qué falsedades se prevén en este título por la legislación general? — 1106. En esta no se castiga, en general, la falsificación de la firma del funcionario público. — 1107. ¿En qué condiciones puede ser penada la mera falsificación de una firma? — 1108. Fines que se propone el legislador al penar la falsificación de sellos. — 1109. Falsificación de papel sellado. — 1110. Impresión fraudulenta del sello verdadero. — 1111. Impresión fraudulenta por el empleado encargado del sello. — 1112. Uso del sello por segunda vez, borrando el documento á que se aplicó primero. — 1113. Falsificación de sello, firma, marca ó contraseña de establecimientos ó particulares. — 1114. Marcas en ganados. — 1115. Marcas en productos industriales. — 1116. Vigencia de la ley especial. ¿Procederá la aplicación del Código Penal á las marcas no registradas? — 1117. Análisis de los derechos lesionados en la falsificación de una marca de fábrica y consideraciones sobre la misma. — 1118. Conclusión: las marcas no registradas no están bajo el amparo de la ley penal. — 1119. ¿Pueden las Provincias establecer registros de marcas? — 1120. Agravación especial de los delitos de que trata este capítulo.	169
---	-----



CAPÍTULO XIV

DE LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

1121. Delitos comprendidos en esta calificación. — 1122. Modos de falsificación de documentos previstos por la ley. — 1123. Qué debe entenderse por documentos. — 1124. Criterios esenciales de la falsificación de documentos, enunciados por la doctrina. — 1125. Primer elemento de la falsedad, alteración de la verdad. — 1126. ¿En qué condiciones la alteración de la verdad en un documento constituye falsificación? — 1127. Modos de falsificación que importan delito según la doctrina y la legislación. — 1128. Doctrina de Bonnier sobre la falsedad intelectual en el código francés. — 1129. Opinión de Carrara sobre la misma cuestión. — 1130. Principios que concurren a la solución doctrinaria de la cuestión. — 1131. La simulación no es falsificación. — 1132. Segundo elemento de la falsedad: dolo especial. — 1133. Tercer elemento: perjuicio efectivo ó posible. — 1134. Adulteración material innócuca. — 1135. Cuarto elemento, según Carrara: imitación de la verdad. — 1136. Exámen del artículo 280 del Código Penal: falsedad suplantando documento en libro ó registro en que se inscriben los de su clase. — 1137. Expedición de testimonio ó copia certificada de documento que no existe. — 1138. Alteración de documento verdadero por alguno de los modos previstos. — 1139. Crítica al inciso 3° del artículo 280. — 1140. Interpretación que corresponde. — 1141. Alteración por supresión de una cláusula. — 1142. ¿Hay falsedad por supresión del documento? — 1143. — ¿Hay falsedad intelectual según el artículo 280? — 1144. El texto no autoriza el requisito del dolo especial. — 1145. El texto no hace referencia expresa al tercer elemento enunciado: el perjuicio. Interpretación. — 1146. Criterios de gra-



vedad : falsedad por empleado abusando de su oficio. —	Páginas
1147. Falsificación de instrumento público por un particular. —	
1148. Falsificación de documento privado. —	
1149. Uso de documento falso. —	
1150. Observación crítica al artículo 281. —	
1151. Presentación en juicio de documento falso, como prueba.....	191

CAPÍTULO XV

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO

1152. Delitos previstos bajo esta calificación. —	1153.
Su relación con la falsificación de documentos en general y con la falsificación de billetes de Banco. —	1154. Necesidad de distinguir entre los títulos <i>al portador</i> , y los títulos <i>nominativos</i> . —
1155. Grave omisión del Código respecto de los títulos que no son de deuda pública, emitidos con autorización del Gobierno. —	1156. Tal falsificación tampoco está comprendida en la de billetes de Banco. —
1157. Tampoco lo está en la falsificación de documentos en general. —	1158. Delito del que se encarga de expender títulos falsos <i>fabricados</i> . No hay motivo para no castigar al que se encarga de expender títulos falsos por <i>alteración</i> . —
1159. La ley castiga como delito consumado la aceptación del mandato de expender. Crítica. —	1160. Expendición por el que no se ha encargado de expender, ni ha introducido, ni falsificado. —
1161. Fabricación consistente en borrar el signo de anulación de un documento. —	1162. La misma cuestión en el texto de la ley. —
1163. Casos previstos de falsificación por alteración. —	1164. Examen y crítica del inciso 3º del artículo 283. —
1165. Penalidad y criterios de gravedad.....	225



CAPÍTULO XVI

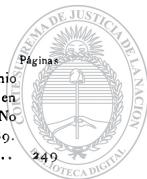
DE LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE BANCO

166. Exposición del artículo 285. — 1167. No puede haber otros Bancos de emisión en la República que los autorizados por el Congreso Federal. — 1168. En el artículo 61 de la ley de 14 de Setiembre de 1863 se legisla el mismo caso que en el artículo 285 del Código Penal. — 1169. Las leyes sobre billetes de Banco han derogado de hecho la disposición del Código Penal. — 1170. La falsificación de billetes fraccionarios cae también bajo la ley de justicia federal.....	243
---	-----

CAPÍTULO XVII

DEL FALSO TESTIMONIO

171. ¿Qué se entiende por <i>testigo</i> , en esta materia? — 1172. Peligros de que el testigo no refiera los hechos con verdad. — 1173. ¿En qué consiste la falsedad de la declaración? — 1174. El testimonio debe ser prestado judicialmente y bajo juramento. — 1175. La declaración en causa propia no es testimonio. — 1176. Caso en que declarando como testigo, éste podría comprometerse á sí mismo. — 1177. La falsedad en lo esencial y en lo incidental. — 1178. La deposición negativa puede constituir falso testimonio. — 1179. Es esencial que haya terminado la audiencia del testigo. — 1180. Declaración ante juez incompetente. — 1181. Es esencial la existencia ó posibilidad de perjuicio. — 1182. Excepción en causa civil. — 1183. Criterios de gravedad y penalidad del falso testimonio en causa criminal, en contra del reo. — 1184.



Observación sobre este punto. — 1185. Falso testimonio en favor del reo. — 1186. Penas del falso testimonio en causa civil. — 1187. Soborno de testigos. — 1188. ¿No requería el soborno una prescripción especial? — 1189. Falsa exposición de peritos é intérpretes.....

249

CAPÍTULO XVIII

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE FALSEDAD

1190. Disposición sobre falsedad en general; crítica. — 1191. Es esencial la existencia de un daño positivo. — 1192. Fabricación é introducción de sellos, cuños y marcas. — 1193. Interpretación del artículo 294..... 267

CAPÍTULO XIX

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

1194. Carácter de estos delitos. — 1195. Elaboración y expendio de sustancias nocivas á la salud. — 1196. Elaboración de productos químicos que puedan causar estragos. — 1197. Mezcla de sustancias nocivas en las bebidas y comestibles. — 1198. Venta de medicamentos deteriorados ó adulterados. — 1199. Concurrencia de daño efectivo en estos delitos. — 1200. Violación de las cuarentenas. — 1201. Otros casos que podría perverse.. 273



TEXTO DEL CÓDIGO PENAL

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA

DELITOS Y PERSONAS RESPONSABLES

	Páginas
TÍTULO I. — Voluntad criminal, delitos consumados y frustrados	279
— II. — De la tentativa.....	281
— III. — De la culpa ó imprudencia.....	283
— IV. — De los autores principales.....	285
— V. — De los cómplices.....	289
— VI. — Encubridores.....	293

SECCION SEGUNDA

TÍTULO I. — De las penas en general.....	295
— II. — Clases de penas, su duración, ejecución y efectos.....	297
— III. — De las causas que eximen de pena.....	305
— IV. — De la atenuación de las penas.....	308
— V. — De la agravación de las penas.....	309
— VI. — De la prescripción.....	312

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS

SECCION PRIMERA

TÍTULO I. — Delitos contra las personas.....	314
Capítulo I. — Del homicidio.....	314
— II. — Infanticidio.....	316
— III. — Aborto.....	317
— IV. — Duelo.....	318



	Páginas
TÍTULO II. — Lesiones corporales.....	322
— III. — Delitos contra la honestidad.....	323
Capítulo I. — Adulterio.....	323
— II. — Violación.....	324
— III.— Estupro ó corrupción de menores.....	325
— IV. — Rapto.....	326
— V.— Disposiciones comunes.....	328
TÍTULO IV. — Matrimonios ilegales.....	329
— V. — Delitos contra el estado civil de las personas.....	331
— VI. — Delitos contra las garantías individuales.....	332
Capítulo I. — Detención privada.....	332
— II. — Sustracción de menores.....	333
— III. — Abandono de niños.....	334
— IV. — Violación de domicilio.....	335
— V. — Amenazas y coacciones.....	336
— VI. — Descubrimiento y revelacion de secretos.....	338
TÍTULO VII. — De las calumnias é injurias.....	339
— VIII. — De los delitos contra la propiedad particular.....	342
Capítulo I. — Robos y hurtos.....	342
— II. — De la usurpación.....	345
— III. — De los quebrados y otros deudores punibles....	346
— IV. — De las estafas y otras defraudaciones.....	347
— V. — De los incendios y otros estragos.....	350
— VI. — De los daños.....	354
— VII. — Disposiciones generales.....	355

SECCION SEGUNDA

DELITOS POLITICOS Y DELITOS PECULIARES A EMPLEADOS PÚBLICOS

TÍTULO I. — Delitos contra la seguridad interior y orden publico...	356
Capítulo I. — Rebelión y sedición.....	356
— II. — atentado y desacato contra la autoridad.....	359
TÍTULO II. — Delitos peculiares á empleados públicos.....	361
Capítulo I. — Usurpación de autoridad.....	361
— II. — Abuso de autoridad.....	362
— III. — Prevaricato.....	364
— IV. — Cohecho.....	365

Capítulo V. — Infidelidad en la custodia de presos.....	367
— VI. — Infidelidad en la custodia de documentos.....	368
— VII. — Revelación de secretos.....	369
— VIII. — Malversación de caudales públicos.....	371
— IX. — Fraudes y exacciones.....	373
TÍTULO III. — De las falsedades.....	374
Capítulo I. — Falsificación de sellos, firmas y marcas.....	374
— II. — Falsificación de documentos en general.....	375
— III. — Falsificación de documentos de crédito.....	377
— IV. — Falsificación de billetes de Banco.....	377
— V. — Falso testimonio.....	378
— VI. — Disposiciones generales.....	380
TÍTULO IV. — Delitos contra la salud pública.....	381

